José Cisneros Espinosa
(Coord.)

Un mundo falso

Notas sobre sus constructores actuales

Cuadernos Artesanos de Comunicación / 91

BUAP

Instituto de Ciencias de Gobierno
y Desarrollo Estratégico

ULL

Universidad
de La Laguna

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Sociedad Latina de
Comunicación Social

Cuadernos Artesanos de Comunicación

Coordinador editorial: José Manuel de Pablos

Comité Científico

Presidencia: José Luis Piñuel Raigada (UCM)

Secretaría: Concha Mateos (URJC)

- Bernardo Díaz Nosty (Universidad de Málaga, UMA)
- Carlos Elías (Universidad Carlos III de Madrid, UC3M)
- Javier Marzal (Universidad Jaume I, UJI)
- José Luis González Esteban (Universitat Miguel Hernández de Elche, UMH)
- José Luis Terrón (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB)
- José Miguel Túnuez (Universidad de Santiago, USC)
- Juan José Igartua (Universidad de Salamanca, USAL)
- José Antonio Meyer (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)
- Marisa Humanes (Universidad Rey Juan Carlos, URJC)
- Miguel Vicente (Universidad de Valladolid, UVA)
- Miquel Rodrigo Alsina (Universidad Pompeu Fabra, UPF)
- Núria Almiron (Universidad Pompeu Fabra, UPF)
- Ramón Reig (Universidad de Sevilla, US)
- Ramón Zallo (Universidad del País Vasco, UPV-EHU)
- Francisco Javier Martínez Garza (Tecnológico de Monterrey)
- Sarely Martínez Mendoza (Universidad Autónoma de Chiapas)
- Victoria Tur (Universidad de Alicante, UA)

* Queda expresamente autorizada la reproducción total o parcial de los textos publicados en este libro, en cualquier formato o soporte imaginables, salvo por explícita voluntad en contra del autor o autora o en caso de ediciones con ánimo de lucro. Las publicaciones donde se incluyan textos de esta publicación serán ediciones no comerciales y han de estar igualmente acogidas a Creative Commons. Harán constar esta licencia y el carácter no venal de la publicación.

Este libro y cada uno de los capítulos que contiene, así como las imágenes incluidas, si no se indica lo contrario, se encuentran bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 3.0 Unported. Puede ver una copia de esta licencia en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> Esto significa que Ud. es libre de reproducir y distribuir esta obra, siempre que cite la autoría, que no se use con fines comerciales o lucrativos y que no haga ninguna obra derivada. Si quiere hacer alguna de las cosas que aparecen como no permitidas, contacte con los coordinadores del libro o con el autor del capítulo correspondiente.

* La responsabilidad de cada texto es de su autor o autora.

José Cisneros Espinosa
(Coord.)

Un mundo falso

Notas sobre sus constructores actuales

Cuadernos Artesanos de Comunicación / 91

BUAP

Instituto de Ciencias de Gobierno
y Desarrollo Estratégico

ULL

Universidad
de La Laguna

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

USC
UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

U^{ma}

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Sociedad Latina de
Comunicación Social

CAC 91º – ***Un mundo falso. Notas sobre sus constructores actuales***, José Cisneros Espinosa (Coord.)

Precio social: 12,90 € | Precio en librería. 16,95 € |

Editores: Javier Herrero y Alberto Ardèvol

Diseño: F. Drago

Ilustración de portada: Fragmento del cuadro *Árboles y viento*, de Juan Davó (sin fecha).

Imprime y distribuye: F. Drago. Andocopias S. L.

c/ La Hornera, 41. La Laguna. Tenerife.

Teléfono: 922 250 554 | fotocopiasdrago@telefonica.net

Edita: Sociedad Latina de Comunicación Social – edición no venal

- La Laguna (Tenerife), 2015 – Creative Commons

<http://www.revistalatinacs.org/14SLCS/portada2014.html>

Descargar en pdf:

<http://www.cuadernosartesanos.org/#91>

Protocolo de envío de manuscritos:

<http://www.cuadernosartesanos.org/protocolo.html>

ISBN – 13: 978-84-16458-22-6

DL: TF-786-2015

DOI: [10.4185/cac91](https://doi.org/10.4185/cac91)

Índice

Introducción.....	7
Vivimos en un mundo falso	
José Cisneros Espinosa.	
Capítulo 1.	11
La reestructuración del capitalismo mundial y la construcción de un mundo falso.	
Alejandro Silva Arias	
Capítulo 2.	169
La falsa neutralidad de las autoridades electorales en México.	
Abstencionismo y fraude en los comicios federales 2003–2006.	
Óscar Antonio Jiménez Morales	
Capítulo 3.	247
Especulaciones aventuradas sobre egresados universitarios y el mercado laboral.	
Wietse de Vries.	
Capítulo 4.	271
La falsedad de la Santa Sede.	
José A. Alonso Herrero.	
Capítulo 5.	301
Comunicación pública: El gran negocio de mentir.	
José Cisneros Espinosa.	
Autores	355

Un mundo falso. Notas sobre sus constructores actuales

Abstract

¿Por qué es importante reiterar que vivimos en un mundo falso? Porque aunque tod@s experimentamos esta realidad, las mentiras que observamos tanto en la vida privada, pero sobre todo en la función pública, van generando en nosotros una aceptación tácita de que “así es el mundo”, y se nos olvida de generación en generación que pueden existir otras maneras de relacionarnos en sociedad de forma justa y solidaria. Contra ese olvido es conveniente recordar que no es forzoso ni socialmente saludable vivir en la mentira.

¿Por qué es necesario explicarnos el fenómeno de las mentiras públicas? Porque las mentiras rebasan la dimensión de lo casuístico, y porque las grandes instituciones sociales con las cuales se ha estructurado la organización mundial, como los gobiernos, los bancos y los medios comerciales de difusión, son operadas con base en el engaño: La economía, la política y la ideología de progreso actuales se mantienen en la práctica como mecanismos de un despojo permanente de los recursos de la población, y todo ello cubierto con un falso discurso sobre la democracia; discurso que moldea la mente de la mayoría de las personas que no se dan otra explicación del mundo.

De ahí la pretensión del presente libro: sumarse a los trabajos que buscan construir un mapa conceptual explicativo de la realidad destructiva que estamos viviendo, con el ánimo de contribuir a entender y superar la falsedad de los discursos dominantes.

Keywords

Bloque histórico, Globalización, Fraude electoral, Comunicación pública, Estado Vaticano.

Forma de citar este libro

Autor capítulo (2015): “Título del capítulo”, en Un mundo falso. Notas sobre sus constructores actuales (José Cisneros, Coord.). *Cuadernos Artesanos de Comunicación*, 91. La Laguna (Tenerife): Latina.

Introducción

Vivimos en un mundo falso

¿POR qué es importante reiterar que vivimos en un mundo falso? Porque aunque tod@s experimentamos esta realidad, las mentiras que observamos tanto en la vida privada, pero sobre todo en la función pública, van generando en nosotros una aceptación tácita de que “así es el mundo”, y se nos olvida de generación en generación que pueden existir otras maneras de relacionarnos en sociedad de forma justa y solidaria. Contra ese olvido es conveniente recordar que no es forzoso ni socialmente saludable vivir en la mentira.

¿Por qué es necesario explicarnos el fenómeno de las mentiras públicas? Porque las mentiras rebasan la dimensión de lo casuístico, y porque las grandes instituciones sociales con las cuales se ha estructurado la organización mundial, como los gobiernos, los bancos y los medios comerciales de difusión, son operadas con base en el engaño: La economía, la política y la ideología de progreso actuales se mantienen en la práctica como mecanismos de un despojo permanente de los recursos de la población, y todo ello cubierto con un falso discurso sobre la democracia; discurso que moldea la mente de la mayoría de las personas que no se dan otra explicación del mundo. Y a quienes sí se dan cuenta del engaño y se movilizan para denunciarlo y sugerir otras opciones de vida en sociedad, se les descalifica, o se les criminaliza y se les reprime.

Pero el abuso, el engaño y la coacción por parte de los gobiernos y los organismos financieros mundiales han llegado a tal grado, que ya no es posible encubrir la realidad ni con la persistente complicidad de los medios de difusión masiva. Por ello aumentan cada día las manifestaciones públicas de inconformidad de colectivos civiles locales y mundiales.

Frente a esta situación, y con la finalidad de contribuir desde el ámbito académico a la explicación de esta dinámica social del engaño

sistemático, se han reunido en el presente libro cinco textos que analizan aspectos particulares de lo que se percibe como una estrategia de engaño integral. No es la pretensión ser exhaustivos, por supuesto, pero sí aportar algunos conceptos e inquietudes que puedan ayudar a entender la lógica institucional que articula lo que podríamos considerar una estrategia de falsedad y despojo global.

En el primer capítulo, un análisis socio-económico titulado “La reestructuración del capitalismo mundial y la construcción de un mundo falso”, el Dr. Alejandro Silva Arias expone un marco conceptual para entender la lógica del poder global que necesita la construcción de un sistema de mentiras para controlar a la sociedad enriquecerse cada vez más. Particularmente aborda la reestructuración del capitalismo internacional y el bloque histórico mundial. Describe cómo el capitalismo de la posguerra se transformó en un par de décadas en un capitalismo dominado por el capital financiero y las empresas transnacionales. Y cómo la hegemonía norteamericana devino en una asociación de élites y estados para crear un bloque histórico diferente, donde las clases subalternas han sido excluidas.

En el capítulo dos el Dr. Óscar Antonio Jiménez Morales documenta “La falsa neutralidad de las autoridades electorales en México. Abstencionismo y fraude en los comicios federales 2003–2006”. En este texto, el Dr. Jiménez analiza la magnitud del abstencionismo electoral y cívico en los comicios federales de 2003 y 2006, tanto en el ámbito nacional como en el estado de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara; caracteriza el contexto social y político de dichas elecciones hasta llegar al fraude electoral perpetrado en 2006, documentando de esta manera la falsa neutralidad del instituto responsable de las elecciones en México.

Pasando al campo de la educación superior, en el capítulo tres el Dr. Wietse de Vries trata las “Especulaciones aventuradas sobre egresados universitarios y el mercado laboral” en México, donde analiza específicamente algunas afirmaciones al respecto y enfatiza que la relación entre la universidad y el mercado laboral está rodeada por una serie de mentiras, estadísticas dudosas, información contradictoria y especulaciones sin sustento.

Por su parte, el Dr. José A. Alonso Herrero, expone en el capítulo cuatro “La falsedad de la Santa Sede”, analizando a esta organización religiosa en su dimensión política como Estado Vaticano. Su pregunta

central se refiere a la posible contribución de la Santa Sede, que no de la Iglesia Romana, al clima de falsedad que invade a toda la sociedad global desde hace décadas. Su hipótesis es que, siendo el Papa la máxima y absoluta autoridad de la Iglesia Católica, y jefe supremo de la Santa Sede, es decir, del Estado Vaticano, ha funcionado como un monarca absoluto e infalible contra el radicalismo y el comunismo. Responde entonces que la Santa Sede ha actuado como un Estado autoritario y se ha olvidado del mensaje evangélico de Jesús. Y por tanto, con esta falta de autenticidad, la Iglesia Vaticana se ha convertido en las últimas décadas en un ingrediente estructural de la falsedad reinante.

Finalmente, en el capítulo cinco referido a la “Comunicación pública: El gran negocio de mentir”, el autor de esta presentación expone la función, interesada en lo económico y sesgada en lo informativo, de los medios de difusión masiva, tomando como ejemplo experiencias públicas en México. Un país donde los representantes electos no representan a los ciudadanos, el discurso público cubre y promueve intereses privados, el modelo de democracia es una ficción que encubre a un gobierno autoritario, y los medios de comunicación se enriquecen profesionalizando el engaño.

En conjunto, se trata de ir construyendo un mapa conceptual explicativo de la realidad destructiva que estamos viviendo. Por supuesto, otros autores han tocado tangencialmente el tema, como Giddens en *Un mundo desbocado*, y Lipovetsky en *La sociedad de la decepción*, justificándolo como un proceso natural en la construcción de la democracia. Otros son más contundentes y señalan actores sociales abusivos específicos, como las instituciones financieras, las empresas transnacionales y los gobiernos nacionales. Tal es el caso, entre muchos otros, de Noam Chomsky con *500 años*, la conquista continúa, y de Joseph Stiglitz con *El precio de la desigualdad*. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. En esta segunda tendencia, más crítica, se ubican los trabajos que ahora se exponen, con el ánimo de contribuir a entender y superar la falsedad de los discursos dominantes.

José Cisneros Espinosa

Cholula, Ciudad Digna, septiembre de 2015

La reestructuración del capitalismo mundial y la construcción de un mundo falso

Alejandro Silva Arias

Resumen

Este trabajo se centra en la reestructuración del capitalismo internacional y del bloque histórico mundial. Trata de cómo el capitalismo de la posguerra se transformó en sólo un par de décadas en un capitalismo dominado por el capital financiero y las corporaciones transnacionales. Y en cómo la hegemonía estadounidense se convirtió en una asociación de las élites y los Estados para crear un bloque histórico diferente, de donde se excluyó a las clases subalternas.

Palabras clave: bloque histórico mundial, reestructuración, globalización, capital financiero, empresas transnacionales, élites.

Abstract

This work focuses on the restructuring of international capitalism and world historical bloc. How the post-war capitalism was transformed into a couple of decades in a capitalism dominated by finance capital and transnational corporations. And how American hegemony became an association of elites and the states to create a different historical bloc, where the subaltern classes were excluded.

Keywords: World Historic Bloc, restructuring, globalization, financial capital, transnational corporations, elites

Introducción

DESDE sus orígenes siempre se ha acusado a las relaciones capitalistas de producción, demostrando que ocultan relaciones de explotación y dominación bajo la égida de la libertad y la democracia. La una simulando el trato entre iguales cuando en la mayoría de los casos se trata de entes profundamente desiguales, y la otra pervirtiendo la voluntad general a través de la hegemonía.

Hace unas décadas, un nuevo concepto se adicionó para brindarnos la imagen de un capitalismo más humano y amigable, bajo el nombre de globalización, la cual integraría a las naciones en condiciones de igualdad y desarrollo. El fin de la historia. La aldea global. La integración social como fenómeno inevitable, ineludible, feliz.

Sin embargo, si atendemos a la forma y fondo de cómo se gestó históricamente tal fenómeno, todo parece indicar que se trata de la construcción de un mundo falso, edificado en la oscuridad, en silencio y a base de engaños, en beneficio particularmente de las grandes empresas trasnacionales y del capital financiero.

Este trabajo versa sobre la reestructuración del capitalismo internacional y el bloque histórico mundial. De cómo el capitalismo de la posguerra se transformó en un par de décadas en un capitalismo dominado por el capital financiero y las empresas trasnacionales. Y cómo la hegemonía norteamericana devino en una asociación de élites y Estados para crear un bloque histórico diferente, donde las clases subalternas simplemente quedaron excluidas.

El trabajo se ha dividido en tres partes. La primera abarca del periodo de la Segunda Guerra Mundial a los años setenta del siglo pasado, que es la época del primer bloque histórico, donde el capitalismo y la hegemonía se desarrollaron sin contradicciones graves, donde el crecimiento económico se sustentó en la economía mixta y el papel protagónico del Estado; y a nivel internacional, en la subordinación de las clases dominantes y Estados europeos y de Japón a sus iguales de Estados Unidos, a pesar incluso de la guerra fría y la potencia *contrahegemónica*.

La segunda parte comprende esencialmente de 1971, con la caída del Sistema de Bretton Woods, a 1983, con la terminación de la crisis de

1982-1983. En este periodo se observa cómo la economía mundial y el bloque histórico entraron en crisis, y cómo la correspondencia entre la creciente competencia en los mercados internacionales, por un lado, y los acuerdos entre Estados Unidos y sus aliados se problematizaron, mientras las crisis económicas, políticas e ideológicas se hicieron más frecuentes y profundas.

La tercera parte inicia en la crisis de 1982-1983 y culmina hasta el fin de la década de los años noventa. Se refiere al proceso de reestructuración del capitalismo mundial y del sistema hegemónico bajo un esquema definido como *la era de la globalización*, el cual abarcó a los países llamados socialistas de Europa y a los subdesarrollados.

El momento histórico en el que surgió el concepto hegemónico de la globalización corresponde al periodo histórico del proceso de reestructuración del capitalismo mundial. Su función, al ser utilizado por los organismos internacionales y ampliamente difundido por los medios de comunicación, fue la de ocultar su esencia; es decir, su carácter metabólicamente explotador y dominador.

Durante la década de los años setenta del siglo pasado se inició este proceso de reestructuración del capitalismo mundial. Este proceso, que tuvo como principal característica el haber sido dirigido desde las élites del capitalismo mundial, y abarcar modificaciones tanto en el ámbito de la estructura como de la superestructura (bloque histórico) fue sumamente exitoso para las fracciones de las clases transnacionalizadas de los países desarrollados, y menos para las de los países subdesarrollados y ex socialistas, y con el más funesto resultado para la mayoría de la población mundial.

Una visión crítica del proceso histórico de integración

El proceso de integración social ha estado presente en toda la historia conocida de la humanidad. Aún más, se podría aceptar la afirmación de que la historia universal es la historia del proceso de integración social, el cual tiende a conformar una totalidad de alcances mundiales.

Dicho proceso se refiere al avance significativo de las relaciones económicas, políticas, ideológicas, culturales y migratorias entre

sociedades particulares distintas. Sin embargo, este proceso histórico de integración ha distado mucho de ser armonioso, e incluso pacífico; por el contrario, se ha llevado a cabo mediante las formas más violentas de conquista, de dominación y de imposición de relaciones de explotación de unas sociedades por parte de otras. Ésta ha sido su característica fundamental.

La conquista, la esclavitud y el saqueo de los pueblos bárbaros por parte del Imperio Romano marcaron de manera distintiva la integración en el llamado mundo antiguo. De igual manera fue la conquista, el pago de tributos, la esclavitud de los llamados indios lo que caracterizó por más de trescientos años la dominación española y portuguesa de gran parte del Nuevo Mundo americano.

También, la compra de territorios de aquellos que no conocían la institución de la propiedad privada. La esclavitud y el saqueo por parte de ingleses y franceses fue lo que caracterizó la integración de África y Asia durante el llamado mundo moderno, que para nosotros corresponde al predominio de las relaciones capitalistas de producción.

Si bien es cierto que durante la vigencia del capitalismo; es decir, durante los últimos trescientos años, la integración social ha avanzado más que en todas las épocas anteriores, esto no significa que ambos términos sean sinónimos o intercambiables en el análisis teórico. Cada uno corresponde a tiempos y espacios diferentes.

La integración corresponde a un proceso histórico de carácter general que abarca toda la historia universal y da cuenta del establecimiento de lazos de manera progresiva entre sociedades particularmente distintas; el capitalismo corresponde a un tipo de relaciones sociales históricamente determinadas, con formas propias de integración social, de explotación y de dominación.

En otras palabras, el capitalismo ha establecido las formas sociales específicas en que la integración social se ha llevado a cabo en las tres últimas centurias a través de la acumulación de capital y una dialéctica interna que le otorgan su carácter distintivo.

Durante la vigencia del capitalismo han sido los países donde se consolidó de manera temprana el proceso de acumulación de capital, los promotores del proceso de integración mundial.

Esto lo han hecho a través de dos métodos que han operado simultáneamente: uno en longitud, englobando y subordinando a regiones hasta entonces ajenas al ciclo de la producción capitalista, dando lugar a un desarrollo extensivo hasta conformar un verdadero mercado mundial y una economía mundial capitalista; y otro en profundidad, desarrollando las relaciones sociales capitalistas, reproduciéndolas y volviéndolas más estrechas, actualizándolas continuamente e intensificándolas (Robinson, 2000).

Por lo que se refiere al desarrollo extensivo del capitalismo, es decir, el geográfico, éste tuvo un gran auge en la segunda mitad del siglo XIX. Esta expansión estuvo precedida por un proceso intensivo que vivieron los ahora llamados *países desarrollados* entre los siglos XVIII y XIX y que culminó con el establecimiento de un sistema de acumulación de capital autosostenido y protegido por un Estado centralizado, fuerte, unitario y nacional.

En la mayoría de los casos, las clases capitalistas nacionales se impusieron como dominantes a través de revoluciones en contra del orden feudal en Europa y el esclavista en Estados Unidos.

Su objetivo estribaba en eliminar las trabas a la libre movilidad de mercancías, capitales y fuerza de trabajo, unificar el sistema impositivo e imponer una moneda única. Es decir, la “integración” nacional fue un proceso complejo, impulsado por las necesidades del desarrollo capitalista, y en ningún caso fue un proceso consensuado y admitido por todos los que se integraban.

Por el contrario, se trató siempre de un proceso impuesto por la fuerza y consolidado también por la fuerza de los Estados centralistas que se alumbraron en el curso de los conflictos: Estado inglés, francés, alemán, italiano, norteamericano y otros europeos (Vidal, 2000).

Sobre la base de este proceso se desarrolló la política imperialista de finales del siglo XIX, fundamentalmente por cuenta de Inglaterra y los

principales países europeos, que convirtieron a Asia y África en colonias.

Aquí el capitalismo se trasladó por vía coercitiva y violenta a territorios en los que no había aparecido de forma espontánea. Se impuso el imperialismo y el capitalismo se extendió por todo el planeta, dando origen a un sistema deforme, integrado por economías con estructuras internas diferentes: las propias de las metrópolis, desarrolladas y expansivas; y las de las colonias, dependientes, subordinadas, subdesarrolladas y generadoras de pobreza (Vidal, 2000); oferentes de materias primas y fuerza de trabajo.

El desarrollo extensivo del capitalismo parece haber quedado concluido, durante los últimos años, con la reincorporación del antiguo bloque socialista europeo y de China a las relaciones capitalistas de producción.

Por lo que respecta al desarrollo intensivo del capitalismo, éste es un proceso que todavía se mantiene abierto y tiene que ver con la movilidad del capital y las mercancías a nivel global. Intensifica además las relaciones laborales, comerciales y financieras en todos los ámbitos (local, nacional, regional, internacional), sustituyendo progresivamente no sólo a las relaciones precapitalistas y no capitalistas de producción remanentes en gran parte del mundo, por relaciones capitalistas, convirtiendo en mercancías todos los productos de la actividad humana. Actualiza continuamente las formas de la producción y reproducción del capital.

Este proceso ha alcanzado su mayor nivel en las últimas décadas, durante la llamada *era de la globalización*, y su última fase, la más reciente, representa la etapa de mayor integración.

Como todo proceso de integración social, el proceso de integración capitalista no ha sido continuo. Por el contrario, ha estado plagado de episodios donde ha predominado el estancamiento e incluso el retroceso, y periodos en donde se han producido verdaderos saltos, revoluciones en el proceso de integración.

En el primer caso, las guerras entre los principales promotores de la integración, las revoluciones socialistas, las revoluciones de liberación nacional protagonizadas por países subdesarrollados que se han

revelado contra la integración (asociada a la explotación y dominación extranjera) y las crisis económicas generalizadas, han sido los factores más importantes que han obrado en contra de la integración. Las calamidades naturales podrían ser consideradas aquí también.

Todos estos elementos causales han puesto y pueden poner fin a una oleada de integración. El proteccionismo ha sido sólo una manifestación de estas causas, mas no la causa fundamental. El proceso de integración no suprime el desarrollo desigual; más bien lo mantiene y en algunos casos, como en la época actual, lo amplía.

En la mayoría de los países subdesarrollados, a las formas tradicionales de integración basada en la explotación de materias primas se les ha yuxtapuesto la explotación de una fuerza de trabajo barata y la generalización de consumidores globales, tanto de bienes como de capitales.

Ésta ha sido la esencia de la nueva división internacional del trabajo y el significado de la globalización para el grueso de la población de los países subdesarrollados.

Finalmente, cabe señalar que el proceso no ha estado exento de contradicciones: al mismo tiempo que surgen nuevas formas de integración social, las viejas formas tienden a desintegrarse sin que desaparezcan del todo, e incluso se reeditan (Dávila, 2001).

En otras palabras, su comportamiento histórico ha sido fluctuante, desigual y combinado, y por momentos incierto. De ahí que, por un lado, tengamos que estudiar el proceso de integración social a través de la utilización metodológica de etapas históricas, fases en las cuales el fenómeno se muestra con mayor nitidez y donde es posible destacar otros procesos que contribuyen a su desarrollo; y por otro lado, desechar la idea de que la integración es un proceso continuo que está llegando a su fin.

Parte I: El sistema hegemónico de la posguerra

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso del proceso de integración capitalista se sucedieron dos periodos que se caracterizan por la ausencia de guerras entre las principales potencias

capitalistas. Cada uno de estos periodos ha tenido como elemento distintivo el corresponder a algún sistema hegemónico, más o menos diferenciado el uno del otro.

El sistema hegemónico mundial nacido durante la segunda posguerra se caracterizó esencialmente por la aceptación por parte de los Estados capitalistas de los países más desarrollados de Europa y de Japón, así como de sus respectivas clases dominantes, de la dirección de Estados Unidos y de su clase capitalista nacional en los asuntos mundiales, inaugurando con ello un bloque histórico.

Las contradicciones entre el desarrollo de la economía mundial, la política interestatal y la ideología dominante no fueron graves, y marcaron una época de relativa paz sin enfrentamientos directos entre las grandes potencias, incluida la Unión Soviética. Con este hecho se superó perentoriamente la rivalidad endémica entre los países europeos, que había ocasionado dos guerras mundiales en menos de 35 años.

Para que esto sucediera tuvieron que conjugarse condiciones históricas objetivas independientes de la acción política de los sujetos históricos, y condiciones subjetivas derivadas de sus acciones relativamente calculadas.

El punto de partida de este sistema hegemónico se encuentra en el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941) por parte de Japón rompió la resistencia interna respecto a la participación de Estados Unidos en la guerra, y marcó el retroceso de las corrientes aislacionistas que habían dominado la escena político-jurídica previa (leyes de neutralidad).

Por otra parte, el aporte de recursos materiales que brindó Estados Unidos resultó definitorio para que los aliados ganaran la guerra, pues los beligerantes ya habían agotado lo mejor de sus fuerzas (Raymond Aron, 1973: 32).

Por lo tanto, no fue casual que Estados Unidos se erigiera casi inmediatamente que ingresó a la guerra como la dirección militar y política en la contienda, y que obtuviese inmediatamente el consenso sobre este hecho.

Aunque el triunfo de los aliados en la guerra representó en sí mismo un paso decisivo en la construcción de la hegemonía de Estados Unidos, no era suficiente para su consolidación. Para ello, tenía que restaurar y estabilizar bajo su mando las condiciones necesarias para la acumulación de capital a nivel mundial.

Dicha restauración pasaba necesariamente por la reconstrucción de las economías de Europa Occidental y Japón, por la restauración de los circuitos del mercado mundial de mercancías, capitales y divisas y por la reestructuración de las relaciones políticas estatales e interestatales que llenaran el vacío político dejado por un imperialismo inglés en franca bancarrota y resquebrajado por la carencia de recursos y el embate de los movimientos nacionalistas.

En el último año de la Segunda Guerra Mundial, dos acontecimientos históricos trascendentales y casi simultáneos definieron el ejercicio del poder de Estados Unidos en el proceso de construcción del sistema hegemónico: para los aliados, la firma de la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945; y para los enemigos, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto del mismo año.

El primer hecho significaba el establecimiento de una superestructura jurídico-política internacional, basada en organizaciones multilaterales tendientes a trascender el aparato de coerción representado por sus ejércitos, y la unificación en torno suyo de los intereses de los Estados y clases dirigentes de los países aliados.

El segundo, en el colofón de la guerra, mostraba no sólo su poderío militar, sino también: a) la mayor advertencia a sus potenciales enemigos, como era el caso de la Unión Soviética; b) la capacidad de brindar seguridad a los aliados; y c) el castigo potencial que podrían sufrir los países subalternos que pretendiesen atentar contra el nuevo sistema hegemónico acorazado de coerción.

La forma en que se construyó el sistema hegemónico de la posguerra acaeció a través de la creación de una serie de organizaciones-instituciones internacionales, similares a las de una sociedad civil, con la particularidad de que sus miembros eran Estados nacionales y tenían el propósito de: 1) regular las relaciones económicas y políticas

entre los Estados, con el fin de garantizar la acumulación de capital; 2) evitar, en lo posible, que se repitiese otro conflicto de magnitudes mundiales; y 3) regular la competencia capitalista internacional, evitando las acciones unilaterales.

La creencia de los intelectuales orgánicos y los dirigentes políticos que crearon el proyecto histórico que dio forma a estas organizaciones-instituciones internacionales, era que con ellas se romperían las líneas de conducta y las acciones unilaterales, típicas de los gobiernos de los Estados nacionales más poderosos de la preguerra.

A ellas se les atribuían las crisis económicas, la guerra, la fragmentación de la economía y del mercado mundial, colocando en su lugar un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en la instauración de un cierto tipo de cooperación que favoreciera una paz duradera, brindara seguridad contra las acciones unilaterales y trabajara en pos de la prosperidad (Cano, 2011).

En otras palabras, esperaban que estas instituciones internacionales asentadas en un conjunto de organizaciones multilaterales conjugaran idealmente alguna forma de gobierno mundial que diera cumplimiento a estos objetivos.¹

Sin embargo, desde una perspectiva crítica tendríamos que considerar que al romper esas organizaciones multilaterales las líneas de conducta y las acciones unilaterales (soberanas) en favor de la cooperación institucionalizada, se sometía a los Estados participantes a la lógica de un sistema, que por su propia naturaleza reproducía y

¹ Bajo esta lógica, cada una de las organizaciones-instituciones económicas estaba destinada a cumplir propósitos específicos. La creación del BIRF estaba encaminada a recuperar el espacio europeo para la reproducción capitalista, que se encontraba fuertemente amenazado tanto por los efectos destructivos de la guerra como por la influencia del socialismo y el poderío del Ejército Rojo (Guerra Fría). La Organización Internacional de Comercio, dentro de esta lógica institucional estaría encargada de regular las relaciones comerciales internacionales que garantizaran el libre flujo de mercancías por todo el mundo, contribuyendo así a la reconstrucción del mercado mundial. El Fondo Monetario Internacional, como puntal del sistema monetario planetario, debería jugar el papel estratégico en la reproducción, creando un sistema monetario estable que favoreciera el comercio y las transacciones internacionales de capitales.

favorecía un desarrollo mundial desigual –tanto económico como político, jurídico y militar– en beneficio de las naciones desarrolladas, particularmente de Estados Unidos, y en desmedro de los países subdesarrollados.

Se convertía así a estas organizaciones-instituciones internacionales en verdaderos baluartes hegemónicos.

La misión esencial de las instituciones internacionales de signo económico no era de ninguna manera la de garantizar el progreso, sino la de garantizar –en la medida de sus alcances y eficacia y a través del establecimiento de leyes, normas, principios y procedimientos– una superestructura congruente con la reproducción mundial del capital.

Es decir, que favoreciera la integración, la concentración de la producción, el control de los mercados y la acumulación de las ganancias privadas siempre que permitiese, al mismo tiempo, a la potencia y las clases hegemónicas quedarse con “la parte del león”. Ésta fue la base de la cooperación y el consenso entre la potencia hegemónica y sus aliados.

Averiguar cómo se integraron estas organizaciones-instituciones en el sistema hegemónico no es tarea fácil. Su imagen de instituciones universales, las sutilezas de los procedimientos burocráticos que les han sido propias además de la abundante tinta que ha corrido para justificar sus acciones, han oscurecido por momentos su relación con el poder hegemónico, con los intereses económicos de las clases capitalistas y con las concepciones del mundo dominantes.

Hay todavía que distinguir entre las frases y las pretensiones de los intelectuales orgánicos que las formularon, que las han administrado y que creen en ellas en los términos que hemos citado, y la naturaleza real y los intereses ocultos de estas instituciones. O si se quiere, entre lo que se imaginan ser y lo que en realidad son.

El elemento central fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), constituida en octubre de 1945. A ella concurrieron no sólo los países capitalistas, sino también los países socialistas encabezados por la Unión Soviética, que aceptaron institucionalizar sus relaciones internacionales.

La lógica de su constitución suponía que sus funciones abarcarían todos los temas, como los sociales, económicos y humanitarios, así como la política y la seguridad.

Sin embargo esto no fue así, pues los asuntos económicos pasaron a las agencias especializadas, y la seguridad quedó en manos del Consejo de Seguridad, con atribuciones relativamente independientes respecto a la Asamblea General y como un lugar donde el equilibrio político-militar con la potencia contrahegemónica podía ser alcanzado, entre otras cosas, a través de la capacidad de veto.

En la crucial esfera de la economía, aunque la Carta asignó a las Naciones Unidas la función de formular y guiar las orientaciones y estrategias macroeconómicas, que abarcarían a todos los organismos especializados, incluidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,² esto no resultó así.

Los Convenios Constitutivos del FMI y del BIRF fueron negociados y entraron en vigor con antelación a la fundación de la ONU, y los esfuerzos posteriores de ésta para lograr que dichas instituciones quedaran plenamente asociadas a ella, se vieron enfrentados a una enérgica resistencia por parte de la potencia hegemónica.

Los Convenios de Asociación que se firmaron con el Consejo Económico y Social (CES) al amparo de lo establecido por el artículo 63 de la Carta, solamente tuvieron un carácter simbólico.

Tanto el Banco Mundial como el FMI han funcionado desde entonces como organizaciones internacionales independientes. No han estado sometidos a una coordinación de fondo por las Naciones Unidas, ni a nivel intergubernamental (es decir, por el CES) ni a nivel de la secretaría (esto es, por el Comité Administrativo sobre Coordinación).

² El artículo 57 de la Carta dispone que “los distintos organismos especializados... serán vinculados con la Organización”. En el mismo artículo (57.1), la Carta define a los organismos especializados como aquéllos “establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos y relativas a materias de carácter económico, social...” El artículo 58 dispone que “la Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de los organismos especializados”. Carta de la ONU.

Tampoco ambas instituciones han estado dispuestas a brindar información a la ONU ni le han otorgado a ésta pleno acceso a sus reuniones, ni aceptado su participación en la elaboración de sus presupuestos. En suma, no se han sentido obligadas a acatar ninguna decisión de las Naciones Unidas.

Cabe mencionar que de las tres organizaciones internacionales planeadas originalmente, sólo sobrevivió el Fondo Monetario Internacional sin alteraciones fundamentales. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el cual tenía como objetivo la reconstrucción europea, fue hecho a un lado cuando el Plan Marshall se encargó de ello.

Este banco devino en el grupo del Banco Mundial,³ orientado al desarrollo y cuya influencia en los países subdesarrollados aumentó considerablemente.

La estratégica Organización Internacional de Comercio, que debía encargarse de la regulación del mercado mundial, fue propuesta para su creación en la Conferencia de Bretton Woods.

Sin embargo, las divergencias entre Estados Unidos y Gran Bretaña impidieron su avance. Estados Unidos encauzó entonces sus esfuerzos para que fuese creada por las Naciones Unidas, de la cual emanó la Carta de La Habana;⁴ sin embargo, dicha acta no fue ratificada ni siquiera por Estados Unidos,⁵ su principal promotor.

³ En la actualidad el Banco Mundial está integrado por varias instituciones: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), la Asociación Internacional para el Desarrollo (AID), la Corporación Financiera Internacional (CFI) y la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones (AMGI). Por extensión, y debido a que es el principal organismo de este grupo de organizaciones, generalmente se habla del Banco Mundial.

⁴ En esta línea, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convocó (el 18 de febrero de 1946) a la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo y se reunió en las sesiones preparatorias del proyecto original en Londres (1946) y Ginebra (1947), citas previas a la Conferencia de La Habana en 1948. Al tratado resultante se le denominó “Carta de La Habana, para una Organización Internacional de Comercio”, documento constituyente de la OIC y cuya acta fue suscrita por 53 países en total. Su entrada en vigor quedó condicionada a la ratificación de por lo menos un número de países que en su

Simultáneamente a las negociaciones de la Carta de La Habana, el gobierno de Truman, amparado por la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos que lo facultaba a reducir los aranceles norteamericanos a cambio de concesiones equivalentes de otros países, realizó negociaciones paralelas con 23 países⁶ durante 1947, mismas que dieron origen al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio (30 de octubre de 1948), el cual fue concebido como transitorio, mientras se implementaba la OIC.

Al fracasar ésta, el Acuerdo General se constituyó en la base de una nueva instancia internacional de negociación comercial, asumiendo algunos de los roles asignados a la OIC. Pero a diferencia de ésta, el Acuerdo General no era una organización ni contaba con una estructura institucional similar a la del FMI. Los participantes no tenían el carácter de países miembros, sólo eran partes contratantes (Tussie, 1987).

Con sede permanente en Ginebra y formalmente proclamado como un acuerdo general, en realidad el GATT se edificó como un sistema de negociación entre la potencia hegemónica y sus aliados.

Por su propia naturaleza representaba una institución *sui generis* y compleja, que en su desarrollo fue sumando otros acuerdos, protocolos, modificaciones y negociaciones, que se fueron

conjunto representara el 85% del comercio mundial. El acta sólo fue ratificada por dos países: Australia y Líbano (Díaz Mier, 1996).

⁵ Estados Unidos se negó a ratificar la Carta de La Habana, lo que provocó que otros países tampoco lo hicieran. Poco caso tendría crear una organización internacional donde el socio comercial de prácticamente todos los países signatarios estuviese ausente.

⁶ Los países que originalmente suscriben el GATT son: Australia, Reino de Bélgica, Birmania, Estados Unidos del Brasil, Canadá, Ceilán, República de Cuba, República Checoslovaca, República de Chile, República de China, Estados Unidos de América, República Francesa, India, Líbano, Gran Ducado de Luxemburgo, Reino de Noruega, Nueva Zelandia, Reino de los Países Bajos, Paquistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rhodesia del Sur, Siria y Unión Sudafricana.

incorporando periódicamente a través de rondas,⁷ las cuales terminaron por constituirse como la base de su funcionamiento.

Así, progresivamente fue adoptando las formas y el reconocimiento de una organización económica internacional, aunque eso sí, con una naturaleza jurídica muy compleja (Díaz Mier, 1996).

Los principios del GATT reflejaban la visión liberal del comercio y estaban fuertemente influidos por la percepción norteamericana de que las concesiones debían ser recíprocas y equivalentes. Otro de los principios fundamentales se refería a la no discriminación, expresada en la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF).

En suma, las organizaciones internacionales mencionadas no fueron creadas a partir de la convergencia de los intereses de los países participantes, ni en función de sus expectativas. Fueron creadas por la potencia hegemónica y sus aliados. Es decir, por el bloque histórico mundial, para dar respuesta al problema más acuciante de la economía mundial: la restauración y consolidación del proceso de acumulación capitalista a nivel mundial, bajo la lógica e intereses del sistema hegemónico.

Se debe tener en cuenta que la reproducción mundial del capital había sido profundamente dañada por la Primera Guerra Mundial, más tarde por la gran depresión de 1929 y luego por la Segunda Guerra Mundial.

La disminución de las tasas de crecimiento de la producción, la inestabilidad de los precios (sobre todo de materias primas) y las “constantes interrupciones del comercio mundial” (CEPAL, 2002: 3), aunadas a la ruptura del sistema de pagos, la inestabilidad de los tipos de cambio, el derrumbe del financiamiento internacional de largo plazo y la incapacidad de restablecer el “patrón oro” (CEPAL, 2002: 55) impedían que el ciclo del capital se completara sin sobresaltos, con lo que impactaban negativamente en las ganancias capitalistas.

Los Estados de los principales países capitalistas enfrentaron la situación, a partir de los intereses de sus clases dirigentes, echando a

⁷ Hasta 1993, las ocho rondas de negociación del GATT fueron: Ginebra (1947), Annecy (1949), Torquay (1951), Ginebra (1956), Dillon (1960-1961), Kennedy (1964-1967), Tokio (1973-1979) y Uruguay (1986-1993).

andar el predominio de políticas proteccionistas y controles administrativos estatales envueltos en ideologías nacionalistas y beligerantes, las cuales sólo lograron empeorar las condiciones para la reproducción.

Existía una verdadera anarquía macroeconómica internacional y una profunda inestabilidad política. Estas condiciones desfavorables para la reproducción mundial del capital se exacerbaban aún más durante la Segunda Guerra Mundial, al momento que las ganancias quedaron subordinadas a los sobresaltos de la contienda y la lógica militar.

De ahí que durante la segunda posguerra las instituciones internacionales se abocaran a ello. Sin duda esto representó un brusco giro en la historia comercial y financiera del mundo, en la medida en que por primera vez se pretendía capear la feroz competencia entre los grupos capitalistas más poderosos y sus Estados, esto a través de la cooperación y legalidad jurídica internacional, al mismo tiempo que realizaban negocios y transacciones financieras con buenas ganancias.

Sin embargo, hay que decir de estas organizaciones-instituciones internacionales que durante los primeros veinte años de su existencia no todas alcanzaron a cumplir las tareas que les fueron encomendadas.

El papel más destacado lo jugó el Fondo Monetario Internacional, que como ya mencionamos tenía la asignatura de construir un nuevo sistema monetario internacional, siempre a favor de los intereses hegemónicos.

El viejo sistema monetario internacional basado en el “patrón oro” había entrado en crisis terminal desde la Primera Guerra Mundial,⁸

⁸ Sin embargo, esto no quiere decir que la guerra fuese la causa de su crisis; sólo agravó los problemas que se venían arrastrando. Los desajustes mundiales que condujeron a la crisis del libre comercio, basado en el “patrón oro”, y la confrontación en los mercados que llevaron a no sólo a la Primera sino también a la Segunda Guerra Mundial, además de la Gran Depresión, pusieron en evidencia que el mercado no producía de manera automática el equilibrio (mercado autorregulado), y que “era necesaria la participación del Estado para recuperar el crecimiento”. (Aguirre, 2004: 111). A esto debemos agregar la pérdida de influencia y poder de Inglaterra como un factor decisivo para la crisis del “patrón oro”, pues su declinación repercutió implacablemente en la

particularmente con la suspensión de la convertibilidad de las monedas participantes. Así, a partir de la crisis del “patrón oro” predominó el caos monetario internacional.⁹

El Reino Unido, presionado internacionalmente sobre todo por Estados Unidos (principal acreedor mundial) y Suecia, e internamente por sus propios banqueros, retornó al “patrón oro” en 1925,¹⁰ que sin embargo tuvo que abandonar nuevamente en 1931, y “Estados Unidos, que contaba con los recursos suficientes, no hizo nada por asumir el liderazgo monetario” (Keohane, 1988: 105).

Las fluctuaciones monetarias se intensificaron aún más por los efectos de la Gran Depresión de 1929. El Acuerdo Monetario Tripartito firmado entre Estados Unidos, el Reino Unido y Francia de septiembre de 1936, al que posteriormente se adhirieron Bélgica, Holanda y Suiza, tendiente a evitar las devaluaciones competitivas, se vio pronto rebasado por el nacionalismo económico y la manipulación de los tipos de cambio.

Con la Segunda Guerra Mundial hubo cambios en las relaciones monetarias internacionales por medio de acuerdos intergubernamentales, sin que constituyeran un régimen monetario propiamente dicho.

Fue sólo con la celebración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en Bretton Woods, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, que se establecieron normas de derecho

libra, que ya era una moneda fiduciaria, generando una mayor desconfianza sobre su papel de eje del sistema monetario.

⁹ Las monedas europeas y de Estados Unidos fluctuaron con sus paridades libres y favorecieron la especulación desenfrenada. Todos los intentos por restablecer el “patrón oro fracasaron”. La Conferencia de Génova de 1922, donde las grandes potencias pretendieron establecer un patrón de cambios oro, también fracasó; además, el incumplimiento de Alemania de sus obligaciones indemnizatorias colapsó al marco y a las pretensiones de la Conferencia.

¹⁰ Este hecho constituyó un paso crítico para alcanzar la estabilidad monetaria. De manera unilateral, cada una de las potencias fue alineando sus tipos de cambio. Sin embargo, resultaba evidente que la adopción del “patrón oro” a la paridad de la preguerra (4.86) resultaba imposible de sostener por parte de un país económicamente debilitado.

internacional público destinadas a regir en forma general, o al menos con efectos amplios, las relaciones monetarias internacionales.

Para que esto ocurriera se conjugaron una multitud de determinantes, entre otras: el debilitamiento y la dependencia económica y militar de los aliados respecto a Estados Unidos; la correspondencia entre la estrategia político-militar y la económica; y el fortalecimiento del presidente Roosevelt en la política interna.

Mientras la Conferencia se llevaba a cabo entre el 1 y el 22 de julio de 1944, reuniendo a 44 países “unidos para ganar la Segunda Guerra Mundial”, en ese mismo mes, el día 6, con el llamado día “D”, se iniciaba el desembarco en Normandía que inauguraba el “Segundo Frente”.

Por otra parte, al ofrecer la Conferencia una alternativa para las relaciones monetarias internacionales en tiempos de paz, aislaba a las “Potencias del Eje” al mismo tiempo que los ejércitos aliados les propinaban un duro golpe militar.

Con la conferencia, dada la relevancia del tema monetario y los objetivos estratégico-militares, el presidente Roosevelt no sólo logró fortalecer el bloque aliado, sino incluso el consenso nacional interno.

Simultáneamente a la Conferencia de Bretton Woods se celebró la convención del Partido Demócrata, que designó al entonces presidente Roosevelt como candidato presidencial para una cuarta reelección, y a Truman como vicepresidente, misma meta que se consiguió en noviembre del mismo año.

El proceso de creación del FMI se caracterizó por la controversia y negociaciones entre el proyecto inglés y el norteamericano: el primero presentado por John M. Keynes (La Unión Internacional de Compensaciones) y el segundo mostrado por Harry Dexter White (Fondo de Estabilización Internacional), ambos realizados por sus respectivos equipos de intelectuales orgánicos.

Aunque cada uno de ellos proclamaba principios universales, en su contenido encerraban los intereses de sus propias clases dirigentes nacionales y la realidad que la Segunda Guerra Mundial había traído

para cada uno de ellos:¹¹ la emergencia de la hegemonía norteamericana y la franca decadencia del imperialismo inglés.

Por lo tanto, si Keynes abogaba por erigir una Cámara Internacional de Compensaciones que buscaba claramente favorecer a economías con una alta apertura comercial, como era el caso Gran Bretaña; y al proponer al Bancor como una especie de dinero mundial, buscaba evitar que una moneda nacional se convirtiese en la base del sistema monetario internacional; es decir, que el sistema monetario quedase sujeto al dólar, y con ello a las políticas internas y externas de los Estados Unidos, como finalmente sucedió.

Por otra parte, si el Plan White restablecía al oro como base del sistema monetario internacional, esto obedecía a que Estados Unidos se ostentaba como el mayor poseedor de oro en el mundo y su moneda era la única que podía ser convertible a él (Lichtensztein, 1987).

Si el plan Keynes en el tema del equilibrio de la balanza de pagos propugnaba por el ajuste a los países superavitarios (Estados Unidos), intentaba con esto favorecer a su país, que era deficitario; mientras los norteamericanos limitaban el ajuste obligatorio sólo a los países deficitarios, y con ello evitaban rendir cuentas de sus políticas económicas en el seno de la institución.

Si los ingleses se oponían a que el Fondo condicionara su ayuda a la aplicación de políticas de ajuste, se debía a que ellos eran un candidato inevitable de las injerencias del Fondo.¹²

¹¹ En la perspectiva del fin de la guerra, la principal preocupación económica norteamericana era conseguir los mercados externos suficientes para sus cuantiosos excedentes de mercancías y de capitales, a fin de evitar la recesión. Mientras los ingleses, que habían agotado sus reservas de oro, disminuido sus exportaciones, perdido gran parte de sus inversiones en el exterior de manera definitiva y se encontraban agobiados por las deudas, requerían de todos los medios para salvar la libra esterlina, sin que ello implicase su completa subordinación respecto al capital norteamericano (Lichtensztein, 1987).

¹² Por eso insistían en que las recomendaciones del Fondo sobre la política económica sólo fuesen eso, recomendaciones. Se resistían a concederle amplias facultades discrecionales respecto de la fijación de políticas económicas y de control sobre los bancos centrales de los países miembros. Manifestaban

Sin embargo, más allá de la contraposición de los intereses nacionales privaban las necesidades del sistema capitalista mundial, que exigía condiciones adecuadas para su reproducción.

Por lo tanto, las bases del acuerdo, capaces de conciliar los intereses nacionales con las necesidades sistémicas, partían de los objetivos comunes de la economía liberal: a) impulsar la expansión del comercio y las finanzas internacionales sobre una base multilateral; b) estabilizar los tipos de cambio, eliminando las restricciones cambiarias; y c) crear las condiciones para un libre movimiento internacional de capitales.

Desde esta perspectiva, un plan podía ser sustituido por el otro, aunque con ciertos matices. Si Keynes tenía el proyecto de crear un organismo verdaderamente mundial, para fines mundiales, controlado por una organización de muchos países, Mr. White también abogaba por un organismo mundial, sólo que controlado por Estados Unidos.

El banco central de Keynes era para Mr. White la Reserva Federal de Estados Unidos; y el Bancor ya estaba creado: era el dólar (Tamames, 1991).

Por lo tanto, las negociaciones concluyeron en la “Declaración Conjunta de los Expertos sobre las Instituciones del Fondo Monetario Internacional de las Naciones Unidas y Asociados”,¹³ que

además la inconveniencia de concederle tanta autoridad a una institución nueva, y alegaban que en tiempos normales el Fondo debería mantener una actitud pasiva, y que su iniciativa y discreción sólo debían circunscribirse a los casos en que hubiese riesgo de que se violaran las normas y finalidades de la institución, reservando el derecho de iniciativa para los bancos centrales de los países miembros. Los norteamericanos, por su parte, sabían que los ajustes, tan dolorosos para los pueblos, sólo podían ser impuestos, y por lo tanto deberían quedar condicionados a la obtención de apoyos financieros (Lichtensztein, 1987).

¹³ Este documento recogía en lo esencial los postulados norteamericanos. Se iniciaron los preparativos para la Conferencia y se emprendió el proceso de información para aquellos países que podrían asistir, proporcionándoles documentación acerca de los temas más importantes y de controversia que se mantenían pendientes, como eran el tamaño de las cuotas del Fondo, el acceso a sus recursos, las contribuciones en oro, la localización de las oficinas centrales del Fondo y del Banco, y el poder de voto de los países miembros. Esta

recogía en lo esencial los postulados norteamericanos.¹⁴ Sobre esta base se aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en julio de 1944.

La fundación del Fondo Monetario Internacional estuvo ligada a tres objetivos hegemónicos fundamentales, que se reforzaban mutuamente. El primero consistía en proclamar institucionalmente al patrón oro-dólar como eje del sistema monetario internacional en construcción (artículo IV, sección 1, inciso a).

El segundo ordenaba institucionalizar las paridades fijas (aunque flexibles) como base de las relaciones monetarias internacionales, que evitaran que los países miembros implementaran devaluaciones competitivas (artículo IV, sección 4), y al mismo tiempo reforzaba el *statu quo* monetario, erguido sobre el predominio del dólar.

El tercero consistió en establecer un fondo financiero común, para que los países con problemas de balanza de pagos los resolvieran sin tener que recurrir a devaluaciones que afectaran el sistema de paridades fijas.

Finalmente, al igual que en el plano nacional, los intelectuales jugaron un papel fundamental en la formación y desenvolvimiento de la hegemonía y el bloque histórico internacional.

documentación se sometió a la consideración de especialistas de un grupo limitado de países, en junio de 1944, en Atlantic City, Estados Unidos. En esa reunión previa a la Conferencia de Bretton Woods participaron expertos de 17 naciones.

¹⁴ Los puntos que quedaron pendientes, como era el caso de la sede del Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Fomento, se resolvieron a favor de los norteamericanos, como parte de un paquete de concesiones que tuvieron que aceptar los británicos en las negociaciones iniciadas en septiembre de 1945, para obtener un préstamo. Dicho paquete contenía el abandono del sistema de preferencias imperiales, de la libre convertibilidad de la libra esterlina, la utilización de los créditos para reactivar la economía mundial y la ratificación de los acuerdos de Bretton Woods. El paquete de concesiones también contenía implícitamente algo aparentemente menos tangible: la aceptación británica, de manera definitiva, de la hegemonía norteamericana; y su incorporación subordinada al bloque histórico mundial dirigido desde Washington.

Ellos fueron los encargados de diseñar, impulsar y administrar las organizaciones multilaterales –como es el caso del Fondo Monetario Internacional– y de generar el consenso en torno a ellas y de proveer la ideología hegemónica (Ikenberry, 1992). Es decir, de dirigir el bloque histórico.

Por otra parte el socialismo, representado principalmente por la Unión Soviética como fuerza contrahegemónica, parecía avanzar inconteniblemente en el mundo de la Posguerra.

A través de la ocupación de Europa del Este por el Ejército Rojo había fundado el bloque socialista, que luego se convirtió en el Pacto de Varsovia (1955) y se erigió como potencia nuclear (1949); los movimientos guerrilleros procomunistas avanzaban en China,¹⁵ Vietnam, Grecia, Turquía y la Península Malaya; incluso en la misma Europa Occidental la izquierda electoral tomaba posiciones políticas importantes. En Francia e Italia existían ministerios en manos de los partidos comunistas.

La amenaza socialista se convirtió inmediatamente en un elemento que cohesionó a las clases capitalistas y a los Estados de ambos lados del Océano Atlántico, y constituyó un factor insoslayable para la cooperación capitalista y el consenso en torno a la hegemonía norteamericana en los asuntos mundiales.

El “avance del socialismo” en la posguerra marcó un límite geográfico y político a la hegemonía norteamericana, y durante mucho tiempo la obligó a convivir con un sistema diferente al régimen capitalista propiamente dicho, además de constituirse como una permanente amenaza.

Como ya se mencionó, en la inmediata posguerra la reconstrucción europea constituyó la tarea básica para el sistema hegemónico. En primer lugar, significaba evitar que Europa Occidental se convirtiera en parte del socialismo internacional.¹⁶

¹⁵ “En el fin de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas controlaban una quinta parte de China y más de 105 millones de gentes” (La Feber, 1991: 30).

¹⁶ A su regreso de Moscú, Marshall volvía convencido de que “si Estados Unidos no ayudaba, ineluctablemente toda Europa quedaría dentro de la esfera de intereses de la URSS” (Tamames, 1984: 54).

En segundo lugar, sólo sobre la base del pleno funcionamiento económico de los países europeos se podía hablar de su restablecimiento como Estados nacionales, de la reproducción del capitalismo a nivel mundial y de la operatividad de las instituciones internacionales propias del sistema hegemónico.

Finalmente, Europa Occidental no tenía más que dos salidas para solucionar sus problemas: una, recibir ayuda de manera inmediata de Estados Unidos, único país en condiciones de otorgarla; o dos, sobre la base de sus limitados recursos, se encaminaba a una planificación económica de carácter socialista. La situación económica y política de la posguerra no daba espacios para la reconstrucción europea que no fuera a través de la ayuda directa norteamericana.

Por su parte, Estados Unidos contaba con las capacidades materiales suficientes para dirigir el proceso de reconstrucción. En el interior de la sociedad estadounidense, el bloque histórico construido a través del “Estado de bienestar” se mantenía intacto (Franklin Delano Roosevelt fue presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta 1945), y existía el consenso social suficiente para cumplir con esta tarea.

Por añadidura, su economía estaba en pleno auge, como producto entre otras cosas de la “tercera revolución tecnológica” (Mandel, 1971), que aguijoneada por la guerra había dinamizado poderosamente sus fuerzas productivas, acelerando su proceso de acumulación de capital. Así, su capacidad productiva y financiera soportó sin dificultades la gigantesca demanda de productos, créditos y ayuda económica por parte de los aliados.¹⁷

Al terminar la guerra, el verdadero problema de Estados Unidos no era la penuria, sino la amenaza de la sobreproducción. Por lo tanto, la ayuda internacional que ofrecía Estados Unidos respondía también a sus propias necesidades.

¹⁷ Según estimaciones, de los 48 601 365 millones de dólares proporcionados por Estados Unidos en forma de créditos y ayuda al exterior, más de 31 mil millones fueron destinados al Imperio Británico y más de 11 mil millones a la Unión Soviética. Por su parte, Francia y otros países de Europa recibieron cerca de 4 000 millones entre marzo de 1941 y septiembre de 1946 (Sultzberger, 1966).

Además, sobre la base de su poder económico desplegaba su capacidad militar,¹⁸ ya que el grueso del sostenimiento de los ejércitos aliados dependía directa o indirectamente de Estados Unidos, durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

En suma, las condiciones históricas prevalecientes en la posguerra y la voluntad del gobierno norteamericano convirtieron a Estados Unidos en el único país capaz de ofrecer seguridad a las clases dirigentes y a los Estados nacionales europeos frente a la amenaza soviética; de ayudar al restablecimiento de las economías europeas; de establecer un nuevo orden internacional y de crear toda una ideología internacional capitalista (“el mundo libre”, “la democracia”), diferenciada del “socialismo”, del “fascismo”, del “imperialismo” e incluso de contribuir a la formación de lo que se podría llamar la “cultura occidental”.

En consecuencia, podemos afirmar que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra se habían dado las condiciones históricas, objetivas y subjetivas para que Estados Unidos se convirtiera en la potencia hegemónica.

Ahora bien, la estrategia concreta para la reconstrucción europea y la consolidación del nuevo bloque histórico internacional se dio a través del Plan Marshall, el cual se inició oficialmente el 3 de abril de 1948 con la firma del presidente Truman de la “Ley de Asistencia al Extranjero” (Foreign Assistance Act).¹⁹

Más allá de la simple transferencia de dólares y de excedentes económicos de Estados Unidos hacia Europa, el Plan Marshall representó un fenómeno mucho más complejo. La ayuda estuvo condicionada a la apertura de los mercados europeos y la aceptación

¹⁸ No es casual que pomposamente el presidente Roosevelt definiera a su país como “El arsenal de la democracia” (Eidenmuller, 2008).

¹⁹ El Programa de Recuperación consistió en un mecanismo de transferencia de cantidades considerables de dólares de Estados Unidos a varios países europeos. Entre 1946 y finales de 1951 se habían canalizado más de 11 000 millones de dólares (Fajnzilber, 1976: 21.), y para junio de 1961 el monto alcanzado era de 30 230.8 millones de dólares (Tamames, 1984: 61). A través de la Administración de Cooperación Económica (ECA, por sus siglas en inglés), los norteamericanos mantuvieron en todo momento el control sobre el destino de los dólares en Europa.

del multilateralismo en las transacciones económicas, y en general al acatamiento de la regulación establecida por las instituciones internacionales.

Esto nos habla de cómo Estados Unidos utilizó los factores económicos (comercio, inversión, crédito) para hacer avanzar su hegemonía mundial, al mismo tiempo que beneficiaba a su clase dirigente.

El fuerte flujo de inversión directa a través de las empresas transnacionales norteamericanas vino, no sólo a llenar los espacios vacíos dejados por las empresas europeas en quiebra, también a través de la absorción y fusión de las empresas norteamericanas con las europeas rentables se creó una alianza de clase (asociación) entre los propietarios europeos y los norteamericanos.

Cabe agregar que la producción europea, particularmente la de Alemania Federal, se recuperó sobre la base de los mercados de Estados Unidos. En suma, el mayor grado de integración relativa de las economías del Atlántico tuvo su contraparte en un bloque de Estados, pero también de clases, sobre el cual se levantó el bloque histórico internacional.

“Las clases sociales del país dominante encuentran aliados en las clases dentro de otros países. El bloque histórico que apuntala los Estados particulares llega a estar conectado a través del interés mutuo y las perspectivas ideológicas de las clases sociales en los diferentes países, y las clases globales se empiezan a formar” (Cox, 1987: 7).

La reconstrucción europea revaloró entonces el funcionamiento de las instituciones internacionales y contribuyó poderosamente a la creación de otras. El solo anuncio del Plan Marshall puso en marcha el primer convenio intraeuropeo de pagos. La ayuda Marshall tuvo consecuencias importantes en la conformación económica de Europa.

De hecho el verdadero comienzo de la cooperación europea, que dio origen posteriormente a la Comunidad Económica Europea (CEE), fue resultado de las condiciones impuestas por Estados Unidos en el momento de conceder su ayuda.

Ulteriormente, la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica permitió realizaciones tan importantes como la Unión Europea de Pagos y la liberalización del tráfico de mercancías invisibles.

La recuperación europea permitió el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Sin los dólares que liberó el Plan Marshall, la liquidez hubiese sido insuficiente para activar el comercio mundial y hacer posible el juego de los dispositivos del FMI. Y sin la expansión comercial implicada en la recuperación, en el GATT apenas se habrían superado las primeras negociaciones arancelarias.

Por lo que se refiere al BIRF, al resolver el Plan Marshall los problemas primordiales de los países de Europa Occidental, esta institución pasó a ocupar un lugar secundario y años después orientó sus actividades esencialmente a los países subdesarrollados.

Finalmente, la aplicación del Plan Marshall tuvo importantes consecuencias para la Guerra Fría. Los soviéticos vieron en el Plan Marshall un instrumento de penetración del capitalismo norteamericano, y no vacilaron en rechazarlo abiertamente en toda Europa Oriental y por todos los partidos comunistas del mundo.

En respuesta promovieron la creación del Consejo de Ayuda Económica Mutua, que desde 1947 garantizó el predominio de la Unión Soviética en el bloque del este, y emprendieron un limitado renacimiento a la III Internacional Comunista, bajo el nombre de “Oficina de Información Comunista” (Cominform).

En este contexto, el 4 de abril de 1949 fue creada la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que venía a ser en lo militar la contraprestación europea a la ayuda económica recibida de Estados Unidos. Por lo demás, la OTAN se constituyó inmediatamente en la pieza clave del “Sistema de Seguridad” norteamericano frente a la Unión Soviética.

Ya la URSS había rechazado formar parte del organismo estratégico de la hegemonía norteamericana; es decir, del Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto que la URSS participó en la Conferencia

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en Bretton Woods y en algunas reuniones previas, no llegó a ser parte formal del FMI.

Polonia se retiró en 1950 y Checoslovaquia fue expulsada en 1954. Los pagos de estos países con los países capitalistas se basaron en sistemas bilaterales, o simplemente se realizaron a través del oro o de divisas convertibles.

Posiblemente, todos los esfuerzos por contener a la Unión Soviética hubiesen resultado nulos y el bloque histórico no hubiese resistido en el tiempo, si la recuperación del capitalismo en Europa Occidental y Japón hubiese fracasado.

Pero la realidad impuso un crecimiento económico acelerado y sostenido de los principales países capitalistas del orbe entre 1955 y 1965 (Mandel, 1969), y un desarrollo del sistema hegemónico sin contradicciones graves.

Paradójicamente, los motores de dicho crecimiento que se desarrolló en forma de círculos concéntricos partieron de los países derrotados durante la Segunda Guerra Mundial; es decir, Alemania (Federal) y Japón.

Las actividades de reconstrucción; la inauguración de la tercera revolución tecnológica, que impactó poderosamente en la reducción del ciclo de rotación del capital fijo e impulsó el crecimiento industrial, incluyendo la producción acelerada de bienes de consumo y la construcción; la participación activa de los gobiernos, subsidiando ganancias y absorbiendo pérdidas y favoreciendo el crecimiento de la demanda a través del gasto y de la inflación; y los bajos salarios acompañados de una alta calificación que favorecieron el crecimiento acelerado de las ganancias, sobre todo en Alemania Occidental, Japón e Italia, fueron todos factores que contribuyeron al mayor periodo de crecimiento económico y de prosperidad capitalista y a un ritmo hasta entonces desconocido, incluso antes de la Primera Guerra Mundial (Mandel, 1969).

El auge de la economía mundial

La hegemonía de Estados Unidos se mostró plenamente entre 1955 y 1965, en el marco de una fase de crecimiento acelerado de la economía mundial. Este exitoso comportamiento de la reproducción mundial del capital debemos buscarlo en las interconexiones entre el desarrollo de la economía mundial y el sistema hegemónico, que permitieron una congruencia relativa entre ambas esferas, sin contradicciones graves y que definieron el bloque histórico internacional de la posguerra.

La base del éxito radicó en la innovación tecnológica y en una fuerza de trabajo calificada y barata.

El crecimiento acelerado fue desigual, como es característico del capitalismo, y se concentró en los países desarrollados; y dentro de éstos, con mayor acento en Alemania Federal y Japón (países derrotados en la Segunda Guerra Mundial que fueron incorporados a la alianza hegemónica y sobre los cuales Estados Unidos tenía mayor control), y en menor medida en Estados Unidos, como lo muestra el siguiente cuadro.

Tabla 1

Tasas de crecimiento

**(Cambio porcentual promedio anual, excepto para la proporción
Inversión/PIB)**

País	PIB	PIB/hora	Stock de capital	Stock bruto/hora	Inversión bruta de capital/PIB
	1950/1973	1950/1973	1950/1973	1950/1973	1950/1973
EEUU	3.6	2.5	3.2	1.7	13.2
R.F.A.	5.9	4.9	6.6	5.5	17.2
Japón	9.3	8	9.1	7.3	23.7

Cuadro elaborado a partir de datos presentados por Brenner (1999: 60).

El Plan Marshall jugó un papel fundamental y no debe ser considerado sólo como un elemento puramente económico. Corresponde también a la conexión natural entre la “tercera revolución tecnológica”, los flujos de capital, la Guerra Fría, el restablecimiento de la acumulación mundial del capital, las nuevas instituciones internacionales y el progreso del proceso de integración mundial.

Para efectos de la reproducción del capital, la destrucción de Europa y Japón representó una condición inmejorable para que la reposición del capital fijo se hiciera sobre una base tecnológica significativamente superior.

Para ello se contó con la inversión extranjera directa norteamericana y la innovación producto de la llamada “tercera revolución tecnológica”, conectada a su vez de manera natural tanto con una base tecnológica no explotada propia de la Segunda Guerra Mundial, como con la “carrera armamentista” derivada de la Guerra Fría (Mandel, 1971).

Europeos y japoneses no sólo copiaron las nuevas tecnologías; también las transformaron, y conforme avanzó el proceso de su recuperación económica, se permitieron aumentar los gastos en investigación y desarrollo, así como en entrenamiento y educación, lo cual les permitió desarrollar nuevas ramas de la producción y mejoras tecnológicas en algunas “antiguas” ramas como la textil, la industria del acero, de automóviles, de máquinas herramientas y electrónica.

Mientras, en Estados Unidos se observaba una combinación de estancamiento en las industrias “viejas” (como la siderurgia, la del carbón y la industria textil) y un acelerado crecimiento en industrias como la química, la electrónica y la energía eléctrica (Mandel, 1971).

Por otra parte, el crecimiento acelerado se nutrió de fuerza de trabajo barata y calificada y por la subordinación de los trabajadores a los bloques históricos nacionales, en especial en Alemania Federal, Japón e Italia. Los tres contaron con abundante mano de obra y, por lo tanto, bajos niveles de salarios, que acompañados de altos niveles de productividad les permitieron altas tasas de ganancia y de acumulación.

En Italia, el subdesarrollo del sur se convirtió en una vasta reserva de oferta de trabajo para el norte; en Japón fue la combinación de un sector “moderno” y un sector “arcaico” (tradicional) lo que proporcionó al primero amplias reservas de fuerza de trabajo; y en Alemania Occidental tuvo lugar un flujo de más de 10 millones de refugiados.

Por otra parte, la capacidad de negociación salarial de los trabajadores ya había sido mermada ostensiblemente desde antes de la guerra por los regímenes fascistas, y aunque al terminar la guerra las fuerzas de ocupación inicialmente alentaron políticas prosindicalistas, con la llegada de la Guerra Fría cambiaron su postura y pasaron incluso a la represión directa de los obreros.

Los salarios bajos permitieron además a los empresarios utilizar los incrementos progresivos de los mismos como mecanismo de negociación para conseguir la “estabilidad social”, sin que ello afectase significativamente la tasa de ganancia.

Este anillo de consenso y coerción fue tan efectivo, que resistió la prueba del “pleno empleo” en la Alemania de 1961, cuando los obreros alemanes no obtuvieron ninguna ventaja de ello.

Como ya mencionamos, Estados Unidos contribuyó poderosamente al crecimiento europeo, sobre todo a través del enorme flujo de capitales (públicos y privados) destinado a Europa, con la apertura de su mercado y a través de la institucionalización del dólar. Dichos factores, además de facilitar el proceso de crecimiento, favorecieron y consolidaron el consenso de los aliados en torno al liderazgo económico norteamericano.

Junto con los capitales del Plan Marshall, las empresas trasnacionales norteamericanas incursionaron en Europa en una aventura triunfante. Recibieron apoyo por parte del gobierno norteamericano a través de las políticas de libre intercambio de bienes y fondos de inversión, y fueron bien acogidas por los gobiernos europeos, merced a su contribución al proceso de reconstrucción y absorción del empleo.

Por otra parte, respaldadas por sus incomparables ventajas tecnológicas y de recursos se ubicaron rápidamente en los mercados europeos, llegando a controlar algunas de las ramas más importantes

de la producción y “participaron activamente en la formación bruta de capital en los países del Mercado Común” (Braun, 1967: 189).

De igual manera controlaron a un buen número de las empresas europeas, a través de fusiones o absorciones completas, y mantuvieron las decisiones estratégicas centralizadas y enfocadas al mercado mundial.

La creación del Mercado Común Europeo, con sus 160 millones de consumidores potenciales y su acelerado crecimiento económico, superior incluso al de Estados Unidos, generó que las filiales norteamericanas en Europa se expandieran con mayor rapidez que sus matrices en Estados Unidos, y que las mismas empresas competidoras europeas. Estos elementos contribuyeron para que la inversión directa pasara de 637 millones en 1952 a 5 398 millones de dólares en 1964 (Fajnzilber, 1976: 22).

La rápida expansión de las empresas trasnacionales norteamericanas ocasionó un proceso de desnacionalización en las economías europeas, las cuales, acosadas en sus mercados, respondieron al reto con una política más competitiva: se fusionaron y elevaron su eficiencia tecnológica y administrativa.

Y no sólo eso, favorecieron acuerdos institucionales, sobre todo en Alemania Federal y Japón, entre el sector financiero y el manufacturero, entre sindicatos, empresarios y gobierno, asegurándose un apoyo desconocido en Estados Unidos.

Y sobre todo diseñaron estrategias para aprovechar una mayor apertura del mercado de Estados Unidos, de los países socialistas y los propios países europeos. Esto último fue especialmente cierto para la República Federal Alemana, que logró saldos positivos considerables en su comercio con los países del Mercado Común Europeo.

En Japón, la incursión de las empresas trasnacionales norteamericanas no fue tan afortunada. Las grandes empresas japonesas reconstruyeron y controlaron rápidamente su sistema productivo, a través de la creación de redes estrechamente interrelacionadas de las grandes empresas con los grandes bancos

profundamente involucrados con la industria (*keiretsu*), y un Estado altamente intervencionista.

Además, brindaron a sus trabajadores incrementos salariales y trabajo de por vida, lo cual les ganó estabilidad y productividad.

Sobre esta base aplicaron una política restrictiva respecto a la inversión extranjera en el sector manufacturero y financiero, protegieron su mercado interno con barreras arancelarias más altas que las europeas y procesaron la tecnología occidental para efectuar innovaciones en aquellos sectores de mayor dinamismo en el comercio mundial.

Además, el control sobre el mercado interno les brindó una particular fortaleza para abrirse paso en los mercados internacionales, fortaleza que hicieron efectiva en plazos muy breves. En 1952, las exportaciones de Japón representaban el 1% de las exportaciones mundiales; para 1970 esa proporción había aumentado al 6%.

De tal suerte que cuando Japón se vio forzado a liberalizar su economía a finales de la década de los sesenta, presionado por las empresas norteamericanas y europeas, y obedeciendo a un cambio de actitud del gobierno japonés y de las propias empresas de ese país, pudieron, gracias a su competitividad, resistir el creciente empuje del capital extranjero (procedente, en orden de importancia, de Estados Unidos, Alemania Occidental, Suiza, Inglaterra, Francia y Canadá) (Fajnzilber, 1976: 23).

Para la segunda mitad de la década de los años sesenta la recuperación de las empresas europeas y japonesas era una realidad, y su expansión internacional resultaba más dinámica que la de las trasnacionales norteamericanas. Entre 1966 y 1971 las empresas japonesas crecieron al 30.4% anual, y las alemanas al 24.2%, en tanto las norteamericanas lo hicieron al 9.5% anual.

Sin embargo, las empresas norteamericanas todavía mantenían la supremacía apoyadas por el respaldo financiero que les daba la hegemonía del dólar, de modo que se expandían y actuaban de manera mucho más decisiva en los mercados en donde se ubicaban, utilizando incluso de manera abundante los propios recursos financieros del país huésped.

Un elemento estratégico para el crecimiento acelerado de la economía mundial lo constituyó la institucionalización del dólar como dinero mundial en la conferencia de Bretton Woods. La supremacía del dólar hizo posible que operara el Plan Marshall, y con él la transferencia de recursos de Estados Unidos para la recuperación económica de los aliados.

La moneda norteamericana convertida en dinero mundial brindó la suficiente confianza, tanto a empresarios como a gobiernos, para la realización de sus transacciones económicas internacionales.

Sobre la base del dólar se dio la recuperación y estabilización de las operaciones financieras mundiales, y utilizado como activo de reserva generó una estabilidad monetaria apoyada por el sistema de paridades fijas.

Anclada su expansión al déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, derivada a su vez del financiamiento de sus bases militares en el extranjero, estimuló el crecimiento económico, la ofensiva exportadora de sus aliados rivales y proveyó de ingresos adicionales a los países ocupados.

No menos importante fue el papel que jugó el dólar para la expansión de las empresas trasnacionales norteamericanas. Por todo ello, el dólar también fue fuente de consentimiento de la dirección norteamericana, al mismo tiempo que factor de negociación, en el seno del bloque histórico.

Además, la expansión del dólar se constituyó en el eslabón que unió y dio congruencia a la relación entre el desarrollo de la economía mundial y el esquema de seguridad que brindaba Estados Unidos para sí y para los Estados y clases capitalistas aliadas, en contra del socialismo representado por la Unión Soviética.

En materia de política económica, difícilmente se le puede atribuir al keynesianismo todo el éxito económico de la posguerra. Por lo menos para Alemania Federal y Japón, no fue la demanda doméstica el motor del crecimiento económico, sino sus políticas exportadoras basadas en salarios bajos y alta productividad, que les redituaron un superávit en la balanza de cuenta corriente y una moneda cada vez más fuerte.

Incluso en el caso alemán este vigor económico tuvo que ser refrenado por Estados Unidos a través de la revaluación de 1961, para que no rompiera el sistema de paridades fijas, y sobre todo para que disminuyera su competitividad.

En todo caso, el mayor mérito del keynesianismo lo encontramos en los estímulos a la demanda por parte del gobierno norteamericano, que junto con sus enfoques de libre comercio y libre inversión en la economía mundial favorecieron las exportaciones de sus competidores.

En suma, sólo con las políticas económicas orientadas a la exportación fue posible el crecimiento europeo y japonés. Las escalas de la producción que alcanzaron no hubiesen sido posibles únicamente con los mercados nacionales, e incluso regionales.

Ahora bien, si los europeos y japoneses fueron capaces de arrebatárles a los norteamericanos porciones cada vez mayores del mercado mundial, fue con la complacencia de Estados Unidos, que toleró no sólo la amplia apertura de su economía a la penetración de sus aliados y competidores, en contraprestación a la estabilidad económica internacional, la rápida expansión en el extranjero de los bancos y corporaciones de Estados Unidos y sobre todo a su hegemonía.

Obstinado en reforzar la alianza contra el comunismo, el gobierno norteamericano privilegió sus relaciones económicas con los países derrotados y ocupados; es decir, Alemania y Japón, a los cuales les abrió su mercado interno y los incorporó al poco tiempo al bloque histórico.

Al igual que a los aliados históricos, también a estos países les solapó su proteccionismo y sus restricciones a la movilidad externa e interna del capital que impusieron, y se abstuvo de presionarlos para que establecieran las paridades fijas de sus monedas, pactadas en Bretton Woods (Brenner, 1999: 66).

La ausencia de crisis económicas relevantes, el buen funcionamiento de los negocios, la competencia capitalista todavía no exacerbada, así como algunas concesiones (de manera desigual) otorgadas a la clase

obrera (casi pleno empleo y aumento de los salarios reales), contribuyeron a la consolidación del bloque histórico.

Los bloques formados por las clases capitalistas nacionales y las clases subalternas en los países desarrollados, hasta mediados de los años sesenta parecían no mostrar fisuras de consideración.

Estados Unidos se esforzó en mantener la alianza mientras trabajaba por crear un entorno internacional favorable a sus empresas transnacionales y a sus bancos que estaban operando internacionalmente, mientras internamente favorecía a sus productores con un déficit presupuestal de corte keynesiano orientado al aspecto militar.

Parte II: Crisis del sistema hegemónico de la Posguerra

Simultáneamente a este auge del capitalismo, particularmente en los países desarrollados, se fueron desplegando signos de que la era del crecimiento económico sostenido pronto llegaría a su fin.

Si a finales de los años sesenta del siglo pasado el concepto de crisis económica, al menos en el medio académico, se encontraba muy devaluado,²⁰ en los años siguientes retomaría su protagonismo, en el marco de una fase descendente de larga duración de la economía mundial (Mandel 1971, 1974, 1979 y 1980), caracterizada esencialmente por la “reducción de la tasa de ganancia” (Brenner, 1999: 136).

Los principales factores que generaron este quiebre fueron: la disminución del ejército industrial de reserva, particularmente en Europa Occidental; la tendencia acelerada hacia la sobreproducción; y

²⁰ Los economistas Robert Solow y Paul Samuelson, ganadores del Premio Nobel, pronunciaron jubilosas necrologías sobre la destructiva inestabilidad económica capitalista: “la vieja noción de un... ‘ciclo de negocios’ ya no tiene mayor interés”. Por su parte, los artífices de las políticas económicas ubicados en la OCDE advertían a los gobiernos sobre un crecimiento económico incontenible hasta finales de siglo. Más aún: “el milagro del mercado”, supervisado por el Estado, podía virtualmente garantizar un crecimiento perpetuo (Brenner, 1999: 9).

sobre todo, el resurgimiento de la competencia internacional y la inflación (Mandel, 1971).

El desarrollo acelerado de la producción y las políticas de pleno empleo²¹ ocasionaron un aumento en los niveles de ocupación, a tal grado que el ejército industrial de reserva tendió a disminuir y los costos de la fuerza de trabajo aumentaron.

Cada una de las clases capitalistas nacionales se volvió entonces en contra de su clase obrera, aplicándole ajustes salariales, programas de productividad y represión a los sindicatos, y orquestó con los gobiernos estrategias de largo alcance que incluían estímulos a la automatización, la reincorporación de las mujeres a las actividades económicas, el traslado de la producción de uso intensivo de fuerza de trabajo hacia los países subdesarrollados y el solapamiento del proceso inflacionario.

Pero estas medidas, aparentemente de orden económico, tenían un significado mucho más profundo. Se trataba del inicio de la ruptura de los bloques históricos nacionales tal y como se habían construido durante la inmediata posguerra.

Los movimientos estudiantiles que se precipitaron en 1968 y 1969 en varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos, aliados con los obreros, como en el caso francés, dieron una enérgica respuesta a las políticas económicas que comenzaban a desarrollarse (Mandel, 1969).

En mayo de 1968 hubo un número mayor de huelguistas que en ningún otro momento de la historia de la clase obrera de Francia. Además, las movilizaciones sociales utilizaban formas de lucha mucho más radicales que, por ejemplo, en 1936. Cabe hacer notar que si Gran Bretaña y Estados Unidos tradicionalmente habían sido considerados los países clásicos de la economía capitalista, Francia lo había sido de la política.

La fuerza de estos movimientos no pasó inadvertida para las clases dominantes, las cuales tuvieron que retroceder temporalmente en sus políticas incipientemente globalizadoras, esperando solapadamente para avanzar con mayor fuerza en las décadas siguientes.

²¹ Alemania alcanzó el pleno empleo en 1961, y Japón en 1970.

Por otra parte, en la década de los sesenta la sobreproducción se mostraba ya en la mayoría de los países desarrollados, a través de los altos índices de capacidad instalada excedente en las principales ramas de la producción (Mandel, 1971) y el estancamiento de los precios, e incluso su declinación.

Todavía durante aquellos años ocurrieron inversiones crecientes, sobre todo con el objetivo de disminuir los costos, lo que agravó la sobreproducción, acicateada al mismo tiempo por la competencia internacional, que reducía drásticamente los precios de exportación.

Las agresivas políticas exportadoras de Europa y Japón que había favorecido Estados Unidos, se volvieron en su contra. Estos países eran ahora serios contendientes en el mercado mundial, incluso en las ramas más complejas de la producción industrial, como la producción de maquinaria. Europeos y japoneses podían ofrecer en el mercado mundial productos de similar calidad a los norteamericanos, pero a precios más bajos (Brenner, 1999: 155).

Las corporaciones de Estados Unidos, para aprovechar los bajos costos de Europa y Japón incrementaron sus inversiones en una proporción de uno de cada tres dólares invertido nacionalmente, afectando la propia competitividad de su país de origen.

La producción europea (principalmente la alemana) y la japonesa enfrentaban exitosamente en el mercado mundial a la producción norteamericana, exacerbando, por un lado la competencia capitalista internacional; y por el otro, favoreciendo la reaparición del espectro de la sobreproducción.

Sin embargo, el punto de quiebre del sistema hegemónico fue la caída del sistema de Bretton Woods. La crisis del dólar, y por ende del sistema monetario internacional, no fue sorpresiva, la turbulencia de 1960-1961 representó el primer antecedente de que el sistema de paridades fijas estaba en peligro, cuando la onza de oro alcanzó los 40 dólares en la bolsa de valores de Londres.

El gobierno de Estados Unidos tuvo que forzar un acuerdo con los gobiernos de los países que tenían las mayores reservas del metal, particularmente Francia, para crear el “*pool* del oro”, en octubre de ese mismo año, y restablecer la paridad.

No obstante su compromiso, la Francia nacionalista de De Gaulle, uno de los principales aliados de Estados Unidos, ya había dado muestras palpables de su desconfianza respecto al dólar, y siguió comprando oro de acuerdo con las tesis de Jacques Rueff, así como la de exigir el improcedente retorno del “patrón oro” (Mandel, 1974), y en junio de 1967, a propósito de su antagonismo con la política exterior norteamericana en China y Vietnam, acabó por abandonar el *pool*. Su participación la absorbió Estados Unidos.

Por su parte el Reino Unido, copatrocinador del sistema de Bretton Woods, fue incapaz, ante sus problemas históricos y contingentes, de evitar la devaluación de la libra esterlina (1967), puntal secundario del sistema monetario internacional (Mandel, 1974).

El sistema de paridades fijas era cada vez más difícil de mantener, en tanto los movimientos de capital especulativo, aguijoneados por el mercado de eurodólares, cruzaban el Atlántico sin que los gobiernos de Estados Unidos y los países europeos los pudiesen contener.

Tras la retirada francesa, el *pool* sobrevivió sólo nueve meses (el 17 de marzo de 1968 fue suprimido). En su lugar se estableció un doble mercado internacional para el oro. Por un lado, se mantuvo un precio oficial de 35 dólares la onza para las transacciones entre bancos centrales; por el otro, el resto del mercado quedó completamente libre, con una incontrolable tendencia de los precios a la alza.

De hecho, la decisión del mercado doble equivalía a la no convertibilidad del dólar, pues resultaba absurdo pensar que Estados Unidos vendería oro a los bancos centrales, cuando en el mercado libre se situaba a precios muy superiores. Finalmente, para favorecer el mercado libre Estados Unidos levantó el compromiso de Sudáfrica (principal productor del metal) de vender oro sólo a 35 dólares la onza.

La revaluación del marco alemán (9.3%) a finales de 1969, fue un acontecimiento lleno de significados (Mandel, 1974). En primer lugar, no se derivó de las leyes ciegas del mercado, sino de presiones diplomáticas de Estados Unidos. La medida resultaba contraria a toda lógica económica y a los estatutos de Fondo Monetario Internacional.

En lugar de que el país con déficit en la balanza de pagos devaluase, se obligaba a un país superavitario a revaluar. En lugar de que se devaluara el dólar, se revaluaba el marco. El objetivo era forzar al principal competidor de Estados Unidos a elevar sus precios en los mercados internacionales. Se trató de una prerrogativa hegemónica.

Los efectos alcanzados sólo fueron de corto plazo, con el encarecimiento de las mercancías alemanas. Aun con la revaluación, en el largo plazo quedó demostrado que la capacidad productiva de la industria alemana y el inferior costo de la fuerza de trabajo (respecto a Estados Unidos) eran lo suficientemente fuertes para resistir embates como éste.

Por lo demás, la revaluación del marco se revirtió contra Estados Unidos. Ante el fortalecimiento de marco se acentuó la ola especulativa contra el dólar, al mismo tiempo que se encarecían los créditos y aumentaban los costos de las bases militares norteamericanas en el Viejo Mundo.

Japón también recibiría una fuerte presión de Estados Unidos para que revaluara su moneda. Sin embargo, el gobierno japonés no cedió y mantuvo el cambio de 360 yenes por dólar, el nivel fijado desde fines de los años cuarenta.

Por otra parte, al llegar Nixon a la presidencia de Estados Unidos aplicó medidas antiinflacionarias y con ello favoreció la crisis de sobreproducción de 1970 (Mandel, 1974). Espantado por las consecuencias de la recesión y la derrota de los republicanos en las elecciones para el Congreso en noviembre de 1970, el gobierno retornó a las medidas keynesianas.

La política inflacionaria logró paliar la recesión a través de un gasto deficitario sin precedentes en la historia norteamericana. Sin embargo, el torbellino inflacionario que se expandió por todo el mundo aceleró aún más el deterioro del sistema monetario internacional.

Europeos y japoneses no podían exigir a Washington la aplicación de una política ortodoxa para controlar la inflación, pues afectaría la política antirrecesiva de la fortaleza central de la economía mundial, que a su vez traería graves repercusiones a los demás países. El

mercado interior de Estados Unidos era el elemento clave del mercado mundial para las demás potencias capitalistas.

El sistema de Bretton Woods sólo funcionó mientras el mundo estuvo sediento de dólares para la adquisición de las mercancías norteamericanas. Con la recuperación y repunte de las economías de Europa y Japón, que lanzaban al mercado mundial cantidades crecientes de mercancías y acumulaban grandes cantidades de reservas, los dólares que arrojaba Estados Unidos a los circuitos financieros dejaron de corresponder a la demanda de sus mercancías. Por lo tanto, el respaldo de la masa de dólares pasó a depender mayormente de su base aurífera.

... entre 1949 y 1968, los dólares en billetes en el exterior de Estados Unidos pasaron de 6 400 a 35 700, y durante el mismo lapso, las enormes reservas de oro en poder de Estados Unidos se contrajeron de 246 000 a 10 400 millones de dólares (Tamames, 1984: 73).

Por otra parte, Estados Unidos perdía oro debido al déficit de la balanza de pagos relacionado con los costos materiales del sistema hegemónico, como la ayuda económica y el sostenimiento y construcción de las bases militares (Mandel, 1974), y sobre todo por la guerra de Vietnam. En 1967 el déficit se debió a este motivo en sus tres cuartas partes, además de ser una de las causas de la inflación.

En esta situación, resultaba evidente que una devaluación del dólar sería inevitable. Todavía el gobierno de Washington parecía tener dos alternativas: 1) elevaba el precio del oro, aumentando con ello el valor nominal de sus reservas, para afianzar de esta manera la convertibilidad del dólar; o 2) eliminaba el déficit de su balanza de pagos, con lo cual podía recuperar su reserva física de oro sin incrementar su precio.

La última solución resultaba imposible, pues exigía que Estados Unidos restringiera de manera drástica sus inversiones exteriores y variara su política exterior de signo belicista; es decir, exigía la renuncia a su papel de potencia hegemónica mundial.

La otra alternativa resultaba igualmente imposible, debido a que disminuiría su capacidad de importación, así como la de exportación

de capitales; esto es, exigía su renuncia a su política exterior de penetración económica (Lichtensztein, 1987).

Ante los primeros indicios del deterioro del dólar, Estados Unidos estableció una estrategia de carácter institucional reforzando al Fondo Monetario Internacional con los “Derechos Especiales de Giro” (DEG). Con este mecanismo se intentó instaurar un medio para transformar paulatinamente el sistema monetario internacional en un patrón fiduciario internacional con base en el dólar.

Sin embargo, el sistema descansaba en el dólar de manera tan determinante, que incluso el uso de los DEG resultaba poco práctico.

Estados Unidos, haciendo gala de su hegemonía exigió que los aliados pagaran la “factura” del dólar, a través de su renuncia a reclamar la convertibilidad de sus reservas en dólares (Tamames, 1984: 73).

Esta medida, si bien permitió mantener momentáneamente la estabilidad del dólar, mantuvo también, en buena medida, la fuerte penetración norteamericana en todo el mundo capitalista, la inflación, el déficit de la balanza de pagos norteamericana, la inestabilidad del sistema y el descontento de los aliados.

A pesar de todo, el 15 de agosto de 1971, bajo la “nueva política económica” el gobierno del presidente Nixon declaró la inconvertibilidad y la flotación del dólar, junto a una serie de medidas proteccionistas que constituían una verdadera declaración de guerra a sus rivales económicos.

El sistema de paridades fijas entró en un verdadero caos. Las paridades de las monedas flotaron entre sí en medio de un desacuerdo general sobre las tasas de cambio que deberían prevalecer. Con esto se derrumbaron los dos pilares del sistema de Bretton Woods: el sistema de paridades fijas y la convertibilidad del dólar en oro.

Todos los intentos que le siguieron para restablecer el sistema terminaron en fracasos.²² A principios de 1973, la mayoría de las

²² La realineación de las monedas del “Grupo de los Diez” respecto al dólar, en diciembre de 1971 (Smithsonian Institution) fue de corta duración. En junio de

principales monedas, en cascada, volvió a “flotar” y se produjo una segunda devaluación del dólar.

El intento de los seis países, que entonces conformaban la Comunidad Europea, por mantener tipos de cambio fijos entre ellos (*snake in the tunnel*) y tipos de cambio flotantes respecto al dólar, también fracasó.²³

Por lo tanto, los países de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Japón, Suiza, y Noruega se reunieron en marzo de 1973, en París, donde decidieron implementar “un sistema ordenado de flotación conjunta”, mismo que finalmente sería legalizado por el FMI en Jamaica en enero de 1976.

Hacia septiembre de 1974, la flotación de los tipos de cambio parecía funcionar a satisfacción de Estados Unidos. No fue casual que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, considerado el principal arquitecto del nuevo régimen, lo asumiera como el más grande logro de su carrera (Garritsen de Vries, 1986: 95).

Con la caída del sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional entró en crisis. Sus pretensiones institucionales de continuar regulando el sistema monetario internacional quedaron suprimidas y su utilidad fue profundamente cuestionada; e incluso, su existencia misma.

En los términos institucionales en que fue construido, ya no era capaz de contribuir a la reproducción del capital mundial a través del sistema monetario, sino incluso, de acuerdo a sus propios creadores, se había convertido en un obstáculo.

1972, como producto de la especulación, el Reino Unido puso a flotar la libra esterlina, y con ello flotaron también otras dieciséis monedas.

²³ En enero de 1974, Francia abandonó esta política y con ello se restringió considerablemente el funcionamiento de los tipos de cambio fijos. La mayoría de los países subdesarrollados, miembros del Fondo, mantuvieron su paridad respecto a una sola moneda, principalmente el dólar, y en algunos casos respecto al franco o la libra esterlina. Por tanto, compartieron la suerte de la moneda en torno a la cual había fijado su paridad.

El comportamiento de las monedas había pasado a depender de las fuerzas “ciegas” del mercado. El FMI no tenía más alternativa que redefinir sus funciones en el marco de una necesaria reforma.

El proceso de reforma del Fondo, sin embargo, no sería fácil. Por el contrario, se vislumbraba bastante complicado, prolongado y sus resultados nunca le volverían a dar la primacía del sistema monetario internacional.

Con el sistema monetario internacional, el bloque histórico internacional también entró en crisis. La competencia capitalista había no sólo colocado frente a frente a Estados Unidos y a sus aliados en la lucha por los mercados mundiales; también había destruido el sistema monetario internacional basado en la cooperación institucionalizada entre Estados nacionales.

Estados Unidos había perdido consenso en relación a su conducción económica del mundo, pues había privilegiado sus intereses económicos nacionales sobre sus compromisos hegemónicos.

El derrumbe del sistema de Bretton Woods no sólo representó el final de una época, también era el principio de otra. A partir de 1970 se inició lo que sería la larga noche de la economía norteamericana y de la economía mundial, caracterizada por un crecimiento lento.

Durante la década de los años setenta, Estados Unidos experimentó uno de los periodos más críticos de su historia económica. En 1970 se produjo la primera recesión importante. En 1971 se devaluó el dólar y se produjo la crisis de Bretton Woods. En 1973 se dio la primera crisis petrolera²⁴ y la segunda devaluación del dólar, lo cual

²⁴ El desmesurado aumento de los precios del petróleo, que estalló entre octubre y diciembre de 1973, fue producto de las decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), impulsada fundamentalmente por los países árabes y los intereses de las empresas petroleras llamadas “las siete hermanas”. La asonada de este grupo de países subalternos trajo serias consecuencias para la economía mundial, siendo los más afectados los países subdesarrollados no exportadores de petróleo. Si bien es cierto que los países industrializados sufrieron con el aumento de los precios, se beneficiaron del reciclaje de los ingresos de los países exportadores a través de compras adicionales de mercancías y del aumento de las inversiones (Mandel, 1980: 44-57). Por su parte, los países subdesarrollados exportadores de petróleo, a través

ocasionó que el abandono del sistema de paridades fijas fuese irreversible.

Para 1974-75 se experimentó la peor crisis económica²⁵ desde la Gran Depresión; y hacia 1978 se dio otro choque petrolero²⁶. Además,

de los ingresos considerables que obtuvieron, se protegieron de manera más o menos eficaz ante los efectos directos e indirectos de la recesión generalizada de la economía capitalista de 1974-75. Evidentemente, no sucedió lo mismo con los países subdesarrollados no exportadores de petróleo. La conjunción del aumento de los precios del petróleo y la recesión económica general los condujo a una penuria económica y alimentaria, además de agudos desequilibrios en sus balanzas de pagos, que persistieron mucho más allá de 1974. Según el Fondo Monetario Internacional, el déficit de la balanza de pagos de los países subdesarrollados no exportadores de petróleo ascendió a 30 000 millones de dólares en 1975, y a 25 000 millones de dólares en 1976.

²⁵ Casi simultáneamente a la “crisis petrolera” de 1973 se produjo la recesión generalizada de 1974-75, producto de la sobreproducción y resultado directo de una fase típica de descenso de la tasa de ganancia (Caputo, 1987). Su profundidad se le atribuyó a la acumulación de problemas desde la crisis de Bretton Woods, y su carácter generalizado (abarcó simultáneamente a los principales países capitalistas) al acentuado proceso de integración (crecimiento del comercio mundial, la expansión de las empresas transnacionales y del sistema de crédito internacional, entre otros factores) que se había generado durante el periodo de expansión capitalista.

Para enfrentar la recesión, los gobiernos de los principales países capitalistas recurrieron nuevamente al expediente de las políticas económicas anticrisis, basadas en la expansión del crédito y la masa monetaria. Lo singular del caso es que lo hicieron en el momento mismo en que aplicaban una política deflacionaria para contrarrestar la inflación acumulada. En la Asamblea del FMI en Nairobi (septiembre de 1973) la Comunidad Económica Europea, de una parte, Estados Unidos de la otra y en general todos los miembros de la OCDE, llegaron a la conclusión de que era necesario acordar una serie de medidas para desacelerar la economía y frenar la fase ascendente del ciclo, a fin de lograr un nuevo equilibrio con cierta estabilidad (Tamames, 1984: 371).

Los gobiernos tenían que escoger entre inflación y crisis, cuando esta última ya había estallado. Así, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón, sorprendidos por la magnitud de la recesión, decidieron desde el segundo semestre de 1975 tomar medidas de reactivación económica. En Estados Unidos la reactivación consistió en un déficit del presupuesto del orden de 80 mil millones de dólares para el año fiscal de julio de 1975 a julio de 1976. En Alemania Federal el déficit presupuestal fue de 30 mil millones de dólares, y en Japón de 20 mil millones de dólares (Mandel 1980: 77). Para el año de 1976 existían no menos de 175 mil millones de dólares de poder adquisitivo

durante la mayor parte de la década se experimentó un fenómeno nuevo en la economía norteamericana: la “estanflación”; es decir, estancamiento con inflación (la cual alcanzó niveles de dos dígitos), para concluir con una crisis todavía más intensa: la de 1980-82, la cual estuvo acompañada por la crisis de la deuda en los países subdesarrollados.

suplementario inyectados en el circuito económico, por el déficit de los principales países capitalistas.

La política inflacionaria aplicada limitó la recesión (la eliminación de sus causas escapa al control de toda política económica (Mandel, 1980: 78)), y ésta tocó a su fin en 1975; primero en Estados Unidos, más tarde en Alemania Federal, en Japón y los demás países capitalistas. El precio que pagaron los países capitalistas por la aplicación de la política económica inflacionaria fue muy grande: a) se generó la progresiva desvalorización de las monedas, y por lo tanto la retroalimentación de la inflación; b) la desvalorización de las monedas, combinada con la vigencia de los cambios flotantes, afectó de manera incidental la competencia entre los principales países capitalistas, sobre todo en el comercio internacional; y c) los altos niveles de inflación alcanzados por algunos países desarrollados pusieron en peligro la solvencia económica del Estado (Mandel, 1980: 112-113).

Por otra parte, la reactivación económica a través de la inflación generó un desarreglo generalizado del sistema de crédito. Entre otras cosas, surgieron ciclos de crédito (nacionales) parcialmente autónomos respecto a los ciclos industriales. Los bancos asumieron una actitud más agresiva, extendiendo y acelerando sus operaciones; los depósitos a corto plazo se utilizaron para el otorgamiento de créditos a largo plazo y para la especulación. Los bancos confiaban ciegamente en el apoyo que les brindaría la banca central en caso de quiebra (Mandel, 1980: 92).

²⁶ A finales de la década de los años setenta se produjo otro incremento sorpresivo en los precios del petróleo. Si bien es cierto que los países productores tenían considerados aumentos escalonados del precio, los acontecimientos revolucionarios en Irán aceleraron el alza. En abril de 1979 se marcó un precio mínimo de 14.74 dólares el barril, y para noviembre de 1981 el precio oficial del barril era de 34 dólares. Los efectos del llamado segundo choque petrolero fueron aún más desastrosos para los países consumidores, particularmente para los subdesarrollados. Por lo que se refiere a los ingresos de los países productores, la guerra entre Irak (apoyado por Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos para frenar la revolución de Jomeini) e Irán, absorbieron gran parte de ellos, en beneficio de los países exportadores de armamento: Estados Unidos y la URSS.

Por otra parte, la derrota de Estados Unidos en Vietnam tuvo graves consecuencias para el sistema hegemónico: a) puso en entredicho la eficacia de su poder militar en un país subdesarrollado; b) revaloró la capacidad de la Unión Soviética como fuerza contra-hegemónica para aumentar su zona de influencia; y c) cuestionó profundamente su capacidad efectiva de brindar seguridad a los aliados.

Además, las secuelas de la guerra generaron toda una serie de problemas económicos de repercusión mundial, derivados en gran parte del déficit presupuestal y la hipertrofia del sector militar norteamericano.

A esto debemos agregar la crisis de confianza de amplios sectores de la sociedad civil norteamericana en el proyecto hegemónico vigente en esa época, y en la clase política que lo dirigía.

El sistema hegemónico no podía ya alardear de su compromiso con el progreso económico consustancial a su proyecto. Ante la crisis, el gobierno norteamericano, bajo la presidencia de Richard Nixon, olvidó sus responsabilidades hegemónicas y respondió con medidas proteccionistas, unilaterales y nacionalistas.

La más grave de ellas fue el abandono de la convertibilidad del dólar, la cual desencadenó la crisis del Sistema de Bretton Woods, devolviendo a los países, sobre todo a los desarrollados, su libertad para manejar nacionalmente sus monedas.

En el plano de la política económica, durante la década de los años setenta el keynesianismo como política económica oficial del mundo libre fue profundamente desacreditado, y en los centros intelectuales tanto de Estados Unidos como del exterior abundaron los textos sobre la crisis de la hegemonía norteamericana, la declinación de dicha hegemonía e incluso se teorizó de manera abundante sobre la crisis del capitalismo como sistema mundial.

La crisis del petróleo de 1973 mostró, por su parte, los límites del poder norteamericano frente a Estados subdesarrollados coaligados, cuando éstos manejan un bien estratégico como es el petróleo.

La cereza del pastel fue la recesión generalizada de 1974-1975, la cual se extendió simultáneamente a todos los países desarrollados, aunque

su impacto fue desigual. El gran riesgo para las fracciones de las clases capitalistas nacionales de las grandes potencias económicas que operaban internacionalmente, era que ante la crisis se impusieran soluciones nacionales.

El temor se acrecentó con la política de Estados Unidos respecto al sistema monetario internacional, que como ya mencionamos daba primacía al interés nacional y guardaba en el cajón parte de sus responsabilidades hegemónicas mundiales.

Todavía en lapso 1980-1982 se produjo otra crisis de sobreproducción generalizada, que abarcó a todos los países y productos.²⁷ Esta crisis, que se explica también por la caída de las tasas de ganancia, fue mucho más profunda que la anterior de 1974-75 y con mayores efectos en las relaciones económicas internacionales, particularmente en el comercio mundial, y afectó de manera aún más grave a los países subdesarrollados.

Resultaba evidente que se hacía necesaria una reestructuración de la economía mundial capitalista y de la hegemonía mundial. El problema que se planteaba era: ¿qué intereses prevalecerían?, ¿los nacionales o los globales?

Parte III: La reestructuración del capitalismo mundial. El nuevo bloque histórico

Dos elementos caracterizaron la reestructuración del bloque histórico. 1) el agrupamiento mundial de las élites financieras e industriales de las grandes potencias, de manera relativamente independiente de sus Estados nacionales, con el objetivo de garantizar que la reestructuración fuese favorable a sus intereses mundiales; y 2) el

²⁷ La sobreproducción generalizada de mercancías fue reconocida por las agencias internacionales especializadas en asuntos económicos, que la consideraron como “un problema mundial que empeora, y que se manifiesta palmariamente en ‘demasiadas industrias’, entre ellas: las de automóviles, acero, computación, semiconductores eléctricos, equipos pesados, textiles, así como la producción de alimentos”; y una serie de otras ramas, como son: la industria farmacéutica, la industria química, la petroquímica y en la construcción de barcos, etc. (Caputo, 1986: 155-58).

reagrupamiento de los Estados más importantes de Europa Occidental y Japón en torno a Estados Unidos, pero con una mayor participación en la dirección de los asuntos mundiales, con el objetivo de relanzar un proyecto histórico de grandes alcances que posteriormente sería identificado con el nombre de *globalización*.

Ésta fue la esencia de la reestructuración del bloque histórico mundial.

La fracción trasnacional de la clase capitalista y la reestructuración del bloque histórico mundial

Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre las clases capitalistas nacionales de los países más desarrollados se habían caracterizado por una competencia exacerbada, sobre todo en Europa Occidental.

La fusión entre los intereses estatales y los intereses privados en cada uno de estos países condujo a que la encarnizada lucha por el control de los mercados externos y las materias primas se combinara con la expansión territorial y la soberanía de los Estados. A este proceso se le conoció como imperialismo.

Estas rivalidades menguaron a consecuencia de la guerra, y de su dependencia de la ayuda de sus pares y del Estado norteamericano. Sin embargo, sobre la base de esta ayuda, más el intervencionismo económico de sus propios Estados, la disponibilidad de trabajo eficiente y barato de las clases subalternas desempleadas, la cooperación entre ellas y la apertura del mercado norteamericano, fueron factores que obraron para que se fueran recuperando a la par de sus empresas y bancos.

Las políticas keynesianas de pleno empleo, el intervencionismo económico y el Estado de bienestar crearon las condiciones para que pactaran con sus clases subalternas nacionales y construyeran sus propios modelos de bloque histórico nacional, al mismo tiempo que reconstituyeron sus propias expectativas nacionales.

Así, las clases capitalistas nacionales siguieron desarrollándose dentro de las fronteras protectoras que les proporcionaba el Estado nacional,

y en competencia con los otros capitales nacionales, prefigurando hacia principios de los años setenta del siglo pasado un escenario en donde parecían predominar nuevamente los intereses nacionales sobre los globales, contribuyendo de esta manera a ahondar la crisis de la hegemonía mundial.

Ante la crisis de la economía mundial y del sistema hegemónico mundial las fracciones de clase de los principales países capitalistas desarrollados, comprometidas con la producción de bienes y capitales para los mercados externos, iniciaron un proceso de agrupamiento trasnacional con el objetivo primario de detener las soluciones nacionales, y luego de promover un proyecto histórico de largo alcance que reestructurara el bloque histórico mundial con base en el libre mercado, la despolitización de la competencia intercapitalista y la intensificación de las relaciones económicas internacionales.

Esta estrategia, ligada a sus intereses como veremos más adelante, prevaleció y se manifestó inicialmente en la forma como los gobiernos enfrentaron la crisis generalizada de 1974-1975, cuando buscaron desincronizar la crisis e intensificaron las relaciones económicas internacionales, al mismo tiempo que se procedió a la liberación del capital trasnacional de la regulación impuesta por los Estados nacionales.

El acelerado crecimiento de las relaciones económicas internacionales; el carácter permanente de la “tercera revolución tecnológica”, con su impacto en las comunicaciones y los transportes; la interpenetración inversora entre las grandes potencias económicas; y la liberalización comercial y financiera favorecieron incuestionablemente la consolidación de las fracciones trasnacionales de la clase capitalista, particularmente en Estados Unidos y en los principales países desarrollados.

La liberación progresiva del capital trasnacional de las limitantes que le imponía el Estado nacional fue alterando la correlación de fuerzas y las alianzas propias de los bloques históricos nacionales.

Las fracciones de la clase capitalista con intereses trasnacionales encontraron mayor afinidad con sus pares de otros países

desarrollados, e incluso varios subdesarrollados, que con las fracciones nacionalistas de sus propios países.

Estas últimas paulatinamente se convirtieron en un obstáculo para la acumulación mundial del capital. Este proceso ha venido dando como resultado la segmentación de los procesos de acumulación de los Estados nacionales, algo que se ha extendido en todos los órdenes de la vida social.

Estas dos fracciones de la clase capitalista han estado chocando y negociando en la mayor parte de los países del mundo respecto al control de los aparatos del Estado, aunque a partir de la década de los ochenta del siglo pasado las fracciones *transnacionalizadas* lograron eclipsar a las fracciones nacionales en los países centrales y capturar “las alturas del comando”, haciendo avanzar la globalización.

Mientras los intereses de las fracciones de clase transnacionales han consolidado una mayor apertura en las relaciones económicas internacionales acordes con la acumulación mundial del capital, las fracciones de las clases capitalistas que dependen mayormente de la acumulación nacional del capital, todavía siguen pidiendo el retorno de las barreras proteccionistas.

En las últimas cuatro décadas, gradualmente el bloque transnacional se ha tornado hegemónico en el interior de los Estados nacionales. Las fracciones de clase transnacionales han promovido firmemente la transformación de la mayoría de los países del mundo –desde Suecia a Nueva Zelanda, a La India, Brasil, México, Chile y África del Sur– en países de economía abierta, favorables al capital financiero internacional y a las empresas transnacionales.

Más aún: las fracciones transnacionales en el Norte han utilizado su poder estructural no para hacer avanzar “intereses nacionales” en rivalidad con otros Estados-nación, sino para moldear estructuras transnacionales en la era de la globalización.

Los Estados capturados por las fracciones de clase transnacionales han interiorizado las estructuras de autoridad del capitalismo global. El poder disciplinario del capitalismo global ha volcado el poder de decisión de los Estados nacionales hacia el bloque global capitalista,

que es a su vez representado por fuerzas sociales locales unidas a la economía global (Robinson, 2000).

Por otra parte, la ruptura de los bloques históricos nacionales ha sido completada con la anulación de los acuerdos históricos y las prerrogativas que obtuvieron las clases trabajadoras derivadas del Estado de bienestar, por parte de las fracciones de clase transnacionales.

No es casual que las formas institucionalizadas de las relaciones laborales estén siendo sustituidas por modalidades informales y por la llamada “flexibilización de los mercados laborales”; es decir, por la aplicación de mecanismos que tienden a disminuir los montos salariales.

Las fracciones de clase transnacionales han estado ejerciendo su poder de clase a través de una intrincada red formada por los Estados nacionales y las instituciones multilaterales. Incluso los primeros han jugado, cada vez más, el papel de vía de transmisión de los segundos, particularmente en los países subdesarrollados.

Prueba de ellos es el condicionamiento que lleva a cabo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a los países miembros que requieren de recursos financieros, contemplando programas económicos con topes salariales y flexibilización de las leyes laborales.

Las medidas de desregulación, conservatismo fiscal, monetarismo, regresión en materia de impuestos, austeridad, etc., han dado otro vuelco en los ingresos y en la distribución del poder, en perjuicio del trabajo y a favor del capital.

La Comisión Trilateral y otros grupos de poder

Dos de los principales ejemplos de los agrupamientos de las fracciones de clase transnacionales que surgieron como parte del proceso de reestructuración del sistema hegemónico mundial, son: la Comisión Trilateral (1973) y el Grupo Davos (1971).

La Comisión Trilateral, al momento de su fundación significaba el 65% de las firmas bancarias, comerciales e industriales más poderosas

del mundo, y el más grande conjunto de políticos e intelectuales jamás antes reunido.

De acuerdo con Stephen Gill (1990: 123), la Trilateral fue construida sobre una cadena de élites económicas, políticas e intelectuales preexistentes, particularmente la norteamericana “The Council on Foreign Relations”, y la atlanticista “The European Bilderberg Group”.

Ideada por Zbigniew Brzezinski y organizada por el poder de David Rockefeller, cabeza del Chase Manhattan Bank, la Comisión Trilateral se presentó como una organización temporal (por tres años) y con el propósito específico de contrarrestar las fricciones entre los gobiernos de los principales países desarrollados.

Sin embargo, esta Comisión pronto trascendió sus objetivos primarios, renovando su permanencia en forma sucesiva cada tres años (hasta la fecha) y dotándose de proyectos de alcances mundiales.

La Trilateral no fue concebida como una organización secreta (como el Grupo Bilderberg); por el contrario, ha sido abierta y dispuesta al debate e incorporó explícitamente a las élites japonesas para compartir el “liderazgo mundial” (en términos de la propia Trilateral).

Sin duda, su carácter abierto y la incorporación japonesa a la Trilateral representaron un desafío a los grupos nacionalistas norteamericanos que habían peleado contra ellos en dos guerras mundiales. Un hecho de esta naturaleza representaba, en sí mismo, la determinación para construir un proceso de integración más allá del interés nacional.

Más aún, la Trilateral pasó a promover entre sus miembros una identidad de clase transnacional por la vía de romper los esquemas nacionales que prevalecieran entre su membresía, y enfrentar así los problemas mundiales con posiciones comunes, puestas en operación a través de su influencia en las esferas gubernamentales de la “triada”.

La pieza central de los esfuerzos de la Comisión ha sido internacionalizar la perspectiva de los elementos que rigen a los principales Estados de la Trilateral, y socavar la influencia de los nacionalistas o las perspectivas mercantilistas en los círculos políticos.

En la práctica esto se ha traducido en intentar contener el unilateralismo de Estados Unidos y prolongar su compromiso con la integración y el manejo internacional del sistema; cambiar el mercantilismo japonés por un mayor compromiso en la política internacional; y promover la unidad y vigor de Europa Occidental.

La base argumental de la fundación de la Comisión Trilateral giró en torno a tres ideas básicas: 1) Estados Unidos había dejado de ser la potencia hegemónica y se encontraba en paridad con los países más desarrollados de Europa y de Japón; 2) el mundo era cada vez más interdependiente (sobre la base de la idea de la interdependencia se fincó la idea posterior de la globalización); y 3) en estas condiciones, resultaba necesario construir un nuevo orden mundial que favoreciera la paz y la estabilidad mundial para respaldar los negocios mundiales.

La Comisión reunió en su proceso de fundación a lo más representativo de las fracciones de clase trasnacionales en ciernes de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Entre sus miembros fundadores encontramos importantes figuras políticas como George Bush, Yasuhiro Nakasone y Valéry Giscard D'Estaing (artífice de la Unión Europea), todos ellos ligados a empresas trasnacionales y que, como sabemos, ocuparían años después los más altos cargos políticos en sus respectivos países.

La influencia política de la Trilateral se ha mantenido desde su creación, e incluso ha aumentado, particularmente en Estados Unidos. El gobierno del presidente Ford estuvo dominado por *trilateralistas*. El mismo George Bush, junto con Jimmy Carter y Bill Clinton han sido identificados como miembros de la trilateral. Y aunque Reagan no lo fue, contó con la dirección de Paul Volcker en la Reserva Federal, uno de los personajes más influyentes de la Trilateral.

El gobierno de George W. Bush contó, a pesar suyo, con una fuerte presencia de *trilateralistas*; y en el caso del presidente Obama, el mismísimo Zbigniew Brzezinski es su principal consejero en política exterior.

Por otra parte, la Trilateral ha hegemonizado a la burocracia (intelectuales orgánicos) encargada de la política exterior nortea-

americana. Ésta ha sido una empresa fácil por el hecho de que ha existido una identificación de clase. Tienen una formación política, experiencias y actitudes similares.

Una caracterización (Kegley, 1982: 250) de esta burocracia presenta los siguientes rasgos: es un grupo más bien pequeño, muy perdurable y que ha cambiado poco en los últimos cuarenta años; los puestos más altos son ocupados por miembros de la clase más poderosa; son educados en las mejores escuelas (los mejores y los más brillantes); tienden a ser predominantemente blancos, anglosajones y protestantes (WASP); en su mayoría son abogados; muchos de ellos tienen amplia experiencia en los grandes negocios; y sus vidas profesionales giran entre posiciones de poder en el gobierno, los grandes negocios y la academia de las principales universidades.

La creciente influencia de la Trilateral se ha manifestado a través del aumento de su membresía, la cual pasó de sus 300 miembros originales distribuidos equitativamente entre Estados Unidos, Europa y Japón, a 376 miembros. Europa ha incrementado su membresía a 160, incorporando a miembros de los países de Europa del Este; Estados Unidos ha devenido en el grupo de América del Norte, que cuenta actualmente con 120 miembros, 87 de Estados Unidos, 20 de Canadá y 13 de México; y el grupo japonés, que se ha convertido en el Grupo Asia-Pacífico (en 2012), cuenta con más de 100 miembros que incluyen 57 de Japón, 15 de Corea, 8 de Australia y Nueva Zelanda, 16 de los cinco países miembros del ASEAN e incluye también a La India, a participantes de la República Popular de China, Hong Kong y Taiwán (The Trilateral Commission, 2014).

Es decir, agrupa a las élites mundiales. Para mantener su carácter de Organización No Gubernamental, cuando uno de sus miembros ocupa un puesto en un gobierno nacional renuncia a su membresía, y se eligen nuevos miembros sobre la base de la cuota nacional. En pocas palabras, es algo así como una ONU, pero privatizada.

La estructura organizativa de la Comisión Trilateral está compuesta actualmente por tres presidentes, uno por cada región, presidentes diputados y directores, que junto con un comité ejecutivo conformado por 36 miembros constituye su dirección.

En la instancia de dirección ha destacado la presencia de miembros de los países subdesarrollados, como fue el caso de Lorenzo Zambrano (presidente de CEMEX, de Monterrey, México y presidente diputado de la región de América del Norte), lo cual muestra la intención de la Trilateral de conformar una verdadera élite mundial.

La perspectiva de la Comisión Trilateral ha sido trabajar en pos de subordinar la política territorial a los objetivos económicos no territoriales de las corporaciones transnacionales, financieras y no financieras.

También ha constituido un modelo de manejo de la cooperación regional y global en una estructura que ellos consideran posnacional, para proteger y expandir los intereses globales y regionales del capital transnacional.

A pesar de su importancia, la Comisión Trilateral es sólo uno de los nudos más grandes de una densa red que ha venido integrando progresivamente a las fracciones de clase transnacionales de los principales países de la triada y de algunos países subdesarrollados.

Otro de los grandes nudos de esta red lo constituye The Davos Group. Se trata de una organización privada fundada a instancias del profesor Klaus Schwab bajo el nombre de European Management Forum en 1971, y cuyo objetivo inicial fue constituirse como un centro de discusión donde los grandes capitalistas europeos definieran una estrategia coherente para enfrentar los desafíos del mercado mundial.

A partir de entonces, el Foro se ha venido transformando en una compleja organización con múltiples objetivos y alcances mayores, tal y como lo refleja la denominación de “The World Economic Forum” que adquirió en 1987.

Ha promovido la intensificación de las relaciones económicas entre Europa y las otras regiones del mundo, así como la integración de la economía mundial. Ha jugado el papel de mediador entre empresarios, empresarios y gobiernos, entre empresarios y organizaciones económicas internacionales, entre empresarios y la Organización de las Naciones Unidas, y de gobiernos entre sí.

Ha jugado el rol de identificar y definir las nuevas tendencias económicas, políticas, sociales y culturales, y crear estrategias y acciones para las corporaciones y países a fin de que se integren a esos cambios y maximicen sus potenciales.

Ha sido un referente clasificatorio de las principales corporaciones industriales del mundo, que a su vez conforman la base de su membresía y de la competitividad de los países como un mecanismo indispensable para la inversión de las corporaciones.

Ha formado y organizado la reproducción mundial de las fracciones de clase trasnacionales (líderes globales para el mañana) y favorecido una nueva cultura trasnacional (The World Arts Forum).

Ha promovido valores universales y la defensa del medio ambiente, dotando de principios éticos al sistema hegemónico y su proyecto globalizador.

Otras agrupaciones importantes que pasaron a formar parte de la red de agrupaciones de capitalistas *transnacionalizados* se pueden encontrar en: The World Business Council on Sustainable Development,²⁸ que nació en el marco de la expansión de la globalización (1995) y cuenta con cerca de 200 miembros, todos CEO'S de las principales compañías trasnacionales como BP, ICI, RTZ, Sony, Fiat, Cargill, Heineken y Unilever.

Se ha descrito a sí mismo como la más influyente red de negocios del mundo y su objetivo es crear un futuro sostenible, tanto en términos ambientales como sociales. Se reúne una vez al año (otoño) para definir estrategias y darles el seguimiento correspondiente.

Tanto el concepto de desarrollo sostenible como sus estrategias están basados en la lógica y promoción del libre mercado, y han dedicado sus mayores esfuerzos al ambiente político para conseguirlo.

Su membresía por región da primacía a la Unión Europea con una participación del 39%, NAFTA 20%, resto de Asia 11%, Japón 10%, resto de Europa 9%, Latinoamérica 7% y África 7%.

²⁸ <http://www.wbcsd.org/home.aspx>

En términos del tipo de producto tienen mayor participación, paradójicamente, las ramas de la producción más contaminantes del planeta, como las productoras de madera y papel, y los energéticos, productos químicos, etcétera.

La European Round Table of Industrialists.²⁹ Nacida en pleno proceso de reestructuración del capitalismo mundial (1983), sus objetivos han consistido en remover todos los obstáculos al comercio dentro de la Comunidad Europea y “completar el mercado internacional”.

Cada uno de los miembros del ERT es sumamente influyente y cuenta con fácil acceso a los dirigentes nacionales y europeos. Dentro de sus principales logros destacan su contribución en la “Single European Act” (1986), “European Monetary Union” (1999), “The Channel Tunnel”, “The Trans-European Roads Programme and Network” y “The GATT Uruguay Round”.

Agrupar a más de 50 capitanes de las más grandes corporaciones transnacionales europeas, industriales y tecnológicas como la BP, Daimler-Benz, Fiat, Shell, GKN y Siemens, que maneja en negocios cerca de un billón y medio de euros, da empleo a cerca de 7 millones de personas e invierte 51 millones de euros en investigación y desarrollo.

El United States Council for International Business (USCIB),³⁰ fundado en 1945 y con sede en Nueva York, tiene el objetivo de promover los intereses globales de las empresas norteamericanas, representa oficialmente las posiciones empresariales tanto en los principales órganos intergubernamentales como en las comunidades de negocios extranjeros *vis-à-vis* y sus gobiernos.

Se le considera uno de los más influyentes grupos de representantes empresariales en la política y cuyo objetivo estriba en promover y defender un sistema abierto de comercio mundial, así como las finanzas y la inversión.

²⁹ <http://www.ert.eu/>

³⁰ <http://www.uscib.org/>

Su membresía está formada por 300 corporaciones globales, empresas y asociaciones profesionales de la industria. Ha sido la representante norteamericana ante la ICC y el BIAC y promotora incansable ante el gobierno de Estados Unidos de la MIA (Multilateral Agreement on Investment).

Desde su aparición, ha formulado posiciones políticas tendientes a facilitar el comercio internacional a través de la armonización de prácticas comerciales.

Una de las organizaciones pioneras fue la International Chambers of Commerce,³¹ creada en Francia en 1919. Dicha institución internacional ha asumido un papel central para fomentar el comercio internacional y los negocios en todo el mundo. Es una férrea defensora del libre comercio y la globalización, forja normas internacionales y mecanismos que favorecen a los empresarios a lo largo del mundo.

A través de esta organización, las compañías comparten reglas y políticas que estimulan el comercio y la inversión internacional, y cuentan con el prestigio y la experiencia de la ICC para obtener un panorama de los negocios a través de las organizaciones gubernamentales e intergubernamentales cuyas decisiones afectan a las corporaciones y sus operaciones al nivel mundial.

Miles de compañías, desde las grandes trasnacionales hasta las medianas, dedicadas a la manufactura, al comercio y a los servicios financieros y profesionales de más de 120 países, están afiliadas.

Dentro de los grupos de cabilderos y asesores destacan: The Business and Industry Advisory Committee,³² el cual se autodefine como una red de negocios global cuya misión común es abogar por los mercados abiertos y el crecimiento impulsado por el sector privado.

Su centro de intervención es la OCDE, donde sus integrantes tienen acceso al más alto nivel y donde influyen en la formulación de políticas en una amplia gama de cuestiones de gobernabilidad mundial y política económica.

³¹ <http://www.iccwbo.org/>

³² <http://biac.org/>

Constituye uno de los principales grupos de cabilderos a favor del MAI (Multilateral Agreement on Investment). Sus miembros están organizados en forma de federaciones de negocios en cada uno de los países de la OCDE. Su meta radica en controlar todos los acontecimientos de la OCDE que podrían afectar los negocios.

El Business Roundtable³³ es un grupo cabildero corporativo que reúne a los CEO's de las más grandes corporaciones de Estados Unidos, como Boeing, Procter and Gamble, Caterpillar, Chrysler, General Motors y TRW. Suman 7 200 billones de dólares en ingresos anuales y agrupan a cerca de 16 millones de empleados.

Las empresas miembros de BRT comprenden más de una cuarta parte del valor total del mercado de valores de Estados Unidos, e invierten más de \$ 190 000 000 000 al año en investigación y desarrollo, equivalente al 70 por ciento del gasto de Estados Unidos.

Fundada en 1972, la Business Roundtable aplica los conocimientos y la experiencia de sus miembros CEO para enfrentar los principales problemas que afectan a la nación.

A través de la investigación y la promoción, la Mesa Redonda de Negocios promueve políticas para mejorar la competitividad de Estados Unidos, fortalecer la economía y estimular la creación de empleo. Se considera que su influencia fue muy importante para la firma del NAFTA/TLCAN.

La Reunión de Rambouillet y el Grupo de los Siete

Un aspecto esencial para la reestructuración del capitalismo mundial lo constituyó la reestructuración del bloque histórico mundial. Este proceso tuvo su punto de partida en la reunión de Rambouillet de noviembre de 1975, cuando las principales potencias económicas capitalistas se agruparon³⁴ asumiendo la dirección mundial y dictaron

³³ <http://businessroundtable.org/>

³⁴ La primera experiencia de estos agrupamientos se dio con la creación del “Grupo de los Diez” el 24 de octubre de 1962, cuando los diez países capitalistas más importantes (Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido, Alemania y Suecia) subscribieron los

las líneas programáticas sobre las cuales se levantaría más tarde la llamada globalización.

Este hecho, insistimos, resultó altamente significativo, histórico si se quiere, en la medida en que los Estados nacionales que habían protagonizado en el siglo XX las dos guerras mundiales, en esta ocasión eran capaces de ponerse de acuerdo y prefigurar un futuro sin guerras, donde todas las grandes potencias tendrían libre acceso al mercado mundial, para beneplácito de sus empresas trasnacionales y sus poderosas élites *trasnacionalizadas*.

Las fuerzas nacionalistas irían quedando así opacadas en las relaciones internacionales, dando paso a las teorías de la cooperación y el posible entendimiento.

Con este acuerdo se esperaba que la crisis fuera superada y el bloque histórico se restableciera paulatinamente. Es decir, que se alcanzara la congruencia relativa, sin contradicciones graves entre el desarrollo de la economía mundial y el sistema hegemónico, entre la dirección económica y la dirección política mundial.

Los países que habían logrado una mayor participación en la economía mundial pasarían a jugar un papel de mayor jerarquía en las estrategias y decisiones mundiales. Las instituciones multilaterales que caracterizaron el periodo hegemónico anterior quedarían al margen de las negociaciones y subordinadas a las decisiones grupales, no sólo de los Estados,³⁵ también de las élites.

Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP) del Fondo Monetario Internacional, creando un fondo exclusivo para ellos en caso de que alguno tuviese problemas de balanza de pagos que pudiera desestabilizar al sistema monetario internacional (Hernández Vela, 2002: 502-503). Mostraron de esta manera una autonomía financiera respecto a la estructura formal de la institución, y más tarde el “Grupo de los Diez”, con más del 50% de las cuotas, fungió como una dirección *de facto* del FMI, poniendo en predicamento a los órganos de dirección estatutariamente establecidos, particularmente al Directorio Ejecutivo, que en ocasiones tuvo que sancionar acuerdos previamente tomados por el G10. No sólo eso, el G10 amplió su rango de intervención sobre la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo y el Banco Internacional de Pagos.

³⁵ De hecho, durante la mayor parte de su existencia el G5 se propuso tratar de manera directa los asuntos monetarios internacionales al margen del Fondo

Así, ante la posibilidad de que los problemas de la economía mundial siguiesen aumentando y que las soluciones unilaterales agravaran las relaciones entre las grandes potencias, a iniciativa del presidente francés Valéry Giscard D'Estaing (prominente miembro de la Comisión Trilateral), se convocó y se celebró en el castillo de Rambouillet, en Francia, del 15 al 17 de noviembre de 1975 la primera cumbre de los países más industrializados de la época, no bajo la forma de una organización internacional legalmente constituida, sino a manera de un encuentro informal,³⁶ con el objetivo declarado de elaborar planes para resolver los problemas comunes que los aquejaban.

En esta reunión participaron seis jefes de Estado, los del llamado “Grupo de los 5” y el italiano. Aunque ya se habían celebrado reuniones bajo esta denominación en el seno del Fondo Monetario Internacional a instancias del gobierno norteamericano,³⁷ se habían realizado con funcionarios importantes, pero de menor nivel.

Monetario Internacional, y actuar respecto a él como una dirección externa, imponiendo sus determinaciones a través de la viabilidad que les ofrecía la estructura basada en el sistema de cuotas. Hasta mediados de los años ochenta, las reuniones del grupo fueron altamente confidenciales y no se emitió comunicado alguno sobre sus resoluciones. Sus integrantes consideraban que las tasas de cambio y la coordinación política eran temas muy delicados para discutirse en un foro amplio.

³⁶ Sin ser una institución internacional propiamente dicha, los jefes de Estado de los países más industrializados del mundo se han venido reuniendo desde entonces dos veces al año, y sus delegaciones se han incrementado de menos de diez personas hasta más de 500, como fue el caso de la delegación norteamericana en la cumbre de Halifax (Canadá), en 1995. El país sede de la cumbre ha mantenido la prerrogativa de fijar la orden del día, previa consulta con los participantes y en la agenda. Aunque el aspecto económico sigue siendo su principal tema, se ha venido ampliando progresivamente. Desde 1978, cada cumbre ha dado lugar a una declaración política que ha reflejado las preocupaciones del momento y los temas abordados por los jefes de Estado.

³⁷ El “Grupo de los Cinco” surgió del Fondo Monetario Internacional. Sus integrantes correspondían a las unidades monetarias que conformaban la valoración del derecho especial de giro (DEG). La ocasión para su creación se dio en el marco de la segunda reunión del Comité de los Veinte del FMI en 1973, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, George Shultz, invitó a sus pares de Alemania, Francia y el Reino Unido a un encuentro informal, a

Al año siguiente, con la participación de Canadá, el grupo pasó a ser el célebre G7.³⁸ De los jefes de Estado participantes, además de Valéry Giscard D'Estaing, Helmut Schmidt también era miembro de la Trilateral;³⁹ Harold Wilson pertenecía al Bilderberg Group; y Gerald Ford era miembro del Council on Foreign Relations y trilateralista.

En la histórica reunión cumbre en Rambouillet (1975), Estados Unidos retrocedió respecto a las acciones unilaterales que venía ejerciendo, como la suspensión de la convertibilidad del dólar de 1971, y suscribió junto con los otros cinco miembros una estrategia común.

La existencia del agrupamiento fue justificada ideológicamente por sus fundadores de dos maneras: 1) el G7 se proclamó como una entidad identificada con los valores del capitalismo y con una posición política “centrista”; esto es, como un agrupamiento de gobiernos de sociedades democráticas y abiertas, dedicadas al avance de la libertad individual y social. Incluso consideraron que el éxito de sus reuniones reforzaría a las sociedades democráticas en cualquier lugar del mundo; y 2) establecieron la cooperación entre ellos, en un mundo caracterizado por una creciente interdependencia, como el medio indispensable para lograr la prosperidad económica mundial, pues consideraban que si ellos lograban el crecimiento y la estabilidad de sus economías, esto beneficiaría también al resto del mundo (*spill*

celebrarse el 25 de marzo en la biblioteca de la Casa Blanca (por tal motivo se le conoció inicialmente como “Library Group”), con el objetivo de discutir opciones que les permitieran enfrentar de manera conjunta la crisis de los mercados cambiarios. El grupo se encontró nuevamente en Kenia en septiembre de ese mismo año, donde se incorporó Japón, constituyéndose así el G5 (Shultz, 1993: 147-48).

³⁸ Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía se han encargado de asegurar durante todo el año el seguimiento de las decisiones. Desde 1994, el jefe de Estado de Rusia ha sido invitado a intervenir en la segunda mitad de la cumbre y a participar en la declaración política, hasta convertirse en lo que actualmente se reconoce como el G8. Este grupo, con el paso del tiempo se ha transformado en un verdadero órgano de dirección mundial bajo la dirección de Estados Unidos.

³⁹ Además de ser miembro del Council on Foreign Relations y del Bilderberg Group. Schmidt, Helmut (1990).

over). Más aún, en esta lógica proclamaron que la cooperación debería extenderse también tanto a los países subdesarrollados como a los socialistas.

Consideraron que un incremento ordenado y fructífero de sus relaciones económicas con los países socialistas sería un progreso importante en la *détente* y en el crecimiento económico mundial.

Se propusieron incrementar el volumen del comercio mundial con estabilidad de precios a través de la creación de un sistema abierto de comercio. Comisionaron a la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo) (OECD, en inglés), para que evitara medidas proteccionistas entre sus países miembros.

Acordaron concluir las reformas del Fondo Monetario Internacional en Jamaica, que privatizaba las transacciones monetarias internacionales. Comisionaron también al Fondo Monetario Internacional para que facilitara el giro exportador y el endeudamiento de los países subdesarrollados (asistencia financiera).

Asumieron el principio neoliberal de abatir la inflación a toda costa y buscar el crecimiento de sus economías. Hicieron patente su determinación de asegurar que sus economías tuviesen las fuentes de energía necesarias para su crecimiento.⁴⁰

En el plano de las fuentes de energía, este grupo eslabonó el crecimiento de sus economías a la disponibilidad de éstas. Por ello determinó tres líneas estratégicas: 1) el aseguramiento de dichas fuentes; 2) la reducción de su dependencia de la energía importada y el desarrollo de fuentes alternativas; y 3) la cooperación con los productores, para equilibrar el mercado de los energéticos.

Es oportuno agregar que las ideas centrales emanadas de la reunión coincidían plenamente con las demandas que venían impulsando las fracciones de clase *transnacionalizadas*, y que fueron expuestas de manera clara por la Comisión Trilateral en su primera reunión.

A partir de entonces, sobre la idea central de estimular las relaciones económicas internacionales se fue tejiendo de manera pragmática una

⁴⁰ Declaración de Rambouillet.

[file:///C:/Users/Usuario/Downloads/sp_1975rambouillet%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/sp_1975rambouillet%20(1).pdf)

gama de estrategias de corte liberal, por parte de los gobiernos de los países desarrollados y las instituciones multilaterales, que se condensaron de manera culminante en la versión hegemónica de la globalización.

A partir de la reunión cumbre de Rambouillet, el proyecto histórico se fue conformando paulatinamente en las sucesivas reuniones cumbre del G7, entremezclado con problemas de orden contingente.

La agenda se volvió más densa. No sólo se profundizó en los temas concernientes a la coordinación de la política económica, también se incorporaron nuevos temas, incluso tan importantes como la globalización y la seguridad mundial.

El G7 dirigió el cambio hacia la globalización durante los años ochenta del siglo pasado, a través de lo que se dio en llamar después como “la revolución silenciosa”.

Desde la cumbre de Rambouillet hasta la de Bonn (1985), la estrategia para enfrentar la inflación estuvo basada en políticas restrictivas, tanto monetarias como fiscales. En el discurso se eslabonó el desempleo a la inflación. Sin embargo, esta idea quedó desacreditada cuando la inflación disminuyó en la segunda mitad de los años ochenta, en tanto que el desempleo se mantuvo, e incluso aumentó.

A partir de la Cumbre de Tokio (1986), el centro de preocupación de la política económica del G7 cambió al ámbito del funcionamiento de la economía mundial, en especial a los desequilibrios externos, llamando para tal efecto a todos los países a efectuar ajustes estructurales efectivos, que incluían la agricultura. Además asignó al Fondo Monetario Internacional la supervisión de su cumplimiento.

Con el cambio estructural, la política económica se orientó de manera creciente a favorecer al sector privado, en claro detrimento del sector público (Venecia, 1987).

En la Cumbre de Toronto (1988) se habló por primera vez de la globalización de los mercados, de una mayor interdependencia y de la necesidad de enfrentar los desequilibrios externos reforzando la política de ajuste estructural.

Aunque la inflación se consideró contenida (París, 1989), se mantuvo la estrategia restrictiva para Canadá y Estados Unidos, y expansiva para Japón y Alemania, sólo que ahora bajo el argumento del ajuste estructural y unas políticas macroeconómicas apropiadas. Por primera vez se llamó a los países recientemente industrializados a contribuir al ajuste, y se insistió en ello en la Cumbre de Houston (1990).

En materia de política energética, la estrategia de la Cumbre de Rambouillet se mantuvo hasta la Cumbre de Houston (1990), orientada a garantizar el abastecimiento de energéticos para los países más industrializados del mundo. Aunque cabe mencionar que en la cumbre de Bonn (1978) se decidió mejorar la asistencia a los países subdesarrollados con problemas energéticos.

En la cumbre de Tokio (1979) se relacionó a los energéticos con la protección al medio ambiente, aunque fue hasta la Cumbre de París cuando esta relación no sólo se hizo ostensible, sino que se comprometió con medidas prácticas.

De cualquier manera, ya desde la Cumbre de Londres (1984) los miembros del G7 se habían declarado satisfechos con los logros alcanzados en materia energética, y llamaban a sus miembros a cooperar para mantener la situación.

Por lo que se refiere a la reestructuración del comercio internacional, se consideró un logro del G7 la conclusión de la Ronda Tokio del GATT, así como la propuesta de una nueva ronda (Williamsburg, 1983; Londres, 1984; Bonn, 1985; Tokio, 1986), la cual se materializó en la Ronda Uruguay, misma que el G7 consideró como la máxima prioridad en la agenda económica internacional (Houston, 1990).

La relevancia de la Ronda Uruguay radicó en que en ella se introdujeron temas relacionados con el fortalecimiento institucional del GATT, mismo que a la larga daría origen a la OMC, así como el comercio de servicios, el comercio relacionado con la inversión y los derechos a la propiedad intelectual.

Además del pronunciamiento del G7 en contra de los subsidios agrícolas (Venecia, 1987; y Toronto, 1988), un espinoso asunto que enfrentaba los intereses de Estados Unidos con los países europeos en dicha ronda.

Otra línea estratégica importante consistió en la insistencia en que los países subdesarrollados abrieran sus mercados (Bonn, 1978; Venecia, 1980; Ottawa, 1981; Williamsburg, 1983; y Tokio 1986), asumieran los compromisos implicados en la reforma del GATT y se integraran plenamente en los mercados globalizados.

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, así como el acercamiento entre la Comunidad Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, al igual que el Mercado Único Europeo, fueron vistos por el G7 como elementos que debían favorecer y complementar el proceso de liberalización multilateral (Toronto y París, 1989).

Un elemento adicional que se convirtió en un objetivo estratégico fue la incorporación de los países ex-socialistas de manera plena a los mercados globalizados (Houston, 1990).

En la esfera monetaria se estableció como objetivo estabilizar y mejorar el sistema de cambios (San Juan de Puerto Rico, 1976; Bonn, 1978; Tokio, 1979; Versalles, 1982; Williamsburg, 1983; Bonn, 1985; París, 1989; y Houston, 1990) por medio de medidas macroeconómicas, cooperación y reforzando la supervisión del sistema monetario internacional por parte del FMI, más que a través del manejo del tipo de cambio.

Para que pudiera cumplir este objetivo, el G7 se comprometió a incrementar los recursos del Fondo a través de las revisiones de cuotas, a fin de que el FMI contara con los medios suficientes para apoyar el ajuste estructural que supuestamente redundaría en la estabilidad monetaria.

Los mayores éxitos en la esfera monetaria se consiguieron en las reuniones Plaza y Louvre del Grupo de los Cinco. Sobre todo porque se logró una devaluación negociada del dólar, la cual terminó con una situación monetaria insostenible.

Por lo que se refiere al papel de los países subdesarrollados dentro de la reestructuración del sistema hegemónico, el Grupo de los Siete estableció como una constante desde la Cumbre de Rambouillet (1975) hasta la de Houston una clara intención de proporcionar financiamiento a los países subdesarrollados, ya fuese a través de

ayuda oficial, financiamiento multilateral o financiamiento privado, con el objeto de que solucionasen el déficit de sus cuentas externas. Incluso llamaron a los países socialistas y exportadores de petróleo para que participaran en esta cruzada.

Este apoyo financiero no estuvo ausente de ciertas obligaciones para los países subdesarrollados. Dentro de éstas se dio particular importancia a la de crear un clima de mayor seguridad para las inversiones privadas (Londres, 1977; Bonn, 1978; Tokio, 1979; Ottawa, 1981).

Luego de la crisis de la deuda y a partir de la cumbre de Williamsburg (1983), se estableció que se reforzaría al Fondo Monetario Internacional para que “restaurara” el crecimiento de estos países, al tiempo que impulsaba la apertura de sus mercados a través de procesos de ajuste negociados caso por caso (Londres 1984).

A partir de la cumbre de Venecia (1987) se determinó el ajuste y el cambio estructural para todos los países deudores, incluso los más pobres, como era el caso de los africanos.

El ajuste estructural, como veremos más adelante, implicaba la subordinación de las decisiones de las principales variables de la política económica a la apertura de los mercados, tanto para los bienes como para los capitales extranjeros, lo que en términos del G7 se entendía como trabajar a favor de la salud de la economía mundial (Toronto, 1988).

Podemos afirmar que fue en la instancia decisiva del G7, liderada por Estados Unidos, en donde se decidió el rumbo de los países subdesarrollados en la era de la globalización, el cual se fue fincando con la intervención decisiva del Fondo Monetario Internacional (Williamsburg, 1983; Londres, 1984; Bonn, 1985; Tokio, 1986; Venecia, 1987; Toronto, 1989; y Houston, 1990).

En el caso de los países socialistas, la estrategia definida en Rambouillet se mantuvo hasta la cumbre de Ottawa (1981), en la cual las relaciones económicas del G7 con estos países quedaron subordinadas a los objetivos políticos y de seguridad, y se establecieron controles para los bienes estratégicos y tecnológicos.

Fue hasta la cumbre de Venecia (1987) que la estrategia del G7 cambió, definiendo una política de seguimiento de los acontecimientos en la URSS y su disposición para la reducción verificable de armamento nuclear, el retiro de sus tropas de Afganistán y mejoras en los derechos humanos.

En la cumbre de Ottawa (1988), el G7 se congratulaba del retiro de las tropas de Afganistán y del acuerdo de reducción de armamento nuclear. Ahora exigía la disminución de armas convencionales en Europa e invitaba a las economías de Europa del Este a abrir sus economías, particularmente a la Comunidad Europea.

Para la cumbre de París (1989), sin levantar la estrategia de disuasión el G7 llamó a la URSS a asumir acciones concretas. Celebró el proceso de reforma en Polonia y Hungría y se pronunció a favor de las negociaciones entre el FMI y Polonia.

Fue hasta la Cumbre de Houston (1990) y en el marco del derrumbe del bloque socialista que se celebraron eufóricamente los cambios en la URSS. “Nosotros damos la bienvenida a los esfuerzos de la Unión Soviética para liberalizar y crear una sociedad soviética más abierta, democrática y pluralista, y para acercarse a una economía orientada al mercado.”

Se tomó entonces la decisión de que el FMI, el Banco Mundial y la OCDE emprendiesen una consulta cercana con la Comisión de las Comunidades Europeas, para efectuar un estudio detallado de la economía soviética que permitiera hacer las recomendaciones para su reforma y establecer el criterio bajo el cual la ayuda económica occidental podría apoyar a estas reformas eficazmente. Esta tarea, sentenciaron, debía ser emplazada a través del FMI.

La agenda del G7 se fue politizando e ideologizando en la lógica de la reestructuración del bloque histórico. En la cumbre de Bonn (1978) se incluyó el tema del combate al terrorismo internacional, en Tokio (1979) el tema de los refugiados de Kampuchea, y a partir de la cumbre de Ottawa (1981), las reuniones cumbre del G7 se politizaron aceleradamente.

Además de los tópicos anteriores, se incluyeron temas como el conflicto árabe-israelí, la guerra civil en Líbano y la condena a la URSS

por su intervención en Afganistán. En Williamsburg (1983) se presentó una declaración sobre seguridad y se incluyó el tema del medio ambiente.

En Londres se emitió una declaración sobre los valores de la democracia, y se advirtió que la década por venir era la década de la democracia. Además de los temas anteriores, se realizó una declaración sobre la guerra entre Irak e Irán. En Tokio (1986) se introdujo el tema de la tecnología y una declaración sobre el accidente de Chernóbil. Y en Toronto se incluyó el tema del narcotráfico y el lavado de dinero, entre otros.

La versión hegemónica de la globalización

Llamamos versión hegemónica de la globalización al conjunto de rasgos que sobre ella han compartido las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así como los gobiernos que conforman el Grupo de los Siete, particularmente Estados Unidos durante el gobierno del presidente William Clinton.

La importancia de esta versión no estriba tanto en la fortaleza de sus argumentos teóricos como en el hecho de que constituyó el fundamento, la explicación y la justificación de prácticas políticas, económicas y culturales de la dirección económica y política mundial.

En otras palabras, aquellos que la propusieron gozaron del privilegio que les dio el poder para forjar su propia profecía. Tal fue el caso del Fondo Monetario Internacional, que recibió no sólo la comisión, sino todo el poder por parte del Grupo de los Siete para impulsar el desarrollo de las relaciones económicas internacionales en los países subdesarrollados y socialistas, e implementar programas de asistencia financiera condicionados a reformas estructurales y sistémicas.

Estas reformas funcionaron como estrategias de política económica orientadas a integrar a los países subdesarrollados y ex-socialistas de una manera intensiva a la economía mundial.

El Fondo Monetario Internacional definió la globalización como “un proceso histórico, resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico y referido a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente mediante el comercio y los flujos financieros”.

Este término lo extendió también al desplazamiento de personas y a la transferencia de conocimientos (tecnología) a través de las fronteras, abarcando además aspectos culturales, políticos y ambientales (Fondo Monetario Internacional, 2000).

Aunque los alcances de esta definición resultaban sumamente amplios, el Fondo los acotó en su discurso a la integración económica, dejando de lado los otros aspectos, por considerar que se encontraban fuera de su esfera de acción.

Para fundamentar su definición, el Fondo Monetario Internacional reescribió la historia conocida en función de la integración económica y la proyectó como estrategia de desarrollo.

El comportamiento histórico de la integración, nos dice, ha estado sujeto a flujos y reflujos e íntimamente asociado a la liberalización de los mercados y el crecimiento económico. Por lo tanto, el avance o retroceso del crecimiento económico ha dependido de que los países abran o cierren sus economías.

Al respecto, señala que en los albores del siglo XX ya existían notables vínculos comerciales y de capital entre las economías nacionales; pero este panorama cambió conforme avanzó la primera mitad de este siglo. Los países cerraron sus economías, adoptaron medidas proteccionistas y aplicaron un control generalizado de capitales, obteniendo por resultado una reducción del ingreso per cápita (Fondo Monetario Internacional, 2000).

El caso contrario ocurrió, según el Fondo, durante la segunda mitad del siglo XX, cuando la mayor parte de las naciones se integró a la economía mundial y abrió su economía, hasta alcanzar a finales del siglo un notable grado de globalización, con mercados financieros más integrados (Camdessus, 1998).

En perspectiva, la apertura es benéfica para todos los países que se han adscrito a ella pues los ha conducido al progreso, y prueba de ello –han dicho los funcionarios del Fondo– es que con la globalización se ha logrado un más rápido crecimiento económico, mejores estándares de vida y mayor esperanza de vida, y sobre todo la mayor expansión de la democracia y la libertad que en épocas anteriores en el mundo.

Con este esquema de argumentación, el Fondo Monetario Internacional dio un carácter ético a la promoción de la globalización y una visión optimista respecto al futuro del mundo. Dicha visión optimista predominó hasta la crisis asiática.

A partir de entonces se reconocieron algunos riesgos implicados en la globalización: a) la volatilidad de los flujos de capital; y b) el deterioro de la situación social, económica y ambiental producto de la pobreza.

Sin embargo, esto no bastó para que el Fondo revisara a profundidad su concepción de la globalización y sus políticas. Por el contrario, llamó a ahondarla (Fondo Monetario Internacional, 2000).

El FMI concluyó que la integración de la economía mundial era parte esencial de toda estrategia con pretensiones de aumentar los niveles de vida en un país, y afirmó en voz de Horst Köhler (ex director gerente del FMI) que “en un mundo globalizado, el FMI, con su alcance universal, es la piedra angular para el fomento del crecimiento y la estabilidad” (Fondo Monetario Internacional, 2001).

El esquema de la globalización elaborado por el Fondo Monetario Internacional fue compartido en términos generales por el Banco Mundial (2000), su organización gemela, aunque estableció históricamente algunas variantes como que el auge de la globalización arrancó a partir de la segunda mitad del siglo veinte, con una fase de aceleración a partir de mediados de los años ochenta caracterizada por el desarrollo de la interdependencia económica entre los países del mundo y el impulso generado por factores como: 1) los avances tecnológicos, que han reducido los costos del transporte y el desarrollo de las comunicaciones y la computación; y 2) la liberalización del comercio y los mercados de capitales.

En la Organización Mundial de Comercio se identificó a la globalización con el liberalismo económico, y por lo tanto su aplicación conceptual correspondió al ascenso que tuvo el liberalismo económico después de la Segunda Guerra Mundial, primero de manera lenta, con un alcance limitado, y a partir de la década de los ochenta de manera acelerada en todo el mundo, impulsado por los países ricos en general y en especial por Estados Unidos y Gran Bretaña.

Dicho ascenso se debió, según la OMC, a que las políticas aplicadas por estos países fueron copiadas no sólo por otras naciones industrializadas, sino también por los países en desarrollo.

Además, con el descrédito del comunismo y del estatismo, las políticas que estimulaban la apertura económica en todos los lugares se revaloraron positivamente. Conforme los gobiernos se retiraban, los mercados, combinados con nuevas tecnologías, tejieron una red entre las economías nacionales. Así surgió una nueva palabra: “globalización”, acuñada para describir este proceso.

La globalización se mostró como inevitable aun entre quienes abrigaban dudas acerca de ella (Moore, 2000). Como se puede apreciar, esta visión de la globalización, aunque difiere respecto a la del Fondo Monetario Internacional en la medida en que pone un mayor énfasis en la política económica que en la existencia del fenómeno objetivo de la integración económica, resulta complementaria y, por los resultados que aduce, equivalente.

En el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la globalización ha estado vinculada a la formación de un mercado mundial liberalizado e integrado de bienes y capitales, y a la emergencia de un nuevo orden internacional institucionalizado que ha facilitado la expansión de la producción, del comercio y de los grupos financieros a escala mundial (Kolodko, 2001: 10).

Su aplicación histórica es similar a la del Fondo Monetario Internacional, y advierte que la globalización ha sido adoptada consistentemente en los trabajos de la organización más que nada

porque refleja los cambios ocurridos en la economía mundial (Johnston, 2004: 12).

En suma, como se puede apreciar, las grandes organizaciones multilaterales, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, aunque difieren en el orden de los factores: integración, interdependencia, liberalismo económico, mercado mundial liberalizado... el resultado es el mismo: la promoción de políticas económicas en favor de la apertura económica, de la democracia y de la institucionalización del cambio económico.

La explicación de tal coincidencia sobre los términos de la globalización nos puede conducir a tres hipótesis: 1) el esquema teórico que sustenta a la globalización es tan contundente e inobjetable (pensamiento único) que a estas organizaciones no les queda más alternativa que asumirlo; 2) el esquema compartido tiene la misma base epistemológica, y por lo tanto llegan a posiciones equivalentes, de manera independiente, sobre la globalización y las políticas que se derivan de ella, con algunas pequeñas diferencias; y 3) todas estas organizaciones forman parte de un sistema hegemónico, por lo que de manera natural asumen la dirección ideológica que les es marcada por el sistema y lo expresan intelectualmente.

La globalización y la política económica exterior de Estados Unidos

En plena época imperialista, a finales del siglo XIX, el gobierno norteamericano ya propalaba su política de “puertas abiertas”; es decir, de libre acceso de todos los países imperialistas al comercio y a las fuentes de materias primas en igualdad de circunstancias.

El presidente Woodrow Wilson, al final de la Primera Guerra Mundial, reverdeció esta política en los famosos “Catorce Puntos” que expuso ante el Congreso el 8 de enero de 1918, en donde asociaba la paz mundial a la eliminación de las barreras económicas y la igualdad en las condiciones comerciales.

Roosevelt y Churchill en agosto de 1941, a propósito de la Conferencia Atlántica postularon en el artículo IV del Capítulo Atlántico que todos los Estados deberían disfrutar de acceso, sobre iguales términos, al comercio y las materias primas del mundo, los cuales eran necesarios para su prosperidad económica.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano advertía que la única manera de evitar que se produjera una recesión económica era “sólo si el comercio mundial y las materias primas eran plenamente abiertos a todos los pueblos sobre la base de iguales oportunidades” (LaFeber, 1991: 9).

Se pensaba que el mundo no podía regresar a los años treinta, cuando las naciones trataron de escapar de la depresión creando altas barreras arancelarias y bloques comerciales que dañaron profundamente los flujos comerciales.

Esta línea en la política exterior de los Estados Unidos está asociada a dos ideas complementarias que se derivaron de la Segunda Guerra Mundial: 1) una economía nacionalista tiende a la formación de bloques comerciales coloniales con altas barreras arancelarias, y conduce inevitablemente tanto a desvirtuar la competencia económica como a generar bloques políticos, que al interactuar entre sí provocan las guerras. Eso fue lo que ocurrió durante los años treinta cuando británicos, alemanes, japoneses y rusos transformaron la lucha económica en lucha militar; y 2) la prosperidad económica y la constante expansión del comercio internacional se encuentran indisolublemente ligadas, pues al sistema capitalista es esencialmente un sistema internacional, y si no pudiese funcionar internacionalmente, se vendrá abajo completamente (LaFeber, 1991: 9).

Por lo tanto, desde 1944 Estados Unidos se aseguró de que el sistema de Bretton Woods incluyera su visión liberal de la economía mundial. Posteriormente, para consolidar este objetivo, no sólo enfrentaron al bloque socialista, antagonista natural de esta política, sino además (en otro nivel) exigieron a sus aliados, el Reino Unido y Francia, la destrucción de sus bloques imperialistas.

No fue casual que los préstamos norteamericanos, que resultaban imprescindibles para la economía de ambas naciones, estuviesen

condicionados al desmantelamiento de los bloques comerciales coloniales respectivos.

Lo cierto es que el poderío económico desarrollado por Estados Unidos, muy superior al de sus aliados, le aseguraba una posición altamente ventajosa en la carrera por “el acceso en iguales términos” al comercio mundial de la posguerra (LaFeber, 1991: 11-12).

La derrota en Vietnam, la creciente competitividad de Europa y Japón en los mercados mundiales y el incremento sustancial de las relaciones económicas internacionales de Estados Unidos hacia principios de la década de los setenta, marcaron cambios sustanciales en el proceso de elaboración de su política exterior.

La creencia de que la construcción de la política exterior norteamericana correspondía a un proceso racional, estratégico, libre de presiones y políticas internas, en la cual el presidente descubría las amenazas en contra de los ideales o intereses de Estados Unidos, reunía hechos, formulaba y sopesaba opciones y deliberadamente seleccionaba una apropiada solución sirviendo al interés nacional (Deese, 1994: 2) y apoyada por los dos partidos, demócrata y republicano, quedó profundamente afectada a partir de las movilizaciones de la sociedad civil en contra de la guerra de Vietnam.

La injerencia del llamado complejo industrial militar presionando en favor de la guerra quedó al descubierto (Quezada, 1993), y la movilización social heredada de los movimientos en favor de los derechos civiles de las minorías afroamericanas, ahora en contra de la guerra de Vietnam, fueron un factor decisivo para que dicha guerra llegara a su fin.

A partir de entonces, las Organizaciones No Gubernamentales comenzaron a influir en la política exterior norteamericana libremente y el bipartidismo terminó. Pero no fueron las organizaciones defensoras de los derechos civiles las que prevalecieron, sino las económicamente más poderosas, promotoras de la interdependencia económica, antecedente directo de la globalización, como era el caso de la influyente Comisión Trilateral.

Ellas abrieron brecha para que la globalización se convirtiera en un objetivo estratégico. Zbigniew Brzezinski, creador de la Comisión

Trilateral y asesor de seguridad nacional del presidente Carter, caracterizó a Estados Unidos como la “primera sociedad global” (Kegley, 1982: 42).

En estas condiciones, la unificación de la clase dirigente en Estados Unidos en relación a la política exterior se volvió más compleja. No obstante, la clase política norteamericana, durante el gobierno de Ronald Reagan, al mismo tiempo que actualizó el discurso de la Guerra Fría introduciendo posiciones maniqueas tendientes a fortalecer dentro de Estados Unidos la imagen de la gran potencia, impulsaba la “revolución silenciosa” en los países subdesarrollados y fortalecía la integración de la economía norteamericana con la economía japonesa.

Por otra parte, las élites con fuertes intereses materiales en el extranjero y favorables a la globalización, utilizando una estrategia gradualista se dedicaron a tomar posiciones, de manera progresiva, cooptando a los principales funcionarios tanto gubernamentales como civiles en las áreas económicas, políticas y culturales, estrategia que resultó mucho más efectiva que las de algunos grupos proteccionistas del Medio Oeste, trabajadores de la industria manufacturera tradicional y grupos marginales de las grandes ciudades que se oponían a ella (Deese, 1994).

Conforme el gobierno de Estados Unidos fue convirtiendo a la globalización en el eje de su política exterior, particularmente en el tema económico, de manera incipiente durante el gobierno de George Bush y plenamente durante el gobierno de Clinton y con matices de retirada en el gobierno de George W. Bush, ésta se fue desarrollando como una política y un discurso que enfatiza cada vez más los valores y las formas de hacer política y negocios en la sociedad norteamericana.

Es en este punto donde se encuentra la esencia de la versión hegemónica de la globalización, su base epistemológica y su importancia en la política exterior de Estados Unidos. En otras palabras, constituye el esfuerzo de la clase política norteamericana de refrendar por diferentes medios la aceptación de la globalización por parte de la sociedad norteamericana.

Así el presidente George W. Bush, por cierto perteneciente a un grupo muy alejado de los postulados de la Trilateral, en sus discursos elevó a la globalización al nivel de fenómeno objetivo y le ha conferido el carácter de proceso inevitable. Es decir, “que no puede ser detenido y, por lo tanto, lo único que puede hacerse es facilitarlo o mejorarlo”.

Y esto se logrará, de acuerdo al presidente, en la medida en que el mundo adopte los valores norteamericanos que nutren su política exterior: libertad, democracia e imperio de la ley.

La libertad, en estos términos, por supuesto no se refiere al derecho que tienen todos los pueblos del mundo de elegir su forma de organización económica y política de manera libre y soberana. Se refiere esencialmente a la libertad de comercio y de circulación de capitales (Carother, 2000).

Cuando se habla de que la globalización debe ir acompañada del buen gobierno, se habla de un proceso de democratización que deben seguir los gobiernos del mundo, sólo que en los términos de la democracia norteamericana.

Es decir, se trata de un proceso de “modelado institucional” en el que un país en vías de democratización debe reproducir las formas de las instituciones de las democracias establecidas, a través de una secuencia de etapas naturales y ordenadas. La primera, orientada a las elecciones; la segunda, a las instituciones estatales; y la tercera, a la sociedad civil (Carother, 2000).

Si se sostiene que la globalización favorece la paz, esto no se refiere al respeto al derecho ajeno, sino esencialmente a que favorece las buenas relaciones entre las grandes potencias, la lucha contra los terroristas y tiranos, y el aliento a las sociedades libres y abiertas en cada continente.

A partir de todo esto, no es difícil identificar a la globalización como la extensión mundial de los valores de la política exterior de Estados Unidos, valores que son los mismos que promueven las organizaciones multilaterales, en especial el Fondo Monetario Internacional, y que son propios de las élites empresariales de todo el mundo.

Finalmente, conviene tener en consideración la posición que al respecto guarda la Comisión Trilateral, esto con un doble objetivo: destacar el compromiso que la Comisión Trilateral tiene con la globalización al estilo norteamericano; y advertir sobre quiénes consideramos que son los verdaderos beneficiarios de la globalización, que por supuesto no son los países subdesarrollados miembros del Fondo Monetario Internacional.

Así, tomando como elemento representativo a Joseph Nye (2004), distinguido profesor de la Universidad de Harvard, prominente miembro de la Comisión Trilateral y funcionario del gobierno norteamericano, a pesar de que califica de erróneo el punto de vista de todos aquellos que identifican la *globalización* con la “americanización” (refiriéndose por supuesto a Estados Unidos) de las culturas del mundo. Y nos pone de ejemplo a Japón, que a pesar de haber abrazado desde hace siglo y medio la globalización ha mantenido su singularidad cultural.

Agrega que incluso la cultura de Estados Unidos, como la de todos los países, se ha visto influida por la globalización. Admite que existe cierto grado de “americanización”, pero advierte que esto se debe a que Estados Unidos está en el primer plano de la revolución de la información, y que esta situación disminuirá conforme los países asuman la modernización a su propia manera.

Finalmente, no tiene más remedio que reconocer que Estados Unidos puede tener menos control en el futuro, pero puede encontrarse viviendo en un mundo algo más amable merced a sus valores básicos de democracia, mercado libre, libertades individuales y derechos humanos.

En busca de la hegemonía perdida: “La revolución conservadora”

Luego del intento fallido del presidente *trilateralista* Jimmy Carter, la determinación de devolver a Estados Unidos la hegemonía perdida y satisfacer simultáneamente las demandas de las dos principales fracciones de la clase dirigente estadounidense provino del ala

derecha de la clase política norteamericana, esto a través del gobierno de Ronald Reagan (Yager, 2006).

La estrategia del gobierno de Reagan descansó en tres puntos principales: 1) replanteó las relaciones con la Unión Soviética vía una mayor hostilidad; detuvo las negociaciones sobre control de armamento y, para beneplácito del complejo industrial militar estadounidense, inició una escalada armamentista a partir de 1983, con la Iniciativa de Defensa Estratégica y a costa del aumento del déficit presupuestal; 2) adoptó al neoliberalismo como base ideológica de su proyecto económico, particularmente en su variante ofertista, cuyo objetivo principal fue el de estimular la ganancia capitalista, y con ello el crecimiento de la economía de Estados Unidos; y 3) exportó la estrategia neoliberal a todo el mundo, sobre todo a los países subdesarrollados, por la vía de las instituciones internacionales, respondiendo de esa manera a las demandas de las fracciones de clase con intereses materiales mundiales e identificadas con la interdependencia económica, antecedente directo de la *globalización*.

Ronald Reagan no era miembro de la Trilateral; por el contrario, durante su campaña presidencial había sido uno de los más duros críticos del presidente *trilateralista* Jimmy Carter y de la Trilateral misma:

Él dijo (el presidente Jimmy Carter) que debemos ratificar el tratado SALT II porque si no nadie nos apreciaría. Él dijo que debíamos devolver el Canal de Panamá porque si no nadie nos apreciaría. Ya es tiempo de decirle al presidente: no nos importa si nos aprecian o no. Nos haremos respetar en el mundo.

No sólo eso, su política exterior ya como presidente de Estados Unidos resultaba también contraria a la que venía pregonando la Comisión, en el sentido de intensificar las relaciones con la URSS y compartir el poder con las potencias europeas.

Sin embargo, su *staff* de gobierno estaba compuesto, en los principales puestos, por *trilateralistas*, dentro de los cuales destacaban: George Bush (vicepresidente, 1981-1989); Alexander Haig (secretario de Estado, 1981-1982) y George Shultz (secretario de Estado, 1982-1989); Caspar Weinberger (secretario de Defensa, 1981-1987) y su

sucesor Frank Carlucci (1987-1989); Paul Volcker (Sistema de la Reserva Federal, 1979-1987) y Alan Greenspan (Sistema de la Reserva Federal, 1987-2006); Nicholas Brady (secretario del Tesoro, 1988-1993); Donald Regan, primero como secretario del Tesoro (1981-1985) y posteriormente como *Chief of Staff* (1985-1987).

Como se puede apreciar, los puestos clave de la administración de Reagan; es decir, política exterior, gobierno y dinero estaban en manos de *trilateralistas*.

Por otra parte, en contrapeso, la organización ultraderechista The American Security Council Foundation, creada en 1958 con el objetivo de luchar contra el comunismo y fuertemente conectada con el Complejo Militar Industrial que la financiaba,⁴¹ suministró la doctrina *The National Strategy for Peace Through Strength*, misma que había desarrollado y registrado en tiempos de presidente Dwight Eisenhower. Esta doctrina fue adoptada por Reagan y constituyó la base ideológica de la nueva carrera armamentista y su agresiva política exterior.

El presidente Reagan habló de su significado al decir: “Una cosa es segura, si vamos a seguir avanzando en la paz mundial y la libertad humana, Estados Unidos debe seguir siendo fuerte. Si algo hemos aprendido estos últimos ocho años es que la paz a través de la fuerza, opera.”⁴²

Además, Reagan le dio un tinte mesiánico a la renovada carrera armamentista cuando el 8 de marzo de 1983, ante la Convención Anual de las Asociaciones Evangélicas Nacionales, tildó a la Unión Soviética de “El Imperio del Mal”, al cual había que destruir.

Sólo quince días después anunció el lanzamiento de la Strategic Defense Initiative conocida como “La Guerra de las Galaxias”, modificando profundamente el equilibrio de fuerzas a escala planetaria.

Cabe agregar que esta iniciativa operaba al mismo tiempo, por su gigantesco impacto en el presupuesto, como una especie de

⁴¹ https://www.ascfusa.org/content_pages/view/ascf-benefactors

⁴² https://www.ascfusa.org/content_pages/view/Historyofascf

keynesianismo militar tendiente a reactivar la economía norteamericana.

Su política en contra del “Imperio del Mal” abarcó eventos bastante discutibles como el apoyo y entrenamiento a Osama Bin Laden y los mujaidines en su lucha contra la ocupación soviética de Afganistán; el apoyo a los sucesivos gobiernos golpistas guatemaltecos, reconocidos por su extrema violación de los derechos humanos; la invasión a Grenada para deponer al presidente Maurice Bishop, con el pretexto de que el reciente aeropuerto construido lo pretendía utilizar como base militar soviética; y el escándalo Irán-contras, que violaba flagrantemente las resoluciones del Congreso.

Por lo que se refiere a la política económica, tomó a las corrientes económicas neoliberales como la dirección ideológica de su gobierno y sustento de su proyecto conocido como “la revolución conservadora”.

El objetivo central de este proyecto consistía en restablecer el crecimiento de las ganancias capitalistas a través de la aplicación de un conjunto de posiciones estratégicas, que incluían: 1) temporalmente, el manejo restrictivo del crédito que destruyera la carga que representaban las empresas de altos costos y bajas utilidades; 2) la liberalización de los flujos internacionales de capitales y mercancías como palancas antiinflacionarias; 3) la disminución de la intervención estatal (particularmente a través de la disminución del gasto público dedicado a la asistencia social), acompañada de una retórica anti-keynesiana que desacreditaba la política del bienestar social, la cual, según esto, desestimulaba el trabajo, fomentaba el ocio y resultaba sumamente cara para la sociedad; y 4) la aplicación de un programa del lado de la oferta⁴³ (*supply-siders*), tendiente a remover los

⁴³ Para los intelectuales orgánicos identificados como ofertistas —una de las tres vertientes del pensamiento neoliberal; las otras son el monetarismo y la nueva macroeconomía clásica— y principales creadores del proyecto económico, la estanflación y la disminución relativa en la productividad que había venido experimentando la economía norteamericana eran consecuencia de un Estado benefactor que gastaba demasiado en los pobres, subsidiando su flojera y pereza y con ello desalentando el trabajo, la producción y el empleo, dando por resultado una contracción de la economía y un incremento de los precios. Por lo tanto, para volver a sentar a la economía norteamericana sobre bases firmes

“gravámenes que pesaban sobre el capital; es decir, los sindicatos excesivamente poderosos, los salarios sumamente altos y los impuestos agobiantes” (Brenner, 1999: 257).

Estas medidas incentivarían las ganancias, la inversión y el ahorro, lo cual traería una mayor producción y con ello mayor empleo, mayores ingresos, mayor consumo y mayor crecimiento económico, todo sin la intervención del gobierno en la economía.

A esta estrategia neoliberal le empotró, paradójicamente, un gigantesco gasto militar justificado con su campaña de hacer retroceder al comunismo y encuadrada en la lógica del esquema neoliberal, la cual asignaba al gobierno las funciones específicas de guardián del orden interno y de la seguridad nacional como tareas ineludibles, pero que en términos económicos actuaba como una palanca keynesiana para estimular el crecimiento económico.

El avance del neoliberalismo como base del nuevo enfoque del gobierno norteamericano se fincó en su ataque en contra de la intervención del Estado en la economía y a favor de la liberación de los mercados.

El ataque se fundamentaba en la idea de que el Estado obstaculizaba el equilibrio automático al que tendían los mercados, generando perturbaciones sobre todo de carácter inflacionario. Sólo con su retracción sería posible alcanzar el funcionamiento sano de la economía y el progreso material de los pueblos.

Sin embargo, este ataque frontal contra el Estado keynesiano tenía un destinatario específico: las conquistas sociales alcanzadas por medio del Estado benefactor (en los países desarrollados) y el Estado promotor y planificador del desarrollo que surgió con la rebelión estructuralista en los países subdesarrollados (Villarreal, 1986: 16).

En otras palabras, con el neoliberalismo las clases dirigentes trataban de recuperar lo que sentían habían perdido (disminución de la tasa de ganancia) a través de las concesiones a las clases subalternas (altos

y sanas, proponían fundamentalmente tres cosas: 1) reducir los gastos sociales, eliminando al Estado benefactor; 2) reducir las elevadas tasas impositivas; esto es, restringir al Estado recaudador; y 3) eliminar todos los controles y regulaciones del mercado; esto es, eliminar al Estado controlador y regulador.

salarios y pleno empleo), en aras de mantener la estabilidad que brindaba el bloque histórico nacional.

Por otra parte, argumentaban que el incremento del poder laboral generado por los arreglos institucionales y las políticas gubernamentales keynesianas que volvían más rígido el mercado del trabajo, afectaban las ganancias y con ello favorecían la tendencia a un crecimiento lento de la economía.

Por lo tanto, la conclusión lógica para la reestructuración hegemónica consistía en restablecer el equilibrio en el mercado laboral, a través de una estrategia que tomase en cuenta tanto posiciones económicas como políticas y legislativas.

El objetivo era flexibilizar el mercado laboral por la vía de incrementar la exportación de capitales por medio de la inversión extranjera directa a países con menores costos salariales, solapar la inmigración, hostilizar a los sindicatos y cambiar las leyes en perjuicio de los trabajadores, entre otras medidas.

Esta ideología unificó sustancialmente a las clases capitalistas dentro y fuera de la potencia hegemónica; es decir, en la mayor parte de los países desarrollados y subdesarrollados, pues ofrecía incrementar de manera directa las ganancias a costa de los trabajadores y minar el supuesto poder institucional y político que ellos poseían.

Evidentemente, poco valieron para las clases dominantes los argumentos en contra que sostenían que las ganancias se recuperaban, a pesar de los altos costos salariales, a través del aumento de la demanda en el mercado, producto del incremento de la capacidad de compra de los trabajadores, lo cual facilitaba la rotación del capital, la valoración de las mercancías y la concreción de las ganancias.

En la práctica, poco tiempo tuvieron las recetas neoliberales para mostrar su efectividad. Las políticas neoliberales restrictivas se aplicaron en momentos en que la sobreproducción manufacturera se encontraba a niveles sumamente altos. El resultado inmediato fue la compresión de la demanda y una espiral deflacionaria que contribuyó de manera importante, en 1980-82, a la peor crisis generalizada desde la de 1930.

Todos los indicadores económicos cayeron a niveles desesperantemente bajos. Reagan aseguró a los ciudadanos norteamericanos que ése era el costo que se tenía que pagar por un futuro lleno de prosperidad.

No obstante la retórica, el gobierno norteamericano, ante el colapso de la economía tuvo que retroceder en sus políticas originales, ablandando su política crediticia y aplicando el mayor déficit presupuestal de la historia mundial (Brenner, 1999: 258).

Fue esta estrategia renovada con medidas keynesianas la que rindió frutos, y a partir de 1983 y durante ocho años consecutivos la economía norteamericana mantuvo el ritmo de crecimiento económico. El PIB real creció a una tasa promedio anual de 2.8% entre 1981 y 1990; y no sólo eso, la mayor parte de los indicadores mostraron resultados positivos.

Ciertamente, el crecimiento se debió, en parte, al saneamiento de la economía que produjo la crisis de 1980-82. Muchas de las empresas menos productivas cerraron y se produjeron despidos masivos de trabajadores. Las empresas más grandes que sobrevivieron fortalecieron su posición en el mercado y aumentaron la productividad del trabajo y la concentración de capital.

Sin embargo tal depuración fue insuficiente para solucionar el problema de la sobreproducción del sector manufacturero, y su dinámica no fue el principal factor para estimular la recuperación económica.

La recuperación se fincó, como en el pasado, en un crecimiento sostenido del endeudamiento del gobierno norteamericano, las empresas y las familias, pero ahora a niveles nunca antes vistos.

Este proceso no fue privativo de los Estados Unidos, tuvo alcances mundiales y representó el vértice del comportamiento de la economía norteamericana, al igual que la de los países desarrollados y en general de la economía mundial.

El enorme déficit fiscal y la demanda generalizada de créditos elevó y mantuvo las tasas de interés a niveles récord y por tiempo prolongado. Ello estimuló poderosamente al sector financiero tanto

nacional como internacional, y se convirtió en una fuente de atracción de capitales de otras ramas de la producción, desviando recursos del sector productivo al rentismo y la especulación y la atracción de capitales extranjeros.

El endeudamiento sobre el que se fincó la recuperación de la economía norteamericana provino en gran medida del exterior, y cambió la circunstancia financiera de los Estados Unidos. Desde 1985 Estados Unidos se convirtió en deudor neto, y para 1990 era ya el principal deudor internacional, con más de 600 mil millones de dólares (*Survey of Current Business*, junio de 1990).

Gran parte de los recursos para financiar el déficit de Estados Unidos fluyeron desde Japón, que había acumulado grandes excedentes de capital durante su prolongado periodo superavitario, y de los países árabes exportadores de petróleo.

En el primer caso se fortaleció la integración económica que reforzaba el bloque histórico. El déficit norteamericano, sin lágrimas, sólo era posible por los créditos japoneses.

Por otro lado, un dólar sobrevaluado para atraer capitales extranjeros y combatir la inflación e impulsado al alza por la demanda de dólares por parte de los inversionistas extranjeros, favoreció las exportaciones japonesas, europeas y de algunos países subdesarrollados hacia Estados Unidos.

Pero con ello, el déficit de las cuentas externas de Estados Unidos se agudizó: mientras las importaciones crecieron en un 100%, las exportaciones aumentaron sólo un 12% en la década de los años ochenta. El crecimiento de las importaciones, por su parte, socavó la producción norteamericana e incrementó el déficit externo de Estados Unidos, presionando al dólar a la baja.

A mediados de los años ochenta, el déficit comercial se convirtió en uno de los principales problemas del gobierno de Estados Unidos, por lo que éste inició una serie de presiones sobre los otros miembros del bloque histórico para que revaluaran sus monedas, sobre todo Japón, cuyos superávit comercial y de pagos con respecto a los Estados Unidos y al resto del mundo eran enormes.

En 22 de noviembre de 1985, con el Acuerdo Plaza el agrupamiento de los principales países desarrollados rindió sus frutos ante los excesos de Washington. Los países capitalistas más desarrollados, presionados por Estados Unidos, acordaron acciones comunes para el descenso del dólar.

Sin embargo, a pesar de la apreciación del yen (*endaka*) en aproximadamente el 30%, la cual tuvo profundas repercusiones negativas en la economía japonesa (Girón, 2006), tal movimiento no tuvo el efecto esperado en el déficit comercial norteamericano, en parte porque Estados Unidos no cumplió su compromiso de eliminar el enorme déficit fiscal federal.

Lo anterior condujo a una conferencia internacional en el Louvre, en París, en febrero de 1987, en busca de tipos de cambio que pudiesen ser aceptados por los participantes. Se acordó estabilizar al dólar, lo cual implicó que los bancos centrales de Alemania y Japón compraran grandes cantidades de dólares, y esto acarreó consecuencias negativas para ambas economías. Además, se esperaba que Japón y Alemania aplicaran medidas tendientes a estimular sus economías.

Sin embargo, ni Estados Unidos fue capaz de reducir su déficit fiscal, ni Alemania y Japón estimularon adecuadamente sus economías. Para octubre de ese mismo año, el acuerdo había comenzado a resquebrajarse. Las fuertes recriminaciones entre los miembros del bloque histórico por el fracaso, tuvieron como respuesta la caída del mercado de valores.

Empero, la fuerza del bloque se mantuvo y a comienzos de 1991 los bancos centrales de las principales economías comenzaron a coordinar sus intervenciones en el mercado, para restringir las fluctuaciones del tipo de cambio y mantener las divisas dentro de una franja consensuada. Así nació el nivel de referencia del régimen monetario internacional (Gilpin, 2003).

A juzgar por los resultados podemos afirmar que *The Reaganomics*, como se conoce a la política económica conservadora, no solucionó de manera definitiva los graves problemas de la economía norteamericana. Sólo los pospuso, y de paso creó problemas nuevos (Sawyer, 1987).

Si bien la inflación disminuyó, la restauración del ahorro y los niveles de inversión se lograron no a causa de la política económica de Reagan, sino gracias los altos niveles de endeudamiento generalizado. La productividad no superó los niveles de décadas anteriores (Sawyer, 1987); y la competitividad, por lo menos hasta 1990, en el plano internacional no se recuperó del todo.

Por lo que se refiere a la tasa de ganancia, variable estratégica en la economía capitalista, la política “conservadora” no logró revertir la tendencia que venía desde principios de los años setenta; siguió declinando desde un máximo del 15.8% en 1977 a 9.5 en 1990 (Estay, 1991: 22).

En suma, la restauración hegemónica a partir del fortalecimiento de la economía norteamericana no se logró en la medida en que se esperaba.

Pero durante el gobierno de Reagan culminó un proceso económico en contra de los trabajadores norteamericanos que se había iniciado desde finales de los años cincuenta. A pesar de que Reagan había forjado de manera importante su vida política dentro de un sindicato, los trabajadores lo identificaron plenamente como su virtual enemigo: los salarios de los trabajadores fueron duramente golpeados durante su gobierno.

Por otra parte, aunque a lo largo de la década de los ochenta se crearon cerca de 20 millones de empleos, cabe mencionar que la mitad de ellos fue de baja calificación (limpieza y servicios poco calificados) y de poco sustento en el aparato productivo.

Entre 1990 y 1992 se perdieron 2 millones de empleos. La desigualdad social se incrementó. La clase media se encogió (Steve Rose, 1985). El ingreso medio de las familias norteamericanas, en dólares contantes de 1984, fue el mismo que en 1970; y por lo que toca a los ciudadanos de raza negra, el índice disminuyó en un 9%. Entre 1979 y 1984, el número de familias americanas que vivían bajo la línea de la pobreza aumentó en un tercio, y para las familias de la de raza negra significó un aumento del 24%.

Mientras se estimulaba la ganancia y con ella la reproducción del capital desde abajo, es decir afectando a los trabajadores, ésta se

alentaba simultáneamente desde arriba, favoreciendo a los grandes capitalistas de formas diversas.

Gran parte de la lucrativa deuda gubernamental se concentró en pocas manos. El 10% de personas más ricas tenía cerca de un 80% de la deuda federal total de EU, que se encontraba en propiedad de particulares, y al 1% más rico le pertenecía casi un tercio (Brenner, 1999: 294).

En suma, el gran mérito de la “revolución conservadora” fue fortalecer a la fracción de la clase capitalista identificada con las grandes empresas industriales y financieras, generando a través de la política económica neoliberal las condiciones para que incrementaran sus beneficios y consolidaran su confianza en el proyecto expansivo de alcances globales que venían desarrollando.

Posiblemente el mayor éxito del gobierno de Ronald Reagan, si se puede considerar como tal, consistió en consolidar las reformas estructurales de los países subdesarrollados y el cambio sistémico de los países socialistas, que dejaron de serlo.

Sobre el desarrollo tecnológico y la globalización

La versión hegemónica de la globalización sostiene que el motor de la integración social global se encuentra en el desarrollo de la tecnología. También sostiene que la globalización favorece la transferencia tecnológica, beneficiando a los países subdesarrollados que la adoptan.

El uso de tecnologías cada vez más eficientes tiene como objetivo fundamental en el capitalismo la reducción de la cantidad de fuerza de trabajo en el proceso de producción, haciendo que ésta rinda más, es decir, que sea más productiva. Esto con el fin de obtener no sólo las ganancias regulares, sino además obtener ganancias extraordinarias en el mercado —a costa de las empresas menos productivas— al momento de la formación de precios.

Si circunscribimos el análisis del avance tecnológico a la historia del capitalismo (como recurso metodológico), es necesario hacer una distinción entre dos procesos: 1) el desarrollo del conocimiento y la

invención técnico-científica derivados del trabajo de los intelectuales, ampliamente vinculado a una compleja interacción de factores, entre otros la historia de la ciencia, la educación y la cultura; y 2) su aplicación como innovación tecnológica en la estructura económica, conforme a la lógica del funcionamiento de ésta y a los intereses capitalistas, específicamente la ganancia capitalista.

Cuando estos dos procesos, el de la creación y el de la aplicación, convergen históricamente en condiciones propicias y se desarrollan de manera acelerada, contribuyen de manera determinante a la generación de las grandes revoluciones tecnológicas.

Aunque los aspectos técnicos asociados a las grandes revoluciones tecnológicas aparecen como sus rasgos definitorios, su impacto como factor de cambio social es mucho más profundo, tanto nacional como internacionalmente, y por supuesto constituyen un factor decisivo en el proceso histórico de integración social, “por el estrecho nexo que ellas tienen sobre las estructuras de la producción” (Dobb, 1981: 311), las comunicaciones, los transportes, la organización social, las instituciones, las prácticas culturales y sobre todo con la demanda de fuerza de trabajo cada vez más calificada, entre otros aspectos notables (Smith, 1997).

En la historia del capitalismo podemos distinguir tres grandes revoluciones tecnológicas: 1) La Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, con su centro en Inglaterra; 2) la revolución tecnológica de principios del siglo XX en Estados Unidos y Alemania; y 3) la revolución tecnológica concomitante a la Segunda Guerra Mundial, la cual se inició en Estados Unidos y se extendió a la mayor parte de los países desarrollados.

Cada una de estas revoluciones ha estado asociada a verdaderos saltos económicos en los países protagonistas, al desarrollo de la integración capitalista y una serie de eventos sociales de gran envergadura no siempre benéficos para el género humano.

La Revolución Industrial convirtió a Inglaterra en el centro de la industria textil y luego ferroviaria, en el eje de la subordinación colonial de África y Asia y en el cómplice perfecto del desarraigo, de la muerte, el sometimiento, la esclavitud y la explotación de la

población negra en los campos de algodón de los Estados Unidos, para disfrute de las extraordinarias ganancias que en ese tiempo prodigaba la industria textil.

La segunda revolución tecnológica, centrada en la industrialización del proceso de extracción de las materias primas, el despegue de la industria química, la eléctrica y la del automóvil y los bienes de consumo duradero, permitió que Alemania desafiara a Inglaterra, y que Estados Unidos viviera el auge económico más importante de su historia hasta esos momentos, aunque luego lo pagaría con la Gran Depresión, caracterizada por altos niveles de pobreza y desempleo.

Tanto la primera como la segunda revolución tecnológicas siguieron el ciclo regular de tres tiempos peculiar de toda tecnología: 1) el surgimiento y su consolidación; 2) la maduración y la propagación; y finalmente 3) el de su obsolescencia.

Sin embargo esto no sucedería con la tercera revolución tecnológica. Una de las características particulares de ésta es que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el momento se ha mostrado como un fenómeno de innovación de carácter casi permanente.

El carácter permanente de la tercera revolución tecnológica se explica, en primer lugar, por el hecho de que la guerra favoreció la organización sistematizada de la investigación científica en las grandes compañías y universidades, impulsadas por el Estado, acelerando la innovación tecnológica con fines militares.

Con la Guerra Fría, el vínculo entre la carrera armamentista y los intereses económicos y políticos que usufructuaban el presupuesto en las llamadas superpotencias, demandaron continuas innovaciones tecnológicas, provocando que la organización de la producción de la tecnología no sólo se mantuviera, sino además se perfeccionara.

En el seno de las grandes compañías, sobre todo las norteamericanas, la investigación y el desarrollo científico y técnico se convirtieron en una rama separada y especializada de la división interna del trabajo. Años más tarde, estas mismas compañías financiaron la creación de empresas productoras de tecnología.

También aparecieron laboratorios de investigación operados privadamente, vendiendo sus inventos y descubrimientos al mejor postor. La tecnología se convirtió entonces en una mercancía sujeta a la lógica de la ganancia capitalista, con lo cual su desarrollo adquirió una dinámica propia (Mandel, 1979).

Sin embargo, no toda la tecnología quedó sujeta al libre mercado (salvo la madura, la obsoleta y la menos compleja). La parte más importante de la tecnología militar, por ejemplo, permaneció celosamente resguardada por las compañías productoras y los gobiernos de los países desarrollados.

Por lo que se refiere a la tecnología civil, la competencia dictó que las grandes compañías mantuviesen bajo su control las principales innovaciones tecnológicas, explotándolas directamente mediante la exportación de productos terminados.

Con la reestructuración del capitalismo mundial y el fin de la Guerra Fría, con la apertura generalizada de los mercados y la competencia internacional, las grandes compañías, sobre todo las transnacionales, no resistieron la tentación de reconvertir los descubrimientos tecnológicos desarrollados por la industria militar al consumo civil, e iniciar un proceso constante y metabólico de automatización no sólo del resto de las ramas productivas que todavía no lo habían hecho, sino además en los servicios, en el mismo proceso de investigación, en la actividad política e incluso en los sistemas judiciales con el ingreso de los sistemas de cómputo, y sobre todo en el mercado de valores, con la creación de la NASDAQ.⁴⁴

Un hito en el carácter permanente de la tercera revolución industrial lo constituyó la creación del internet. Casi al terminar la Segunda

⁴⁴ La NASDAQ o National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Asociación Nacional de la Bolsa de Distribuidores de Valores Automatizada), fundada en 1971, tiene su antecedente en la autorización por parte del Congreso de Estados Unidos, en 1961, a la Comisión de Bolsa y Valores para estudiar la dificultad en la comercialización de los valores extrabursátiles, que concluyó que la automatización permitiría mejores negociaciones entre los participantes. El éxito de la NASDAQ es que se trata de un mercado de valores extrabursátiles continuo y sin un piso de intercambio físico.

Guerra Mundial, la comunidad científica occidental se planteó como el gran reto de la posguerra desarrollar instrumentos que, más que engrandecer el poder físico de las personas, proporcionase al género humano el acceso y el control sobre el conocimiento heredado a lo largo del tiempo (Bush, 1945).

Paradójicamente fue el Departamento de Defensa de Estados Unidos el que en 1958, a través de la Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados) dio los primeros pasos para la creación de ARPANET,⁴⁵ de la cual surgió finalmente el internet.

Denominada a partir de 1972 como DARPA (agregando la D para definir que dependía del Departamento de Defensa), fue responsable de proporcionar fondos para el desarrollo de satélites y robots, incluyendo redes de ordenadores. En enero de 1983, el Departamento de Defensa decidió partir DARPANET en dos: una ARPANET pública y una MILNET o Red Militar clasificada.

Con la participación de las universidades más importantes de Estados Unidos, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Laboratorio Nacional de Física de Gran Bretaña e Instituciones paramilitares y empresas, la red pasó de conectar 23 computadoras en 1971 a 600 000 computadoras en más de cien países en 1991; y para 2000 ya había más de 43 millones de *hosts* (Samuelson, 2001).

Con el internet se abrió la era de la información, de la comunicación y de la globalización. Lo cierto es que la integración intensiva del capitalismo se aceleró como nunca antes. La red no sólo vino a modificar la ciencia, la cultura, las artes y la política; también y sobre todo intervino en la forma de hacer negocios (Katz, 2005) en todas partes y las 24 horas del día.

Aunque existe la creencia de que el internet se ha regulado por sí mismo y pertenece a los usuarios, y de que existen una serie de

⁴⁵ El antecedente directo del internet fue la red de computadoras Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET), la cual fue creada por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos por varias de las más prestigiadas universidades del país, y que se erigió en la espina dorsal del internet hasta 1990, tras finalizar la transición al protocolo TCP/IP iniciada en 1983. Abbate, Janet (1999) *Inventing the Internet*. Cambridge: MIT Press.

organismos internacionales como la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación; o la ICANN (corporación de internet para la asignación de nombres y números en todo el mundo), el negocio multimillonario del internet, desde que fue privatizado por el presidente Clinton, está dominado por un puñado de grandes corporaciones que ofrecen el servicio, y empresas como Microsoft, Facebook, Amazon, Google y Apple, que además de enriquecerse han sido acusadas de espiar a los ciudadanos de casi todo el mundo por encargo del gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, conforme avanzó la reestructuración del capitalismo mundial y el proceso de integración se fue consolidando, de un desarrollo tecnológico altamente concentrado, organizado y que generalmente correspondía a estrategias bien definidas, donde la triada conformada por Estados Unidos, Europa Occidental y Japón representaba algo más del 90% de gastos mundiales en investigación y desarrollo (OCDE, 1992), se pasó en los primeros años del siglo XXI a un escenario donde los países desarrollados disminuyeron su participación del Gasto Bruto en Investigación y Desarrollo del 82.6% al 76.2% en 2002; mientras que la participación de los llamados países en desarrollo se incrementó del 17.2% al 23.7% (UNESCO, 2010).

Esto brindó la percepción de que el desarrollo tecnológico por fin se estaba democratizando, y de que estaba en marcha el proceso la convergencia tecnológica tantas veces proclamado.

Sin embargo esta percepción resulta falsa, si tomamos en consideración los siguientes aspectos:

- La caída de la NASDAQ en 2001, la cual significó el fin de la burbuja tecnológica, representó un duro golpe para la investigación y el desarrollo de Estados Unidos y los países europeos, lo que se manifestó en una contracción de la inversión privada. El mercado perdió en dos años cinco billones de dólares, y con ello mandó muchos proyectos a la basura. En diciembre de 1990, el componente tecnológico del valor ponderado de S&P 500 fue de 6.5 por ciento. En marzo de 2000 fue de más del 34 por ciento. El número de empresas de

tecnología en el S&P 500 se duplicó en el mismo periodo (Samuelson, 2001).

- Gran parte de la investigación y el desarrollo, atribuida a los llamados países en desarrollo, ha sido financiada y facilitada por las empresas trasnacionales ahí ubicadas, que están descentralizando sus actividades tecnológicas hacia diferentes partes del mundo obedeciendo a estrategias productivas o comerciales, con el objetivo de reducir los costos laborales y facilitar el acceso de las compañías a los mercados, el capital humano y los conocimientos locales, así como los recursos naturales del país receptor (UNESCO, 2010). Esto queda de manifiesto por el predominio de las exportaciones de bienes intermedios en el comercio internacional y la formación de las llamadas cadenas de producción.
- Otro elemento importante en el mismo sentido es la asociación entre las empresas trasnacionales y el gobierno chino, que han elevado el gasto en inversión y desarrollo sólo por debajo de Estados Unidos y han superado a Japón. El gasto de China representa más de la mitad del avance de los países en desarrollo. Y no sólo eso, para mantener el crecimiento económico el gobierno chino, a través de su plan nacional preliminar para el desarrollo científico y tecnológico a plazo medio y largo aprobado en 2005, se ha propuesto incentivar aún más a las empresas para invertir en innovación, repatriar investigadores, reclutar expertos extranjeros e incrementar el gasto bruto en investigación y desarrollo en relación al Producto Interno Bruto del 1.5% al 2.5% (UNESCO, 2010).
- El apoyo de los gobiernos a las empresas privadas para la investigación y desarrollo no ha sido privativo de China, una de las principales formas de hacerlo es a través de estímulos fiscales. En 2011 el gobierno de Estados Unidos transfirió por esta vía 8 300 millones de dólares, seguido en el ranking mundial por Francia y China (OECD, 2013). Dentro de los países desarrollados, las empresas trasnacionales tienen cada vez más influencia y poder en el ámbito tecnológico. En Estados

Unidos el sector privado financia la mayor parte de las actividades de investigación y desarrollo (UNESCO, 2001), y tres decenas de grandes empresas son las responsables de la mitad de esa inversión. Además, la transferencia de tecnología a través de la proliferación de contratos conjuntos de investigación, las alianzas estratégicas (IBM, Toshiba y Siemens) y los modelos interactivos de integración se da fundamentalmente entre los países desarrollados y entre las grandes empresas trasnacionales.

Por otra parte, el ingreso de nuevos productores al mercado de la tecnología ha quedado limitado por los enormes gastos implicados con el desarrollo de tecnologías cada vez más complejas y sofisticadas.

Salvo las redes que forman las grandes empresas (sobre todo las de corte trasnacional), las grandes universidades y los Estados (particularmente de los países desarrollados), han sido muy pocos los actores que se hayan mostrado capaces de desarrollar de manera independiente una invención técnica y científica y la hayan convertido en innovación tecnológica relevante, sin que antes hayan sido cooptados por los actores principales.

Por lo demás las grandes empresas, a través de los modelos interactivos de innovación, han logrado integrar la investigación con la innovación tecnológica, generando no sólo la capacidad de fabricar un amplio abanico de productos (Kodama, 1992) de alta calidad, sino convirtiendo a la innovación tecnológica en un flujo constante.

Adicionalmente, al convertirse la tecnología en una mercancía con mayor movilidad que en años anteriores, ha quedado sujeta la inversión en ella al comportamiento del ciclo económico. La recesión en Europa ha traído como consecuencia una disminución en la inversión para investigación y desarrollo en esa región.

Por lo que atañe a los países subdesarrollados, a pesar de que éstos adoptaron la globalización y aplicaron el cambio estructural forzados por el Fondo Monetario Internacional, salvo raras excepciones, esto no los ha conducido al desarrollo tecnológico autosostenido; tampoco ha disminuido la brecha en la materia respecto a las economías más desarrolladas, ni ha generado las bases tecnológicas

para el desarrollo sustentable que dicha institución internacional dice promover en los países subdesarrollados.

La incursión de las empresas trasnacionales en estos países ha generado dos tendencias: por una parte, un aumento en la adquisición de licencias internacionales, diseños de productos y tecnologías de procesos de origen externo, generalmente provenientes de las empresas matrices ubicadas en el exterior, y la adopción de leyes de propiedad intelectual semejantes a las de los países desarrollados para responder a los sistemas internacionales de producción integrada de estas empresas, que requieren condiciones mundiales homogéneas tanto en la producción como en el consumo, así como en el marco institucional.

Y por otra parte ha dado lugar a una disminución de los esfuerzos de adaptación de tecnología extranjera, y simultáneamente a un aumento de la fragmentación de los sistemas de innovación tecnológica en estos países.

Muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras, han preferido explotar los recursos naturales disponibles sin adquirir verdaderos compromisos con el desarrollo tecnológico. Incluso las empresas trasnacionales que han sido adquiridas por las empresas locales han suspendido la investigación y desarrollo que estas empresas venían realizando en apoyo a sus tareas productivas y de inversión en las décadas anteriores.

Finalmente, la participación del Estado en la investigación y el desarrollo y en la innovación tecnológica, algo que era fundamental en las estrategias de sustitución de importaciones, con la globalización ha perdido su razón de ser, en la medida en que las empresas estatales fueron privatizadas y los proyectos de industrialización nacional quedaron truncados.

Para los defensores de la globalización, ésta es históricamente irreversible, ante la cual deben sumarse todos los países si no quieren perder el tren del desarrollo.

En este mismo sentido se expresa Reich (1993: 13), para quien en el futuro “no existirán productos ni tecnologías nacionales, ni siquiera industrias nacionales. Ya no habrá economías nacionales, al menos tal

como concebimos hoy la idea”, y lo único que les queda a los países, como bien fundamental, es su población, con sus capacidades y destrezas.

Por eso “la principal misión política de una nación consistirá en manejarse con las fuerzas centrífugas de la economía mundial que romperán las ataduras que mantienen unidos a los ciudadanos, concediendo cada vez más prosperidad a los más capacitados y diestros, mientras los menos competentes quedarán relegados a un más bajo nivel de vida”.

Los verdaderos beneficiarios de la globalización

La reestructuración del capitalismo mundial, que en términos hegemónicos se ha popularizado con el término de *globalización*, ha tenido como objetivo fundamental elevar las ganancias del capital financiero y las grandes empresas trasnacionales.

Es decir, el lucro desmedido de sus promotores a través del rompimiento de los marcos nacionales que impedían su libre acción e incrementando de manera brutal el ejército industrial de reserva a nivel mundial y con ello la plusvalía, esencia de la ganancia.

Las empresas trasnacionales y al capital financiero internacional, para la realización y reproducción de las grandes masas de mercancías y capitales concentrados en sus manos, requieren de manera incesante de mercados para su colocación lucrativa, y por lo tanto de la eliminación de los controles estatales-nacionales que impidan su expansión más allá de las fronteras nacionales de su país de origen.

Históricamente, los procesos de concentración y centralización del capital —es decir, de la acumulación de capital y de la asociación de capitales— se realizaron aceleradamente en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón entre 1870 y 1913, mismo periodo que la versión hegemónica de la globalización considera como de ascenso de la integración, pues ahí existieron condiciones para ello.

Junto con la segunda revolución tecnológica se desarrollaron la industrialización, el desarrollo acelerado del proletariado y el avance del liberalismo, a tal grado que dieron origen a grandes empresas y a

una variedad de asociaciones cuyo propósito era controlar los mercados, y que pronto se convirtieron en grandes monopolios industriales y financieros.

Luego, al mismo tiempo que consolidaban la monopolización de sus mercados nacionales expandieron sus operaciones internacionales, exportando bienes y capitales y ejerciendo el control mundial de las materias primas y de los mercados de ultramar.

Los propietarios y representantes del capital de las grandes empresas y bancos coaligados (oligarquía financiera), conjuntamente con sus Estados nacionales promovieron las políticas imperialistas, exacerbando la competencia interimperialista (Hobsbawn, 1998) y contribuyendo de este modo a que estallara la Primera Guerra Mundial (Lenin, 1961).

La oleada imperialista terminó con la Primera Guerra Mundial. El proceso de integración mundial no sólo se detuvo, sino que retrocedió. El sistema monetario liderado por la libra esterlina dio paso a otros bloques monetarios comandados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Estados Unidos retomó la política aislacionista, restringiendo el comercio europeo. Francia e Inglaterra se volvieron comercialmente sobre sus colonias, y Estados Unidos sobre América Latina, mientras Alemania y Japón, los vencidos, lidiaban con la reconstrucción y el pago de indemnizaciones de guerra.

Por otra parte, la Revolución Rusa sustrajo a la Unión Soviética del mercado mundial y los flujos migratorios se detuvieron. A esto debemos agregar la práctica generalizada del control de capitales a través de medidas impositivas. Todo esto redujo sustancialmente la esfera de actuación de las empresas trasnacionales y el capital financiero.

Esta situación negativa se agravó con la crisis de 1929, de la cual uno de los principales responsables fue el capital financiero. Cegados por la ambición de ganancias, los financieros crearon una burbuja especulativa (Galbraith, 2009) en la bolsa de valores norteamericana, que fueron incapaces de controlar (Kindleberger, 1973), por el impulso que daban los créditos baratos.

El estrepitoso derrumbe de la bolsa de valores, que se inició el jueves 24 de octubre de 1929, no detendría su caída sino hasta 1932, luego de haber perdido el 90% de su valor. La crisis de la bolsa no sólo fue una expresión de la depresión en curso; fue el factor desencadenante más importante (Samuelson, 1979).

Con el *New Deal* el Estado apareció como el corrector de los fallos del mercado. El capitalismo liberal no garantizaba ni la estabilidad, ni el progreso, ni la justa distribución de la riqueza. El Estado se convirtió en el agente fundamental de la economía.

En ese sentido, se estableció una nueva regulación para las actividades del capital financiero. En Estados Unidos se creó la Federal Deposit Insurance Corporation, para garantizar los depósitos bancarios; las Emergency Banking Act(s), que establecieron la Securities and Exchange Commission (SEC), encargada de vigilar los mercados de valores y remodelar la estructura bancaria; y la Glass-Steagall Act, que separó la banca comercial de la banca de inversión.

Además, reaparecieron los rigurosos controles de capital, que habían menguado durante la época de auge. En este marco se produjo la contracción de la esfera de actuación del capital financiero nacional e internacional.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el diseño del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional –creado en la Conferencia de Bretton Woods– era de corte liberal, en su articulado quedó plasmado el control de cambios, específicamente en el artículo VI, sección 3⁴⁶ (Fondo Monetario Internacional, 1993).

Durante la era de Bretton Woods las transacciones de capitales, en muchos países, quedaron limitadas a la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos. Todavía durante la inmediata posguerra, en el marco de la reconstrucción europea el capital

⁴⁶ Sección 3. Control de las transferencias de capital. Los países miembros podrán ejercer los controles que consideren necesarios para regular los movimientos internacionales de capital, pero ningún país miembro podrá ejercer dichos controles en forma que restrinja los pagos por transacciones corrientes, o que demore indebidamente las transferencias de fondos para liquidar obligaciones, excepto en los casos previstos en el artículo VII, sección 3, b), y el artículo XIV, sección 2.

financiero internacional de carácter privado mantuvo una participación discreta, opacado por la transferencia de recursos oficiales de Estados Unidos (eslabonados sobre todo al Plan Marshall) a Europa y el financiamiento multilateral.

No obstante, la recuperación del capital financiero internacional, inicialmente paulatina, pronto habría de tornarse acelerada e irrefrenable. Un factor fundamental lo constituyó la caída del sistema monetario internacional institucionalizado.

La caída del sistema de Bretton Woods se debió en gran medida a los abusos de Estados Unidos con el resto del mundo, lo que lo llevó al “déficit sin lágrimas”, fruto de la preponderancia absoluta de que gozaba dentro del sistema monetario internacional.

Otro importante factor fue la recuperación europea y de Japón, quienes acumularon gran cantidad de dólares y que en un momento determinado exigieron su convertibilidad en oro (Mandel, 1974), sobre todo cuando el sistema comenzó a tambalearse.

Otro factor importante fue la especulación promovida y sustentada por los bancos comerciales y particulares, primero acumulando oro y luego, en 1969, aprovechándose de las ventajas que ofrecía la instauración del doble precio del oro; es decir, uno oficial y el otro de mercado libre, quedando abierta la tentación de obtener oro en los mercados oficiales para posteriormente venderlo al mejor postor.⁴⁷

Finalmente no podemos dejar de considerar la Guerra de Vietnam, principal causante del déficit y de la inflación⁴⁸ en Estados Unidos, con profundas repercusiones para el valor del dólar.

⁴⁷ Si es verdad que entre 1967 y 1973 el sector financiero internacional se alimentó de la desvalorización del dólar y de la crisis monetaria, no se puede olvidar el costo de la Guerra de Vietnam, que dio origen al déficit público norteamericano e hizo más aguda la crisis del dólar (Dos Santos, 1998).

⁴⁸ Durante la primera mitad de la década de los sesenta, los precios al consumidor en EU no habían subido más de 1.7 por ciento anual. Pero con los crecientes gastos originados por la guerra de Vietnam a partir de la segunda mitad de 1965, repentinamente se duplicaron y en 1966 llegaron al 3.4 por ciento. En 1967 y 1968, después de los déficit más grandes desde la guerra de Corea, la inflación se aceleró todavía más, llegando a un 4.2 y 5.4 por ciento en 1968 y 1969. (Brenner, 1999: 172).

Además Estados Unidos, que poseía casi el 60% del oro monetario en tiempos de la fundación del FMI, para 1971 ya era incapaz de respaldar con oro (paridades fijas) la existencia de los dólares que había regado en el mundo.⁴⁹

Por fin, el 15 de agosto de 1971, de manera unilateral el presidente norteamericano Richard Nixon tomó la decisión de terminar la convertibilidad del dólar en oro y terminar de un plumazo con los acuerdos multilaterales tomados en Bretton Woods.

A partir de entonces, el dólar ni quedaba respaldado por el metal amarillo ni constituía una moneda de valor intrínseco. Por lo tanto, se trataba de una moneda fiduciaria, es decir una institución humana en la que se confiaba en virtud de las reglas y prácticas. Un artefacto falso a través del cual se dominaría al mundo en la era de la globalización.

El llamado “sistema de paridades flotantes” que le siguió, que en realidad no era ningún sistema, significó una “privatización del riesgo cambiario”, pues impuso la necesidad de crear instrumentos financieros para cubrirlo y multiplicó las transacciones en divisas.

Además, los especuladores se aprovecharon de los distintos intentos de establecer paridades fijas entre las monedas para embolsarse grandes sumas a costa de los contribuyentes nacionales.

Los cambios flotantes fueron un fracaso, ya que sólo generaron inestabilidad en las relaciones económicas internacionales, pero al mismo tiempo constituyeron una fuente gigantesca de capital originario para los bancos privados.

El control de las divisas inició su traslado de los gobiernos centrales de los países más desarrollados a las manos de los bancos privados, que incrementaban aceleradamente sus operaciones en el exterior y aumentaban su riqueza.

⁴⁹ “... entre 1949 y 1968, los dólares en billetes en el exterior de Estados Unidos pasaron de 6 400 a 35 700, y durante el mismo lapso, las enormes reservas de oro en poder de Estados Unidos se contrajeron de 246 000 a 10 400 millones de dólares” (Tamames, 1984: 73).

Pero la recuperación del capital financiero internacional no sólo se alimentó de la crisis de Bretton Woods, lo hizo también de los otros problemas y crisis que acompañaron la fase descendente del crecimiento de la economía mundial. Por ejemplo, de las políticas anticrisis que se estaban aplicando en Estados Unidos y el mundo en el momento mismo en que el sistema monetario internacional se venía abajo. O de los eurodólares (Edelman, 1990); es decir, de los dólares acumulados principalmente en Europa y sobre los cuales no había jurisdicción (Estados Unidos era renuente a convertirlos en oro) y que permitía a los bancos europeos actuar como paraísos fiscales y centros de “financiación *offshore*”, obteniendo con ello grandes beneficios (Hernández, 2005: 25).⁵⁰

O de los petrodólares, derivados del aumento del precio del petróleo y cuyos ingresos fueron reciclados a través de bancos preferentemente europeos que actuaron, junto con los eurodólares, en procesos de financiamiento “fuera del control de las administraciones estatales” (Hernández, 2005: 26).

El repunte internacional del capital financiero

Con el proceso de la reestructuración de la economía mundial capitalista el capital financiero no sólo se reconstituyó, sino que creció aceleradamente. Incluso se convirtió en un protagonista de primer orden en la era de la mayor integración del capitalismo mundial, concentrando y centralizando gigantescas sumas de capital, mientras la población sufría los estragos de la crisis y la transformación.

Para enfrentar la crisis generalizada de 1974-1975,⁵¹ los gobiernos de los principales países capitalistas recurrieron nuevamente al

⁵⁰ Hernández, Juan (2005) *Los paraísos fiscales*. Madrid, Akal.

⁵¹ Casi simultáneamente a la “crisis petrolera” se produjo la recesión generalizada de 1974-75, producto de la sobreproducción y resultado directo de una fase típica de descenso de la tasa de ganancias (Caputo, 1987). Su profundidad se le atribuyó a la acumulación de problemas desde la crisis de Bretton Woods y su carácter generalizado (abarcó simultáneamente a los principales países capitalistas), y al acentuado proceso de integración que se había generado durante el periodo de expansión capitalista.

expediente de las políticas económicas anticrisis, basadas en la expansión del crédito y la masa monetaria.

Lo singular del caso es que lo hicieron en el momento mismo en que aplicaban una política deflacionaria⁵² para contrarrestar la inflación acumulada. Los gobiernos tenían que escoger entre inflación y crisis, cuando esta última ya había estallado.

Así, los gobiernos de Estados Unidos, Alemania Occidental y Japón, sorprendidos por la magnitud de la recesión, decidieron desde el segundo semestre de 1975 tomar medidas de reactivación económica.⁵³

Para el año de 1976, existían no menos de 175 mil millones de dólares de poder adquisitivo suplementario inyectados en el circuito económico por el déficit de los principales países capitalistas.

La política inflacionaria aplicada limitó⁵⁴ la recesión, y ésta tocó a su fin en 1975; primero en Estados Unidos, más tarde en Alemania Federal, en Japón y los demás países capitalistas.

El precio que pagaron los países capitalistas por la aplicación de la política económica inflacionaria fue muy grande: a) se generó la progresiva “desvalorización de las monedas” y por lo tanto la retroalimentación de la inflación; b) la desvalorización de las monedas, combinada con la vigencia de los cambios flotantes, afectaron de manera incidental la competencia entre los principales países capitalistas, sobre todo en el comercio internacional; y c) los altos niveles de inflación alcanzados por algunos países desarrollados

⁵² En la Asamblea del FMI en Nairobi (septiembre de 1973), la Comunidad Económica Europea de una parte, Estados Unidos de la otra y en general todos los miembros de la OCDE, llegaron a la conclusión de que era necesario acordar una serie de medidas para desacelerar la economía y frenar la fase ascendente del ciclo, a fin de lograr un nuevo equilibrio, con cierta estabilidad (Tamames, 1984: 371).

⁵³ “En Estados Unidos la reactivación consistió en un déficit del presupuesto del orden de 80 mil millones de dólares para el año fiscal de julio de 1975 a julio de 1976. En Alemania Federal un déficit presupuestal de 30 mil millones de dólares, y en Japón de 20 mil millones de dólares” (Mandel, 1980: 77).

⁵⁴ La eliminación de sus causas escapa al control de toda política económica (Mandel, 1980).

pusieron en peligro la solvencia económica del Estado (Mandel, 1980).

Por otra parte, la reactivación económica a través de la inflación generó un desarreglo generalizado del sistema de crédito. Entre otras cosas, surgieron ciclos (nacionales) de crédito parcialmente autónomos respecto a los ciclos industriales.

Además, los bancos asumieron una actitud más agresiva, extendiendo y acelerando sus operaciones; los depósitos a corto plazo se utilizaron para el otorgamiento de créditos a largo plazo y para la especulación. “Los bancos confiaban ciegamente en el apoyo que les brindaría la banca central en caso de quiebra” (Mandel, 1980: 92).

El capital financiero internacional se encontraba absolutamente fortalecido y dispuesto a expandir su escenario de operación. Detentaban una gigantesca masa de capital monetario que quedó atrapada en los circuitos bancarios, relativamente independientes del control de las autoridades monetarias y financieras nacionales.

Esta gran masa de capitales pronto se convirtió en una sobreoferta de crédito, lo cual permitió que los bancos ofrecieran préstamos en condiciones relajadas, mismos que propiciaron el endeudamiento generalizado de gobiernos, empresas y particulares, que en muchos casos superaron sus posibilidades reales de pago.

Las empresas trasnacionales

Otros de los grandes beneficiarios de la llamada *globalización* fueron las grandes empresas trasnacionales. Cabe señalar que en términos de relaciones sociales existe una gran diferencia entre el capital financiero y las empresas trasnacionales, aunque ambas tengan como objetivo incrementar sus ganancias y obtener mercados.

Un examen somero en el marco de la reestructuración del capitalismo mundial arroja luz sobre el particular y pone en evidencia la relación entre este tipo de empresas y el Estado.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el vértice de la integración económica internacional y de los

procesos de concentración y centralización del capital. Las empresas trasnacionales norteamericanas dominaron la escena de la franca recuperación de la economía mundial (Gilpin, 1990).

Simultáneamente, las empresas trasnacionales europeas y japonesas iniciaron y consolidaron su proceso de reconstitución hasta llegar a ser, a principios de la década de los setenta, tan competitivas como las norteamericanas, y junto con ellas representaron el factor decisivo de un proceso de integración mayor; es decir, de la *globalización*.

La influencia de las empresas trasnacionales y la *globalización* fueron advertidas oportunamente por los estudiosos de las relaciones internacionales.

Keohane y Nye (1971), desde su perspectiva teórica, consideraron que con la revolución tecnológica en las comunicaciones y transportes la política global estaba ahora caracterizada por la creciente interdependencia, la diseminación del *trasnacionalismo* y la aparición de nuevos temas globales dentro de la economía, la cultura y la esfera tecnológica.

Con su novedosa propuesta desafiaron a la teoría realista clásica de las relaciones internacionales. En el marco del llamado segundo debate de la Teoría de las Relaciones Internacionales, clamaron por ampliar el esquema de los actores internacionales para incluir, entre otros, a las empresas trasnacionales, las cuales, junto con los bancos privados y otras organizaciones, se habían convertido en una parte normal de las relaciones tanto extranjeras como domésticas.

Más aún, las empresas trasnacionales se convirtieron en la forma de producción más importante de la economía mundial, y según Gilpin (1990: 248), “la esfera de acción de sus operaciones y la amplitud del territorio sobre el cual se extienden, son más extensas geográficamente que cualquier imperio que jamás haya existido”.

La década de los años noventa del siglo pasado fue la década de crecimiento de las empresas trasnacionales. Entre 1990 y 2000, las entradas de IED mundial tuvieron una tasa promedio de crecimiento anual de casi el 25%, y en el año 2000 alcanzaron su nivel máximo histórico con 1.4 billones de dólares y su número llegó a cerca de 63

000 empresas matrices, con alrededor de 690 000 filiales extranjeras (Organización de las Naciones Unidas, 2000: 1).

Tabla 2
Corriente de IED mundial
(En miles de millones de dólares y porcentaje)

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
IED Mundial (entradas)	200	211	158	170	208	226	317	338	400	690.9	1081.6	1409.4
Porcentaje		5.50	-25.12	7.59	22.35	8.65	40.27	6.62	18.34	72.73	56.55	30.31
IED Mundial (salidas)	218	243	199	191	208	222	339	347	475	649	1102.3	1244.5
Porcentaje		11.47	-18.11	-4.02	8.90	6.73	52.70	2.36	36.89	36.63	69.85	12.90

Fuente: UNCTAD varios números - www.unctad.org

Cabe advertir que, si bien es cierto que el número de estas empresas aumentó significativamente en esta época, su distribución se mantuvo profundamente desigual. Aunque en los países llamados de reciente industrialización aparecieron pequeñas y medianas empresas trasnacionales, o incluso grandes como Petróleos de Venezuela, Hutchison Whampoa (de Hong Kong y China) y Cemex (de México), los flujos de capital mundial (IED principalmente) se siguieron realizando en un porcentaje superior al 80% entre los países desarrollados (Organización de las Naciones Unidas, 2000: 7).

Por consiguiente, no surgió ningún signo de que la desigualdad de la producción internacional entre los dos tipos de países hubiese disminuido significativamente. Los procesos de concentración y centralización de capital siguieron vigentes.

Incluso, en los últimos años de la década la centralización internacional de capitales cobró auge a través de las fusiones y adquisiciones. En 1999, las fusiones y adquisiciones movieron la

astronómica suma de 800 000 millones de dólares, y en el año 2000 superaron el billón de dólares.

Las tres cuartas partes de estas operaciones se efectuaron en los países desarrollados, especialmente en el área de la Unión Europea y Estados Unidos, en donde se comenzaron a formar las llamadas “supercorporaciones”, como la proveniente de la megafusión entre las compañías petroleras estadounidenses Texaco y Chevron, luego de las también fusionadas Exxon-Mobil, Royal Dutch/Shell y British Petroleum/Amoco.

Esta tendencia abarcó también los servicios, sobre todo los comercializables, entre otros la producción de programas de computación, el procesamiento de datos, los centros de llamadas y los servicios de apoyo a las empresas.

Difícilmente se puede sostener la declaración de que en la economía mundial prevalece el libre mercado, como lo suscribe la versión hegemónica de la globalización, sobre todo cuando de acuerdo a Naciones Unidas (1998: 2), las empresas trasnacionales hacia finales de la década de los años noventa ya concentraban más de la mitad de la producción mundial y las ventas de sus filiales alcanzaban, en 1992, 5.2 billones de dólares (Naciones Unidas, 1995: 37); es decir, un valor equivalente al triple del monto total de exportaciones mundiales excluido el comercio intrafirmas (1.7 billones de dólares).

Si agregamos a ello el comercio intrafirmas relacionado con los sistemas de producción integrados que sirven de sustento a la cooperación entre empresas trasnacionales, tendríamos que agregar un 30% más. Incluso, como afirma Gilpin (1990: 250), su dominio global obedece a la creciente importancia de las economías de escala, las ventajas monopólicas y los alicientes para entrar en un sector económico particular.

Una de las mayores ventajas que obtuvieron las empresas trasnacionales con la reestructuración del capitalismo mundial, fue contar con libre acceso a los trabajadores de todo el mundo.

De esta manera la expansión de las empresas trasnacionales, al mismo tiempo que ha contribuido significativamente a una mayor integración de la economía mundial, a través del comercio y del dinero, lo ha

hecho también de manera aún más significativa por medio de la expansión de las relaciones sociales de producción capitalista de corte trasnacional.

Trabajadores de diferentes países del mundo son contratados para laborar para un grupo reducido de capitalistas de nacionalidad diferente a la suya, *trasnacionalizando* de esta manera las relaciones de producción y la lucha de clases.

Por otra parte, tal expansión y poderío económico de las empresas trasnacionales ha sido posible por los altos niveles de acumulación de capital asociados al desarrollo de este tipo de empresas y por las fusiones y adquisiciones, acicateadas por la competencia capitalista y, en cierta medida, por el auge tecnológico alcanzado en esferas de la producción como las telecomunicaciones y los transportes.

A esto debemos agregar el franco y decidido apoyo de los gobiernos de los países desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, e incluso los de los países subdesarrollados, a través de la aplicación de políticas neoliberales e impulsadas en todo el mundo por las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.

Dichas políticas han asegurado, entre otras cosas, la libre movilidad de capitales incluyendo la repatriación de las ganancias, y han contribuido a que la mayoría de los gobiernos de los diferentes países del mundo les brinden una beneficiosa acogida. En segundo término, creando un ambiente institucional mundial favorable; y en tercero, compitiendo entre los propios países por atraer inversión extranjera directa.

El debate sobre si las empresas trasnacionales constituyen nuevos actores internacionales y son relativamente independientes de los Estados; o sí por el contrario las empresas son sólo una extensión del poder del Estado, es una disyuntiva que sólo tiene un fundamento aparente.

El mismo argumento que aplicamos para el capital financiero es válido para las empresas trasnacionales. Las fracciones de clase que controlan este tipo de empresas actúan y ejercen su poder dentro y fuera del Estado de diferente manera, articulando negociaciones

incluso contradictorias, dependiendo del espacio en el que se encuentren.

Como entidades formales negocian, cooperan o presionan a los gobiernos a favor de sus intereses. Sus representantes políticos disputan el control de los gobiernos, promoviendo gobiernos favorables a sus intereses materiales e históricos.

En la sociedad civil nacional e internacional fundan agrupamientos de sus pares, para promover la defensa de sus intereses comunes y para externar su opinión y extenderla sobre los asuntos nacionales y mundiales y difundir sus proyectos históricos.

En suma, a pesar de que la versión hegemónica de la globalización lo considere un desatino, lo característico de esta era de integración a la que se ha dado en llamar *globalización*, es el dominio de la economía mundial por el capital financiero y las grandes empresas, ambos de carácter trasnacional, y por tanto de las fracciones de clase que las detentan.

El carácter decisivo de las empresas trasnacionales respecto a la globalización, quedó de manifiesto con el descenso vertiginoso del ritmo de crecimiento de la IED mundial a partir de 2001 y hasta 2003, e incluso en 2004, cuando apenas creció en un 2% en relación al año anterior.

La caída fue catastrófica para la Unión Europea y Estados Unidos, tanto en la entrada como en la salida de IED. En la Unión Europea, las entradas de IED pasaron de 696.1 mil millones de dólares en el año 2000 a 213.7 mil millones de dólares en 2004; mientras en Estados Unidos disminuyó de 314.0 mil millones de dólares en el año 2000, a 53.1 mil millones de dólares en 2003; es decir, a casi la sexta parte.

Por lo que se refiere a las salidas de IED en Europa, pasaron de 813.1 mil millones de dólares a 265.8 mil millones de dólares en 2002; y en Estados Unidos, de 142.6 mil millones de dólares en el año 2000 a 124.9 mil millones de dólares en 2001.

La interpenetración en el bloque hegemónico se detuvo, al principio por las turbulencias en la economía norteamericana, y se prolongó por los signos de sobreproducción en el conjunto de los países más

desarrollados y por las estrategias norteamericanas de lucha contra el terrorismo y de recuperación del crecimiento de su economía basado en la inversión interna, fundamentalmente en el sector inmobiliario y el sector productor de armamento.

Tabla 3
Corriente de IED
(en miles de millones de dólares y porcentaje)

	2001	2002	2003	2004	2005
IED mundial (entradas)	832.2	617.7	557.9	710.8	916.3
Porcentaje	40.95	25.78	-9.68	27.41	28.91
IED mundial (salidas)	764.2	539.5	561.1	813.1	778.7
Porcentaje	38.59	29.40	4.00	44.91	-4.23

Fuente: UNCTAD, varios números.

www.unctad.org

Sin embargo, a partir de 2005 se recuperó nuevamente el ritmo de crecimiento de la IED mundial. Más en la Unión Europea y menos en Estados Unidos, volvieron a crecer aceleradamente las entradas y las salidas de IED.

Debe destacarse también la creciente participación de los países subdesarrollados como receptores de IED, los cuales alcanzaron el más alto nivel jamás registrado, con 334 mil millones de dólares.

Esto se debió esencialmente a la búsqueda de una disminución de costos por parte de las empresas trasnacionales en un ambiente cada vez más competitivo, y por el alza en los precios de los minerales y el petróleo y la recuperación de las fusiones y adquisiciones transfronterizas (UNCTAD, 2006: 9 y 10).

La caída de la IED no puede atribuirse a un ambiente institucional desfavorable. Por el contrario, éste ha seguido siendo cada vez más propicio para la expansión de las empresas trasnacionales.

Si consideramos que durante el periodo 1992-2005, de los 2 267 cambios introducidos en todo el mundo en las leyes que rigen las inversiones extranjeras directas (IED), el 92% crearon un marco más favorable a las IED. Aunque debe advertirse que desde 2004 ha habido un aumento considerable de legislaciones desfavorables a la IED.

Tabla 4
Cambios introducidos en la legislación nacional sobre IED, 1992-2005

Número de países que introdujeron cambios en su legislación sobre la inversión extranjera	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Número de cambios introducidos	77	100	110	112	114	150	145	139	150	207	246	242	270	205
Más favorables a la IED	77	99	108	106	98	134	136	130	147	193	234	218	234	164
Menos favorables a la IED	-	1	2	6	16	16	9	9	3	14	12	24	36	41

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies, cuadro I.11.

El capital financiero y la crisis de la deuda, prolegómeno del cambio estructural

En la segunda mitad de los años setenta del siglo pasado, el problema de los bancos privados de los principales países desarrollados no era la falta de capital, sino su exceso. Con sus circuitos de capital repletos, sin el suficiente espacio rentable en las áreas productivas de sus países (por la sobreproducción industrial), e incluso siendo incapaces de reciclar los volúmenes de capital por sí solos;⁵⁵ es decir, atendiendo exclusivamente a las condiciones del mercado, desarrollaron agresivas políticas financieras (intereses bajos y préstamos de largo plazo) e identificaron a los países subdesarrollados que mostraban cierto dinamismo en sus economías como sus clientes potenciales.

⁵⁵ Para que se pudiesen reciclar los petrodólares "se necesitaban iniciativas especiales del gobierno o nuevas facilidades internacionales". (Kapstein, 1994: 64)

Así, los bancos privados se convirtieron en verdaderos endeudadores, al igual que los oferentes de créditos oficiales y multilaterales, otorgando créditos por montos que de antemano se sabía que no podían ser pagados.⁵⁶

Los bancos privados corrieron los riesgos del impago porque estaban seguros de que sus gobiernos y el Fondo Monetario Internacional jugarían el papel de prestamistas en última instancia y los salvarían cualesquiera que fuesen las circunstancias.

Este comportamiento se engarzaba además con la política del Grupo de los Siete, los cuales por su parte, desde su cumbre de Rambouillet (1975) hasta la de Tokio (1979) mantuvieron su decisión de aumentar los recursos financieros a los países subdesarrollados, tanto públicos como privados, bilaterales y multilaterales.

Incluso se puso particular énfasis en estimular la inversión privada en estos países durante la Cumbre de Londres (1977), y el gobierno norteamericano ya había levantado los controles de capital que limitaban la salida de capitales de los bancos comerciales privados a clientes en el extranjero desde 1974.⁵⁷

Por su parte, los países subdesarrollados tenían sus propias razones para endeudarse. Gran parte de ellas provenían de la dependencia estructural y el endémico desequilibrio externo de sus economías, a las que se agregaron otras de carácter contingente (Miller, 1989).

Los organismos financieros multilaterales, tradicionales proveedores de crédito a estos países⁵⁸ y encargados oficialmente de ayudarlos a solucionar sus problemas de balanza de pagos, resultaron incapaces de resolver la demanda de créditos.

⁵⁶ David Rockefeller, del Chase Manhattan Bank y fundador de la Comisión Trilateral, consideraba que muchos de los países en vías de desarrollo “no estaban en la posición ideal para pedir prestado”. (Spiro, 1999: 41).

⁵⁷ “A principios de 1974 tuve el *placer* de escribir el comunicado de prensa que anunciaba el final de los controles de capitales, haciendo notar que bajo las circunstancias del momento, el acceso al mercado de capitales de Nueva York por parte de los países extranjeros, sería muy útil” (Volcker, 1992: 125).

⁵⁸ Latinoamérica, por ejemplo, se ha caracterizado en términos generales por ser una región permanentemente endeudada (Schatan, 1985: 307).

Primero porque parecían no contar con los recursos financieros suficientes, luego de que Estados Unidos disminuyera su participación; y paradójicamente porque entre 1974 y 1976 los países desarrollados hicieron uso de los recursos de esta institución en un porcentaje del 60%. Y segundo, porque parecía no existir voluntad política por parte de la potencia hegemónica para hacerlo, pues veía al FMI como un competidor de los bancos privados en los mercados subdesarrollados (Spiro, 1999).

Los créditos de la banca internacional privada resultaban más atractivos, o si se quiere competitivos (abundantes y a su disposición), no estaban condicionados a “ajustes” como era el caso de los organismos multilaterales, y ofrecían recursos en cantidades infinitamente superiores.⁵⁹

Muchos de los países subdesarrollados habían decidido financiar su política de sustitución de importaciones a través de los créditos internacionales.

El ritmo de endeudamiento fue verdaderamente frenético. La deuda externa de los países en desarrollo se duplicó entre 1971 y 1975, y volvió a hacerlo entre 1975 y 1979. Subió otro 50% entre 1979 y 1982, cuando llegó a 620 000 millones de dólares. Y hacia 1984 la deuda sobrepasó los 800 000 millones de dólares.

⁵⁹ La mayor participación de la banca internacional privada en el proceso de endeudamiento se dio a despecho de los organismos internacionales y de los créditos gubernamentales. En 1971, los gobiernos de los países desarrollados eran acreedores de casi el 80% de la deuda acumulada de los países subdesarrollados (Correa, 1984). Algunas regiones y países mantuvieron una mayor participación de fuentes oficiales (Asia Meridional, África al sur del Sahara), mientras en otras regiones como Latinoamérica y Asia Oriental (incluyendo la zona del Pacífico) disminuyó la participación de las fuentes oficiales en favor de una acelerada participación de las fuentes privadas (64.3% de la deuda pública de la región latinoamericana en 1981, según el Banco Mundial, *World debt tables*, 1982-83). Cabe mencionar que un importante número de países latinoamericanos, particularmente los de menor tamaño, conservaron un importante componente de deuda contratada con fuentes oficiales (República Dominicana 72%, El Salvador 99%, Guatemala 99% y Haití 80%, entre otros).

La región que mostró un mayor ritmo de endeudamiento fue Latinoamérica,⁶⁰ cuyo crecimiento promedio anual fue del 18.8%, seguida por Asia Oriental y el Pacífico, que promediaron 18.1%, y el Norte de África y Oriente Medio, con un 18.0%. (Correa, 1984).

El dinero fácil que provenía de los *stocks* acumulados en los bancos de los países desarrollados también estimuló el derroche, la corrupción y la fuga de capitales, la cual alcanzó para América Latina un monto de 130 mil millones de dólares (cifra que representa un tercio de la deuda total contraída por esta región) (*Excélsior*, 4 de julio de 1984).

Mención especial merecen los países exportadores de petróleo en el proceso de endeudamiento. Si bien es cierto que los ingresos obtenidos por la exportación de hidrocarburos les permitió momentáneamente resolver sus problemas del sector externo, también es cierto que un importante número de estos países fueron incapaces de utilizar dichos recursos para crear una reproducción de capital autosostenida y evitar su dependencia de importaciones de bienes de consumo y aumentar excesivamente el gasto público (México, Venezuela y Ecuador).

Además, varios países petroleros, al mantener obcecadamente una política librecambista, permitieron a las élites autóctonas acumular activos en el exterior financiados con recursos de los gobiernos y propiciaron las condiciones para la fuga de capitales.

Por lo tanto, pronto se creó el contexto para que varios países exportadores de petróleo pasaran de ser de superavitarios a deficitarios, y para que tuvieran que recurrir al crédito internacional con el fin de saldar sus balanzas de pagos.

En contrapartida, el vertiginoso crecimiento de los precios petroleros (desde 1973), obligó a los países subdesarrollados no exportadores de

⁶⁰ “Latinoamérica se mantuvo, durante los setenta, como la región más endeudada del conjunto de países subdesarrollados (seguida por Asia). Y dentro de esta región, México y Brasil centralizaron la mayor parte de la deuda (41% en 1971 y 58% en 1981 de la deuda pública externa total de los países latinoamericanos). Si a esto agregamos la participación de países como Argentina, Colombia y Chile, podemos constatar que sólo en estos cinco países se centralizaron tres cuartas partes de la deuda total de la región” (Correa, 1984: 193).

petróleo a destinar mayores sumas para el pago de las importaciones petroleras,⁶¹ sobre todo a partir del “segundo choque petrolero” de 1979. Gran parte de la factura petrolera fue pagada con créditos otorgados desde el exterior.

Estos países seguían tal comportamiento con base en el hecho de que las tasas de interés eran bajas, y bajo la idea de que el precio de petróleo continuaría aumentando.

Simultáneamente al proceso de endeudamiento se desarrolló una ideología y una política económica en favor del endeudamiento (neoliberalismo) en los países desarrollados y subdesarrollados: los banqueros, funcionarios del gobierno e intelectuales orgánicos norteamericanos visualizaron el fenómeno como un impresionante ejemplo del funcionamiento de “la mano invisible” del mercado.⁶²

Los dirigentes políticos de los países subdesarrollados, todavía anclados en los problemas del desarrollo, difundieron la idea de que se trataba de “un fenómeno positivo inmanente al desarrollo económico”, “un fenómeno transitorio que estimula el crecimiento económico y que en el futuro lo hará innecesario”, “un mecanismo para optimizar recursos que se ven obstaculizados por la falta de capital nacional”, “un fenómeno natural que hace que los recursos financieros fluyan de los países excedentarios a las regiones donde existen oportunidades para su colocación”.

La banca internacional y nacional de los países subdesarrollados fueron unos fuertes impulsores de verdaderos intelectuales orgánicos, creadores de la ideología de la deuda.

⁶¹ “El pago de los países latinoamericanos importadores de petróleo se elevó de 1 610 millones de dólares en 1973 a 5 065 millones de dólares en 1974, hasta alcanzar los 14 714 millones de dólares en 1980. Es decir, la cuenta petrolera se multiplicó diez veces durante ese periodo, lo que elevó su participación en el total de importaciones de 10% en 1973 a casi una tercera parte del total en 1980” (Durán, 1987: 66).

⁶² Paul Volcker, en su libro *Changing fortunes* (1992: 139) expresaba que “los mercados financieros internacionales, actuando por su propia cuenta, parecían estar haciendo un trabajo efectivo reciclando los excedentes de los países petroleros”.

Pero esta ideología no contempló que para que los gobiernos de los países subdesarrollados pudiesen actuar en los mercados libremente, tenían que ser liberados previamente.

De ello se encargó Estados Unidos, que apoyó decididamente a los gobiernos que aplicaron medidas de corte neoliberal en los países subdesarrollados que favorecieron el endeudamiento.

Los gobiernos militares latinoamericanos abrieron las puertas sin cortapisas a los créditos extranjeros, mientras violaban sin miramientos los derechos humanos y masacraban a amplios sectores de la población de sus países.

Los grandes beneficiarios del proceso de endeudamiento de los países subdesarrollados fueron los sectores financieros de los principales países desarrollados. No sólo porque lograron reciclar una buena parte de los excedentes que se habían acumulado en sus sistemas financieros, sino porque además habían obtenido el pago regular de los intereses de la deuda y vieron incrementar sus exportaciones en proporción significativa a lo prestado.

Gran parte de los créditos estuvieron anclados a las exportaciones de los países desarrollados. Si en 1974 los siete países industrializados tenían un déficit en su cuenta comercial de 3 000 millones de dólares, entre 1974 y 1982 manejaron excedentes acumulados de 227.3 mil millones de dólares.

En el caso de Estados Unidos, con excepción de Europa Occidental, América Latina se había convertido en el principal destinatario de sus productos, y México por sí solo se convirtió en el tercer comprador más grande de Estados Unidos.

Pero para 1979, la crisis de la deuda era ya inminente. Las dificultades para cubrir los intereses se generalizaron. Los créditos contratados a corto plazo y a tasas flotantes se revirtieron contra los prestatarios cuando, producto del aumento de la tasa de interés en los centros financieros internacionales, se vieron obligados a utilizar créditos nuevos sólo para solventar el servicio de los anteriores, creando así un círculo vicioso.

“La tasa de interés del mercado de euromonedas pasó del 5.46% en 1972 al 16.38% en 1981, y la preferencial de Estados Unidos de 5.23% a 18.92% en ese mismo periodo” (Durán, 1987: 66).

Este incremento tan acelerado de las tasas de interés, por arriba incluso de sus niveles históricos, contribuyó a crear además una espiral incontenible de financiamiento: deuda que creaba más deuda.

Por otra parte, los bancos privados norteamericanos se encontraban sumamente expuestos. El total de los préstamos otorgados a los países subdesarrollados de la mayoría de los bancos privados que habían intervenido en estas operaciones superaba el 150% de sus capitales. A pesar de ello, ninguna de las agencias reguladoras del sistema financiero estadounidense hizo algo por detener la vorágine (Volcker, 1992).

La crisis de la deuda no explotó por sí misma, fue detonada desde la Reserva Federal de Estados Unidos a través de la contracción monetaria, el aumento histórico de las tasas de interés y la apreciación del dólar aplicada por Paul Volcker, presidente del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos (y prominente miembro de la Comisión Trilateral), la cual adquirió proporciones mundiales desde que dicha política fue presentada en la Reunión Anual en Belgrado del FMI (*Interim Committee*, septiembre de 1979).

Ésta tenía como pieza central “el aumento de las tasas nominales y reales de interés y el fortalecimiento del dólar” (Miller, 1989: 44). Su objetivo era controlar la inflación como un requisito previo para estimular el crecimiento y el empleo (problemas arrastrados desde la crisis de 1974-75).

Ciertamente, la tasa de inflación en los países industrializados cayó al 7% en 1982, y las tasas de interés se establecieron a niveles positivos (por encima de las tasas de inflación y tasas de interés nominales previas). Su costo “fue sólo” una década de estancamiento y la pobreza de las economías de la inmensa mayoría de los países subdesarrollados.

Así, el endeudamiento generalizado de los países subdesarrollados y la crisis mundial de 1980-82 condujeron inevitablemente a la “crisis de la deuda externa” que estalló en el verano de 1982, cuando México se

declaró (sin eufemismos) insolvente. A los pocos meses le siguió Brasil. Luego la crisis se extendió a todos los países subdesarrollados.

El capital financiero y el cambio estructural

La sincronización de la crisis con la deuda pudo ser el cataclismo del capitalismo mundial.⁶³ Por ello, ante el peligro de la moratoria o la negociación en bloque por parte de los deudores, y dada la exposición que tenían los grandes bancos de Estados Unidos y Europa y con el fin de evitar la cesación de pagos, el pleno del poder mundial tomó medidas al respecto.

El Grupo de los Siete tomó la decisión de que fuese el Fondo Monetario Internacional el encargado de enfrentar la crisis de la deuda de 1982. La crisis representaba para el G7 la oportunidad de engranar sus objetivos hegemónicos con la demanda, por parte de los grandes banqueros acreedores, de su intervención (Griffith Jones, 1988) para asegurar que los países deudores cumplieran con sus

⁶³ La crisis de la deuda de 1982 encerraba dos grandes riesgos: 1) la reducción sustancial de los flujos financieros mundiales, que podría traer graves consecuencias para la reproducción mundial del capital en momentos en que se estaba sorteando la sobreproducción mundial de mercancías y capitales; y 2) la posible declaración de moratoria por parte de los principales países subdesarrollados coaligados, que generaría profundas repercusiones no sólo para la economía mundial, también para el sistema hegemónico. Sin embargo, estos dos grandes riesgos no se materializaron. Los flujos de capital se mantuvieron y las clases dominantes de los países endeudados, congruentes con su dependencia histórica, no ofrecieron mucha resistencia a las presiones hegemónicas y se sometieron inmediatamente al FMI. Por lo tanto, la estrategia adoptada por los principales países acreedores y el Fondo Monetario Internacional para manejar la crisis de la deuda de 1982 estuvo orientada a: 1) evitar que los países deudores se coaligaran para negociar su deuda externa o declarar la moratoria, ofreciéndoles programas de asistencia financiera negociados caso por caso; 2) restablecer en lo posible las relaciones financieras internacionales afectadas por la crisis, forzando el entendimiento entre deudores (cumplimiento de los pagos) y acreedores (préstamos involuntarios), a través de la reestructuración de las deudas vencidas; y 3) forzar la aplicación de programas de cambio estructural en los países deudores, a través del condicionamiento de la ayuda financiera.

compromisos financieros; es decir, que pagasen su deuda con los respectivos intereses.

Este engranaje correspondía a un compromiso implícito entre los gobiernos del G7 y los banqueros al momento en que éstos fueron estimulados para que invirtiesen cuantiosos recursos en dichos países.

Por su parte, coincidentemente, el Fondo Monetario Internacional ya contaba con los instrumentos y la experiencia necesarios para cumplir la encomienda asignada: programas de ajuste estructural debidamente fundamentados, nuevos servicios financieros, una condicionalidad y supervisión actualizadas y una estrecha relación con los principales bancos internacionales.

Incluso contaba con el argumento para reclamar como suyo el problema de la deuda, insistiendo en que éste había afectado a las economías de muchos países y, sobre todo, había puesto en peligro la integridad financiera del sistema bancario internacional (Fondo Monetario Internacional. 1991a: 45).

Además, meses atrás (1981) ya había enfrentado con su estrategia de cambio estructural la primera crisis de los países del bloque socialista (Yugoslavia, Hungría, Polonia y Rumania), a pesar incluso de que en esos momentos Polonia no pertenecía a su membresía, pero estaba viviendo la resistencia activa de *Solidarnosc*, dirigida por Lech Walesa.

En ese mismo tenor el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, el Banco Internacional de Pagos y los bancos norteamericanos agrupados, junto con los gobiernos de la OCDE, el “Club de París” y el Fondo Monetario Internacional, establecieron todo un proceso de negociaciones con los deudores.

Se trató de un procedimiento “caso por caso”, con el fin de escalar los pagos de la deuda, refinanciar la deuda vencida e impulsar programas de ajuste estructural en los países deudores (Devlin, 1989).

Las expectativas de la estrategia basada en las negociaciones “caso por caso” se cifraban en una aparente solución transitoria, mientras se esperaba que un repunte de las economías de los países de la OCDE estimulara las exportaciones de los países deudores, para que de esta manera pudieran hacer frente a sus compromisos.

En palabras de Larosiere, entonces director gerente del Fondo Monetario Internacional, se expresaban las expectativas de esta manera: "... con una tasa de crecimiento entre los países de la OCDE de 3% durante los próximos tres años, los problemas financieros de los países en desarrollo son manejables, siempre y cuando se realicen esfuerzos de ajuste a nivel mundial" (Miller, 1989: 66).

Para los países subdesarrollados, la deuda externa se volvió una verdadera trampa. Fue falsa la "zanahoria" del crecimiento económico; los modelos de sustitución de importaciones a los que habían apostado quedaron desacreditados; salvo honrosas excepciones, la deuda fue dilapidada en armamento, corrupción, consumo e inversiones poco rentables, fuga de capitales y sobre todo fue utilizada pagar el servicio de la deuda anterior, generando un círculo vicioso de endeudamiento.

Pero lo más importante: los países quedaron a merced del Fondo Monetario Internacional, que condicionó sin cortapisas el apoyo financiero al cambio estructural; es decir, a la apertura de la economía, a la adopción del neoliberalismo y al sometimiento del país al capital financiero y a las trasnacionales.

Inicialmente el capital financiero internacional se negó a financiar los programas de ajuste. Esto es, los bancos acreedores se resistieron a comprometer más recursos de los que ya se encontraban en juego. Para los financieros, la ganancia inmediata regularmente se antepone a los fines estratégicos.

Sin embargo, es importante resaltar que los llamados "préstamos involuntarios" representaban casi la única vía de transferencia de capital a los países deudores, toda vez que los créditos privados internacionales casi habían desaparecido del mercado (Griffith Jones, 1988).

Si finalmente los bancos acreedores aceptaron conceder nuevos préstamos, fue debido a que el Fondo Monetario Internacional estrechó todavía más sus relaciones con ellos y pasó a defender sus intereses colectivos (más allá de la competencia entre ellos), se comprometió a que el servicio de la deuda sería cubierto prioritariamente, e insistió en que tal acción les brindaría tiempo para

acumular reservas, de tal manera que ante una eventual insolvencia de los deudores su situación financiera no se viera aún más afectada.

No debemos olvidar que los principales bancos de Estados Unidos y algunos de Europa se encontraban bastante “expuestos”.

Por lo demás, los grandes bancos exigieron que los préstamos fueran sindicados, en ellos participaran todos los acreedores, grandes y pequeños, para repartir de mejor manera los riesgos de la nueva empresa, y exigieron además estar presentes en las negociaciones con los deudores, a través de “comités de asesoramiento”.

Para 1983 la estrategia estaba rindiendo sus primeros frutos, casi todos en beneficio de los banqueros.⁶⁴

Un optimismo exagerado reinó entre los patrocinadores de la estrategia (Miller, 1989), cuando en 1984 las economías de Estados Unidos, de Europa Occidental y Japón experimentaron un importante crecimiento⁶⁵ y disminuyó el nivel promedio del crecimiento del endeudamiento.

Pero poco tiempo después, los optimistas tuvieron que guardar sus banderas de celebración. Los países deudores resultaron víctimas de la estrategia y el problema persistió. Sus economías no crecieron, los nuevos préstamos otorgados por los bancos comerciales resultaron insuficientes y se incrementaron las obligaciones por el pago de intereses.

⁶⁴ a) se había logrado conjurar una eventual crisis del sistema financiero internacional, los bancos acreedores contaron con el tiempo suficiente, particularmente los europeos, para disminuir su grado de exposición acumulando reservas líquidas suficientes ante la eventualidad de que los países subdesarrollados no pudiesen cumplir sus compromisos financieros; b) el proceso de renegociación de las deudas les brindó confianza en los pagos y les permitió reprogramar sus movimientos de capitales, c) a pesar de los préstamos involuntarios disminuyeron sus créditos a los países deudores hasta volverse negativos en 1986, librándose de los riesgos implicados; d) los bancos acreedores iniciaron el desarrollo de un mercado secundario de instrumentos de deuda soberana.

⁶⁵ Se tenía la convicción de que tal crecimiento favorecería indirectamente las economías de los países deudores a través del aumento de sus exportaciones y la apertura de sus economías a través del ajuste estructural.

Los intereses, si bien disminuyeron, se mantuvieron altos. Descendió la inversión extranjera directa, los términos de intercambio se mostraron aún más desfavorables y aumentó el proteccionismo, las economías se mantuvieron estancadas y los programas de ajuste enfrentaron graves dificultades (Miller, 1989).

Ante esta situación del todo desfavorable para los países deudores subdesarrollados, la posibilidad de la insolvencia y la moratoria volvió a aparecer como la única solución.

Así, en un marco económico mundial caracterizado por el Acuerdo Plaza y el inicio del proceso de depreciación del dólar, el fracaso de la estrategia del FMI respecto a la deuda externa de los países subdesarrollados y la aceptación, por parte de los intelectuales orgánicos de los centros financieros mundiales, de que sin crecimiento en la economía de los países deudores las posibilidades de que éstos cumplieran con el pago de sus compromisos financieros serían cada vez más difíciles, a finales de septiembre de 1985 el gobierno de Estados Unidos, en ejercicio de la hegemonía sin cortapisas, decidió intervenir directamente para enfrentar el problema de la deuda a través del “Program for Sustained Growth” (Plan Baker), que asignaba más participación a los bancos comerciales.⁶⁶

Las reformas estructurales fueron el punto de la estrategia que mayor consenso levantó entre los banqueros, los gobiernos de los países del G7 y las instituciones multilaterales, sobre todo por el énfasis que se

⁶⁶ El Plan fue expuesto James A. Baker III, secretario del Tesoro de Estados Unidos, en la reunión del Comité Interino en Seúl, Corea el 6 de octubre de 1985, y día 8 ante la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Su diagnóstico destacaba tres aspectos básicos: los principales países deudores estaban debilitando sus esfuerzos de ajuste; el apoyo de los países acreedores e instituciones multilaterales estaba fragmentado; y los préstamos netos por parte de la banca comercial estaban disminuyendo. Por lo tanto, la consecuente estrategia se definió a través de tres grandes prescripciones: 1) “la adopción por parte de los países deudores de reformas macroeconómicas y estructurales, dirigidas hacia el crecimiento; 2) el aumento de créditos de las instituciones multilaterales con fines de ajuste estructural; y 3) más préstamos netos de los bancos comerciales” (Fondo Monetario Internacional, 1991a: 45).

ponía en construir y liberalizar las instituciones de mercado y el reforzamiento al sector privado.

El problema eran los nuevos préstamos por parte de los bancos acreedores,⁶⁷ que exigieron mayores garantías de parte de las instituciones oficiales. Para convencerlos se les ofreció considerar todo un menú de opciones financieras (*debt-equity swaps*, *exit bonds*), así como la capitalización de los intereses.

El 13 de noviembre de 1985 se institucionalizó internacionalmente el Plan Baker, cuando el Fondo Monetario Internacional lo hizo suyo.

La estrategia rindió, como era de esperarse, resultados por debajo de los esperados.⁶⁸ En lo esencial, el plan no modificó ni las condiciones financieras de contratación ni los ejes de política económica impuestos a los países subdesarrollados endeudados por el FMI durante el periodo anterior.

El cambio estructural de los países deudores como condición para obtener recursos financieros se mantuvo de manera irreductible. Además, se mantuvo el concepto de “caso por caso” como aspecto fundamental de las negociaciones entre deudores y acreedores.

De esta manera mantuvo a raya la demanda cubana de “borrar la deuda externa” y la iniciativa peruana de “limitar el pago de la deuda a un porcentaje del 10% de los ingresos por exportaciones”. Y ante todo, se evitó la unificación de criterios de los países deudores aglutinados en el llamado “Consenso de Cartagena”.

⁶⁷ Los bancos privados acreedores brindarán nuevos préstamos netos a los países deudores seleccionados, en un rango de 20 mil millones de dólares para los siguientes tres años. “Los préstamos bancarios representaban una expansión de préstamos de portafolio equivalente a 2.5 por ciento por año.” (Devlin, 1989: 195).

⁶⁸ Los bancos multilaterales comprometieron recursos financieros netos (16 500 millones de dólares) a un nivel muy cercano al establecido en el plan, aunque la cantidad total y los incrementos anuales fueron inferiores. Los bancos privados internacionales invirtieron (13 000 millones de dólares en los tres años del plan) una cantidad inferior a la prometida, y al final el saldo de los préstamos netos fue negativo. A esto debemos agregar que el conjunto de los 15 países tuvo una tasa anual de crecimiento del 2.5%, tasa inferior a la esperada en el plan (3%).

Ante los escasos resultados positivos del Plan Baker, el gobierno de Estados Unidos lanzó (10 de marzo de 1989) su segunda propuesta a través del entonces secretario del Tesoro, el banquero y miembro prominente del Council on Foreign Relations Nicholas F. Brady (Plan Brady).

La idea esencial del Plan Brady de reducir la deuda fue planteada originalmente por el G7 en su reunión cumbre en Toronto (1988). Sin embargo, estaba dirigida particularmente a los países de bajos ingresos (generalmente ubicados en África), aunque se dejaba la puerta abierta para que esta concesión fuera aplicada a los países de medianos ingresos, siempre y cuando las medidas que se tomaran para tal efecto no perjudicaran a las instituciones bancarias oferentes de crédito, y fuesen al mismo tiempo llevadas a cabo a través de mecanismos de mercado.

Semejante galimatías sólo podía ser desentrañado por un experto y experimentado banquero, capaz de convertir la ayuda en un beneficioso negocio, mientras al mismo tiempo favoreciera el proyecto hegemónico (la “revolución silenciosa”).

El elemento distintivo del Plan Brady, también aprobado por el G7, consistió en que por primera vez y de manera oficial (más allá de los experimentos del FMI en Bolivia y México de 1987) la dirección de la economía mundial planteaba la “reducción voluntaria de la deuda”.⁶⁹

Sin embargo, tal generosidad del Plan Brady no pudo esconder su verdadero propósito: reciclar deuda e intereses vencidos con pocas o nulas posibilidades de pago. Es decir, malos negocios que debían ir a

⁶⁹ La estrategia partía del reconocimiento de que el problema no era de liquidez, sino de insolvencia; y de la idea de que la disminución de la deuda consolidaría la balanza de pagos de los países deudores, aliviaría las presiones sobre la inversión y el crecimiento y permitiría a los países subdesarrollados recuperar el acceso a los mercados de financiamiento privado. La justificación moral del plan insistía en que la nueva estrategia contra la deuda era necesaria y urgente para aliviar el agobio que estaban viviendo los países endeudados, como Venezuela, donde se estaban escenificando violentas protestas y que sin la ayuda del FMI y Estados Unidos quedaría al borde del abismo.

parar al rubro de pérdidas de los bancos comerciales⁷⁰ a través de su canje por bonos que la convertirían en una deuda nueva con mayores garantías de pago,⁷¹ respaldados por el gobierno de Estados Unidos y subvencionados por el Fondo Monetario Internacional⁷² y el Banco Mundial por medio de un intrincado mecanismo de ingeniería financiera.⁷³

El Plan Brady ofrecía otras formas de reducción de la deuda. Una de ellas era la Recompra de Deuda (*buybacks*). En este caso el país deudor podía recomprar parte de su deuda externa con un descuento. Los

⁷⁰ En mayo de 1987 el Citibank decidió aumentar sus reservas en 3 mil millones de dólares, en previsión de posibles pérdidas derivadas de los llamados “préstamos soberanos” (Boughton, 2001: 543).

⁷¹ Tal fue el caso de los Bonos de Descuento y los Bonos Par, bonos con un vencimiento a 30 años en una sola exhibición que estaban garantizados (colateralizados) a través de Bonos Cupón Cero del Tesoro de los Estados Unidos y que el país deudor tenía que comprar con un valor tal que al cabo de los 30 años sirviesen para amortizar el capital de los bonos. La diferencia entre uno y otro radicaba en que el primero sustituía a la deuda vieja pero con una reducción nominal, aunque tenía que pagar la nueva deuda a tasas de interés flotantes; mientras el segundo no tenía descuento, pero las tasas de interés eran fijas.

⁷² Como era de esperarse, el Fondo Monetario Internacional adoptó e implementó inmediatamente el Plan Brady, considerándolo como una positiva respuesta de la comunidad internacional (*IMF Survey*: 1989: 90-92). El papel del Fondo fue el de proveer financiamiento para la estrategia de reducción de la deuda y del servicio de la deuda, modificando su política sobre las garantías de financiamiento (Fondo Monetario Internacional, 1991a: 46), sin insistir en el contenido de sus programas de ajuste estructural; y el de apoyar las negociaciones entre los bancos acreedores y los países deudores, particularmente asesorando a los segundos para que eligieran la más conveniente opción del menú que proporcionaba el Plan Brady. Sin embargo hubo cierta reticencia de los países deudores. En 1989 sólo Argentina, Brasil, Filipinas, Costa Rica, México y Venezuela recibieron asistencia financiera.

⁷³ Un mecanismo similar se aplicó para reciclar los intereses vencidos. Para ello se crearon el Bono IE (*Interest Equalization*), y el Bono PDI (*Past Due Interest*). El primero fue destinado a compensar a los acreedores que no recibieron pagos en el pasado. El bono tenía una duración de diez años sin periodo de gracia y sin garantía, pero con una tasa Libor más 13/16 de intereses. El segundo estuvo destinado a refinanciar los intereses atrasados y vencidos, con una duración de 20 años y 10 de gracia y sin garantía del principal e intereses, pero con una tasa mayor que la Libor.

fondos para tal negocio podían provenir de créditos otorgados por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. En otras palabras, se generaba un traslado de deuda de las instituciones bancarias privadas a los organismos financieros multilaterales, y con ello se trasladaban los riesgos implicados.

Muchos bancos aceptaron esta opción, pues además de deshacerse de negocios riesgosos encontraban una solución rápida a sus problemas de cartera. Otra forma de reducción de la deuda que se popularizó con el Plan Brady fue la capitalización o conversión de deuda por capital. A través de este mecanismo, inversionistas extranjeros y nacionales (repatriación de capitales) se beneficiaron de las privatizaciones en los países endeudados.

Finalmente, deseamos poner énfasis en que la intervención oficial del gobierno de Estados Unidos en el problema de la deuda vino a sancionar de manera contundente la política aplicada por el Fondo Monetario Internacional,⁷⁴ tanto en el manejo como fundamentalmente en la estrategia de reforma estructural que se impuso a los países subdesarrollados.

Igualmente queremos enfatizar el hecho de que la intervención norteamericana no sólo defendió los intereses de la banca norteamericana, sino del capital financiero internacional en su conjunto. No es casual que por tal motivo la política norteamericana respecto al problema de la deuda haya contado con el apoyo de los gobiernos de los países más desarrollados.

⁷⁴ En reuniones del Directorio Ejecutivo del FMI (agosto de 1990 y abril de 1991), la institución manifestó su convencimiento de que la estrategia adoptada había sido la correcta. Destacó el progreso alcanzado por muchos países fuertemente endeudados en relación con la ejecución de planes de financiamiento bancario, el mejoramiento de la situación y las perspectivas económicas, cuando se habían complementado con reformas macroeconómicas y estructurales sostenidas (México y Chile); y el acceso de los deudores al financiamiento externo, pese a la situación precaria del mercado de capital. No obstante el optimismo del Directorio, el Fondo no dejó de reconocer que para muchos países endeudados las perspectivas de viabilidad y crecimiento económico siguieron siendo muy inciertas. En la actualidad, la deuda externa es una losa que inmoviliza y asfixia a los países subdesarrollados.

Así lo muestra el hecho de que, previamente a la Reunión de Corea en que Baker expuso su plan, el Grupo de los Cinco se pronunciara a su favor (Miller, 1989: 24). Evidentemente se trataba de una acción concertada.

Ahora bien, simultáneamente a la expansión de las operaciones del capital financiero por todo el mundo, se incrementó la centralización del capital. La década de 1990 se caracterizó fundamentalmente por un intenso proceso de fusiones y adquisiciones entre las principales instituciones financieras privadas del mundo, que se aceleró a fines del decenio.

Debido a esto, el número de instituciones bancarias disminuyó en casi todos los países y la concentración, calculada sobre la base de la proporción de depósitos controlados por los mayores bancos, tendió a aumentar. “Si se pudiesen incluir en los cálculos las operaciones fuera de balance, la concentración sería aún más acentuada” (Cepal, 2002: 59).

En el mismo sentido, el proceso generalizado de desintermediación bancaria transformó a las instituciones bancarias tradicionales en conglomerados con un menú más amplio de servicios financieros, haciendo más tenue la línea divisoria entre funciones bancarias y no bancarias.

Dichas actividades se vieron favorecidas además por múltiples factores, dentro de los cuales podemos destacar como los más importantes: la aparición de instrumentos financieros modernos ampliamente tecnologizados (contratos de derivados, compras apalancadas y bonos basura); y un proceso de desregulación financiera en la mayoría de los países del mundo.

Los banqueros privados impusieron transformaciones y ritmos a las operaciones financieras, utilizando la alta tecnología y dificultando la posible regulación por cuenta de la autoridad política. (Strange, 1998).

La reestructuración del capitalismo mundial que liberó de las trabas estatales al capital financiero nacional e internacional, ya había olvidado las causas por las que fue regulado: las crisis económicas. O verdaderamente creía que la escuela monetarista tenía la solución para todo.

Sin embargo, las llamadas crisis globales que azotaron al capitalismo mundial en pleno auge de la globalización demostraron lo contrario. Y no sólo eso. Además, el capital financiero internacional ya había escapado en lo esencial del control estatal de sus países de origen.

Un breve recuento de las crisis globales nos puede dar prueba de ello. Pero eso será motivo del próximo segmento.

El cambio sistémico de las economías llamadas *socialistas*

La reestructuración del capitalismo fue mundial y abarcó no sólo a los países desarrollados y los subdesarrollados, como ya hemos visto. También incidió en los llamados países socialistas de Europa y modificó la política interna y externa de China.

Con la incorporación de estos países al mercado mundial, el proceso de integración alcanzó su nivel más alto, no sólo desde el punto de vista extensivo, sino intensivo. Para efectos demostrativos, a continuación sólo analizaremos el caso de la URSS y algunas naciones de Europa del Este.

Como ya mencionamos, la crisis del capitalismo mundial y su reestructuración impactaron también a los países llamados socialistas de Europa. Los procesos de transformación económica, política y de ideología que vivió el mundo capitalista no fueron ajenos a estos países. De hecho, fueron parte del mismo proceso.

En primer lugar, el proceso de evolución histórica de la economía soviética no fue diferente al de la economía mundial, aunque resultó un poco desfasado.

Transitó por un periodo de auge durante la posguerra, problemas serios a partir de la década de los setenta, intentos de reestructuración de la economía durante los ochenta hasta su caída en 1991, y con ello el inicio del proceso de cambio sistémico tendiente a crear una economía de mercado, que privatizó los bienes del Estado. Si se quiere, globalizada.

Si bien es cierto que el contexto de la economía mundial fue un factor, el derrumbe de la Unión Soviética se debió a la convergencia

de una serie de procesos, de los cuales algunos se originaron desde su misma fundación.

En el plano histórico, la Revolución de Octubre pretendía convertir una economía atrasada, mayormente campesina y en proceso de industrialización, en una economía socialista basada en una interpretación de Lenin de las ideas de Carlos Marx.

Para Marx, el socialismo estaba reservado para aquellos países con mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Para Lenin, en cambio, la Unión Soviética podía dar un salto histórico comprimiendo la etapa capitalista bajo la dirección social del proletariado revolucionario.

Hacia la década de los setenta del siglo pasado, parecía que esto era posible. Veinte años después, el proyecto histórico se derrumbó.

Durante mucho tiempo se ha considerado a la industrialización como un fenómeno propio del desarrollo. Los países han generado toda una serie de estrategias para lograrlo. En América Latina y otras regiones, se aplicó la política de sustitución de importaciones.

En el caso soviético significó todo un esfuerzo nacional dirigido y controlado por el Estado, primero apremiado por la guerra, después por la rivalidad con la potencia hegemónica y por el mismo contexto nacional de subdesarrollo.

El proceso de industrialización soviético triunfante encerró un problema estructural desde su nacimiento: la desproporción entre el crecimiento del sector de bienes de producción en relación al de los bienes de consumo.

Si bien es cierto que se puede lograr el crecimiento económico a partir de la industrialización de los bienes de producción, esto encierra un problema doble: su reposición (por obsolescencia moral, incluso) exige un esfuerzo descomunal, mayor que en el capitalismo, pues la industria de bienes de consumo es débil y el financiamiento que puede otorgar al otro sector lo hace a costa de grandes sacrificios para la población.

Para los planificadores soviéticos resultó prioritario dedicar la mayor parte de los recursos productivos a la industria pesada y la industria militar, dada la guerra potencial con el poder hegemónico.

A diferencia del proceso capitalista, donde la industrialización de la producción de bienes de consumo creó la demanda y financió la producción de bienes de producción, en la Unión Soviética se dio un salto que sólo fue posible por la participación del Estado, el aporte de las repúblicas y la conformidad de la población ante la escasez de estos bienes.

Aunque se intentó revertir esta desproporcionalidad en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el avance fue muy relativo y terminó por contribuir al colapso de la economía, particularmente por sus efectos sociales.

Otro problema mayor fue el financiero. Durante gran parte de su historia, la Unión Soviética se caracterizó por una política prudente respecto al financiamiento externo y una alta rigurosidad en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, que la llevó a ser considerada en 1988 como un deudor de primera clase.

Sin embargo esta situación cambió. La necesidad de importar cereales la obligó a abrir su economía desde principios de los años setenta del siglo pasado. Debemos tomar en cuenta que su perfil de comercio exterior no era diferente al de un país subdesarrollado: energéticos, materias primas, productos semielaborados canjeables por bienes de consumo y tecnologías.

Para 1985 su deuda externa era de 28 300 millones de dólares, y su servicio representaba el 20% de sus exportaciones. La *nomenklatura* soviética, al igual que los gobiernos de la mayoría de los países subdesarrollados, tampoco pudo resistir el anzuelo de los créditos baratos que estaba ofreciendo el capital financiero internacional para resolver sus problemas de consumo interno y de presupuesto, y luego como estrategia de desarrollo.

Así, para 1991 la deuda ya había alcanzado más de 67 mil millones de dólares y su servicio representaba más del 33% de sus exportaciones. Pero desde 1990, entre el 75% y el 80% de estos créditos ya estaban destinados al refinanciamiento de la deuda existente (Girón, 1994).

Por otra parte, para que funcionase adecuadamente, la planificación centralizada requería de dos elementos fundamentales: información verídica y eficacia. Por lo que se refiere a la información, el Gosplan

estaba profundamente contaminado por la política, y ésta por la burocracia, en especial aquella que buscaba un ascenso entre los sectores dirigentes y el temor a perder el empleo si no se cumplían las metas, lo cual inducía a la falsificación de datos.

Además, el mismo crecimiento de la economía soviética hacía cada vez más difícil su eficiencia a partir de esquemas burocráticos, sobre todo si tomamos en consideración que no se contaba en esas fechas ni en esos lugares con sistemas de cómputo que facilitaran la tarea.

Por lo que concierne al problema de las nacionalidades, éste no estaba resuelto aunque se aparentase lo contrario (la fusión de los pueblos). Aunque a través de las migraciones y el aprendizaje de la lengua se había intensificado la rusificación, en el fondo permanecían intactos los resentimientos y las rivalidades interétnicas.

Así, al conjuntarse la crisis económica, el debilitamiento del poder central y sobre todo del Partido Comunista, estallaron las tensiones nacionalistas. Reaparecieron con mayor fuerza las reivindicaciones territoriales, se desorganizaron las estructuras productivas y comerciales y reaparecieron los conflictos de soberanía. Tal desunión acentuó el caos económico y el hundimiento del Estado soviético.

Mención particular merece la burocracia soviética. La nueva burocracia soviética nacida de la Revolución de 1917, atada ideológicamente al marxismo-leninismo pero heredera de las prácticas centralistas y despóticas de los Romanov, se curtió en el poder durante la Primera Guerra Mundial y la guerra civil.

Luego el centralismo del PECUS, del Estado soviético y de la economía planificada construyó un gigantesco aparato burocrático piramidal, de cuyo vértice se apropió José Stalin. Esta estructura desarrolló la industria a gran escala, venció en la Segunda Guerra Mundial, llevó el proyecto socialista a Europa del Este bajo las botas del ejército rojo y se convirtió en superpotencia militar.

Pero al mismo tiempo minó brutalmente la vanguardia revolucionaria, reprimió a su base social, la domesticó a base de muerte y de terror y con ello liquidó el factor subjetivo del socialismo.

Si bien el estalinismo fue el mejor representante del poder burocrático de esta época de la Unión Soviética, las “purgas” continuas para mantenerse en el poder generaron inestabilidad en las estructuras y descontento entre la población.

La muerte de Stalin significó un cambio sustancial en la historia de la Unión Soviética. Una sucesión con características de mando similares a las de Stalin era imposible. La industrialización, la urbanización y la complejización del aparato productivo la obstaculizaban.

Con la *desestalinización*, Nikita Krushev suprimió el terror y garantizó estabilidad a la burocracia. La *nomenklatura* se fortaleció, particularmente la del partido, que se afirmó sobre la gubernamental y la militar. Con la caída de Krushev, los límites para la burocracia casi desaparecieron. Su número se incrementó considerablemente, hasta alcanzar los 18 millones de personas.

Con Brezhnev se fortaleció la alianza de la *nomenklatura* con los sectores ilegales de la economía (*tenevike*) que se habían desarrollado en el comercio y la intermediación.

Hacia el fin de la Unión Soviética, el monto de la economía ilegal alcanzaba cerca del 15% del PNB, y los participantes activos representaban más de cinco millones de personas. La élite técnico-productiva, los funcionarios vinculados al comercio exterior (particularmente a los hidrocarburos) y asesores, ayudantes y consultores de los más altos funcionarios del país empujaron a la reforma y a la liberalización del país, junto con artistas, científicos y profesionales de alto nivel. Es decir, los intelectuales.

El Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, el Instituto de Estados Unidos y Canadá y el Instituto de Problemas Sociales y Económicos de Leningrado (IPSE) fueron las instituciones de donde brotaron las reformas liberales de la URSS.

El más importante fue el Centro Soviético de Estudios Sistémicos del Comité Estatal de Ciencia y Técnica (CSES). En él fueron educados muchos de los principales artífices del cambio sistémico, mantuvo importantes relaciones con el Club de Roma y sus actividades fueron fuertemente influidas por la KGB y la inteligencia extranjera.

En la década de los ochenta la reestructuración de la sociedad soviética era inevitable, y ésta sólo podía realizarse a costa del sistema autoritario representado por el Partido Comunista, y de la economía estatizada.

La *Perestroika* de Gorbachov tenía el objetivo de reestructurar el sistema socialista para poder conservarlo. Intentaba evitar la ruptura nacional a través del “Nuevo Tratado de la Unión”, renovar la economía, la sociedad socialista y el Estado.

Lo que consiguió fue convertirla en el último capítulo del llamado “socialismo real” y la transformación de la burocracia soviética en clase social, mediante la conversión del control de los medios de producción por la apropiación privada.

Desde su principio, la *Perestroika* tuvo tres poderosos enemigos: 1) El ala más autoritaria del PECUS, que mantenía la idea de que con mayor autoritarismo y represión se solucionarían los problemas; 2) el hartazgo de la mayor parte de la población de ese autoritarismo, de la falta de bienes de consumo y la poca confianza que tenía en la reforma; y 3) sectores dentro del partido y del Estado soviético que trabajaban consistentemente para apropiarse de los bienes socialistas, en el marco de un proceso de restauración del capitalismo.

Los tres actuaron contra la reforma, contribuyeron a la quiebra del régimen y dejaron la mesa lista para la restauración del capitalismo.

El aspecto fundamental del proceso de derrumbe consistió en la metamorfosis de la *nomenklatura* soviética, y la pasividad de la población ante la apropiación de los bienes del Estado por parte de la burocracia.

Desde el origen de la Unión Soviética, la burocracia gozó de la apropiación de bienes materiales y de servicios vedados para el resto de la población. Posteriormente los privilegios fueron monetizados (1986-1989); es decir, participó de las ganancias obtenidas por las actividades económicas bajo la autorización y conducción de la élite partidista y gubernamental.

La participación en las operaciones cambiarias y la mediación en las operaciones comerciales relacionadas con las importaciones y

exportaciones (sobre todo de hidrocarburos) se convirtieron en vías abiertas para el enriquecimiento personal y corporativo.

Por lo tanto, la apropiación de los bienes del Estado por la élite burocrática resultó el colofón lógico de este proceso.

A partir de 1989, dos años antes de la privatización legal, ministros y dirigentes se habían convertido en propietarios de los sectores más rentables de la producción y las finanzas. Este hecho quedó empotrado en la legalización de las privatizaciones de las riquezas soviéticas a través de los cheques y las subastas.

La escena económica cayó en manos del capital financiero, así como la circulación del capital comercial y la intermediación financiera, mismas que dotaron de grandes recursos a los bancos, los cuales nacieron al amparo de instituciones y dirigentes estatales o partidistas.

Se puede afirmar que la crisis de la Unión Soviética fue la crisis del Partido Comunista; aquí el transformismo de sus dirigentes fue determinante.

De hecho ya en 1988, durante la celebración de la XIX Conferencia del PECUS, el partido todavía en el poder, que ya no hegemónico, renunciaba a su privilegio de ser el partido único que le había conferido la Constitución de la URSS.

Y en 1990, el artículo 6° de la constitución daba paso el pluripartidismo, en tanto que al año siguiente el PECUS abandonaba sin miramientos el marxismo-leninismo.

Todo para convertirse en millonarios explotadores de aquéllos cuyas generaciones anteriores los encumbraron en el poder por ser los dirigentes constructores del socialismo. La élite no sólo impulsó y dirigió el proceso de reforma privatizadora; además, su concepción patrimonialista de los bienes del Estado la hizo realidad.

Pero, ¿qué pasó con el proletariado revolucionario?, ¿cómo permitió que los bienes del Estado pasaran a manos privadas?

La concepción del mundo socialista en la que había sido educada la mayoría de la población, ya tenía tiempo que venía siendo socavada por la *nomenklatura* y por la realidad.

Para 1987, los dirigentes ya hablaban abiertamente del agotamiento del modelo económico socialista y se aceptaba la transición de una economía centralmente planificada a una de mercado, lo cual finalmente fue aprobado por el Soviet Supremo en noviembre de 1990.

Se piensa que en momentos de crisis la gente se rebela, se une buscando soluciones para los problemas de todos; que hace a un lado a los egoístas, que edifica sobre las cenizas un nuevo mundo.

Posiblemente eso sea verdad. Sin embargo, el proceso es desesperantemente doloroso y lento. O tal vez la realidad sea diferente.

El momento catastrófico de la URSS se dio entre 1991 y 1993. En 1991, todas las ramas de la producción entraron en crisis. Para 1992, todas las instituciones colapsaron y la crisis se agudizó particularmente en el sector industrial, y en consecuencia en las repúblicas con mayor peso de la industria.⁷⁵

Se conjugaron estos problemas de orden estructural (interno) con problemas contingentes propios de la recesión generalizada de la economía mundial de 1991. Durante 1991 se redujo severamente el crecimiento económico. En Europa del Este, incluida la ex URSS, el PIB fue de -10.6%; y la de Europa del Este sin la ex URSS fue de -12% (Fondo Monetario Internacional, 1991). Y en 1992, el PIB de Rusia descendió un 20%.

La crisis de la región se manifestó también con el colapso sufrido por el comercio intrarregional (desintegración del CAEM en 1991). Debemos tomar en consideración que la mayor parte del comercio que realizaban estos países era de carácter intrarregional, y que existía una gran dependencia del comercio de Europa del Este respecto a la ex Unión Soviética.

⁷⁵ La caída de la industria se explica en gran medida por su envejecimiento y su dependencia del mantenimiento. Además, la falta de recursos impedía sustituir las empresas contaminantes, que eran cerradas por motivos ecológicos. Otro factor fue el manejo político del suministro de petróleo a la industria de las repúblicas, ya que éste era monopolizado por Rusia en un 90% (Palazuelos, 1994).

El Fondo Monetario Internacional estima que del 33% al 100% del descenso de la producción ocurrida en 1991 corresponde a un efecto directo de la disminución de la demanda exterior⁷⁶ sobre la producción interna (Fondo Monetario Internacional, 1991: 25).

El fenómeno inflacionario apareció en la región con una espectacularidad hasta cierto punto esperada, y el desempleo alcanzó niveles muy elevados. Los salarios reales disminuyeron ostensiblemente. El déficit global en cuenta corriente de la región aumentó considerablemente.

Tal vez el factor más importante de la profundización de la crisis fue responsabilidad del gobierno del presidente de Rusia Boris Yeltsin, quien al desintegrarse la Unión Soviética en diciembre de 1991, inició una reforma económica acelerada basada en los lineamientos del Fondo Monetario Internacional,⁷⁷ comisionado para tal efecto por el Grupo de los Siete.

El bloque histórico, a su vez en proceso mismo de restructuración, se congratulaba de que su enemigo tradicional fuese parte también de este proceso. Sin embargo, le urgía desde el punto de vista económico que los cambios fuesen lo más rápidos y más profundos posibles, para evitar una posible regresión.

Pero desde el punto de vista estratégico, el objetivo era que la crisis calara a gran profundidad, para disminuir la capacidad bélica del que por muchos años los mantuvo espantados.

⁷⁶ En términos generales, las estadísticas nos muestran que el volumen de las exportaciones de Europa Oriental y la exURSS había venido mostrando una tendencia negativa desde 1989, cuando disminuyeron en términos porcentuales en un -1.8%, para disminuir aún más en 1990 con un -21.3%, hasta llegar al escandaloso -34.4% en 1991 (Fondo Monetario Internacional, 1991: 116).

⁷⁷ Los organismos financieros (...) “además de ofrecer asesoramiento para la elaboración de programas de política económica de alcance general, y respaldo financiero, deben suministrar asistencia básica que rebase ampliamente los lindes de los programas de ajuste”. “La URSS y los países de Europa Oriental necesitan ayuda para crear instituciones económicas públicas y privadas rentables; asesoramiento práctico para poner en marcha sistemas fiscales eficaces y asistencia para establecer un marco jurídico en el que funcione la empresa privada” (Discurso de Nicolas Brady. Reunión anual del 15 al 17 de octubre celebrada en Bangkok (*Boletín del FMI*, 1991: 344).

La experiencia adquirida por el FMI en la aplicación de la reforma estructural de los países subdesarrollados y la disciplina que había impuesto a los gobiernos, representaban las mejores cartas de recomendación para asignarle esta tarea.

Nuevamente, la “condicionalidad” se levantaría como la espada de Damocles sobre la cabeza de los demandantes de ayuda. Así las cosas, la ex URSS suscribió un acuerdo de asociación especial con el Fondo Monetario Internacional, y Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania adoptaron programas de estabilización respaldados por el Fondo (*Boletín del FMI*: 1991).

Pero No sólo eso. Se contemplaba implícitamente la adopción de instituciones y valores acordes con los cambios económicos; es decir, un sistema político democrático, propiedad privada, desarrollo empresarial y acentuación de los derechos del individuo, entre otros.

Naturalmente, los resultados no fueron los fantaseados. La política pactada se aplicó irrestrictamente, pero la ayuda del Fondo no llegó ni en los tiempos ni en los montos esperados.

La economía era un desastre, el desempleo era creciente y la inflación galopante. La reforma se mostraba poco congruente con las condiciones sociales y políticas existentes; la mayor parte de los sectores económicos se vieron paralizados.

Uno de los sectores más afectados por los recortes presupuestales impuestos fue el militar, el cual inmediatamente reparó, y con él la clase política de la ex URSS comenzó a oponerse a las reformas económicas a través del Congreso de Diputados del Pueblo.

Chernomyrdin fue electo primer ministro, y el gobierno se volvió de coalición. Se siguieron aplicando las reformas planteadas por el FMI, pero a un ritmo más lento, aunque lo más importante es que sobre la base de este acuerdo se construye otro entre los militares y el presidente Yeltsin.

No obstante, las rivalidades entre el parlamento y el presidente persistieron, por lo que el FMI exigió poner fin a la dualidad de poderes y detuvo los créditos. El 21 de septiembre de 1993, Yeltsin suprimió al Poder Legislativo y se inició una lucha abierta entre

ambos poderes, que terminó el 5 de octubre con la intervención del ejército en favor del presidente.

Entonces retornó la autocracia. El pueblo guardó silencio, acostumbrado a callar ante el terror y ante las reformas implacables del FMI, que no lograban menguar la crisis y que dirigían irremisiblemente a Rusia al proyecto hegemónico de reestructuración del capitalismo a nivel mundial. Es decir, la globalización.

En el capitalismo todo tiene un precio. Los planes de austeridad para el ejército no se aplicaron; se tomaron medidas para mantener el control, hasta donde fuese posible, de las fuerzas militares de la ex-Unión Soviética. Y se logró, *off the record*, algo más importante, de lo cual hablaremos más adelante.

Rusia siguió aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional. Siguió en crisis, el gobierno de Yeltsin siguió aterrorizando a la población y a la oposición como lo hiciera en su oportunidad Stalin.

Pero paulatinamente Rusia se fue alejando de Occidente, y el sucesor de Yeltsin fue un ilustre desconocido, aunque fuertemente vinculado a los servicios de inteligencia y el ejército: Vladimir Putin.

El costo social de la crisis todavía no ha sido del cuantificado todo. En términos de población significó una verdadera catástrofe. La talla de las generaciones de la crisis disminuyó, disminuyó dramáticamente la expectativa de vida, aumentó el consumo del alcohol, drogas y las enfermedades vinculadas a la pobreza.

Tabla 5

Crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia

(Variación porcentual anual)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Rusia	-5,0	-14,5	-8,7	-12,6	-4,1	-3,5	0,8	-4,8

Fondo Monetario Internacional. Informe anual, 1999: 16.

Los ingresos reales de la población descendieron a niveles no vistos durante el llamado socialismo, con todas sus consecuencias. Fue el

precio del cambio de camiseta de la *nomenklatura* comunista y del cambio sistémico.

Conclusiones

La *globalización* es un término que se popularizó en la década de los noventa del siglo pasado y que actualmente ha perdido gran parte de su encanto y, por lo tanto, de su utilidad en los discursos de los intelectuales orgánicos.

La aldea global, en donde el conocimiento sería el principal recurso de las naciones, el hecho concreto que redefiniría las relaciones internacionales en favor de la paz, el crecimiento económico para todos los países del mundo, etc., son frases que ya no se escuchan de manera tan frecuente. Y eso no es casual, nos encontramos en la crisis, si se quiere, de la globalización.

En el texto hemos identificado la *globalización* como un término falso, utilizado por los intelectuales orgánicos y propagado por los medios de comunicación para ocultar la reestructuración del capitalismo y del bloque histórico mundial, en favor de las empresas trasnacionales y el capital financiero.

Pero no sólo eso. Ante el auge de los instrumentos de comunicación les ha resultado más difícil a los intelectuales orgánicos falsear los hechos fraudulentos o corruptos que comprometían la *globalización*: abusos de los bancos, de las grandes corporaciones, de los gobiernos.

Sin embargo, al generalizarse estas prácticas falsificadoras algunos intelectuales orgánicos, asqueados de tal circunstancia, han comenzado a delatar a su propio bando.

La reestructuración del capitalismo mundial correspondió en su estrategia central a un acuerdo de las élites de los principales países desarrollados, particularmente de Estados Unidos, que a través de sus Estados nacionales libraron los obstáculos al proceso de integración del capitalismo mundial y participaron activamente en el cambio estructural de los países subdesarrollados, y en el cambio sistémico de los países llamados socialistas de Europa del Este, a través de la imposición del libre comercio, el endeudamiento como trampa y los

recursos condicionados por parte de organizaciones económicas internacionales, como solución.

Y llevaron a la integración social hasta sus últimas consecuencias. Finalmente, era la única fracción de clase con los intereses y los recursos suficientes para poner en juego una estrategia de semejante envergadura.

El acuerdo entre las élites, o entre las fracciones de la clase capitalista con intereses transnacionales de los países más desarrollados, y su institucionalización a través de organizaciones como la Comisión Trilateral, el Grupo Davos o el Grupo Bilderberg, fueron fundamentales para la creación de agrupamientos de Estados como el G7, que definieron el nuevo bloque histórico.

La diferencia entre este bloque y el anterior, es que el más antiguo estuvo marcado por la hegemonía de Estados Unidos en un sistema de cooperación entre Estados, y el nuevo se ha caracterizado por la privatización no sólo de la economía, sino incluso de la política, donde las organizaciones privadas han adquirido mayor importancia.

El éxito, para sus promotores, se fundó en cuatro factores fundamentales: 1) la privatización del conocimiento social y la tecnología, sobre la cual se elevó el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas; 2) la creación de un gigantesco ejército mundial de reserva de fuerza de trabajo, que aumentó la plusvalía absoluta y relativa; 3) el endeudamiento derivado de un sistema de crédito gigantesco, que alimentó la demanda de Estados, empresas y particulares dispuestos a empeñar su futuro; y 4) el más importante: la incapacidad de respuesta de las clases subalternas para impedir tal atropello.

Este éxito ha sido muy relativo. La *globalización* entró en crisis de manera temprana. Esta crisis se inició en los países subdesarrollados y ex-socialistas, ha llegado al núcleo del sistema y parece haberse estacionado.

Las élites están mirando de nueva cuenta al Estado como actor económico. A ese que con tanto esmero se empeñaron en devaluar. Pero ya no en una perspectiva democrática, sino de gobernabilidad,

en sus términos más autoritarios y si se quiere hasta violentos, como en los viejos tiempos.

Un Estado que sea capaz de hacer tragar el ajuste a las clases subalternas, y preserve los aspectos estratégicos básicos de la integración que más beneficien al capital financiero y a las empresas transnacionales.

A esto podemos agregar otros problemas, que pintan un panorama bastante gris para la *globalización*. El endeudamiento generalizado de particulares, empresas y Estados, que está llegando a sus límites. El descontento de amplios sectores en los países que conforman el núcleo del bloque histórico, particularmente en el Reino Unido.

El movimiento que genéricamente llamaré de *los indignados*, que agruparía a movimientos legales e ilegales que están mostrando su hartazgo de las privatizaciones, la desigualdad y el acotamiento de las libertades bajo falsas amenazas a la seguridad. Y sobre todo el hartazgo de las clases subalternas al embute cotidiano que le hacen pasar los medios de comunicación para mantenerlos en permanente *stand by*.

En el mismo sentido, es falso que la *globalización* ponga fin al problema de la falta de empleo. La globalización nunca resolverá el problema del desempleo; más bien se nutre y se alimenta de él. La creación de un ejército industrial de reserva a nivel mundial ha significado el mayor éxito para sus objetivos económicos.

Hoy este ejército no tiene límites y la “perecuación” de la tasa salarial a nivel mundial está muy lejos de realizarse. El capital está trasladando las ramas de mayor empleo ahí donde globalmente sea más barato, y para ello cuenta con el avance tecnológico de los medios de transporte. Las maquilas, por ejemplo, corren de México a China, de China a India, en un tiovivo frenético.

Las ramas de la producción con necesidades de trabajadores altamente calificados, constituyen segmentos sociales incorporados al proyecto de las élites, que dependen en la mayoría de los casos de niveles educativos de excelencia y en número limitado. Todo esto sin tomar en cuenta la perspectiva del uso generalizado de la robótica.

La “mano invisible del mercado” que guía nuestras vidas sin la interferencia del Estado o de la sociedad, es la mayor de las falsedades de los intelectuales orgánicos. Cuando las crisis económicas se desatan o el capital está en riesgo por los procesos de endeudamiento, bancos y empresas exigen fondos públicos para ser rescatados, a veces con transferencias que nunca regresan a las arcas del Estado o pidiendo mano dura contra los deudores, trabajadores o “indignados”.

Otra de las falsedades es el individualismo. Las élites operan en equipo, así defienden sus intereses y alcanzan sus objetivos de ganancia. Los miembros de las clases subalternas que busquen alcanzar el éxito prefabricado que les imbuyen los medios de comunicación, sólo serán conducidos a la soledad, a las migajas del capital y en la mayoría de los casos al fracaso.

Aunque la integración sea un fenómeno históricamente irresistible, la forma de alcanzarla no es incontrolable, depende de las fuerzas que la hacen posible, de sus intereses, de sus ambiciones y de su capacidad de compartir los beneficios del proceso.

La *globalización* ha sido producto de los intelectuales al servicio de las fracciones de clases *transnacionalizadas*, particularmente de los países más desarrollados, que controlan el capital financiero y las grandes empresas transnacionales.

Su mérito radica en haber desplazado relativamente del poder a las fracciones nacionalistas de las clases dominantes y a las burocracias en los países llamados socialistas, en aras de la conformación de un proyecto global para sus intereses globales.

Pero no hay garantía de que no puede haber un retroceso. Las crisis económicas, los conflictos étnicos o de nacionalidades, las renunciadas al proyecto, pueden dar un paso al costado o hacia atrás en el proceso de integración tal como ha sido creado.

Por otra parte, si el mundo ha sido construido así, como lo fue después de la Segunda Guerra Mundial, puede ser deconstruido y vuelto a construir bajo bases mucho más humanas, más sociales, verdaderamente libres y democráticas.

Si me preguntan cómo, les diré que bajo el control mundial del capital financiero, a través una organización mundial de Estados verdaderamente democráticos, cuyo objetivo sea la equidad social. Y donde los intelectuales de las clases subalternas, y ellas mismas, sean los principales protagonistas.

Bibliografía

- AGUIRRE, M. (2004). Controversia White-Keynes. Orden y desorden financiero internacional, en E. Correa y A. Girón (eds), *Economía financiera contemporánea*, México, Miguel Ángel Porrúa.
- ALONSO, J. (1989). *Metodología*, México: Ediciones y Distribuciones Hispánicas.
- ANDERSON, P. (1981). *Las antinomias de Gramsci*, Barcelona: Editorial Fontamara.
- ANINAT, E. (2002). Surmounting the challenges of globalization: finance and development, *A Quarterly Magazine of the IMF*. March 2002, vol. 39, numb. 1.
- ARON, R. (1973). *La república imperial*, Madrid, Alianza Editorial.
- BANCO MUNDIAL (1991). *Informe sobre el desarrollo mundial 1991: la tarea acuciante del desarrollo*, Banco Mundial.
- BANCO MUNDIAL (2000). *Más allá del crecimiento económico*. Disponible en www.worldbank.org/depweb/spanish/beyond/beg-sp.html#toc Consultada en enero de 2005.
- BERGER, P. y T. Luckmann (1966). *The social construction of reality: a treatise of sociology of knowledge*, New York, Garden City.
- BOLETÍN DEL FMI (1978). vol. 7, 12 de junio de 1978.
- BOLETÍN DEL FMI (1991). 25 de noviembre de 1991.

- BOWLES, S., D. Gordon y T. Weisskopf (1992). *Tras la economía del despilfarro: una economía democrática para el año 2000*, Madrid, Editorial Alianza Universidad.
- BRAUN, F. (1967). *Les investissements étrangers en Europe*, Paris, Editions Dumond.
- BRENNER, R. (1999). El desarrollo desigual y la larga fase descendente: las economías capitalistas avanzadas desde el boom al estancamiento, 1950-1998. *La economía de la turbulencia global*. Un informe especial de Robert Brenner acerca de la economía mundial, 1950-1968, *Revista Encuentro* XXI, año 5, núm. 14, verano-otoño de 1999.
- BUCI-GLUCKSMANN, C. (1979). *Gramsci y el Estado: hacia una teoría materialista de la filosofía*. 3ª edición, Biblioteca del Pensamiento Socialista, México: Siglo XXI Editores.
- BUSH, V. (1945). *As we may think*. Boston: The Atlantic Monthly.
- CAMDESSUS, M. (1995). *The IMF and the challenges of globalization. The fund's evolving approach to its constant mission: the case of Mexico*. <http://www.imf.org/external/np/sec/mds/1995/mds9517.htm>
- CAMDESSUS, M. (1998). *La economía global: ¿aún en crisis?* Intervención del director gerente del Fondo Monetario Internacional en el Congreso Financiero Internacional, *Finantia* 98. Madrid, 25 de noviembre de 1998, <http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/112598s.htm>
- CANO, M. (2011) *Orígenes y fundamentos prácticos del mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas: las posiciones durante el periodo de la Guerra Fría*. Madrid: Librería-Editorial Dykinson.
- CAPUTO, O. (1987). El sistema capitalista en 1986: principales problemas y perspectivas. *Revista Investigación Económica*, núm. 181, julio-septiembre de 1987, Facultad de Economía, México, UNAM.
- CAFRUNY, A. (1990). A Gramscian concept of declining hegemony: stages of US power and the evolution of International

- economic relations. In Rapkin, David (ed) (1990). Boulder, Colorado, *Leadership and hegemony*, Lynne Rienner Publishers.
- CALVO, G. A. y A. Reinhart (2000). When capital flows come to sudden stop: consequences and policy. In P. K Kenen y A. K. Swoboda (eds.) *Reforming the International monetary and financial system*, Washington, International Monetary Fund.
- CAROTHER, T. (2000). *La promoción de la democracia, punto focal del nuevo orden mundial. Hacia una comunidad de democracias*. Temas de la Democracia. Periódico electrónico del departamento de Estado de Estados Unidos, mayo de 2000, vol. 5, núm. 1, pp.25-31. <http://usinfo.state.gov/journals/jourspa.htm>
- CEPAL (2002). *Globalización y desarrollo. Vigésimo periodo de sesiones*. Brasilia, CEPAL.
- CEPAL (2005). *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe*, 2005.
- CHAPOY BONIFAZ, A. (1975) *Empresas multinacionales*, México, Ediciones El Caballito.
- CHECKEL, J. (1998). The constructivist turn in International relations theory, *World Politics*, numb. 50, pp. 342-347.
- CORREA, E. (1984). El endeudamiento en América Latina. *Revista Investigación Económica*, núm. 170, octubre diciembre de 1984, Facultad de Economía, UNAM.
- COX, R. (1979). Ideologies and the New International Economic Order: reflections on some recent literature, *International Organization*, vol. 3, numb. 2.
- COX, R. (1987). *Production, power and world order: social forces in the making of History*, New York, Columbia University Press.
- DÁVILA, D. (2001). Las reintegraciones internacionales y la coalición hegemónica, *Tla- Melana, Revista de Investigaciones Jurídico-Políticas de la BUAP*, año XII, núm. 17-18, noviembre de 2001.
- DEESE, D. (1994). The hazards of interdependence: world politics in the American Foreign Policy Process, in Reisman, Don (ed),

The domestic sources of American Foreign Policy, New York, Martin's Press Inc.

DEVLIN, R. (1989). *Debt and crisis in Latin America: the supply side of the story*, Princeton University Press, Princeton, USA.

DÍAZ MIER, M. (1996). *Del GATT a la Organización Mundial de Comercio*, Madrid, Síntesis.

DUNNING, J. (1981). *International production and the multinational enterprise*, London, Allen & Unwin.

DUNNING, J. (1983). Changes in the level and structure of international production: the last one hundred years, in M. Casson (ed), *The growth of international business*, London, Allen & Unwin.

DURÁN RUIZ, C. (1987). América Latina: el problema de la deuda y propuestas de solución, *Revista Latinoamericana de Economía*, núm. 68, Problemas del Desarrollo, enero-marzo de 1987.

ECONOMIC REPORT OF THE PRESIDENT, February, 1991, USA.

EDELMAN, J. (1990). *The politics of international economic relations*, 4th Edition, St. New York: Martin's Press.

ENGANG, R. (1953). *Europe in our time: 1914 to present*, D. C. Heath and Company, USA.

ESTAY, J. y J. Rivera (1991). Las relaciones comerciales de Estados Unidos con América Latina durante la década de los ochenta. *Documentos de Trabajo*, Fundación Friedrich Ebert, núm. 35, México, DF.

ESTAY, J. y J. Rivera de la Rosa (1988). Balance de las relaciones económicas internacionales durante el año de 1988. *Boletín de Economía Internacional*. Universidad Autónoma de Puebla.

EXCÉLSIOR (1997). La globalización exacerbada, problemas de sobrecapacidad. Sección financiera, 10 de marzo de 1987.

- FAJNZILBER, F. y T. Martínez Tarragó (1976). *Las empresas transnacionales: expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexicana*. México, Fondo de Cultura Económica.
- FEDERAL RESERVE BULLETIN, (1991). April, 1991, USA.
- FEINBERG, R. (1984). El Fondo Monetario Internacional y las Relaciones de los Estados Unidos con la América Latina. Selección de Sofía Méndez V. *La crisis internacional y la América Latina*. Lecturas núm. 55, México, Fondo de Cultura Económica.
- FMI (1982). *Estadísticas financieras internacionales*. Anuario, Washington.
- FMI (1985). *Estadísticas financieras internacionales*. Anuario, Washington.
- FMI (1990). *Estadísticas financieras internacionales*, Anuario. Washington.
- FMI (1991). *Estadísticas financieras internacionales*, mensual, enero. Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1982). *Introducción al Fondo*, serie de folletos del FMI, Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1986). *Recopilación seleccionada de decisiones del Fondo Monetario Internacional y otros documentos*. Duodécima edición. Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1991). *Perspectivas de la economía mundial*, octubre, Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1991a). *Informe anual 1991*, Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1997). *Informe anual 1997*, Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1998). *Informe anual 1998*, Washington.
- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1999). *Informe anual 1999*, Washington.

- FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2000). La globalización: ¿amenaza u oportunidad?, <http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/esl/041200s.htm>
- FORDHAM, B. (1998). Economic interests, party, and ideology in Early Cold War Era, US Foreign Policy, International Organization, vol. 52, numb. 2 (Spring 1998).
- FORERO, J. (2005). *The New York Times*, 5 de julio de 2005.
- GALBRAITH, J. (2009). *The Great Crash 1929*. New York: Houghton Harcourt Publishing Company.
- GAO (2006). (United States, General Accounting Office), Report to the Chairman, Committee on Banking and Financial Services House of Representatives. México's Financial Crisis. Origins, Awareness, Assistance, and Initial Efforts to Recover. February 1996.
- GARCÍA, M. (1991). La política exterior en los años de la hegemonía, *Estados Unidos, Síntesis de su Historia*, tomo 10, Instituto Mora, México, pp. 343-380.
- GARRITSEN DE VRIES, M. (1986). *The IMF changing world 1945-1985*, International Monetary Fund. Washington.
- GILL, S. (1986). US hegemony: It's limits and prospects in the Reagan Era, *Millennium*, vol. 15, numb. 3.
- GILL, S. and D. Law (1987). "Reflections on military industrial rivalry in the global political economy, *Millennium*, vol. 16, numb. 1.
- GILL, S. (1990). *American hegemony and the Trilateral Commission*, New York, Cambridge University Press.
- GILL, S. (2003). *Power and resistance in the New World Order*, New York: Palgrave MacMillan.
- GILPIN, R. (1981) *War and Change in World Politics*, New York: Cambridge University Press.

- GILPIN, R. (1990). *La economía política de las relaciones internacionales*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
- GILPIN, R. (2001). *Global political economy: understanding the International Economic Order*, Princeton University Press, Princeton.
- GILPIN, R. (2003). *El Reto del Capitalismo Global*, México: Editorial Océano.
- GIRÓN, A. y S. Penkina (1994). La deuda externa en Rusia en su transformación en una economía de mercado. *Revista Comercio Exterior*, vol.44, núm. 7, julio de 1994, México.
- GODÍNEZ, V. (1991). El impacto económico de la Segunda Guerra Mundial, *Estados Unidos, síntesis de su historia*, tomo 10, México, Instituto Mora, pp. 311-317.
- GOLD, J. (1979). *Condicionalidad*. Serie de folletos del FMI, núm. 31, Washington.
- GRAHAM M., Edward y P. R. Krugman (1991). *Foreign direct investment in the United States*, Washington, Institute for International Economics.
- GREEN, R. (2000). *La globalización en el siglo XXI: una perspectiva mexicana*, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México.
- GRIFFITH JONES, S. (1988). Introducción y marco de análisis. Las principales interrogantes, en Griffith Jones S. (Compiladora), *Deuda externa, renegociación y ajuste en la América Latina*, Trimestre Económico. México: Fondo de Cultura Económica.
- GRIFFITH JONES, S., with Jenny Kimmis (1999). Stabilizing capital flows to developing countries, in Michie, Jonathan and John Grieve Smith, *Global instability: the political economy of world economic governance*, London and New York, Routledge.
- GRUPO DE LOS SIETE (1975). *Declaración de Rambouillet*, http://www.g8.utoronto.ca/espagnol/sp_1975rambouillet.pdf

- GULTIÁN, M. (1981). *La condicionalidad del Fondo*, Serie de folletos del FMI, núm. 38-S, Washington.
- HERNÁNDEZ VELA, E. (2002). *Diccionario de política internacional*, México, Editorial Porrúa.
- HOBSEWORTH, E. (1987). *Las revoluciones burguesas: la era de la revolución*, Barcelona, Editorial Labor.
- HOBSEWORTH, E. (1998). *La era del imperio*, Buenos Aires, Editorial Grijalbo, Colección Crítica.
- IKENBERRY, J. (1992). A world economy restored: expert consensus and the Anglo-American Postwar settlement, *International Organization*, numb. 1, volume 46, Winter 1992, Edited by Peter M. Hadas.
- INTERNATIONAL MONETARY FUND (1991). *International financial statistics*, Yearbook 1991.
- INTERNATIONAL MONETARY FUND (1995). *Press release*, numb. 95/10, February 1, 1995.
- KATZ, J. y R. E. Rice (2005). *Consecuencias sociales del uso de Internet*. Barcelona, Eureka Media.
- JOHNSTON, D. J. (2004). *Getting to grips with globalisation. The OECD in a Changing World*. www.oecd.org. 2004, p. 12.
- JUDIS, J. (1986). Ronald Reagan y la declinación de Estados Unidos, en Pablo González Casanova (ed). *Estados Unidos hoy*, México: Siglo XXI Editores.
- KAPSTEIN, E. (1994). *Governing the Global Economy: International Finance and the State*, Cambridge: Harvard University Press.
- KEGLEY, Ch. y E. Wittkopf (1982). *American Foreign Policy: pattern and process*, New York, St. Martin's Press.
- KENNAN, G. (1947). The source of Soviet conduct. *Foreign Affairs*, vol. 25.
- KEOHANE, R. and J. Nye (eds) (1971). *Transnational relations and world politics*, Harvard University Press, Cambridge, USA.

- KEOHANE, R. (1982). State power and industry influence: American Foreign Oil Policy in the 1940's, *International Organization*, vol. 36, numb. 1.
- KEOHANE, R. (1982a). The demand for international regimes, *International Organization*, vol. 36, numb. 2.
- KEOHANE, R. y J. Nye (1988) (versión original 1977). *Poder e interdependencia, la política mundial en transición*, Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires.
- KEOHANE, R. (1984). *After hegemony: cooperation and discord in the world political economy*, Princeton University Press, New Jersey.
- KEOHANE, R. (1993). *Instituciones internacionales y poder estatal*, Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires.
- KEYNES, J. M. *The collected writings of John Maynard Keynes*, vol XXV, editado por Donald Moggridge, Royal Economic Society, England.
- KINDLEBERGER, Ch. (1972). *Economía internacional*, Editorial Aguilar, Madrid.
- KINDLEBERGER, Ch. (1973). *The world in depression, 1929-1939*, University of California Press, Berkeley.
- KISSINGER, H. (1998). The IMF: throwing more fuel on the world economic bonfire, *The Washington Post*, October 6, 1998.
- KODAMA, F. (1992). Technology fusion and the New R&D, *Harvard Business Review*, July-August, 1992.
- KOLODKO G. (2001). *Globalization and transformation: illusions and reality*. OECD Development Centred. Working Paper, numb. 176. CD/DOC (2001).
- KRASNER, S. D. (1976). State Power and the Structure of International Trade, *World Politics* 28: 317 - 347.
- LAFEBER, W. (1991). *America, Russia and the Cold Ward 1945-1990*, 6th edition, McGraw Hill Inc.

- LICHTENSZTEJN, S. y M. Baer (1987). *El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estrategias y políticas del poder financiero*, México, Fondo de Cultura Económica.
- LENIN, N. (1961). *Obras escogidas*, Moscú, Editorial Progreso.
- LUSTIG, N. (1994). *México: hacia la reconstrucción de una economía*, México, El Colegio de México.
- MANDEL, E. (1971) (versión original, 1969). *Ensayos sobre el neocapitalismo*, México, Editorial Era.
- MANDEL, E. (1972). *Tratados de economía marxista*, tomos I y II, México, Ediciones Era.
- MANDEL, E. (1979). *El capitalismo tardío*, México, Ediciones Era.
- MANDEL, E. (1974). *El dólar y la crisis del imperialismo*, México, Serie Popular Era.
- MANDEL, E. (1980). *La crisis 1974-1980*, México, Serie Popular Era.
- MANDEL, E. (1986). *Las ondas largas del desarrollo capitalista, la interpretación marxista*, Madrid, Siglo XXI Editores.
- MANRIQUE, I. (2001). México: modernización financiera integral en la condicionalidad de las políticas de ajuste estructural, en Sader, Emir (comp.). *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*, Buenos Aires: CLACSO.
- MARX, C. (1972). *El capital: crítica de la economía política*, tomo I, México, Fondo de Cultura Económica.
- MARX, C. (1982). *Escritos de juventud*, Fondo de Cultura Económica, México.
- MÉNDEZ, Sofía (ed). *La crisis internacional y la América Latina*. Lecturas, núm. 55, México, Fondo de Cultura Económica.
- MICHALET, Ch. (1976). *Le capitalisme mondial*, Paris: PUF.
- MILLER, M. (1989) (edición original 1986). *¡No basta enfrentarse a la deuda! La crisis de la deuda internacional y los papeles del Banco*

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, México: Fondo de Cultura Económica, Economía Contemporánea.

MOORE, M. (2000). The backlash against globalization? *Liberal International*. www.wto.org. Octubre de 2000.

MORGAN GUARANTY TRUST, World Financial Markets, October-November, 1968.

MORGAN, LDC (1986). *Debs: relief of market solution?*, September, 1986.

MORGENSTERN, O. (1959). *International financial transactions and business cycles*, Princeton University Press, Princeton.

NYE, J. (2004). Globalization is not Americanization. *The Taipei Times*. Friday, Oct 22, 2004, p. 9. www.taipeitimes.com/News

NOYOLA, J. F. (1985). El Fondo Monetario Internacional, *Investigación Económica*, enero-marzo de 1985, núm.171, Revista de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

OCDE (1984). *Perspectives économiques*, juillet 1984.

OCDE (1992). *Science and technology policy*, Paris, 1992.

OLSON K., *US Foreign Policy and the New International Economic Order: Negotiating Global Problems 1974-1981*. Westview Press, Inc. Colorado, USA.

PALAZUELOS, E. y M. de Jesús Vara (2005). “Crisis financiera en la economía global: la experiencia de Rusia después de la crisis de 1998”, en Correa, Eugenia, Alicia Girón y Alma Chapoy (Coords.). *Consecuencias financieras de la globalización*, México: Miguel Ángel Porrúa.

PORTELLI, H. (1992). *Gramsci y el Bloque Histórico*, Siglo XXI, Buenos Aires.

RAPKIN, D. (ed) (1990). *Leadership and hegemony*, Lynne Rienner Publishers, Colorado, USA.

- REICH, R. (1993). *El trabajo de las naciones. Hacia el capitalismo del siglo XXI*, Buenos Aires, Javier Vergara Editor S.A.
- ROBINSON, W. (2000). *La globalización capitalista y la transnacionalización del Estado*.
<http://www.rcci.net/globalizacion/2000/fg138.htm>
- ROBINSON, W. (1996). *Nueve tesis sobre nuestra época*.
<http://www.uca.edu.sv/facultad/chn/c1170/nuevetesis.html>
- RUSSETT, B. (1985). The mysterious case of vanishing a hegemony: or Mark Twain really dead. *International Organization*, 39, 207-231.
- RUGGIE, J. (1975). International responses to technology: concepts and trends. *International Organization* 29: 557-83.
- SAMUELSON, P. (2001). *The new economy and information technology policy*. Berkeley, University of California, Berkeley.
- SAMUELSON, P. (1979). Myths and realities about the crash and depression. *The Journal of Portfolio Management*, Fall 1979, vol. 6, numb. 1, pp. 7-10. New York.
- SAWYER, J. (1987). *Why Reaganomics and Keynesian economics failed*, Martin's Press Inc., New York.
- SCHATAN W. J. (1985). "Deuda externa y desarrollo: un enfoque heterodoxo. *Revista Investigación Económica*, núm. 171, enero-marzo de 1985. Facultad de Economía, UNAM.
- SHULTZ, G. P. (1993). *Turmoil and triumph: my years as Secretary of State*, New York, Simon and Schuster.
- SCHMIT, H. (1990). *Men and powers: a political retrospective hardcover*. Washington, Random House.
- SMITH y L. Marx (1997). *Historia y determinismo tecnológico*, Madrid, Alianza.
- STIGLITZ, J. (2000). *El malestar en la globalización*, Madrid: Taurus.
- STIGLITZ, J. (2004). *Los felices 90: la década más próspera de la historia como causa de la crisis económica actual*, México: Taurus.

- SPIRO, D. E. (1999). *The hidden hand of American hegemony: petrodollar recycling and international markets*, New York, Cornell University Press.
- STRANGE, S. (1987). The persistent myth of lost hegemony, *International Organization*, vol. 41, numb. 4.
- STRANGE, S. (1982). Cave! Hic dragones: a critique of regime analysis. *International Organization*, vol. 36, 2 (Spring). 337-354.
- STRANGE, S. (1996). *The retreat of the State: the diffusion of power in the world economy*, Cambridge University Press, Cambridge, USA.
- STRANGE, S. (1988). *States and markets*, Pinter Publishers, London.
- STRANGE, S. (1998). *Mad money*, Manchester University Press, Manchester.
- SUTHERLAND, P. (2002). Why We Should Embrace Globalization, Point of View, *Finance and Development*, FMI, Volume 39, Number 3, September 2002, Washington.
- SULZBERGER, C. L. (1966). *The American heritage: picture History of World War II*, American Heritage Publishing Co. Inc. USA.
- SUMLER, D. (1973). *A History of Europe in the Twentieth Century*, Homewood Illinois: The Dorsey Press.
- TAMAMES, R. (1984). *Estructura económica internacional*, Madrid, Alianza Editorial.
- TAMAMES, R. (1991). *Un nuevo orden internacional*, Madrid, Editorial Espasa Calpe.
- TARASSIOUK, A. (2005). Globalización, Estados nacionales y la construcción de las estructuras financieras. El caso de Rusia, en Correa, Eugenia, Alicia Girón y Alma Chapoy (Coords.). *Consecuencias financieras de la globalización*, México, Miguel Ángel Porrúa.
- TAVARES, M. (1992). Reestructuración industrial y políticas de ajuste macroeconómico en los centros. La modernización conservadora. *Revista Investigación Económica*, núm. 199, enero-marzo de 1992, pp. 67-108. Facultad de Economía. UNAM.

- THERNBORN, G. (1987). *Ideología del poder y el poder de la ideología*, Madrid, Siglo XXI Editores.
- THE TRILATERAL COMMISSION (2004). *Program of the 2004 North American Regional Meeting*, Cancun, Mexico — November 12-14, 2004,
<http://www.trilateral.org/NAGp/REGMTGS/04cancun.htm>
- THE TRILATERAL COMMISSION (2007). *Membership*,
<http://www.trilateral.org/memb.htm>
- TRIFFIN, R. (1960). *Gold and the dollar crisis*, New Haven: Yale University Press.
- TRIFFIN, R. (1961). *El caos monetario*. México, Fondo de Cultura Económica.
- TUSSIE, Diana (1997). El margen de maniobra en las nuevas normas del comercio internacional, capítulos del SELA, núm. 50, abril-junio.
- UNCTAD (1994). *World investment report 1994. Transnational corporations: employment and the workplace*, United Nations, New York and Geneva.
- UNCTAD (1995). *World investment report 1995. Transnational corporations and competitiveness*, United Nations, New York and Geneva.
- UNCTAD (1998). (United Nations Conference on Trade and Development). *World investment report 1998. Trends and determinants*, United Nations, New York and Geneva.
- UNCTAD (2000). (en español, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). *Informe sobre las inversiones en el mundo: las fusiones y adquisiciones transfronterizas y el desarrollo*. Nueva York y Ginebra.
- UNESCO, Instituto de Estadísticas (2001). *The state of science and technology in the world 1996-1997*, Montreal, Québec, 2001.

- UNITED NATIONS (1948). *Proceeding and documents of United Nations and financial conference*, Govt. Printing Office, 1948, vol II, appendix I, document 508, Washington D. C., United States.
- VIDAL, J. M. (2000). *Mundialización e integración económica*.
[http://www.redem.buap.mx/ word/](http://www.redem.buap.mx/word/vidal1.doc) vidal1.doc.
- VILLARREAL, R. (1984). *La contrarrevolución monetarista: teoría, política económica e ideología del neoliberalismo*, México, Editorial Océano.
- VOLCKER, P. A. (1992). *Changing fortunes the world's money and the threat to American leadership*, New York, Times Books.
- WALTER, A. (1991). *World power and world money: the role of hegemony and international monetary order*, New York, St. Martin's Press.
- WALLERSTEIN, I., S. Amin, G. Arrighi, A. Gunder Frank (1982). *Dynamics of global crisis*, New York, Monthly Review Press.
- WALTZ, K. (1979) *Theory of international politics*, New York, Random House.
- WENDT, A. (1992). Anarchy is what States make of it: the social construction of power politics, *International Organization*, 46 (1992). pp. 391-425.
- YAGER, E. (2006). *Ronald Reagan's journey: democrat to republican*. Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield Publishers.

La falsa neutralidad de las autoridades electorales en México

Abstencionismo electoral y el fraude de 2006

Óscar Antonio Jiménez Morales

Resumen

El periodo 1991-2006 registró un creciente nivel de abstencionismo electoral en el ámbito nacional, lo cual contribuyó a la deslegitimación de los procesos electorales organizados por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE). 2003, año en el que se celebraron comicios federales intermedios para renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión, se caracterizó por registrar uno de los más altos niveles de abstencionismo electoral y el más alto dentro del periodo que nos ocupa (60 por ciento). Este hecho fue interpretado como una evaluación negativa a la gestión del entonces presidente Vicente Fox Quesada cuyo inicio, en el 2001, se había visto con altas expectativas de cambio en un gran sector de la sociedad mexicana. En 2006, la democracia electoral fue traicionada por Fox y los funcionarios, tanto del IFE como del TEPJF, con un grave fraude electoral en contra del

entonces candidato de la *Coalición por el Bien de Todos*, Andrés Manuel López Obrador, y lastimaron y dividieron a la sociedad dando entrada a la posterior violencia multifactorial con la denominada “guerra contra el narcotráfico” declarada por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa y continuada, aunque no en el discurso, por Enrique Peña Nieto.

Palabras clave: abstencionismo electoral, fraude, democracia electoral vulnerada, falsa democracia

Abstract

The 1991-2006 period saw an increasing level of voter turnout at national level which contributed to the discrediting of elections organized by former Federal Electoral Institute (IFE). 2003, year in which intermediate federal elections were held to renew the Chamber of Deputies, was characterized by recording one of the highest levels of electoral abstentionism and the highest within the period in question (60 percent). This was interpreted as a negative assessment to the management of then president Vicente Fox Quesada whose beginning, in 2001, had been high expectations for change within a large segment of Mexican society. In 2006, electoral democracy was betrayed by Fox and officials of both the IFE and the Electoral Tribunal, with a serious electoral fraud against the then candidate of the Coalition for the Good of All, Andrés Manuel López Obrador, and hurt and divided society ushering in the back multifactorial violence called “war on drugs” declared by the usurper Felipe Calderon Hinojosa and continued, though not in the speech, Enrique Peña Nieto.

Keywords: voter turnout, fraud, electoral democracy violated, false democracy

Introducción

UNO de los fenómenos centrales que se mencionan como muestra de los peligros para la legitimidad de las instituciones políticas y de la embrionaria “democracia” en México, es el alto nivel de abstencionismo que se ha registrado en los últimos comicios.

El objetivo de este capítulo consiste en mostrar la magnitud y el análisis del abstencionismo electoral y cívico en los comicios federales del 2003 y 2006, tanto en el ámbito nacional como en el estado de Jalisco y la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como el análisis de los contextos social y político de dichas elecciones, hasta llegar al fraude electoral perpetrado en 2006.

La estrategia en la presentación de este trabajo aparece principalmente en dos grandes apartados del mismo. En el primero, intitulado “Análisis del abstencionismo electoral y cívico 2003 y 2006”, se presenta, en un primer subapartado, un panorama general del abstencionismo electoral en el periodo 1991-2006, cuyo propósito es establecer un análisis del abstencionismo registrado en la era IFE (Instituto Federal Electoral), haciendo énfasis en la comparación del abstencionismo electoral registrado en los comicios de 2003 y de 2006.

En este punto se presenta un segundo subapartado intitulado “Abstencionismo cívico”, en el cual se analizan tanto en términos absolutos como relativos ese tipo de abstencionismo durante las elecciones de 2003 y 2006, el cual también compete a nuestro análisis, marcando que tanto el abstencionismo electoral (el cual incluye el político, el técnico y el “indiferente”) como el cívico son mutuamente excluyentes.

Un tercer sub-apartado tiene que ver con el análisis de los contextos políticos, sociales y económicos de la elección federal del 2003 con ayuda de los estudios de Temkin, Salazar, Durand y Sotelo, los cuales nos ofrecen algunas de las variables y contextos explicativos del abstencionismo electoral, principalmente los socioeconómicos, que nos interesan como objeto de estudio.

En un cuarto sub-apartado se hace referencia a otros estudios empíricos sobre abstencionismo electoral en El Salvador, Nicaragua y Panamá, que nos ayudan a completar el análisis, pues también ofrecen factores explicativos de corte socioeconómico.

En el segundo gran apartado tenemos ya el análisis del contexto social y político de la contienda electoral de 2006, en donde se analiza el conteo rápido —conocido como PREP—, el cómputo distrital, los

errores aritméticos, un conjunto de anomalías electorales y el recuento del TEPJF.

Además de que muchos de los votos legítimos, mediante acciones de dolo por parte de algunos funcionarios de casilla, fueron transformados en votos nulos, incrementando de forma artificial la cifra “oficial” de abstencionismo cívico.

En suma, en este capítulo se presenta un panorama completo de cómo los mexicanos pasamos del castigo al gobierno de Fox a través del abstencionismo en 2003, al fraude electoral de 2006.

Panorama general

A continuación mostraremos el análisis del abstencionismo electoral en cada una de las elecciones federales en las que el Instituto Federal Electoral ha sido la instancia organizativa. Aquí se presentan las tendencias del abstencionismo electoral, tanto de las elecciones presidenciales como de las legislativas.

Cabe decir que las cifras de abstencionismo electoral en ambas elecciones son los datos agregados tanto del llamado abstencionismo político al que ya hemos hecho referencia en el capítulo 1, como del abstencionismo “indiferente”.

Asimismo podemos hallar el abstencionismo que por razones técnicas, económicas y de salud, entre otras, imposibilitaron a los ciudadanos acudir a las urnas el día de la contienda electoral y que se suman al porcentaje del abstencionismo electoral.

Recordemos que el abstencionismo político es aquel en el cual el ciudadano, con plena conciencia de su repudio, crítica o marcadas diferencias, ya sea con el sistema de partidos, con el sistema electoral o con el sistema político, toma la decisión de no ir a votar, de no ejercer su derecho al voto, y que esa abstención representa una forma de deslegitimar los resultados electorales, esté o no consciente de esto último.

Las razones (explicativas) de su decisión pueden tener un carácter económico, político, ideológico o social, habiendo sido tomadas por el ciudadano en forma individual o grupal.

En tanto que el abstencionismo “indiferente”, podemos decir, es aquel que el ciudadano ejerce cuando no media ninguna reflexión de corte político, ideológico, social o económico en su decisión de no votar o abstenerse.

Simplemente no sufraga porque le resulta más valioso tomar ese tiempo para hacer otras cosas de su vida personal o familiar. En otras palabras, el costo de oportunidad de ir a votar le resulta en alguna medida alto.

En este tenor y, en términos prácticos, no hay forma de desagregar estos datos pues no sabemos la medida métrica o peso específico de los factores explicativos del abstencionismo, por lo que podríamos utilizar un concepto más abstracto que englobe al abstencionismo político, al técnico y al indiferente, y éste podría ser simplemente “abstencionismo electoral”, aunque no nos interese como objeto de estudio el abstencionismo “indiferente” ni el técnico.

Aclarado el punto, veamos la evolución del abstencionismo electoral en los comicios federales organizados por el IFE (periodo 1991-2006).

Como podemos observar en el gráfico 1, las elecciones presidenciales en el periodo 1991-2006 en México muestran los niveles (puntos o picos en sentido gráfico) más bajos de abstencionismo electoral en los años en que el IFE ha organizado las elecciones federales (1991-2006), si comparamos estos resultados con las contiendas legislativas.

Empero, podemos apreciar que el abstencionismo en las elecciones presidenciales, en términos relativos, va incrementándose de 1994 al 2000, y de éste al 2006 (22.84%, 36.03% y 41.78%, respectivamente) en México.

Mientras que en las elecciones intermedias legislativas federales ocurre virtualmente lo mismo, pero con dos diferencias: 1) que sus puntos (también llamados picos) en el gráfico son más altos que los de la presidencial; y que, 2) si trazáramos una línea recta sobre los puntos en estas elecciones, ésta presentaría una pendiente más pronunciada

en comparación con las presidenciales, lo que indica un crecimiento mayor del abstencionismo en este tipo de elecciones.

Cuadro 1

Participación y abstencionismo ciudadanos de las elecciones federales, México, 1991-2006. Resultados nacionales.

Concepto /Año	1991	1994	1997	2000	2003	2006
Resultados nacionales	Con base en la elección de diputados de RP	Con base en la elección de Presidente de los EUM	Con base en la elección de diputados de RP	Con base en la elección de Presidente de los EUM	Con base en la elección de diputados de RP	Con base en la elección de Presidente de los EUM
Lista nominal	36,676,167	45,729,057	52,208,966	58,782,737	64,710,596	71,374,373
Participación	24,194,239 (65.97%)	35,285,291 (77.16%)	30,120,221 (57.69%)	37,601,618 (63.97%)	26,968,371 (41.68%)	41,557,430 (58.22%)
Abstencionismo	12,481,928 (34.03%)	10,443,766 (22.84%)	22,088,745 (42.31%)	21,181,119 (36.03%)	37,742,225 (58.32%)	29,816,943 (41.78%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Federal Electoral.

Gráfico 1. Porcentajes de abstencionismo electoral, elecciones federales, México, 1991-2006

Fuente: elaboración propia con datos del cuadro 1.

Cabe mencionar que los puntos más altos de abstencionismo electoral se registran en 2006 para las presidenciales y en 2003 para las intermedias legislativas, dentro de ese intervalo.

En términos generales, el abstencionismo en 2006 es sólo superado por las legislativas de 1997 (42.31%) y por las legislativas de 2003 (58.32%).

Cuadro 2

Participación y abstencionismo ciudadanos de las elecciones federales 1991-2006. Resultados para el estado de Jalisco.

Concepto / Año	1991	1994	1997	2000	2003	2006
Resultados para el estado de Jalisco	Diputados de RP	Presi dente de los EUM	Diputados de RP	Presi dente de los EUM	Diputados de RP	Presi dente de los EUM
Lista nominal	2,306,790	2,885,694	3,355,279	3,846,656	4,269,184	4,711,399
Participación	1,584,372 68.68%	2,405,261 83.35%	2,159,440 64.36%	2,623,960 68.21%	2,324,443 54.45%	2,889,406 61.32%
Abstencionis mo	722,418 31.32%	480,433 16.65%	1,195,839 35.64%	1,222,696 31.79%	1,944,741 45.55%	1,821,993 38.68%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Federal Electoral.

El gráfico 2 muestra un comportamiento del abstencionismo electoral de los ciudadanos jaliscienses con ciertos altibajos; sin embargo, la tendencia en el sub-periodo 1991-2003 es creciente.

Al igual que con los resultados nacionales, el abstencionismo electoral registrado en el 2003 debe compararse con un proceso similar, y observamos que dicho registro es más alto en casi diez puntos porcentuales con respecto al de los comicios de 1997, y en casi 15 puntos porcentuales con respecto al de las elecciones de 1991 (ver cuadro 2).

La tendencia del abstencionismo para el periodo 1991-2006 en las elecciones federales en el estado de Jalisco es similar a la presentada para los resultados nacionales.

Gráfico 2

Porcentaje de abstencionismo electoral, elecciones federales 1991-2003 Resultados para el estado de Jalisco

Fuente: elaboración propia con base en los datos del cuadro 2.

El abstencionismo de las elecciones presidenciales muestra los picos (también llamados puntos) más bajos, en tanto que el abstencionismo electoral para las elecciones legislativas presenta los picos más altos dentro del periodo en cuestión.

No obstante, tanto en uno como en otro tipo de elección se presenta una tendencia creciente en los porcentajes de abstencionismo, lo que en otras palabras significa un incremento en términos relativos del abstencionismo electoral en Jalisco similar al que muestran los resultados nacionales.

Ahora bien, en términos electorales, geográficos y socioeconómicos, distintos institutos como el IFE, el Instituto Electoral del Estado de Jalisco (IEEJ), que ya fue convertido en el IEPC (Instituto Electoral y de Participación Ciudadana),⁷⁸ así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establecen que la zona metropolitana de Guadalajara está conformada por cuatro municipios: Guadalajara,

⁷⁸ Maniobra para sacar a algunos consejeros electorales incómodos a ciertos partidos políticos.

Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, aunque poco a poco se han venido integrando a la zona los municipios de El Salto y Tlajomulco.

No obstante, éstos no los consideraremos como parte del espacio de estudio. En esta tesitura, presentaremos a continuación los niveles de abstencionismo electoral de la Zona Metropolitana de Guadalajara registrados en los comicios federales de 2003 y 2006.⁷⁹

En el cuadro 3 podemos apreciar que en la zona metropolitana de Guadalajara el porcentaje de abstencionismo se reduce de la elección intermedia de 2003 a la presidencial de 2006 (47.78% a 36.56%, respectivamente).

Estos porcentajes son menores a los registrados en el ámbito nacional, pues históricamente se sabe que, de acuerdo a los estudios de diversos analistas, la participación en el Occidente de la República y en el Bajío es una de las más altas en el país, pero como ya vimos con el análisis estadístico que hemos presentado, el estado de Jalisco ha reducido esa participación electoral elección tras elección, en términos relativos.

Debemos considerar igualmente que las elecciones legislativas siempre atraen una menor atención de los ciudadanos, en comparación con los comicios presidenciales.

Ahora veamos los datos por municipio en las contiendas 2003 y 2006, elección por elección en estudio.

El municipio de la zona metropolitana de Guadalajara que presenta un mayor porcentaje de abstencionismo en las elecciones federales correspondientes a 2003 es el de Tlaquepaque, con el 50.86%, mientras que el que registra una tasa de abstencionismo menor es el de Guadalajara, con el 45.72%. Tonalá y Zapopan presentan tasas similares, con el 48.90% y el 49.94% respectivamente.

⁷⁹ La lista nominal y el nivel de participación electoral para 1991, 1994, 1997 y 2000 no se encuentran disponibles o desagregados por entidad, ni por municipio en la página electrónica del IFE, por lo que nos resultó imposible calcular las tasas de abstencionismo.

Cuadro 3

Participación y abstencionismo ciudadanos en las elecciones federales 2003-2006. Resultados agregados para la Zona Metropolitana de Guadalajara

Concepto / Año	2003	2006
Resultados para el estado de Jalisco	Con base en la elección de diputados de RP	Con base en la elección de Presidente de los EUM
Lista nominal	2,375,841	2,486,048
Participación	1,240,882 52.22%	1,576,920 63.44%
Abstencionismo	1,135,004 47.78%	909,128 36.56%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto Federal Electoral.

Para las elecciones de 2006, ahora es Tonalá el municipio que registra una mayor tasa de abstencionismo (40.79%, en comparación con los otros municipios en esa elección). No obstante, la diferencia en la tasas de abstencionismo entre Tlaquepaque y Tonalá es menor a un punto porcentual, mientras que Guadalajara sigue siendo el municipio que registra la menor tasa de abstencionismo de esa demarcación geográfica (ver cuadros 4 y 5).

Cuadro 4

Participación y abstencionismo ciudadanos en las elecciones federales 2003 Resultados para la Zona Metropolitana de Guadalajara por municipio

Concepto / Municipio	Guadalajara	Tlaquepaque	Tonalá	Zapopan	Total	%
Lista nominal	1,239,835	295,994	179,106	660,906	2,375,841	100
Participación	673,036 54.28%	145,457 49.14%	91,517 51.10	330,872 50.06%	1,240,882	52.22
Abstencionismo	566,799 45.72%	150,537 50.86%	87,589 48.90%	330,079 49.94%	1,135,004	47.78

Fuente: elaboración propia con datos del IFE.

Abstencionismo cívico

El abstencionismo cívico es uno de los tipos de abstencionismo voluntarista en el que el ciudadano acude a las urnas a invalidar su voto para que quede registro, en forma documental, de su inconformidad con los contendientes de la elección, con los partidos políticos, con el sistema electoral o con las políticas económicas aplicadas por las cúpulas de los gobiernos que, independientemente de la marca o franquicia, han sumido al país en el estancamiento y en la falta de oportunidades.

La anulación de la boleta electoral se hace de antemano de forma reflexiva, concertando el sufragante consigo mismo o con un grupo de ciudadanos, y no es el tipo de anulación que por cuestiones de marcaje, consignas o dolo de los funcionarios de casilla, entre otras, pueda ser anulado por aquéllos.⁸⁰

⁸⁰ Se sabe que un porcentaje importante de funcionarios de casilla en las pasadas elecciones federales de 2006 fueron sustituidos por personas afines a la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales. López Obrador establece que 19 mil 454 funcionarios de casilla que

Cuadro 5

Participación y abstencionismo ciudadanos en las elecciones federales 2006. Resultados para la Zona Metropolitana de Guadalajara por municipio

Concepto / Municipio	Guadalajara	Tlaquepaque	Tonalá	Zapopan
Lista nominal	1,283,836	341,056	214,517	741,788
Participación	64.97 %	60.19 %	59.21%	63.72 %
Abstencionismo	35.03 %	39.81 %	40.79%	36.28 %

Fuente: elaboración propia con datos del IFE.

Abstencionismo cívico, elecciones federales, 2003

La cantidad de votos nulos que en el ámbito nacional se registraron en las elecciones intermedias legislativas del 2003 fue de 899 mil 227 votos, cantidad menor a la registrada en las elecciones del 2006, cuya diferencia absoluta fue de 5.377 votos nulos, según los cómputos distritales.

Sin embargo, cuando se presentan los resultados del cómputo final llevado a cabo por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la diferencia disminuye a 1 146 votos nulos. Aun así, la diferencia entre una y otra elección es muy grande.

En el cuadro 6 hemos colocado una muestra de algunas entidades federativas con el propósito de hacer comparaciones con el estado de Jalisco. De hecho, esta entidad federativa ocupó el cuarto lugar nacional en el llamado abstencionismo cívico, aunque la totalidad de los votos nulos no refleja esta situación al cien por ciento, toda vez que los “votos nulos” también pueden ser dados por nulos por los funcionarios de casilla (como hemos mencionado líneas arriba) en el

“no se presentaron” fueron sustituidos por personas que supuestamente se encontraban en los primeros lugares de las filas de votantes.

caso de que se haya violado la forma correcta del marcaje electoral, y siempre y cuando no haya habido irregularidades de dichos funcionarios, que hayan dado por nulos votos válidos de una manera ilícita.

La entidad federativa que ocupó el primer lugar en abstencionismo cívico en las intermedias del 2003 fue el Distrito Federal, seguido del estado de México, mientras que en tercer lugar se ubicó el estado de Guanajuato.

Si bien es cierto que podríamos apuntar una relación directa entre el número de votos nulos y el tamaño de la lista nominal, también lo es que entidades como Puebla, Nuevo León y Veracruz, que registran listas nominales más grandes que Guanajuato, tienen un número menor de votos nulos que esa entidad federativa en términos absolutos.

En términos relativos tenemos que el estado de Campeche es el que registra un porcentaje de abstencionismo cívico mayor en comparación con el resto de las entidades federativas incluidas en esa muestra (5.02%). En segundo lugar se ubica San Luis Potosí, con una tasa de abstencionismo cívico del 4.89%, y en tercer lugar se ubica la entidad de Oaxaca, con una tasa del 4.27%.

Cuadro 6

Abstencionismo cívico, elección de diputados federales 2003, por el principio de R.P. Algunas entidades federativas

	Votos nulos	Tasa de abstencionismo cívico (1)
Nacional	899,227	3.36
Baja California	23,146	4.19
Campeche	13,298	5.02
Chiapas	29,375	3.99

Chihuahua	29,993	3.95
Distrito Federal	114,914	3.90
Guanajuato	57,043	3.79
Jalisco	53,029	2.29
México	106,618	3.57
Michoacán	33,333	4.00
Nuevo León	46,670	3.27
Oaxaca	35,061	4.27
Puebla	44,948	3.88
San Luis Potosí	31,366	4.89
Veracruz	49,834	2.60

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.

(1) Tasa de participación o colaboración con respecto a la votación total.

Da la casualidad que San Luis Potosí y Oaxaca, y en menor medida Campeche, son entidades que registran altos niveles de marginación y pobreza, los cuales también son o pueden ser factores explicativos del abstencionismo.

Obsérvese que Jalisco, Distrito Federal, estado de México y Guanajuato registran tasas de abstencionismo cívico menores a esas entidades.

Ahora bien, en el cuadro 7 podemos observar el abstencionismo cívico en la zona metropolitana de Guadalajara, por municipio, para las elecciones federales intermedias de 2003, donde el de Guadalajara es el que presenta el número mayor de votos nulos de la zona con 11 679; en segundo lugar se ubica Zapopan, con 5 801 votos nulos.

Cuadro 7

Abstencionismo cívico, elección de diputados federales 2003, por el principio de R.P. ZMG por municipio

Municipio	Votos nulos	Porcentaje de abstencionismo cívico (1)
Guadalajara	11,679	1.75
Tlaquepaque	3,503	2.45
Tonalá	3,548	3.88
Zapopan	5,801	1.75

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.

(1) Tasa de participación con respecto a la votación total.

Sin embargo, en términos relativos es el municipio de Tonalá el que presenta una tasa de abstencionismo cívico mayor con 3.88%, mientras que en segundo lugar se ubica Tlaquepaque, con una tasa del 2.45 por ciento.

En el cuadro 8 se presentan los 11 distritos electorales correspondientes a la zona metropolitana de Guadalajara bajo la anterior *distritación* electoral, en la que el distrito electoral 07 de Tonalá es el que presenta el mayor grado de abstencionismo cívico, expresado tanto en términos absolutos como relativos (4 805 votos nulos y 3.34% respectivamente).

En cambio, el distrito 10 de Zapopan fue el que registró el menor grado de abstencionismo cívico, lo mismo en términos absolutos como relativos (1 551 y 1.40%).

En el cuadro 9 tenemos tres principales columnas. En la primera se anotan los votos nulos, el porcentaje de abstencionismo cívico y el porcentaje de abstencionismo electoral, según el Cómputo Distrital

llevado al cabo por el IFE en el contexto de las elecciones federales de 2006.

Cuadro 8

Abstencionismo cívico, elección de diputados federales 2003, por el principio de R.P. ZMG por distrito

Distrito	Votos nulos	Tasa de abstencionismo cívico (1)
04 Zapopan	2,484	2.01
06 Zapopan	2,404	2.01
07 Tonalá	4,805	3.34
08 Guadalajara	1,829	1.53
09 Guadalajara	2,161	2.02
10 Zapopan	1,551	1.40
11 Guadalajara	2,087	1.88
12 Guadalajara	1,745	1.50
13 Guadalajara	2,003	1.80
14 Guadalajara	1,828	1.77
16 Tlaquepaque	3,372	2.50

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.

(1) Tasa de participación con respecto a la votación total.

En la segunda se anotan los votos nulos, así como el porcentaje de abstencionismo cívico según el cómputo final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la tercera, finalmente, registramos también los votos nulos y el porcentaje de abstencionismo cívico según la elección de diputados por el principio de Representación Proporcional.

Los conceptos que entran a la izquierda son algunas entidades federativas que nos sirven como referencia para el análisis de comparación; los criterios para la selección de esta muestra consisten en que se escogieron entidades con el mayor número de empadronados y con las listas nominales más grandes, así como algunas entidades en las que se registró el mayor número de irregularidades electorales en los pasados comicios federales del 2006.

Es importante mencionar que el porcentaje de abstencionismo cívico es la tasa de participación o de colaboración de los votos nulos con respecto a la votación total, siempre en términos aritméticos.

Abstencionismo cívico, elecciones federales, 2006

Cuadro 9

Abstencionismo cívico, elecciones federales 2006 (algunas entidades federativas)

Cómputo Distrital Instituto Federal Electoral				TEPJF, cómputo final		Diputados RP	
	Votos nulos	% de abstencionismo cívico (1)	% de Abstencionismo electoral (2)	Votos nulos	% de abstencionismo cívico (1)	Votos nulos	% de abstencionismo cívico (1)
Nacional	904,604	2.16	41.5	900,373	2.17	1'037,574	2.50
Baja California	17,099	1.80	53.83	16,747	1.79	18,328	1.96
Campeche	9,514	3.04	35.33	8,903	3.01	10,541	3.48
Chiapas	47,327	3.72	50.94	47,114	3.73	54,737	4.35

Distrito Federa 1	69,553	1.44	31.95	69,260	1.43	85,713	1.78
Estado de México	101,888	1.79	37.73	101,628	1.79	117,055	2.07
Guanajuato	49,896	2.12	42.74	50,056	2.55	55,604	2.86
Jalisco	61,729	2.12	38.23	62,109	2.15	64,831	2.24
Nuevo León	39,211	2.22	39.98	38,655	2.20	42,684	2.43
Oaxaca	42,017	3.11	41.92	41,877	3.11	47,661	3.56
Puebla	53,614	2.70	42.26	53,597	2.71	60,572	3.07
San Luis Potosí	37,332	3.92	40.22	37,270	3.93	46,917	4.95
Veracruz	72,412	2.46	39.65	72,193	2.46	79,857	2.74

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE y elTEPJF.

1: Tasa de participación con respecto a la votación total.

2: Tasa de participación con respecto a la lista nominal.

Aunque ya lo hemos mencionado líneas atrás, sería ingenuo pensar que las tasas de abstencionismo “cívico” registradas en este cuadro y en los posteriores respondan sólo al tipo de abstencionismo que hemos definido como cívico, puesto que en la elección federal del 2006 se registró una gran cantidad de irregularidades, como aquéllas en las que votos perfectamente válidos se asignaron como nulos, situación que en su momento denunció y documentó la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT).

En otras palabras, una parte del llamado abstencionismo cívico corresponde a irregularidades perpetradas por funcionarios de casilla o por funcionarios de las Juntas Distritales del IFE. Empero, es imposible saber con estos datos agregados cuál es su dimensión real.

En este tenor, tenemos que en el ámbito nacional se registran diferencias importantes entre el cómputo que llevó al cabo el IFE en la elección presidencial si lo cotejamos con el cómputo final que llevó al cabo el TEPJF en lo que a votos nulos concierne. Más aún, si las comparamos con el cómputo de la contienda legislativa del mismo año, las diferencias son aún mayores.

Tan sólo observemos que la diferencia de votos nulos entre el Cómputo Distrital presidencial y el del TEPJF es de 4 231 votos. Es decir, que al llevar a cabo el cómputo final del TEPJF se descontó alguna cantidad de aquéllos para ser asignados a otros rubros, entre ellos a la CPBT.

Por otra parte, si equiparamos los votos nulos que emanan del Cómputo Distrital con los que surgen del conteo final del TEPJF, tenemos que dentro de las entidades que más destacan en esta muestra destaca Baja California, en donde se registra una disminución *a posteriori* (ya en el cómputo del TEPJF) de 352 votos nulos.

En Campeche se registra una disminución de 611 votos nulos; en el estado de México, una reducción de 260 votos nulos; en el Distrito Federal, una disminución de 293 votos nulos; mientras que en Jalisco se registra no una disminución, sino un aumento de votos nulos de 380, situación semejante a la de Guanajuato, entidad que también aumenta sus votos nulos después del cómputo final del TEPJF en 160 unidades.

Cuadro 10

Abstencionismo cívico, elecciones presidenciales, 2006

Cómputo Distrital (Zona Metropolitana de Guadalajara por municipio)

Municipio	Votos nulos	Tasa de abstencionismo cívico (1)	Tasa de abstencionismo político (2)	Lista nominal
Guadalajara	14,587	1.75	35.03	1'283,836
Tlaquepaque	4,353	2.12	39.81	341,056
Tonalá	2,855	2.25	40.79	214,517
Zapopan	6,946	1.47	36.28	741,788

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.

1: Tasa de participación con respecto a la votación total.

2: Tasa de participación con respecto a la lista nominal.

Al comparar el abstencionismo cívico en la zona metropolitana de Guadalajara entre el Cómputo Distrital y el cómputo final del TEPJF para las elecciones del 2006, tenemos que se observa una vasta diferencia en el municipio de Guadalajara, pues en el primero se registran 14 587 votos nulos, mientras que en el segundo 11 701. Esto es, una diferencia de 2 886 unidades.

Cabe decir que la diferencia es *a posteriori*. Empero, al comparar dichos cómputos en el municipio de Zapopan, se observa que también existe una diferencia (408 votos nulos), pero aquí el cómputo del TEPJF incrementa dichos votos. Para el caso de Tlaquepaque y Tonalá existen diferencias *a posteriori* con 1 300 y 10 votos nulos respectivamente; la diferencia en el municipio de Tlaquepaque es importante (ver cuadros 10 y 11).

Cuadro 11

Resultados del cómputo final del TEPJF. ZMG por municipio

Municipio	Votos nulos	Tasa de abstencionismo cívico (1)	Votación total por municipio
Guadalajara	11,701	1.72	679,600
Tlaquepaque	3,053	2.08	146,397
Tonalá	2,865	2.28	125,485
Zapopan	7,354	1.56	471,216

Fuente: elaboración propia con base en datos del TEPJF.

(1): Tasa de participación con respecto a la votación total.

En el cuadro 12 tenemos el abstencionismo cívico en la zona metropolitana de Guadalajara, pero aquí los datos se presentan por distrito.

En la mayoría de los distritos que conforman la Zona Metropolitana de Guadalajara se registró una merma en la cantidad de votos nulos cuando se llevó al cabo el cómputo del TEPJF (ver cuadros 12 y 13).

Cuadro 12

Abstencionismo cívico, elecciones presidenciales, 2006

Cómputo Distrital (Zona Metropolitana de Guadalajara por distrito electoral)

Distrito	Votos nulos	Tasa de Abstencionismo cívico (1)	Tasa de Abstencionismo electoral (2)
04 Zapopan	2,585	1.74	38.52
06 Zapopan	2,229	1.33	35.44
07 Tonalá	2,855	2.25	40.78
08 Guadalajara	2,534	1.38	31.13
09 Guadalajara	3,068	1.94	36.26
10 Zapopan	2,133	1.35	34.87
11 Guadalajara	3,176	2.06	38.61
13 Guadalajara	3,169	1.83	34.31
14 Guadalajara	2,642	1.58	35.04
16 Tlaquepaque	3,100	2.09	39.05

Fuente: elaboración propia con base en datos del IFE.

1: Tasa de participación con respecto a la votación total.

2: Tasa de participación con respecto a la lista nominal.

Es de importancia decir que al observar el propio cómputo distrital del IFE, tenemos que en el distrito 16 con cabecera en Tlaquepaque se registran 3 100 votos nulos, pero a nivel municipio (Tlaquepaque) se tienen 4 353 votos nulos.

Ahora bien, al observar los votos nulos del municipio de Tonalá, según el cómputo distrital, éstos son idénticos a los registrados por distrito (Distrito 07 de Tonalá): 2 855 votos nulos.

Cuadro 13. Abstencionismo cívico, elecciones presidenciales, 2006 - Resultados del cómputo final del TEPJF. ZMG, por distrito electoral

Distrito	Votos nulos	Tasa de Abstencionismo cívico (1)
04 Zapopan	2,724	1.84
06 Zapopan	2,335	1.41
07 Tonalá	2,865	2.28
08 Guadalajara	2,576	1.40
09 Guadalajara	3,068	1.94
10 Zapopan	2,295	1.46
11 Guadalajara	3,176	2.06
13 Guadalajara	2,881	1.68
14 Guadalajara	2,642	1.58
16 Tlaquepaque	3,053	2.09

Fuente: elaboración propia con base en datos del TEPJF.

(1): Tasa de participación con respecto a la votación total.

A manera de resumen en este sub-apartado

Como pudimos apreciar, el abstencionismo en México dentro de las elecciones federales organizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) ha tenido una tendencia creciente, tanto en elecciones presidenciales como legislativas, y más en estas últimas.

Hemos mostrado como tanto en el estado de Jalisco como en la Zona Metropolitana de Guadalajara se confirma esta tendencia, aunque con

pendientes un poco más bajas en comparación con los resultados nacionales.

El llamado abstencionismo electoral que hemos manejado aquí es un término que contiene al llamado abstencionismo político, al técnico y al que hemos denominado “abstencionismo indiferente”, al cual diversos analistas han determinado como “abstencionismo apático”.

No obstante, los datos que manejamos para estos términos están agregados y no tenemos manera de desagregarlos. Recordemos que como objeto de estudio sólo nos interesa, dentro del abstencionismo electoral, el político.

Por otra parte, dentro del término “abstencionismo cívico” está presente el acto cívico del ciudadano de anulación de voto por x, y o z razones que hemos sugerido, y el acto de invalidación de los votos por parte de algunos funcionarios de casilla, o en su caso de autoridades electorales superiores, que igualmente no tenemos manera de desagregarlos.

Ahora bien, tengamos en cuenta en todo momento que tanto el “abstencionismo electoral” como el “abstencionismo cívico” son mutuamente excluyentes en términos matemáticos, pues no existe ninguna intersección entre ambos conjuntos de datos.

En otras palabras, el abstencionismo cívico queda en las urnas, mientras que el abstencionismo electoral permanece registrado sólo en las boletas sobrantes, o bien en los espacios vacíos de la lista nominal.

Ahora presentaremos algunos análisis sobre las elecciones intermedias federales del 2003.

Las elecciones intermedias de 2003

Las elecciones intermedias federales de 2003, bajo el mandato de Vicente Fox Quezada y tras el impacto de la alternancia del Partido Acción Nacional en el gobierno así como de la propia gestión de gobierno de Fox, representaron el proceso de mayor abstencionismo

en los últimos cinco ejercicios bajo la nueva autoridad electoral: el IFE.

De acuerdo con el registro de participación en elecciones federales, hubo estados cuyo nivel de participación ha sido históricamente más bajo que el resto de las entidades. Chiapas, el estado con mayor marginación del país, es también el que tiene porcentajes de abstencionismo mayores, que alcanzaron casi el 70 por ciento en 2003, el más elevado –junto con Baja California– en esa elección.

La marginación y la pobreza parecen marcar los niveles de participación en alguna medida. No olvidemos que el abstencionismo no es sólo un asunto de exclusión social y económica, ya que también intervienen muchos otros factores.

No obstante, se puede afirmar que “a mayor marginación, mayor abstencionismo”, según se desprende del patrón de comportamiento electoral en Oaxaca y Guerrero, pues estas entidades registraron, en las elecciones de 2003, un abstencionismo de 66 y 67 por ciento respectivamente, porcentajes que sólo reflejan su comportamiento histórico.

La elección de Vicente Fox reportó bajos porcentajes de participación en esos estados, con 54 y 58 por ciento de abstencionismo, frente a una media cercana al 64 por ciento de participación electoral.

En el lado opuesto existen entidades con elevadas y constantes tasas de participación electoral. La región del Bajío (Jalisco, Guanajuato y Querétaro) reporta los niveles de participación más elevados. Fue en Guanajuato, en la elección de 1994, donde se reportó el mayor porcentaje de asistencia a las urnas, con 83.73 por ciento, apenas cuatro décimas más que en Jalisco, con 83.3.

La capital del país es también la que registra mayores tasas de participación: 82.33% en 1994, y 70% en 2000.

Un análisis muy profundo sobre las elecciones de 2003 es el practicado por Rodrigo Salazar y Benjamín Temkin (2004), quienes establecen que en las elecciones federales del 2003 en México los municipios con mayores niveles de escolaridad presentan menores niveles de participación electoral, contradiciendo una regularidad

detectada tanto en México como en las llamadas democracias en general.

Para explicar este fenómeno, los autores recurren a datos individuales de Latinobarómetro, así como del panel 2001-2003 de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP).

En este trabajo de investigación se sostiene que los resultados agregados se deben a que los individuos con mayor grado de educación redujeron sus niveles de confianza en las instituciones políticas, debido básicamente a menores niveles de aprobación del desempeño de estas instituciones, entendiendo el desempeño en sus dimensiones concernientes al comportamiento de la clase política y los resultados de sus acciones.

El principal objetivo de la investigación de Temkin y Salazar es identificar y analizar las posibles causas de la aguda caída de la participación en la elección intermedia del 2003.

Más específicamente, estos investigadores buscan mostrar que las diferencias absolutas en los niveles de abstención en las elecciones son concomitantes a claras diferencias en los niveles de participación de distintos segmentos de la población; y buscan ahondar en las razones que pueden explicar los cambios en los niveles relativos de participación de dichos segmentos.

Pretenden sostener que las diferencias en la participación relativa de los distintos segmentos de una elección a otra no sólo afectan significativamente los resultados en cada elección al determinar ganadores y perdedores, sino que revelan mucho más sobre la dinámica política de la “cultura democrática”.

De tal suerte que el estudio muestra que la asociación positiva entre el nivel de escolaridad y la participación electoral que caracterizaban los procesos electorales previos en México, no sólo desapareció en la elección federal del 2003, sino que se invirtió.

El principal hallazgo radica en que a pesar de que los encuestados con mayor educación mantienen valores normalmente asociados a una cultura política democrática y participativa, entre las elecciones del

2000 y el 2003 ocurrió una drástica inversión entre el nivel de educación y la confianza en las instituciones políticas.

Estos cambios en el nivel de confianza política tuvieron que ver más con la evaluación del desempeño de las instituciones políticas y los líderes, que con la cultura democrática de los potenciales votantes.

En este estudio, los autores no eligen no asumir *a priori* que las instituciones democráticas se encuentren en peligro, principalmente por una predominante cultura política “antidemocrática”.

Aceptan que la cultura política de una sociedad específica puede corresponder al carácter democrático, o no, de sus instituciones. Sin embargo, el grado de correspondencia no necesariamente conduce a ingobernabilidad o a procesos democráticos óptimos. No hay un determinismo automático que conduzca de la cultura política a la gobernabilidad.

Más aún, esta relación está mediada por la forma en la que los ciudadanos evalúan el desempeño de las instituciones, sus líderes y de los procesos democráticos.

Así, es posible imaginar condiciones sociopolíticas bajo las cuales los riesgos de la gobernabilidad pueden precisamente originarse en aquellos ciudadanos que mantienen fuertes valores democráticos y participativos.

El grado de abstencionismo electoral por sí mismo no debe ser tomado como una fuente o un síntoma de ingobernabilidad, sostienen Salazar y Temkin. Dependiendo del contexto, puede indicar una posible ruptura entre los ciudadanos y su gobierno, pero también podría ser un símbolo de un conformismo generalizado.

Algo muy importante que los autores apuntan en su estudio es que en una democracia los votos son “señales”, no sólo en términos de preferencias por partido y candidato, sino también en la decisión de votar o de no hacerlo. El porqué de los ciudadanos de votar o abstenerse puede ser una pregunta tan importante como por quién lo hacen.

Reducir la cuestión de abstención o participación a un tema de “cultura política democrática” no sólo minimiza nuestras

posibilidades de análisis, también libera a los políticos y gobernantes de su responsabilidad de “escuchar” a los votantes y desempeñarse como les corresponde.

Dentro de los hallazgos que encuentran los autores en su investigación destaca el hecho de que el menor nivel de participación en la contienda electoral de 2003 correspondió a cambios en las percepciones de grupos sociales que tienen valores y actitudes usualmente asociados con una mayor proclividad a participar políticamente y votar. Específicamente, los sectores con mayor educación de la población mexicana.

La comparación entre las dos encuestas revela que la relación entre el nivel de instrucción y la confianza en las instituciones políticas se invirtió durante ese periodo, en buena medida en función de cambios en la evaluación del desempeño de los actores e instituciones políticos.

Este asunto es fundamental, toda vez que Salazar y Temkin pensaron en un objeto similar al nuestro, ya que están relacionando el incremento del abstencionismo en función del cambio en las percepciones sobre la evaluación del desempeño de los actores e instituciones políticos.

En nuestro caso, se trata del estancamiento del bienestar socioeconómico, cuyo mejoramiento en el ámbito nacional le correspondería al Estado mexicano. La gente comenta: “para qué voto si las condiciones sociales y económicas del país siguen siendo las mismas, o más bien esas condiciones siguen deteriorándose”. Como mencionamos, es un objeto de estudio similar que nos apoya en su formulación.

Es importante subrayar que en aquella investigación el enfoque ecológico no pretende sustituir a los métodos diseñados para identificar al voto individual y sus determinantes, sino que ubica los ambientes sociales que, combinados con otros factores, inciden en las decisiones electorales, y en este caso en la participación electoral.

En esta misma línea, el ejercicio estadístico ecológico permite detectar las condiciones sociodemográficas en las que la participación electoral total o grupal se incrementa o disminuye.

Al incorporar distintas variables de control, los autores encontraron no sólo que la educación tenía una relación inversa con la participación en 2003, sino que es la única variable independiente que sufrió cambios drásticos en comparación con las elecciones previas.

Desde esta perspectiva, en las elecciones de 2000 en comparación con las de 1997 hubo una mayor participación de votantes educados, jóvenes y residentes en áreas urbanas, que estaban empleados en el sector terciario y que percibían ingresos medio/bajo y medio/medio. En contraste, estos votantes fueron significativamente desmotivados en la elección del 2003, según el estudio de Temkin y Salazar.

Debe notarse que, salvo por la proporción de mujeres en los municipios, todas las variables consideradas invirtieron el signo de la relación con la participación electoral. Aun así, los valores de los coeficientes estandarizados señalan claramente que la escolaridad promedio es la variable que produce la mejor explicación de los cambios en la participación electoral en 2003.

Se trata de un público exigente que evalúa positivamente el desempeño gubernamental en la medida en que sea capaz de proveer ambos bienes: el logro del desarrollo económico “dentro de las reglas y restricciones impuestas por la democracia”, y de los derechos individuales que ésta garantiza.

Sin embargo, nuestro estudio no estará enfocado, en primera instancia, sólo a esos sectores. Tomaremos en cuenta los niveles socioeconómicos de los abstencionistas que se encuentren en las secciones electorales en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que presenten tasas iguales o mayores de abstencionismo a las registradas en el ámbito nacional.

En los capítulos del diseño de la prueba de hipótesis (capítulos 6 y 8) hablaremos sobre este asunto.⁸¹

A pesar de que en la ENCUP 2003 no se formulan preguntas que permitan medir directamente la predisposición a votar en las

⁸¹ No obstante, la gran mayoría de las secciones electorales que presentaron tasas de abstencionismo iguales o mayores a la registrada en el ámbito nacional están situadas en los barrios más pobres y marginados de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

siguientes elecciones (las de 2006), existen razones suficientes para asumir que el decremento en los niveles de confianza en las instituciones políticas produjo menores niveles de participación electoral entre los sectores más educados, en tanto que aquellos con menores niveles de educación no vieron ningún motivo para abstenerse de votar.

En este sentido, debe notarse que Buendía identificó una relación positiva entre la confianza en las instituciones políticas y la probabilidad de haber votado en las elecciones del 2000 (Buendía, 2002).

Salazar y Temkin sostienen que en un artículo relativamente reciente, William Mishler y Richard Rose han mostrado que para los ciudadanos de las llamadas nuevas democracias en Europa del Este la confianza en las instituciones políticas es una función no tanto de los valores que adoptan los individuos, sino de su evaluación del desempeño de dichas instituciones.

Claro, debemos decir que, en concordancia con estos autores, el voto o el abstencionismo son mecanismos de premio o castigo al desempeño de los políticos que gobiernan, y ese desempeño también incluye el rubro socioeconómico.

En otras palabras, los ciudadanos evalúan: ¿en qué medida los gobernantes elevan los niveles de vida de la población en general de un país? O bien, ¿en qué medida los gobernantes cumplen con las demandas de la población?⁸²

⁸² Es importante señalar, lo que enfatizan los autores en su investigación, que la inclusión de una rúbrica distinta en torno a “interés en política” responde a que, en contraste con la confianza social (confianza en las demás personas), que se origina principalmente con experiencias directas con otros, la confianza en las instituciones políticas “se aprende más generalmente de manera indirecta y a la distancia”. La variable “familiaridad con la política” mide el grado en el que un individuo tiene una disposición favorable a discutir sobre temas políticos, en tanto que el “conocimiento político” se refiere al nivel de información precisa con que cuentan los ciudadanos, el cual les permite formular juicios y elegir entre opciones políticas. Se asume que ambas variables constituyen mecanismos indirectos que afectan el nivel de confianza política.

Ahora bien, los autores indican que la confianza en las instituciones políticas crece cuando los encuestados perciben una mejoría en la capacidad de las acciones para mejorar el nivel de vida, o en la situación económica nacional.

En este mismo grupo, los encuestados muestran confianza una política creciente cuando perciben mejoría en la situación económica nacional y cuando tienen mejores expectativas del futuro.

En contraste, las diferencias en la percepción en torno a la situación económica personal no tienen una asociación significativa con los cambios de confianza política.

Todo esto parece indicar que la relación entre la evaluación del desempeño y la confianza en las instituciones políticas tiene un efecto de carácter sociotrópico, más que egotrópico.

De manera concomitante, aquellos ciudadanos que en algún momento en particular se sientan insatisfechos con el desempeño de sus representantes y sus políticas, podrán votar para un candidato o partido político distinto, para presionar por acciones políticas mejores o diferentes. Cuando esto sucede, un actor político específico es castigado, pero las instituciones democráticas salen fortalecidas.

En contraste, si un votante o un segmento significativo del electorado considera que su participación electoral en el pasado no ha producido los cambios deseados, o que no los producirá en el futuro, entonces,

Es particularmente importante señalar que la “confianza en las instituciones políticas” (la variable dependiente) no puede ser tomada como una característica de socialización, como un valor ni como una norma. Tampoco puede ser considerada como una evaluación por sí misma. La confianza política puede ser entendida como la expectativa que tiene el ciudadano A de que la institución B cumplirá sus compromisos, o que el político C honrará su palabra o se comportará como corresponde a sus funciones y atribuciones. En este sentido, es plausible considerar que una pérdida de confianza en las instituciones políticas (los partidos políticos, el presidente y el Congreso) puede producir abstencionismo: si el ciudadano percibe que ni con el voto las instituciones responden a sus expectativas; el mismo acto de votar pierde algún sentido, o más bien todo sentido. Por tanto, mayores niveles de confianza en las instituciones políticas darían a los sujetos mejores razones para acudir a las urnas.

desde su perspectiva, las instituciones “democráticas” no están cumpliendo con sus funciones.

Por ende, se genera desconfianza, y yendo un paso más allá, puede concluirse que no tiene sentido comunicar las preferencias individuales por la vía del voto.

Contrariamente al pensamiento convencional, la baja participación electoral en 2003 no fue producto de una “deficiente” cultura democrática.

Víctor Manuel Durand (2004) admite que hay importantes sectores de la sociedad que se asumen o actúan como “apolíticos” y que han determinado no participar en los comicios. Entre éstos se encuentran los más marginados, quienes viven muy alejados de la sociedad y cuya relación con la política es muy escasa.

Hay otros grupos sociales para los que la política se volvió extraña; no hay una identidad con los partidos, de los que señalan han abandonado sus posturas ideológicas, porque conciben que desde allí pueden acceder a un mayor potencial de votantes.

Adrián Sotelo Valencia (2002) establecía en uno de sus estudios antes de las elecciones de 2003 que, con una población total en 2002 de 101 millones 270 mil habitantes, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2002 del INEGI, y un padrón electoral de 65 millones 337 mil electores a nivel nacional de acuerdo con el IFE, históricamente el abstencionismo ha ido en ascenso en México, como ya hemos demostrado.

En el año 2000, con un padrón electoral de 59 millones 591 mil 638 personas, el abstencionismo fue mayor en 14% en respecto a 1994, cuando dicho padrón ascendió a 47 millones 480 mil 159 electores.

En el año de 2003, la hipótesis más optimista sobre el índice de abstencionismo según todas las encuestas, apuntaba entonces el análisis de Adrián Sotelo, fluctuaría en un rango de entre 50 y 60 por ciento, y acertó.

Es decir, que por lo menos 32 millones 668 mil mexicanos se abstendrían de votar en unas elecciones en las cuales los

“contendientes” no tienen absolutamente nada que ofrecer a la población, sino “más de lo mismo”, como reza el refrán popular.

Lo que sí ofrecen de manera subrepticia o implícita es la continuidad del régimen neoliberal existente desde hace más de dos décadas –más bien ya estamos cercanos a tres– y que caracterizó como “régimen de transición pactada”,⁸³ vigente desde que Vicente Fox asumió la Presidencia de la República a finales del año 2000.

Se calcula el costo total de la propaganda-basura desplegada por las campañas mediáticas y el derroche antiecológico multimillonario de los partidos políticos en unos 10 mil millones de pesos, que se hubieran podido utilizar para resolver las grandes carencias de la población en materia de salud, alimentación o educación. Simplemente ese derroche equivalió al 70% del subsidio federal de la UNAM, que en 2003 ascendió a 14.1 mil millones de pesos.

Ante la agresiva propaganda plasmada en pintas, carteles y *spots* de que hacen gala los partidos registrados, la población mexicana se indigna y toma conciencia del costo humano, social, político, cultural y ambiental que implica mantener un régimen de partidos ensamblados dentro del aún sistema presidencialista autoritario, donde dichos partidos –y comparto esta opinión con Sotelo– son verdaderos grupos de presión para obtener recursos del erario público; y además sin principios, a no ser los que derivan (y asumen) de la doctrina neoliberal.

Millones de pesos gastados en propaganda y *spots* televisivos de promoción al voto, han resultado totalmente inútiles para cambiar la actitud indiferente que los ciudadanos muestran ante las elecciones.

Frente a esta situación, apuntaba Sotelo, la gente se abstendrá, pero no por indiferencia, desinterés o desconocimiento, sino a raíz de su observación incluso minuciosa de los partidos y los gobiernos que de ellos emanan.

Se trataría, en tal caso, de una abstención activa, de libertad, con la cual enviar un claro mensaje de protesta contra todos y cada uno de

⁸³ Aunque prácticamente es el mismo régimen no democrático, con un gobierno más corrupto y más inepto (Fox y Calderón) y con un Estado e institución presidencial más debilitados.

los partidos, sea por su bajo desempeño político, por su irresponsabilidad ante la democratización y/o por su propaganda sucia y poco propositiva.

Por eso ante la pregunta “¿para qué votar?”, la respuesta es la misma: las cosas seguirán como están y peor: con topes salariales para los trabajadores, más desempleo y miseria en la población, reducción de las oportunidades de empleo, privatizaciones, entrega de los recursos humanos y naturales al extranjero, tugurización⁸⁴ de los barrios populares, narcotráfico en ascenso, drogadicción entre la juventud, endeudamiento externo, autoritarismo, represión, más riqueza para los ricos, desmantelamiento del campo y la agricultura nacional, crisis económica y desmantelamiento de los sistemas sociales de seguridad y bienestar social, como el IMSS y el reciente caso de la nueva ley del ISSSTE, aprobada en el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón.

Y todo esto con la anuencia y con el apoyo de todos los partidos, ya sea explícitamente o con su sistemático silencio ante la impunidad.

¿Para qué votar? En el fondo, para darle continuidad a este estado de cosas; no para cambiarle el rumbo en inexistentes “sistemas democráticos” de que tanto alardean ideólogos y personeros de los distintos partidos políticos y de los mismos gobiernos neoliberales.

Al abstencionismo de quienes no ven ninguna alternativa de cambio en el sistema actual del capitalismo atrasado y dependiente de nuestro país, se le califica de “falta de conciencia ciudadana”, falta de información de la población, poca difusión de las plataformas electorales de los partidos...

Pero lo que no se dice es que ese abstencionismo es un fenómeno sociopolítico fruto del profundo desprestigio del régimen de gobierno y del desarraigo histórico de los miembros y representantes de los partidos políticos con la población.

En el México oficial, no cabe el pueblo sino como objeto pasivo de esas fuerzas *canibalescas* que lo succionan, se nutren de él, y tan luego éste reacciona y se rebela, es reprimido por la fuerza policial y militar, y enajenado a través de los medios masivos de comunicación e

⁸⁴ Pauperización, empobrecimiento y marginación mayores.

información, de la propaganda gubernamental o mediante promesas incumplidas de “solución” a las graves y crecientes problemáticas económicas, sociales, políticas, de seguridad y ambientales históricamente desatendidas por todos los gobiernos, tanto populistas (el de Echeverría principalmente) como neoliberales que han gobernado el país. Ahí tenemos como botón de muestra los casos de Oaxaca y Atenco.

A manera de resumen del sub-apartado

Hemos visto por medio de los análisis de Temkin y Salazar, Durand, Sotelo y Cruz que el abstencionismo es una forma de reacción político-electoral del pueblo, de los ciudadanos o de la comunidad política hacia los políticos y gobernantes que no cumplen con sus obligaciones del mandar obedeciendo, pues dentro de un régimen “democrático representativo” los gobernantes deben cumplir con el “mandato del pueblo”.

Sin embargo, muchos de los gobernantes fetichizan⁸⁵ y corrompen el poder, y lo último que piensan es que aquéllos deben cumplir con ese mandato.

Las elecciones de 2003 registraron el índice de abstencionismo más alto en el periodo 1991-2006, como un muy probable indicador de la desaprobación de una gran parte del pueblo de México con las políticas económicas y sociales, y en general con el manejo de la política gestado por el entonces presidente Vicente Fox Quezada, emanado de un proceso de elección no cuestionado, o al menos no gravemente, y sin poner en riesgo a las instituciones.

⁸⁵ También hay que decir que algunos o muchos sectores de la ciudadanía tienden asimismo a fetichizar el poder cuando éste es encarnado en algún gobernante, presidente, diputado o senador. A estos últimos se les ve (por parte de los gobernados) de una forma, diremos, en términos populares, “agachona”, y que éstos creen que por el solo hecho de que los políticos ostentan un cargo de “elección popular” tienen el “poder” o “ciertos poderes” de resolver los distintos problemas que aquejan a la ciudadanía. El asunto es que el poder, en una verdadera democracia, radica en el pueblo y los gobernantes deben mandar, como hemos dicho, obedeciendo.

Parece ser que el gobierno de Fox atendió muy bien los focos rojos prendidos por el nivel de abstencionismo registrado en 2003, y también la merma que sufrió la bancada panista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión de las elecciones de 2000 al 2003, pues lo que aconteció en la contienda electoral de 2006 vino a corroborar que Fox, el PAN y demás sectores conservadores y poderes fácticos no permitirían que otras fuerzas políticas los despojaran de sus privilegios.

Los comicios presidenciales de 2006 y el fraude electoral

Una literatura es el medio en que la conciencia de una nación toma plena posición de sí misma, decía Justo Sierra en el siglo XIX. Por lo visto, a más de cien años de distancia, a una parte importante de la sociedad mexicana le hace falta no sólo la literatura, sino que carece de conciencia histórica, social y política.

La incompreensión del presente nace de la ignorancia del pasado. De igual manera, no podremos esforzarnos en comprender el pasado si no sabemos nada del presente. La historia irrumpe como ejemplo de la dialéctica⁸⁶ del conocimiento.

Los pequeños grupos que poseen conocimiento histórico saben que si controlan el pasado, tendrán mayores probabilidades de controlar el futuro, y desde luego, al dominar el presente reescribirán el pasado.

Finalmente, la ultraderecha yunquista, clerical, empresarial, panista utilizó la falta de literatura de millones de mexicanos para engañarlos y mantenerse en el poder.

Desde las ocho de la noche del domingo 2 de julio, la regla que imperó en todo ese tiempo fue la sospecha en el proceso de cómputo de los resultados electorales.

No hubo encuestas de salida: Televisa y TV Azteca no las dieron a conocer. Ni siquiera salió la encuesta de María de las Heras, quien había tenido una participación destacada en las pasadas elecciones del

⁸⁶ En este caso, del ir y venir en el análisis entre el pasado y el presente.

2 de julio de 2000; y el IFE, en voz de su presidente Luis Carlos Ugalde, tampoco expresó números.

Desde las ocho de la noche, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) le dio ventaja a Felipe Calderón, entonces candidato presidencial por el PAN, de diez puntos porcentuales al inicio; sin embargo, dicha ventaja se fue reduciendo poco a poco. Desde ese momento, la confiabilidad en el PREP se perdió totalmente.

El Distrito Federal y el estado de México, las zonas más urbanizadas del país, por lógica elemental tardarían muy poco en enviar los resultados a sus respectivas juntas distritales. Ello mostraría, en los primeros momentos del conteo, una apabullante ventaja de López Obrador, entonces candidato presidencial por la Coalición Por el Bien de Todos, porque en dichas entidades triunfó de una manera clara.

El informe del Comité del Conteo Rápido de la elección presidencial del 2 de julio de 2006

Dentro del informe del Comité de Conteo Rápido del IFE se pueden apreciar las siguientes reglas definidas por dicho comité:⁸⁷

⁸⁷ Integrantes del Comité de Conteo Rápido: Miguel Cervera Flores, Guillermina Eslava Gómez, Rubén Hernández Cid, Ignacio Méndez Ramírez y Manuel Mendoza Ramírez.

El marco muestral, está compuesto por 7636 casillas distribuidas en 481 estratos y 300 distritos electorales.

Métodos de estimación: robusto, clásico y bayesiano.

Método robusto: produce intervalos conservadores que sirven de referencia para el resto de los métodos.

Método clásico: toma en consideración el diseño muestral: estratificado simple. 481 estratos sobre los 300 distritos.

Tamaño muestra: 7 636 casillas, distribuidas proporcionalmente al tamaño del estrato. Se estima el total de votos por partido y de votos emitidos en cada estrato.

Se suman de manera ponderada.

Método bayesiano: utiliza un modelo normal para representar la votación para cada fuerza política. Calcula intervalos de probabilidad para el porcentaje de votos a favor de cada una de las fuerzas políticas.

Reglas básicas

- 1) Los métodos de estimación utilizados deben llevar a conclusiones coherentes y comunes;
- 2) Realizar estimaciones por intervalos de cuando menos una confiabilidad del 95%; y
- 3) Para poder identificar un ganador, los intervalos de las primeras dos fuerzas contendientes deberán distar en al menos 0.6%.

Y como conclusiones anotaron las siguientes:

El comité técnico asesor para el conteo rápido llegó a las siguientes conclusiones:

- a). La muestra se recibió en un volumen y con una cobertura geográfica apropiada;
- b) Se estimaron los porcentajes de votación de los distintos partidos y/o coaliciones; y
- c) En virtud de lo cerrado de los resultados, los intervalos de estimación no satisficieron los criterios establecidos por el propio comité para distinguir una fuerza ganadora.

Esto sirvió para justificar que no se dieran a conocer los resultados de la elección presidencial la noche del 2 de julio.

Programa de Resultados Electorales Preliminares: PREP

“El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) es un mecanismo que permite contar el día de la jornada electoral con los resultados preliminares de las elecciones federales contando los votos de todas y cada una de las casillas reflejadas en las actas de escrutinio, los cuales son informados al Consejo General, a los medios de comunicación y a la ciudadanía.”⁸⁸

⁸⁸ Programa de Resultados Electorales Preliminares. www.ife.org.mx

Según este documento, “el sistema del PREP es transparente en su operación y ofrece completa seguridad en lo que respecta a la veracidad de la información que proporciona”.⁸⁹

Ahora bien, durante todo el conteo, el PREP jamás le dio la ventaja a López Obrador, entonces candidato presidencial por la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT).

Al principio hubo una diferencia muy grande, después se “empataron” y Calderón mantuvo, durante todo el conteo, una superioridad de entre tres y un punto porcentual. A las 22:44 horas, la diferencia era de 2.96 por ciento; es decir, 327 mil 349 votos. A las 23:40 existía una ventaja para Calderón de 2.27 por ciento, correspondiente a 398 mil 785 votos.

A las 0:29 se había reducido la diferencia a 1.85%. Para la 1:46 am, la ventaja era de 0.985, con una diferencia en votos de 284 mil 184. Todo parecía indicar que se iban a empatar las cifras y López Obrador superaría fácilmente a Calderón dadas las tendencias.

Sin embargo, a partir de las 2:26 am la diferencia nuevamente comenzó a crecer, pasando de 0.89 por ciento en dicha hora, a 0.92% a las 2:37am.

Un grupo de catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (Hollin, 2006) realizó una investigación de los resultados

⁸⁹ ¿Qué no es el PREP?

1. No es un cálculo de los resultados sobre la base de estimaciones estadísticas o proyecciones a partir de una muestra. 2. No es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido. 3. No es un conteo rápido en el cual, una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas.

Objetivo del PREP: difundir de forma inmediata los resultados preliminares de las elecciones federales al Consejo General, los partidos políticos y a la ciudadanía en general, a través de sistemas de información que permitan la consulta de los resultados preliminares de la elección del proceso electoral federal.

El pasado 30 de noviembre de 2005, el Consejo General del IFE aprobó la creación del Comité Técnico Asesor del PREP. Miembros: Adolfo Guzmán Arenas, Alejandro Pisanty Baruch, Carlos Fernando José Jaimes Pastrana, Judith Zubieta García y Salma Leticia Jalife Villalón.

presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE) en sus dos bases de datos, la del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la del Conteo Distrital (CD), encontrando una serie de inconsistencias en ellas desde el punto de vista estadístico.

Bolívar Huerta, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, explicó que en el Conteo Distrital se encontró que, en todo momento, el 71.04% de los votos, es decir la suma de los votos de Calderón y López Obrador siempre fue la misma, sin importar el estado de procedencia de los mismos, lo que indica que los demás candidatos tuvieron el mismo porcentaje; esto es, el 28.6%.

Otra de las irregularidades halladas por el estudio es que a partir del conteo del 80% de las casillas, la caída de la votación de Andrés Manuel López Obrador es proporcional al aumento de votos obtenidos por Felipe Calderón, entonces candidato presidencial por el PAN.

En otras palabras, Calderón era el único que ganaba votos y López Obrador era el único que perdía, dejando a los candidatos restantes todo el tiempo en la misma situación, lo que es estadísticamente improbable, según los académicos y según las reglas de la estadística, y más concretamente, de las leyes de la probabilidad.

El tercer punto es que, con una muestra de tres millones de votos y con 13 análisis diferentes, ninguno de los resultados coincide con los resultados del IFE.

De acuerdo al estudio, la diferencia de votos por casilla es de dos votos, lo que significa que si se le añade 20 votos al 20% de las casillas a favor de López Obrador, se empata la elección.

En otro de los análisis sobre la elección presidencial, el Internacionalista (2006), se establece que la secuencia temporal de presentación de datos del PREP tuvo un impacto psicológico muy marcado al presentar, desde el inicio, a un único candidato como ganador de la contienda.

La presentación de los datos preliminares obedecieron a lo que el IFE llamó más tarde “razones culturales”; es decir, se presentaron primero las casillas en el orden de norte a sur, donde se sabía de antemano que

uno de los candidatos tenía mayor votación, asunto completamente ilógico, cuando en algunas de las zonas más urbanizadas del país como la de la ciudad de México y el estado del mismo nombre, López Obrador tuvo una ventaja considerable.

Luis Mochán presentó un día después de la elección numerosas inconsistencias en el comportamiento de la presentación temporal de los datos. Víctor Romero Rocín, doctor en física por la UNAM, establece en su análisis que existe una disparidad muy grande entre muestras de 300.000 votos y el resultado final con el orden de llegada de los votos, especialmente al PAN y al PRD.

Establece también que el comportamiento de la evolución del conteo de los votos es atípico e improbable, y añade que no se puede descartar una manipulación del sistema de cómputo del IFE.

Según este análisis, una de las pocas herramientas que brindan información sobre posibles alternaciones numéricas en los conteos de votos es la ley de Benford.⁹⁰

De la aplicación de esta ley a los números del PREP, se tiene como una primera impresión, que la distribución del primer dígito significativo de los números reportados por el IFE por casilla y por partido, no siguen estrictamente la mencionada ley y que la separación entre los datos observados y los esperados no se deben al azar.

Los investigadores Bolívar Huerta y Francisco Portillo, de la UNAM, indicaron que de los 3 millones de votos que “desaparecieron” dentro del PREP, 598 mil fueron borrados en los estados donde ganó Andrés Manuel López Obrador.

Según el PREP, la votación para presidente de la República en todo el país acumuló un total de 38 millones 549 mil 351 votos, mientras la

⁹⁰ Ésta se trata de una distribución estadística que describe con buena precisión la probabilidad de aparición de los dígitos significativos en las cifras de muchos procesos en la naturaleza. La ley de Benford es una herramienta que se utiliza con frecuencia en las auditorías financieras para detectar fraudes en los reportes de contribuyentes fiscales, reportes de ganancias en estados de cuenta, así como alteraciones numéricas en el conteo de votos. Esta herramienta ha sido usada en el pasado en el análisis de la elección presidencial de Estados Unidos en 2004, y en el referendo presidencial de Venezuela en 2004.

de senadores recibió 39 millones 148 mil 170, lo que marca una diferencia de 598 mil 821 votos más para la legislativa.

Y lo mismo ocurrió con la de diputados, que ascendió a 38 millones 942 mil 718; es decir, 393 mil más de los que se contaron para la presidencial. Ahora bien, al revisar la votación total en el Conteo Distrital, tenemos que la votación total para presidente de la República es de 41 791 322 votos, mientras que para la elección legislativa es de 41 435 934 sufragios. Es decir, la votación presidencial apenas supera a la legislativa en 355 388 votos.

Gráfico 3
Ley de Benford sobre el PREP

Fuente: *El Internacionalista*, 2006.

Dichos investigadores establecen que en Tabasco hubo 96 mil 438 votos menos para presidente que para senadores. En Michoacán, donde gobernaba el PRD al momento de la elección, hubo 55 mil 338 votos menos para presidente que para senadores. En Oaxaca hubo 48 mil 27 votos menos para presidente que para senadores; en el Distrito Federal hubo 33 mil votos menos para presidente que para senadores. En Chiapas, 32 mil votos menos; y en el estado de México, 8 mil 176 votos menos en este mismo tenor.

Por el contrario, en los estados donde ganó Felipe Calderón, los votos de la elección presidencial son más que los de la contienda

legislativa. Así ocurrió en Aguascalientes, Baja California, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Morelos.

Pero en Sinaloa, la elección presidencial fue 5 por ciento más concurrida que la legislativa, y en Colima y en Nuevo León fue 2 por ciento mayor, lo que nos habla de una disparidad que no se explica lógicamente y confirma un sesgo para favorecer a Felipe Calderón y desfavorecer, a su vez, a López Obrador.

En respuesta a las críticas de la Coalición Por el Bien de Todos respecto de la “desaparición” de millones de votos, el IFE difundió el 4 de julio de 2006 las cifras de 11 mil 184 casillas no computadas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El nuevo resultado fue: el panista Felipe Calderón, 14 millones 771 mil 9 votos, 35.91 por ciento; frente a 14 millones 513 mil 477 de Andrés Manuel López Obrador, 35.28 por ciento. Es decir, la diferencia se redujo a 257 mil 532 votos, equivalente a 0.63 por ciento.

Cuadro: 14

Porcentaje final de votos de la elección presidencial, calculado de la base de datos del PREP

Partido o coalición	Porcentaje de participación
PAN	35.89
CPBT	35.28
APM	22.20
Nulos	2.21
PASDC	2.70
Nueva Alianza	0.96
No registrados	0.72

Fuente: Programa de Resultados Electorales
Preliminares del IFE.

El director de la Unidad de Servicios de Informática del IFE, René Miranda, dio a conocer que en las casillas que integraban el denominado “archivo de inconsistencias” se encontraban 2 millones 581 mil 226 votos que no fueron computados, aunque sí se reportó el acta procesada en los resultados que dio a conocer el PREP a partir de las ocho de la noche del domingo 2 de julio de 2006.

El estudio de Julen Sagardoa (2006) establece que, según el IFE, las encuestas de salida realizadas durante la jornada electoral del 2 de julio mostraban diferencias entre los dos candidatos punteros menores al error estadístico asociado, y por ello decidió no dar a conocer dichos resultados.

La diferencia entre el PAN y la CPBT, según el conteo del PREP, fue del 0.60%. La primera observación sobre estos resultados es que no son lo que se esperaría de un proceso al azar, donde los datos llegan de todas las regiones del país sin un orden preestablecido.

En un proceso al azar donde todas las regiones aportan datos, se esperaría que después de un número pequeño de actas se estableciera una tendencia y que a partir de ese momento se mantuviese constante, incluso si las tendencias en cada estado del país fueran muy diferentes.

Al comparar el porcentaje de actas procesadas contra el porcentaje de votos, se registra una tendencia decreciente de la votación del PAN y una tendencia creciente en la votación por la CPBT.

Sin embargo, cuando se llevaba el 73% de las actas procesadas, la tendencia ligeramente creciente que mantenía la Coalición por el Bien de Todos cambia a una decreciente, no tocando nunca la gráfica del PAN.⁹¹

Durante la noche del 2 de julio, cualquier observador de estos resultados tendría la impresión de que en algún momento la Coalición por el Bien de Todos rebasaría al PAN, como ya hemos argumentado líneas arriba; pero a partir de aproximadamente el 73% de las casillas computadas, las pendientes cambian abruptamente, curiosamente

⁹¹ El formato en el que se encuentra este documento es el PDF, por lo cual es imposible “importar” los gráficos y mostrar a los lectores el análisis con ayuda de ellos.

siempre dejando una diferencia mínima entre ambos de aproximadamente 1%.

Es importante decir que a partir de aproximadamente el 73% de las actas procesadas, el número de votos promedio por casilla de la CPBT bajó al nivel del número de votos promedio de Alianza por México. Lo mismo se observa para Acción Nacional pero de manera más suave, incluso ampliando su ventaja de votos.

Esto es como si se tratara de al menos dos elecciones distintas, establece Sagardoa: una antes del 73% de las actas procesadas, donde el PAN y la CPBT tienen el mismo número de votos promedio por casilla, muy por arriba de la Alianza por México; y otra después del 73% de las actas procesadas, donde los tres principales partidos tienen casi el mismo número promedio de votos por casilla.

Si se compara la diferencia de votos PAN-CPBT (eje de las Y) y el porcentaje de actas acumuladas conforme fueron llegando a los CEDAT's⁹² (eje de las X), podemos observar que al principio la CPBT tomaba ventaja a un ritmo fijo de 150 000 votos cada 10% de actas.

Querría decir que al final llegaría a 1 500 000 votos de ventaja. Pero después del 10% hay un cambio brusco de tendencia a favor de Acción Nacional, que extrapolado correspondería a 3 000 000 de votos de ventaja.

Es decir, un *comportamiento espejo* con respecto a lo que pasa en el primer 10% de casillas. Más adelante, entre el 65% y el 75%, y después del 90% de las casillas acumuladas, se puede observar

⁹² El PREP cuenta con un Centro de Acopio y Transmisión de Datos (CEDAT) en cada Distrito Electoral. En cada uno de los CEDAT se capturan los datos de cada una de las actas de la elección y se transmiten al Centro Nacional de Recepción de los Resultados Electorales Preliminares (CENARREP), donde son descryptados, respaldados y difundidos. En realidad, a cada CEDAT llegan más actas de las que pueden procesar los capturistas, y existe un rezago entre la llegada de un acta al CEDAT y su captura. Además, las computadoras del CENARREP no procesan todas las actas que son capturadas a tiempo real, y también existe un rezago entre la hora de captura del acta y la hora en la que se incluye en el PREP. La hora de recepción del acta, la hora de su captura y la hora de su inclusión en el PREP se encuentran en la base de datos del PREP, aunque no se puede asegurar que estos datos sean confiables.

nuevamente una tasa de ganancia de votos de la CPBT similar a la que observaba hasta el 10%.

Es posible que aquí alguien esté midiendo la elección hasta el 10% de las casillas y luego la corrige a su favor. Vuelve a medirla entre el 65% y el 75%, y la vuelve a corregir. Si fuera así, y si sólo se tuviera la posibilidad de modificar algunas casillas, digamos el 10%, podríamos encontrar evidencia de algunas zonas donde se le hayan inyectado votos al PAN o se le hayan restado a la CPBT.

Ahora bien, cuando se compara el porcentaje de votos en cada conjunto de 5 000 casillas en función de las casillas acumuladas conforme fueron llegando a los CEDAT'S (eje de las x) contra miles de votos cada 5 000 casillas (eje de las Y), se puede decir que a los CEDAT'S no llegaron las casillas exactamente en orden de mayor a menor para el PAN; y que fueron ordenadas de mayor a menor antes de ser incluidas en el PREP.

En este caso se puede observar aún más claramente la caída brusca de la CPBT y el pico claro del PAN cuando se revisaban alrededor del 85% de las actas recibidas.

Para buscar evidencia de lo que realmente pasó entre el 10% y el 65% de las casillas acumuladas; es decir, en la zona donde se observa un cambio brusco de comportamiento a favor de Acción Nacional y su ordenamiento, se compara el porcentaje de actas acumuladas conforme llegaron a los CEDAT'S (eje de las x) contra miles de votos cada 50 casillas (eje de las Y), y se encuentra algo sorprendente: existe una irregularidad fuera de toda lógica que se repite durante todo este intervalo. Se observan picos periódicos de la CPBT seguidos de caídas bruscas. El periodo de estos eventos es espectacularmente regular. Es decir, se observa un algoritmo, lo cual es prueba de manipulación.

Cómputo distrital

Bolívar Huerta y Francisco Portillo comparten lo antes dicho por Sagardoa, pero ahora en el Conteo Distrital (CD), pues establecen que el resultado final de los cómputos distritales “no es producto de la

voluntad ciudadana, sino de un fraude cibernético logrado mediante la aplicación de un algoritmo”.

“Desde que el IFE anunció que se había contabilizado 84.13 por ciento de la votación hasta que llegó a 99.99 por ciento, Roberto Madrazo se quedó estancado en 22.27 puntos porcentuales, Roberto Campa en 0.96 y Patricia Mercado en 2.7. Los analistas establecen que eso es matemáticamente imposible. No obstante, no se necesita ser matemático para decir que eso es imposible; simplemente con saber algo de teoría de la probabilidad.

De manera complementaria, los científicos comprobaron la existencia de una relación directa entre los votos de Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, para favorecer al primero y desfavorecer al segundo mediante un sesgo cibernético, un algoritmo.

Cuando el porcentaje de actas registradas oficialmente por el IFE era de 41.04, López Obrador llevaba 37 por ciento de los votos y Calderón 34.37, cifras que sumadas dan un total de 71.37 por ciento. Cuando las actas registradas llegaron a 52.57 por ciento, López Obrador había subido a 37.12 por ciento de los votos y Calderón a 34.37, lo que ahora sumaba 71.57 por ciento de la votación.

Eso no varió nunca. Con 70.67 de las actas registradas, López Obrador tenía 36.86 y Calderón 34.58, lo que seguía sumando 71.44 por ciento de los votos. Con 43.38 por ciento de actas sumadas, los dos candidatos reunían juntos 71.38 de los votos; con 50 por ciento de actas, 71.52 de los votos; con 57.33 de actas, 71.67 de votos; con 69 por ciento de actas, 71.45 de votos; con 76.46 de actas, 71.38 de votos; con 82.46 de actas, 71.21 de votos; con 90.07 de actas, 71.26 de votos; con 94.09 de actas, 71.21 de votos; y finalmente, con 98.01 de actas, 71.19 de votos.

Huerta estableció que mientras López Obrador y Calderón disputaban siempre el mismo número de votos, Madrazo, Campa y Mercado permanecieron fijos en los mismos porcentajes, como si se tratara de dos elecciones distintas: las gráficas de López Obrador y Calderón se acercaban dibujando una figura similar a la nariz de un avión (ver gráfico 4); y las de Madrazo, Mercado y Campa describían tres líneas perfectamente rectas.

Los científicos universitarios afirman que a López Obrador un algoritmo dentro del PREP le quitó cientos de miles de votos, y ahora otro algoritmo le trasladó a Calderón los votos que recibió en los conteos distritales.

Gráfico 4

Fuente: *La Jornada*, julio de 2006.

Julio Boltvinik muestra algunos resultados preliminares sobre el Cómputo Distrital en donde se evidencia que en la parte más alta de la curva de López Obrador, éste obtuvo 60 votos en cada una de mil casillas; mientras que la parte más alta de Felipe Calderón indica que obtuvo 90 votos en cada una de 800 casillas.

Lo que extraña a Boltvinik es que el decaimiento hacia la izquierda del máximo no parece ser una curva suave, sino más bien podría describirse por una burda línea recta. A diferencia de la curva típica, la de AMLO tiene un quiebre abrupto en el máximo. Esta curva podría describirse como una curva típica a la que se le cortó una parte (ver gráfico 5).

Gráfico 5

Fuente: *La Jornada*, julio de 2006.

Julen Sagardoa (2006) arguye que, para el cómputo distrital,⁹³ los porcentajes de la votación calculados a partir de la base de datos del Cómputo Distrital (CD) difieren sólo en centésimas del resultado del PREP, éstos son: 35.89% para el PAN, 35.30% para la CPBT y 22.25% para Alianza por México.

Al comparar el porcentaje de casillas procesadas en el CD (eje de las X) contra el porcentaje de votos obtenidos por los partidos o coaliciones (eje de las Y) se tiene que el PAN tiene una ventaja de 2 puntos porcentuales en el cómputo de los tres primeros puntos porcentuales de casillas procesadas.

Acto seguido, la CPBT comienza a remontar y a superar al PAN con una aparente tendencia decreciente. No obstante, al parecer la

⁹³ Según la reglamentación electoral, a través del COFIPE el cómputo oficial de la elección se lleva a cabo tres días después del día de la elección en cada uno de los 300 distritos electorales federales; esto en presencia de los representantes de partido. Por otra parte, si las copias de las actas que poseen los partidos difieren, o si los datos son ilegibles o inconclusos, o si existen errores evidentes en el acta, por ley debe proceder la apertura del paquete electoral y la corrección del acta; la desventaja de esta ley es que en caso de que algún partido político desee la apertura de paquetes donde no tuvo representantes, por no tener el acta correspondiente, la apertura será negada.

elección se había estabilizado a partir del 20% de las casillas computadas, pero a partir del 80% de las casillas la tendencia se rompe y se revierte el resultado de forma espectacular.

Pocas casillas, cerca del 15%, tenían un resultado radicalmente diferente del resto de la elección y fueron incluidas al final del Cómputo Distrital.

Para poder cambiar la tendencia de una elección después del 80% de las casillas procesadas se necesitan muchísimos votos, establece Sagardoa. Cuando se compara el porcentaje de casillas acumuladas en el CD (eje de las X) contra miles de votos de diferencia entre el PAN y la CPBT (eje de las Y), las pendientes de sus gráficos se mantienen constantes hasta cerca del 80% de las casillas, que es cuando el cambio de tendencia es muy brusco.

Ahora bien, si se compara el porcentaje de casillas acumuladas en el CD (eje de las X) contra miles de votos cada 2 500 casillas (eje de las Y), tenemos que a partir del 70% de las casillas acumuladas se observa un cambio de comportamiento espectacular, donde el PAN aumenta su votación hasta en 100 000 votos por cada 2 500 casillas, en tanto que la CPBT disminuye su votación hasta 100 000 por cada 2 500 casillas, en orden.

Es claro que muchas de las casillas incluidas en el último 20% del Conteo Distrital forman una muestra de una elección radicalmente distinta, y que extrañamente fueron incluidas en orden de menor a mayor diferencia entre los candidatos principales.

Desafortunadamente, en el caso de la base de datos del Conteo Distrital no se proporcionan las horas de captura y no es posible comparar para observar si hubo algún ordenamiento artificial de los datos al ser incluidos en el Cómputo Distrital.⁹⁴

⁹⁴ En su momento, se justificaron estos comportamientos arguyendo que la CPBT retrasó los resultados de aquellos distritos donde perdía la elección. Lo que pasó es que la CPBT exigía la apertura de los paquetes donde las actas presentaban indicios de errores aritméticos; es decir, donde las cifras no cuadraban entre actas o con los totales, o aquéllas donde la CPBT no tuvo representantes y, por lo tanto, no contaba con copia del acta original. La discusión cada vez que aparecían este tipo de casillas retrasaba las sesiones de esos distritos. Ya que el IFE ordenó que no se abrieran los paquetes electorales a

Errores aritméticos

Sagardoa establece que los errores aritméticos surgen al violarse alguna de las siguientes igualdades:

Igualdad 1. La votación total debe ser igual al número de boletas depositadas.

Igualdad 2. Las boletas depositadas, más las boletas sobrantes, deben ser iguales a las boletas recibidas.

Igualdad 3. Las boletas recibidas deben ser iguales a la lista nominal más diez boletas, que es el número de boletas que envían legalmente en cada casilla.

Si la primera igualdad no se cumple, quiere decir que hay votos de más o de menos que no están sustentados en boletas. Si la segunda igualdad no se cumple, quiere decir que se incluyeron boletas extras, o que se sustrajeron boletas. Y por último, la tercera igualdad quiere decir que el IFE no mandó el número exacto de boletas legalmente asignadas a la casilla, o que fueron robadas.

Por otra parte, el hecho de que no existan errores aritméticos en un acta no significa que todo está bien; es relativamente fácil modificar el resultado de una casilla si el contrincante no tiene acceso al acta original.

Errores en las igualdades 1, 2 y 3

Julen Sagardoa indica que la *igualdad 1* se cumple sólo en 75 524 actas. Hay 8 032 actas donde el número de boletas depositadas se reporta como cero y que contienen 2 534 546 votos. Puede ser que este campo haya aparecido vacío en el acta y se capturó como cero. Aún así, estos deben considerarse como parte de los errores aritméticos.

De las actas donde el número de boletas depositadas es diferente a cero, hay 33 731 actas donde el total de votos no corresponde a las boletas depositadas. En ellas hay 414 683 votos más que boletas, y

menos que las actas que tenían los partidos tuvieran diferencias; esas casillas fueron retrasadas y al final incluidas, aunque sin haber revisado sus paquetes electorales. Es decir, teóricamente es posible hacer con esas actas cualquier cosa, para lo cual en algunos lugares se necesitaría la complicidad de los representantes de Alianza por México y otros partidos.

309 282 votos menos que boletas. La mayoría de las actas con este error caen dentro del margen de 20 votos de error.

Si comparamos el total de votos por cada 1 000 casillas en función de las actas donde los votos totales son iguales al número de boletas depositadas (eje de las X) contra miles de votos cada 1 000 casillas (eje de las Y), se observa que las actas que tienen votos totales mayores o menores que las boletas depositadas son en su mayoría actas donde gana la CPBT.

El repunte del PAN y la caída de la CPBT con cerca del 85% de las casillas acumuladas, está contenido en este conjunto de casillas.

Ahora bien, la *igualdad 2* se cumple en sólo 58 914 actas. Si se excluyen las 8 032 actas donde las boletas depositadas son cero, quedan 50 341 actas donde las boletas depositadas más las boletas sobrantes no son iguales a las boletas recibidas (extracción de boletas), y hay otras 942 554 boletas depositadas y sobrantes que boletas recibidas (depósito de boletas).

Si se compara el porcentaje de casillas con diferencias entre las boletas totales y las recibidas (eje de las X) contra los miles de votos cada 1 000 casillas (eje de las Y), tenemos que las casillas más afectadas son en su mayoría donde gana la CPBT. Por otra parte, se encuentran 24 498 actas donde se violan las igualdades 1 y 2 al mismo tiempo.

Las tres igualdades se cumplen sólo en 42 008 casillas (35.8% de las actas). Por lo tanto estamos hablando de una elección con errores aritméticos en casi dos tercios de las casillas.

El resultado de la elección eliminando las casillas con errores aritméticos es: el PAN tiene el 36.65% de los votos, la CPBT tiene el 33.79% de los votos y la Alianza por México suma el 23.02% de los votos.

A veces se argumenta que cuando faltan boletas es porque la gente se las lleva. Si eliminamos sólo las casillas que tienen boletas o votos de más, se mantiene el siguiente resultado: el PAN tiene 36.84% de los votos, la CPBT tiene 34.42% de los votos y la Alianza por México el 22.17% de los votos.

Por ningún motivo deben considerarse los errores aritméticos como las únicas fuentes probables de manipulación del proceso. Por ello, y dado el conjunto de reglas que gobiernan los procesos de impugnación de casillas, el panorama para obtener un resultado confiable de ese proceso electoral se plantea como un problema legalmente imposible.

Sin embargo, establece Sagardoa, hay criterios matemáticos que se pueden usar para limpiar la elección.

No hay ninguna razón imaginable para creer que el proceso de captura de datos de la elección no deba ser un proceso al azar. Incluso si hubiera un retraso en algunas regiones con características similares (por ejemplo las regiones rurales), en cada momento los datos deberían cumplir localmente con las condiciones de captura al azar.

Lo que sí es imposible es que todas las casillas de la República se pongan de acuerdo para no entregar sus resultados al azar; es decir, esperarse unos a otros, con un orden y una coordinación fuera de toda posibilidad técnica.

Al sacar el promedio de los intervalos, hasta el 68% de conjuntos de casillas más confiables (una desviación estándar de radio) y de 96% de conjuntos de casillas más confiables (dos desviaciones estándar de radio), Sagardoa llega a los siguientes puntos:

- a) Usando hasta el 68% de los datos más confiables, se obtiene que en promedio la CPBT ganó la elección con el 36.44% de los votos, seguido por el PAN con el 34.18% de los votos y de Alianza por México con el 22.90%.
- b) Usando hasta el 96% de los datos más confiables, se obtiene que en promedio la CPBT ganó la elección con el 36.254% de los votos, seguida del PAN con el 34.54% de los votos, y de Alianza por México con el 22.70% de los votos.

Este resultado coincide perfectamente con lo que se encuentra en el Cómputo Distrital hasta el 80% de las casillas acumuladas. Es decir, el último 20% del Cómputo Distrital está formado en su mayoría por aquellas casillas que forman parte de los grupos que fueron incluidos

en el PREP de forma sistemática, usando algún algoritmo computacional y violando las reglas del azar.

Como ya hemos comentado, esas casillas tienen una característica común: son aquéllas donde la CPBT no tenía representantes.⁹⁵ El partido que no tiene representante no podrá saber si hubo algún cambio entre lo que originalmente se reportó en esa casilla y el resultado del PREP o del Cómputo Distrital.

Inclusive, en algunos casos donde se presentaron actas del PREP o foros del resultado reportado fuera de la casilla que diferían del acta presentada para el Cómputo Distrital, éstas no fueron aceptadas como causa de revisión del paquete electoral.

Anomalías electorales

El ciudadano Cuauhtémoc Negrete Barrera, fotógrafo, reportó que en el tiradero Neza III, en Ciudad Nezahualcóyotl, había talonarios a los que se les arrancaron las boletas para votación para presidente, senadores y diputados, así como actas de escrutinio, acreditaciones, mamparas y otros materiales.

Ésta y otras imágenes las captó a las 10:30 de la mañana del día 4 de julio de 2006, antes de la llegada de autoridades policiales, electorales y del Ministerio Público.⁹⁶

Asimismo en el estado de México, distrito 7, sección 855, casilla contigua número 1, aparece en la sábana electoral la cantidad de 208 votos para Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en el PREP solamente le dieron 197, es decir, se le restaron 11 votos.

⁹⁵ A este respecto, López Obrador indicó que por ejemplo en la delegación Benito Juárez en la ciudad de México, donde gobierna el PAN, las listas de representantes de casilla de la CPBT no llegaron a los funcionarios en buena parte del distrito. Esto provocó que la Coalición se quedara sin representantes en más de la mitad de las casillas de dicho distrito, donde precisamente el candidato de la derecha obtuvo la mayor votación en la ciudad; según López Obrador, la CPBT no tuvo representantes en 21 por ciento de las casillas, lo cual les dio un margen holgado para hacer el fraude electoral.

⁹⁶ La primera plana del diario *La Jornada* tiene como titular “Actas en el basurero de Xochiaca”, en su edición del 5 de julio de 2006.

Ese tipo de irregularidades se dieron en todo el país. En Jalisco, entidad tradicionalmente panista desde ya hace algunos años, se le añadieron votos a Felipe Calderón. En el distrito 14, sección 797, casilla contigua, número 1, se le quitó en el PREP un voto a López Obrador y se le añadió uno a Calderón. El fraude hormiga fue evidente.

Debemos decir que Roberto Madrazo, entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Roberto Campa de Nueva Alianza y Patricia Mercado de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, reconocieron antes del 5 de julio la “legitimidad” del proceso electoral, por lo que cualquier inconformidad de López Obrador sería reputada de “desestabilizadora”.

Ahora bien, en el estado de Jalisco, entidad que dio el mayor número de votos al candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, casi 800 mil más con respecto de su adversario Andrés Manuel López Obrador, se documentaron múltiples irregularidades e inconsistencias en el cómputo de las actas electorales, entre las cuales destaca el registro de 290 casillas con el mismo número de votos a favor del abanderado panista; es decir, una casilla básica y hasta tres contiguas reportaron “coincidentalmente” el mismo dato.

La Coalición Por el Bien de Todos denunció el 10 de julio de 2006 que funcionarios de las juntas distritales electorales del Instituto Federal Electoral comenzaron a extraer documentación referente al cómputo de votos, con el argumento de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se las requirió para analizar los juicios de inconformidad interpuestos por la representación de Andrés Manuel López Obrador.

Empero, el representante perredista ante el IFE, Horacio Duarte, estableció que las juntas distritales aún no notificaban al Tribunal de los citados recursos, por lo que se trató de un ardid para extraer información de manera subrepticia.

El legislador dijo que estas acciones se hicieron en Comalcalco, Tabasco, y en algunos distritos de Puebla, donde los propios funcionarios de las Juntas Distritales recolectan la documentación.

La entonces Coalición por el Bien de Todos denunció que más de un millón 600 mil votos en la elección presidencial del pasado 2 de julio carecieron de sustento en boletas electorales (*La Jornada*, 20 de julio de 2006).

De acuerdo con Claudia Sheinbaum Pardo, ex-vocera de la CPBT, esos sufragios representan 3.88 por ciento de la votación total, mientras el cómputo oficial del Instituto Federal Electoral ubicó en 0.58 por ciento la diferencia entre el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, y el de la Coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de errores aritméticos detectados en 72 mil 197 casillas donde, según evidencias documentales, se sumaron de manera ilegal 898 mil 862 sufragios falsos, y del mismo modo se eliminaron artificialmente otros 722 mil 326 votos. En 56 mil 507 casillas se detectó un resultado distinto entre el total de votos más las boletas sobrantes, respecto al número de boletas recibidas para desarrollar la jornada electoral.

Esta irregularidad, que acumula 740 mil 451 votos, se obtuvo al comparar la base de datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con las actas de casillas elaboradas al final del escrutinio. Por ese mismo ejercicio, se detecta la existencia de 363 mil 925 sufragios eliminados a la hora de elaborar las actas de cómputo.

Lo anterior, indicó Sheinbaum, sólo puede explicarse con el hecho de que al llenar las actas se aumentan y disminuyen artificialmente los sufragios, los cuales suman, sólo por esa vía, un millón 104 mil 376.

En un segundo ejercicio de comparación, los integrantes de la Coalición encontraron 6 mil 739 casillas, casi 199 mil 500 votos, donde la suma de votos obtenidos por los cinco partidos, más los no registrados y los nulos, no es igual al número de boletas depositadas, cuando necesariamente tienen que ser iguales.

Asimismo un tercer error, estableció la vocera, consiste en que la votación total más las boletas sobrantes no es igual a la lista nominal más diez (este número representa las boletas adicionales que se envían para los representantes de los partidos); o el caso inverso, que sucede cuando el número de las boletas depositadas más las sobrantes es

menor a la lista nominal. Esto ya lo hemos expuesto con las igualdades que establece Sagardoa.

Esta irregularidad se detectó en 8 mil 740 casillas, de tal manera que hay ahí 258 mil 822 votos adicionales que no tienen sustento e implican una alteración en las actas, y así se reportaron al PREP; pero en realidad no tienen sustento en boletas.

Ubicó además otras 211 casillas, 58 mil 525 votos, que también carecen de sustento. Según las pruebas de que dispuso la Coalición, sólo en 42 mil 768 casillas todos los datos coinciden.

Mencionó lo que llamó un “segundo nivel” de alteración de la voluntad electoral, que consiste en una diferencia entre los resultados capturados en la base de datos del cómputo distrital y los reportados en las actas de casillas. Por esa comparación se encontró que el PAN aumentó 12 mil 811 votos en 828 casillas, y la coalición 2 mil 663.

Sheinbaum expuso también el comportamiento de la votación en aquellos casos del Distrito Federal y Querétaro donde se abrieron los paquetes electorales. En promedio, por cada paquete abierto y contado voto por voto en esos lugares, la Coalición por el Bien de Todos ganó 0.47 sufragios y el PAN perdió 1.64, por lo que la diferencia a favor de la Coalición se amplió 2.11 votos por casilla abierta.

Claudia Sheinbaum también se refirió a las casillas donde hubo una participación mayor o igual al 75 por ciento. El promedio nacional de la votación fue de 58.55 por ciento, las cuales sumaron 4 mil 342 con una votación reconocida para el PAN de 763 mil 742 votos, y de 569 mil 261 para la coalición encabezada por el PRD.

La fuerza política que postuló a Andrés Manuel López Obrador considera que el comportamiento en esas casillas fue atípico, pues mientras en la votación total la diferencia reconocida entre los dos candidatos fue de 0.58 por ciento, en aquellas casillas con alta participación, la diferencia es de 14.6 por ciento; es decir, es superior en 24 veces a la media nacional y representa el 80 por ciento (194 mil 481 votos) de los sufragios que representan la diferencia final.

En otro caso, un paquete con 11 boletas electorales de los distritos 6 y 10 con sede en Zapopan, entregadas de forma anónima en las oficinas del representante de la Coalición por el Bien de Todos ante el IFE en Jalisco, fueron mostradas como pruebas adicionales que se sumaron a la impugnación que en la entidad fue presentada para la elección presidencial.

Por otra parte, el representante en Jalisco de las redes ciudadanas, José Zamarripa, pidió al cardenal Juan Sandoval Íñiguez que se abstuviera de hacer pronunciamientos políticos, cuando se pronunció en contra del conteo voto por voto (*La Jornada*, 25 de julio de 2006).

Recuento parcial del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación

Una cifra no precisada, pero que ronda los mil votos, fueron restados a Felipe Calderón en los 15 distritos electorales federales de Jalisco, que estuvieron a revisión al terminar la primera jornada del conteo ordenado por el TEPJF y que incluye 2 mil 705 casillas en la entidad, casi una de cada 3 de las que se recuentan en el país (*La Jornada*, 10 de agosto de 2006).

El representante enviado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD para el conteo de votos en Jalisco, Jesús Zambrano, estableció que al término de la primera jornada en todos los distritos, sin excepción, se encontraron con paquetes abiertos bajo justificaciones tan insultantes como la que dio en Ciudad Guzmán el presidente de la Junta Distrital, quien dijo que “el calor había reventado las cintas” en la mayoría de los 145 paquetes electorales de esa demarcación.

Zambrano estableció que en el distrito II, con cabecera en Lagos de Moreno, uno de los más votados a favor del PAN, aproximadamente el 92 por ciento de todos los paquetes estaban abiertos. Otra de las observaciones que hicieron los perredistas es que en el distrito III hay casillas en donde Felipe Calderón gana 10-1 a López Obrador, y hay boletas marcadas con el mismo trazo.

En el distrito VIII con cabecera en Guadalajara se encontró que 80 votos que estaban asignados al Partido Nueva Alianza (Panal) en realidad habían sido a favor de la Coalición por el Bien de Todos.

En el distrito V con cabecera en Vallarta se descubrió que igualmente se habían restado 75 votos a López Obrador, y también fueron asignados al Panal. Zambrano denunció que en el distrito III los representantes del TEPJF mostraron una actitud indolente e intransigente.

Samuel Romero Valle, representante del PRD denunció que en el distrito electoral federal III, con cabecera municipal en Tepatitlán de Morelos, se detectaron irregularidades en cuando menos el 80 por ciento del total de paquetes electorales abiertos.⁹⁷

Sin embargo, el más grave registrado hasta ese momento fue el comprendido en la casilla 7 básica del municipio de Acatic, en donde se encontró una alteración del acta de manera importante: a Acción Nacional le dieron tres veces más de los que obtuvo.

El PAN tenía contabilizados 349 votos a favor, pero luego de este recuento se constató que únicamente le correspondían 11; es decir, existía una diferencia de 233 sufragios. En el conteo de las primeras cinco urnas ya se había encontrado una alteración grave que modifica el resultado; en las otras han sido errores aritméticos menores.

Entretanto, en el distrito VII con cabecera en Tlaquepaque se encontraron anomalías en las primeras 50 casillas de las 202 que se contabilizarían hasta el domingo 13 de agosto de 2006.

El resultado del corte parcial registrado hasta las 10 de la noche detectó que el abanderado del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, tenía 19 votos de más, razón por la cual las autoridades electorales procedieron a descontarlos, en tanto que a López Obrador se le sumaron 7 sufragios que no se habían tomado en cuenta al cierre de la jornada electoral del 2 de julio.

En el segundo día de recuento, en la Junta Distrital VII con cabecera en el municipio de Tonalá, la Coalición por el Bien de Todos

⁹⁷ La primera plana del diario *La Jornada* tiene como titular “Irregularidades al por mayor al iniciar el conteo.”

recuperó 90 sufragios en una sola casilla, la 2709 contigua 8, que por “descuido” no se capturaron, mientras que al entonces abanderado del PAN, Felipe Calderón, se le descontaron 50 sufragios de la casilla 2673 contigua 1, que de un plumazo se le habían añadido.

En un caso más, al término del recuento de las 246 casillas que se escrutaron en el III distrito electoral federal, con cabecera en Tepatitlán de Morelos, datos preliminares de la Coalición por el Bien de Todos indican que se descontaron 600 votos que habían sido otorgados durante el conteo del 5 de julio al candidato presidencial del PAN.

Estas irregularidades se dieron principalmente en los municipios de Acatic, Jalostotitlán, Arandas y Tepatitlán (*La Jornada*, 12 de agosto de 2006). Samuel Romero Valle indicó que son votos encontrados principalmente en casillas de estas localidades; se trata de 10, 15 o 20 votos que contabilizaron de más para este candidato.⁹⁸

Ahora bien, el 16 de agosto de 2006 fue publicado en algunos diarios de circulación nacional un panfleto pagado por el Partido de la Revolución Democrática, en donde se establece que:

El recuento de casillas, ordenado por la Sala Superior del TEPJF en el 9% del total de las instaladas el 2 de julio, prueba

⁹⁸ Diversos intelectuales entregaron a la oficina de Transparencia del IFE una solicitud para tener acceso a las boletas electorales, incluidas las sobrantes e inutilizadas, los votos nulos y los alcanzados por los partidos y coaliciones en la elección presidencial. El escrito fue firmado, entre otros, por Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Bertha Chaneca Maldonado, Daniel Giménez Cacho, Cecilia Suárez, Jesusa Rodríguez, Hugo Gutiérrez Vega, Alejandra Moreno Toscano, David Huerta Bravo, Olga Harmony y Luis Mandoki. En el documento se establece que el IFE está obligado a acatar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con base en su propio reglamento, y destacan que no se están solicitando datos personales de los electores, como podrían ser los contenidos en la lista nominal. De igual forma subraya el escrito que la violación de la voluntad ciudadana expresada en las urnas constituye un grave atentado a un derecho cívico fundamental expresado en nuestra Carta Magna, y que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales.

plenamente que en la elección presidencial hubo un operativo de defraudación, organizado, masivo y sistemático para usurpar la voluntad ciudadana. Se demostró que hay cientos de miles de votos introducidos y sustraídos ilegalmente en las urnas y, además, miles de actas falsificadas que cambian el resultado real de la votación emitida por los ciudadanos.

I. Información del recuento y sus resultados

En 3 873 de las casillas (33%) fueron introducidos ilegalmente (taqueo) 58 mil 056 votos; es decir, un promedio de tres votos por casilla en el total de las recontadas. Por sí sola esta defraudación modifica completamente los resultados electorales.

En 3 659 casillas (31 por ciento) fueron retirados ilegalmente 61 mil 688 votos. Es decir, un promedio de 3.2 votos por casilla en el total de las recontadas. Por sí sola, esta defraudación modifica completamente los resultados electorales. Es decir, el número total de casillas en donde ilegalmente se introdujeron y sustrajeron votos, es 7 mil 532, el 65 % de las casillas recontadas, y significan 119 mil 744 votos alterados.

Esta situación confirmada y cuantificada en el recuento realizado por el Tribunal, no es reparable ni con el recuento mismo, pues el Tribunal no puede contar votos robados, ni identificar los votos introducidos en la urna ilegalmente, de aquellos que genuinamente depositaron los ciudadanos, pues se trata de las mismas boletas que imprimió el IFE y que modifican, evidente y ampliamente, el resultado de la elección.

En la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral se establece en su artículo 75, las causales de nulidad de casillas: k). Existir irregularidades graves plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Se prueba como un efecto secundario de la indagatoria que hubo falsificación dolosa de las actas de escrutinio, al asentar en miles de

ellas un número de votos que claramente no correspondían a la voluntad de los electores. Si bien hubo errores humanos en el escrutinio, no son estos los que modifican el resultado.

Hubo variación en los datos en el 81% de las actas de escrutinio recontadas. La votación obtenida por López Obrador prácticamente no tiene variación pues sólo perdería 43 votos en el total de las actas recontadas. Por el contrario, resulta evidente que existió una falsificación masiva y deliberada para beneficiar a Felipe Calderón, pues en el papel se habían registrado a su favor 13 mil 335 votos que nunca existieron en 4 969 casillas, en el 43% dando un promedio de 1.14 votos por casilla recontada. Es decir, que lo que el PAN ha llamado “errores humanos comprensibles” beneficiaron 5 000% veces más a Felipe Calderón que a López Obrador (no se incluyen los votos reservados por el Tribunal).

3. Se prueba que los paquetes electorales han sido abiertos y violentados después del Cómputo Distrital.

En prácticamente todos los distritos donde se realizó el recuento se encontraron decenas de miles de paquetes sin sellar y centenares de miles de los sobres que contienen la votación electoral, con sellos violados y sin firmas, e incluso paquetes electorales desaparecidos. Es decir, hubo manipulación ilegal de los paquetes, los sobres y las boletas electorales antes, durante y después del cómputo distrital.

4. Se prueba que el Consejo General del IFE y los Consejos Distritales actuaron con dolo al ser omisos en el cumplimiento de sus obligaciones legales y al abusar de su autoridad. Esto es evidente y explícito en la resolución judicial del TEPJF que ordena un nuevo cómputo parcial. Los funcionarios del IFE impidieron deliberadamente que se cumpliera la Constitución Política de la República y con el Código Federal de Procedimientos Electorales, impidieron con premeditación, alevosía y ventaja la aplicación de la ley para encubrir las evidentes y señaladas alteraciones al proceso electoral.

II. Impacto en la elección presidencial del fraude electoral

Sostenemos que el recuento parcial realizado por el TEPJF es insuficiente para garantizar el principio de certeza en la elección presidencial consagrado en el artículo 41 de nuestra Constitución.

Sin embargo, lo consideramos un extraordinario botón de muestra de lo que ocurrió en la elección en el ámbito nacional. Los resultados de las diligencias judiciales practicadas, proyectadas al ámbito nacional, mostrarían la magnitud del fraude: Felipe Calderón obtuvo en el ámbito nacional, producto de la introducción fraudulenta de 651 538 votos en las casillas instaladas, además de 149 mil 653 votos por la falsificación de los resultados en las actas de casilla. A López Obrador, por el contrario, se le eliminaron cerca de 692 299 votos como resultado de los votos extraídos ilegalmente. Esto significa que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección del 2 de julio con cerca de 1.5 millones de votos. La demanda del conteo voto por voto fue sensata, legal, posible y necesaria.

El entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, argumentó las razones, según él, del porqué es improcedente la petición de que el máximo tribunal investigue, como lo han solicitado varias personas en lo individual, la presunta violación grave al voto público en la reciente elección presidencial. Señaló que el artículo 97 Constitucional es “totalmente anacrónico, obsoleto” y está “realmente redactado con los pies” (*La Jornada*, 17 de agosto de 2006).

El 16 de agosto de 2006, Claudia Sheinbaum Pardo, vocera de la Coalición Por el Bien de Todos, entregó a *La Jornada* un DVD con evidencias de violación de paquetes electorales en siete distritos del país.

Las escenas, disponibles en la edición electrónica de ese diario (www.jornada.unam.mx/ultimas) muestran paquetes electorales carentes de los sellos oficiales que exige la ley; sobres de la elección presidencial desgarrados o vueltos a cerrar con cinta adhesiva; boletas electorales que no fueron dobladas para ser introducidas por la ranura de las urnas y, coincidentemente, marcadas en favor del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, entre otras

muestras de lo que Sheinbaum y muchos analistas califican de “fraude masivo”.

La vocera reiteró que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara los resultados de 7 mil 532 casillas en las que el recuento ordenado por los magistrados probó que hubo alteraciones graves, se confirmaría que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones del 2 de julio de 2006.

Cabe mencionar que los distritos electorales donde fueron videograbadas las infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) son el 12 de Veracruz, el 3 de Durango, el 1 de Morelos, el 6 de Baja California, el 8 de Nuevo León y el 2 y el 3 del estado de México.

Pero prácticamente en los 149 distritos donde el Tribunal ordenó el recuento parcial de votos, estableció la vocera, se encontraron paquetes abiertos, sobres desgarrados, votos de más que fueron *taqueados*, votos de menos que le robaron directamente a la CPBT y además existe la videograbación de bodegas manoseadas.

Hasta ese momento, Claudia Sheinbaum estableció: “es sintomático el estado de indefensión en que se encuentra la ciudadanía ante el hecho de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade, adscrita a la Procuraduría General de la República) no haya hecho ningún comentario acerca de este episodio, ni procedido a actuar legalmente contra los *mapaches* que en el video son fácilmente identificables”.⁹⁹

Adicionalmente, en el panfleto publicado por el Grupo Parlamentario del PRD el día 27 de agosto de 2006 en algunos diarios de circulación nacional, se puede apreciar lo siguiente:

⁹⁹ El periodista Guillermo Zamora expresa que Vicente Fox utilizó al Estado mexicano para aliarse con los grupos de poder fáctico, en una confabulación siniestra para cerrarle el paso a como diera lugar a AMLO en lo que define como un asalto al poder desde el poder mismo. Zamora plantea que el fraude existió y había una decisión tal que bajo ninguna circunstancia habrían dejado ganar a López Obrador. Señala que a pesar de las evidencias, Felipe Calderón se apoderó del gobierno y su primera acción fue militarizar al país, apoyándose en las bayonetas.

1. Realizado el 100% del recuento parcial voto por voto, la Coalición acreditó ante 146 jueces y magistrados designados por el TEPJF lo siguiente:
2. Resultado A: 7 532 casillas alteradas. Al comparar boletas recibidas menos boletas sobrantes en contra del número de votos emitidos, 2 de cada 3 casillas fueron alteradas. 7 532 casillas que no coinciden en votos y listados (64%). 1 de cada 3 casillas tuvo votos de más; 3 873 casillas (33%). 1 de cada 3 casillas tuvo votos de menos, 3 659 casillas (31%). Se ordenó la revisión en 11 839 casillas, al final la cifra revisada fue de 11 720 casillas.
3. Resultado B: 8 428 casillas alteradas. Al comparar los votantes en la lista nominal contra la votación total en el recuento ordenado. Siete de cada 10 casillas alteradas. 8 428 casillas que no coinciden en votos y listados (72%), 2 de cada 5 casillas tienen votos de más, 5 037 casillas (43%), 1 de cada 3 casillas tiene votos de menos. 3 391 casillas (29%).
4. Conforme a la ley, tesis y jurisprudencia del TEPJF, las 8 428 casillas son de anulación obligada. En ese caso el PAN pierde 1,389 653 votos y la Coalición pierde 618 933 votos, lo que elimina la presunta diferencia de 243 934 votos a favor de Calderón y da el triunfo por 526 786 votos a López Obrador.

Pruebas del fraude electoral

1. Votos sin sustento en boletas y votos eliminados.

De acuerdo con la base de datos del PREP y actas que tiene en su poder la Coalición Por el Bien de Todos, en más 72 197 casillas existen “errores aritméticos” que significan votos computados que no están respaldados por votantes, o votos que fueron eliminados.

En esas casillas el total de votos falsos sumados de manera ilegal son 898, 862 y los que fueron eliminados son: 722 326 votos; es decir, hay 1 621 188 votos que fueron eliminados o sumados de manera ilegal.

Esta información proviene de comparar la información del total de boletas por casilla, su destino y el número de votantes, la cual está excluida de la base de datos del cómputo distrital y sólo aparece en el PREP y en las propias actas de casilla de escrutinio y cómputo.

Cabe recordar que las dos actas de donde proviene la información para las bases de datos del PREP y cómputo distrital son producto del mismo acto al cierre del escrutinio y cómputo de la elección de presidente de la República. El acta de escrutinio y cómputo es de donde proviene el cómputo distrital y el acta del PREP es una copia de la primera.

Recordemos que la diferencia, que el IFE informó entre Calderón y López Obrador es de 0.6%, y los votos indebidamente eliminados o sumados representan el 3.9% de la votación total.

2. Votos agregados y eliminados ilegalmente en la base de datos del cómputo distrital que no corresponden con las actas de casillas.

Existe al menos un segundo nivel de alteración de la voluntad popular visible y demostrable. Es decir, además de la alteración registrada en las actas de escrutinio y cómputo arriba señalada existe una defraudación adicional, ya que los resultados capturados en la base de datos del cómputo distrital son diferentes a lo reportado en las correspondientes actas de casilla. En una muestra de 616 actas de escrutinio y cómputo en la base de datos de cómputo distrital al PAN se le aumentan artificialmente 616 votos y a la Coalición por el Bien de Todos se le disminuyen de manera ilegal 8 382 votos, lo que amplía la diferencia a favor del PAN de manera artificial en 16.5 votos por casilla. Esto significa, que en 616 casillas se aumentó la diferencia entre el PAN y la Coalición en 10 156 votos que no tienen sustento en actas, ya que alteraron la base de datos del cómputo distrital.

3. Otras irregularidades en el resultado de la elección.

a). Casillas en donde sólo tuvieron representantes el PAN y el Panal.

De acuerdo con los cómputos distritales del IFE, Calderón obtuvo el 35.89% de la votación y AMLO el 35.31%. Resulta increíble que en las casillas donde sólo tuvieron representantes el PAN y el Panal el

resultado de la votación, independientemente del estado donde haya ocurrido, es favorable por casi el doble al PAN.

Esto ocurre en 3 942 casillas cuyo resultado de la votación es: Calderón: 675 304 y AMLO 370 709. Es decir, en tan sólo estas casillas existe una diferencia favor del candidato del PAN de: 304 595 votos. Situación determinante en una sola elección donde el resultado entre Felipe Calderón y López Obrador es de 243 934 votos. En comparación, en las 854 casillas donde no hubo representantes de ningún partido, la CPBT resultó ganadora con un 44.96%, contra 34.27% del PAN.

b). Casillas donde diputados y senadores de la Coalición tienen más votos que AMLO.

Todas las encuestas de opinión sostuvieron que AMLO sacaría más votos que los candidatos de la Coalición al Congreso. En el resultado final así ocurrió. Sin embargo, hay 21 177 casillas donde la votación de AMLO es menor a la obtenida por candidatos al Congreso de la Unión por la Coalición.

En 9 312 casillas los candidatos a diputados de la Coalición obtienen 72 876 votos más que AMLO y en esas mismas casillas los votos nulos representan el 3.21%, el doble que la media nacional. En este mismo sentido, en 11 865 casillas los candidatos a senadores de la Coalición tienen 108 mil 186 votos más que AMLO, y en esas casillas el porcentaje de votos nulos es de 2.83%. Esta situación es completamente atípica y resulta determinante en el resultado nacional, pues la diferencia entre Calderón y López Obrador es de tan sólo 0.58%.

c). Casillas donde la participación ciudadana es mayor o igual al 75%, favorecen inexplicablemente al PAN.

La participación ciudadana en la votación del 2 de julio fue en promedio de 58.55%, de acuerdo con la base de datos del cómputo distrital. Si consideramos las casillas cuya participación es mayor o igual al 75% de la participación ciudadana, resultan ser 4 342 casillas, cuya votación para el PAN es de 763 742 votos y para la Coalición 569 261 votos.

Es decir, en estas casillas (17% arriba de la media nacional) la diferencia en la votación entre el PAN y la Coalición es claramente atípica, pues mientras en la votación total la diferencia es 0.6% entre ambos partidos, en estas casillas es del 14.6%; es decir, 24 veces mayor a la media nacional y representa el 80% (194 481 votos) de los votos de la diferencia dada a conocer por el IFE. Más impresionante aún es que estas casillas tienen una distribución amplia en las 32 entidades de la República.

d). Casillas donde entre los cómputos del PREP y distrital, el PAN gana votos y la Coalición pierde.

Al revisar las bases de datos donde el PAN aumenta su votos entre los datos del PREP y los del cómputo distrital, se encuentra que esto ocurre en 828 casillas computadas, cuyo resultado es que el PAN gana 10 148 votos. Por otro lado, al revisar las bases de datos donde la Coalición por el Bien de Todos disminuye sus votos entre los datos del PREP y lo del cómputo distrital, se encuentra que esto ocurre en 742 casillas computadas, cuyo resultado es que la Coalición pierde 15 533 votos.

Esta situación es inexplicable y esto genera una falta de certeza en los resultados de la votación, ya que las dos actas de donde proviene la información para las bases de datos del PREP y el cómputo distrital, son producto del mismo acto al cierre del escrutinio y cómputo de la elección de presidente de la República.

4. Casillas que se abrieron durante el cómputo distrital

La información que dio el IFE sobre las casillas que fueron abiertas durante el conteo distrital, no sólo es contradictoria respecto a la cantidad, sino que es al menos parcial, porque no señala que en la mayoría de los casos no se contó voto por voto, sino sólo se abrieron los paquetes porque las actas venían adentro. En el caso del Distrito Federal y del distrito III de Querétaro tenemos la certeza que se abrieron los paquetes para contar voto por voto.

En el DF hablamos de 201 casillas donde, al contar voto por voto, la Coalición obtuvo 95 votos más y el PAN disminuyó 323 votos respecto a lo que reportaba el PREP.

En el Distrito III de Querétaro, donde incluso hay prueba de un video del conteo voto por voto de la casilla 740 básica, se contaron nuevamente los votos de 15 casillas, y en ese caso el PAN disminuyó 212 votos y la Coalición tan sólo 1 voto.

Por añadidura, el trabajo de José Antonio Crespo (2006) resulta igualmente muy interesante, pues indica que no se requiere de un fraude colosal para modificar el resultado de las elecciones, pues bastaría con unas cuantas anomalías, dolosas o no, para ello, según la famosa “regla de oro” de la democracia, la cual establece que por un voto se pierde o se gana en buena lid.

No obstante, se omite que si por un voto se pierde o se gana, basta uno solo que sea irregular, de origen incierto, espurio o que no se hubiera considerado en el cómputo total, para generar incertidumbre sobre quién ganó, pues en tal caso no es posible conocer con precisión la voluntad del electorado.

Crespo apunta que el 82% de los paquetes que por ley debieron haber sido abiertos y recontados, quedaron sin ser revisados ni por el IFE ni por el Tribunal.

Cuadro 15
Resumen de “errores aritméticos”

En un total de 72 197 casillas	Votos sin sustento en boletas	Votos eliminados
Votación total más boletas sobrantes diferentes a boletas recibidas	740 451	363 925
Votación total no es igual al número de boletas depositadas	123 860	75 605

Votación total más boletas sobrantes no es igual a la lista nominal más 10	34 551	224 271
Boletas depositadas más boletas sobrantes menores a la lista nominal más 10		58 525
Total	898 862	722 326

Fuente: Grupo Parlamentario PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión.

En este punto estamos de acuerdo con Crespo en que con el análisis de las actas no se puede saber quién ganó. Sin embargo, no estamos de acuerdo con este autor al afirmar que el “fraude electoral de 2006 es un mito”.¹⁰⁰

Por supuesto que no podemos decir que existió fraude sólo con el análisis de las actas, pues éstas sólo revelan, en este estudio, que el número de votos irregulares o inciertos fue superior a la diferencia entre el “primero” (Felipe Calderón) y el “segundo” (López Obrador) lugar de la contienda.

Sin embargo, ya hemos analizado la opinión de otros muchos autores que apoyan la tesis, no la hipótesis, del fraude electoral de 2006, pues hay muchas formas de evidencia empírica (no sólo las actas) que la comprueban.

Obrador estableció también que los que ordenaron y operaron el fraude electoral contaron con el apoyo de algunos intelectuales, quienes en artículos y desplegados argumentaron que todo había sido legal y legítimo; es decir, que no vieron o que prefirieron callar y obedecer a la versión oficial, por convenir así a sus intereses.

Resulta asombroso y demasiado cínico que el ex presidente del TEPJF, José Fernando Ojesto Martínez, haya declarado el 20 de junio de 2007 que: “Abrimos los paquetes, los contamos, vimos las actas, los

¹⁰⁰ Igualmente Crespo afirma que el “triunfo inobjetable de Calderón” es también un mito, y que esta afirmación no se puede desprender del análisis de las actas electorales; estamos también de acuerdo.

informes; y la verdad, la organización electoral está fuera de sospecha. Si alguien está bajo sospecha es la calidad cultural del pueblo de México, con lo doloroso que es esto. No sabe leer, no sabe escribir y menos sumar,” como si este asunto se redujera a analfabetismo y/o con el adjetivo funcional.

O bien que, a un año de la elección presidencial Manuel Espino Barrientos, ex dirigente nacional del PAN, niegue que ese partido político haya orquestado la guerra sucia contra López Obrador (por supuesto que no va a decir lo contrario). Afirma que la provocación surgió del tabasqueño y alaba la labor de Calderón en el Ejecutivo.

De igual manera, resulta incoherente la calidad académica de Soledad Loaeza con sus interpretaciones parciales y poco objetivas. Ella escribió que “el próximo lunes los panistas celebrarán el aniversario de la elección presidencial que llevó al poder a Felipe Calderón. Los lopezobradoristas, en cambio, habrán de rememorar lo que consideran un fraude, una traición, un robo, una comedia; en fin, un acontecimiento que han llamado de muchas maneras, menos por su verdadero nombre: la derrota de su candidato presidencial” (*La Jornada*, 28 de junio de 2007).

“Ni los señalamientos de la Corte de la injerencia indebida del presidente Fox en el proceso electoral, de las denuncias de supuestas irregularidades y de las atarantadas confesiones del ciudadano Fox, pueden hacernos olvidar que el candidato del PRD cometió errores graves que le costaron votos: no participó en el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales, insultó repetidamente al presidente de la República (que lo era, aunque fuera Vicente Fox), proyectó una imagen de picapleitos que disgustó a muchos y, antes de la elección, manifestó un desprecio notable por las instituciones que despertó inquietud y desconfianza, sobre todo entre las clases medias” (*La Jornada*, 28 de junio de 2007), como si este asunto se redujera también a los supuestos, o no, errores de campaña cometidos por el otrora candidato de la CPBT.

Y preguntamos ahora: ¿qué confianza pueden dar esas instituciones cuando de un plumazo borrarán todo lo construido en cuanto a democracia procedimental se refiere?

Loaeza, efectivamente, tiene un punto de vista acotado o determinado por el grupo socioeconómico al cual pertenece. Nos parece que esto se engarza con lo que Karl Marx apuntaba, en el sentido de que el condicionamiento que ejerce la clase social es concebido en todas las formas de conocimiento.

Sin embargo, Manheim (1893-1947) va un tanto más lejos, pues defendió la idea de que los grupos sociales, y no sólo los económicos, a los que pertenecen los individuos determinan sus puntos de vista sobre el mundo, y que los intelectuales que no pertenecen a ninguna clase social muy precisa y que a menudo muestran itinerarios sociales heterogéneos, tienen un acceso privilegiado a conocimientos más próximos a la verdad; más bien, a la realidad.

Conclusiones

El abstencionismo en México dentro de las elecciones federales organizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) tuvo una tendencia creciente hasta 2006, tanto en elecciones presidenciales como legislativas, y más en estas últimas.

Hemos visto cómo, tanto en el estado de Jalisco como en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se confirma esta tendencia, si bien, gráficamente, con pendientes un poco más bajas en comparación con los resultados nacionales.

Los análisis de Temkin y Salazar; Durand, Sotelo y Cruz han mostrado que el abstencionismo es una forma de reacción político-electoral del pueblo, de los ciudadanos o de la comunidad política hacia los políticos y gobernantes que no cumplen con sus obligaciones del mandar obedeciendo.

Los sufragios de 2003 registraron el índice de abstencionismo más alto del periodo 1991-2006, como un muy probable indicador de la desaprobación de una gran parte del pueblo de México hacia las políticas económicas y sociales, y en general hacia el manejo de la política gestado por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

Ahora bien, debemos dejar bien claro que uno de los objetivos específicos del segundo gran apartado de este capítulo estribó,

además de mostrar la suciedad con la que se manejó todo el proceso electoral en 2006, en que la cifra de votos nulos se incrementó de forma artificial porque, como se logró demostrar en alguna medida, algunos funcionarios electorales dieron como votos nulos un cierto número de votos legítimos a favor del candidato de la CPBT, haciendo crecer así la cifra del llamado “abstencionismo cívico”.

El proceso electoral de 2006 constituyó una operación masiva y coordinada del gobierno foxista, del grupo salinista y de los yunquistas del PAN desde tiempo atrás para subvertir la voluntad del pueblo e impedir la llegada a Palacio Nacional de López Obrador.

Y por ello este fraude no debería sorprender, pues desde la tentativa de inhabilitar a López Obrador en 2004, el régimen se propuso utilizar contra él todos los recursos fraudulentos conocidos e inició una *guerra sucia*, que tampoco encuentra precedentes y que era un causal suficiente para que fuera anulada la elección.

Ésta, la del 2 de julio del 2006, fue una “elección” muy irregular, con casi dos tercios de las casillas con errores aritméticos y con comportamientos en el PREP y el Conteo Distrital muy alejados de un verdadero proceso de captura de datos realizada al azar.

De acuerdo a Sagardoa, Bolívar Huerta, Mochán, Romero y Portillo, los datos fueron ordenados para ser incluidos en el PREP de tal manera que el PAN apareciera siempre de mayor a menor votación. Se eliminaron las primeras casillas capturadas, hasta el primer 10%, y se mandaron a las casillas inconsistentes para no ser mostradas en el resultado del PREP.

La recuperación del PAN a partir del 10% de las casillas capturadas es espectacular y se explica a través de una estructura que se repite periódicamente cada 0.3%, desde el 10% y hasta el 65% de las casillas capturadas.

Del 65% hasta el 75%, y después del 90% de las casillas capturadas hay una tasa de ganancia de la CPBT similar a la que se observa en el primer 10% de las casillas capturadas y eliminadas; del 80 al 90% de las casillas capturadas, se observa una caída muy brusca en la votación para la CPBT, junto con un pico en la votación para el PAN.

Ahora bien, la responsabilidad delictiva de Luis Carlos Ugalde, el individuo designado como presidente del IFE, comenzó al planear la manipulación del padrón junto con el cuñado incómodo de Calderón, Diego Hildebrando Zavala; continuó al no impedir el Consejo General del IFE la injerencia de Fox en el proceso y con la utilización de recursos oficiales e ilícitos a favor del panista y al hacerse sus integrantes los desentendidos ante la *guerra sucia* en los medios, y que culminó con el fraude material y cibernético del 2 de julio.

Las evidencias que aportaron los ciudadanos sobre el padrón alterado, las presiones en las casillas, los viejos y nuevos trucos para anular votos legítimos e inyectar votos inexistentes, falsificar actas y resultados, aunadas a los hallazgos sobre el fraude cibernético, cobran mayor trascendencia cuando se constata que esta operación monstruosa de fraude, denunciada desde hace mucho tiempo en los medios independientes, sólo permitió a Calderón tener en las cifras maquilladas del IFE 243 mil 934 votos más;¹⁰¹ es decir, un poco más de un voto por casilla.

El fraude cibernético del 2 de julio se evidenció cuando las encuestadoras fueron obligadas a callar a las 20 horas, el IFE no informó de su conteo rápido de las 23 horas y un día después publicó maquilladas las cifras del PREP, que debía dar a conocer conforme al artículo 89 fracción I del Cofipe, confirmaron que todo el aparato del IFE elbista-panista estuvo inmerso en este operativo delictivo.

El Consejo General del IFE concluyó su papel fraudulento el miércoles 5, fecha en la que se iniciaban los cómputos distritales, cuando usurpó funciones del Poder Judicial al montar una nueva y fraudulenta operación mediática con un conteo ilegal *fast track* y difundiendo una dudosa sumatoria de casillas, actividades a las que no está autorizado por la ley, y todo ello para imponer la creencia de un supuesto triunfo de Calderón, lo cual no es su función, pues la Constitución es muy clara al respecto.

En esta nueva jornada de fraude no sólo se negaron a los partidos las garantías establecidas en el artículo 247 del Cofipe de poder abrir paquetes y hacer nuevos escrutinios y cómputos, sino que se armó la

¹⁰¹ Cifra del Instituto Federal Electoral. www.ife.org.mx

propaganda de datos no oficiales, cuando es a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no al IFE, a la que compete, según el artículo 99 Constitucional: a) realizar el cómputo final una vez resueltas las impugnaciones interpuestas; y b) formular la declaración de validez de la elección presidencial, aunque ésta no se llevó a cabo, como lo muestran Jenaro Villamil y Julio Scherer Ibarra (2006), pues sólo se dio un “dictamen”.

A todas luces, aquel “dictamen” del TEPJF fue todo un fiasco, y una de las maneras más incoherentes y mal hechas de presentar sus argumentos y, es preciso decir, con el resultado de que el recuento efectuado por el TEPJF fue sólo un circo de suma cero.

Al revisar los resultados de su recuento (cifras que también están disponibles en la página electrónica del IFE), tenemos que la diferencia de la votación panista entre el Cómputo Distrital del IFE y el cómputo final del TEPJF es de 83 357 votos. Vamos, hubo una reducción en esa medida métrica tras el recuento, pero la CPBT también disminuyó sus votos tras el recuento en 73 254; es decir, se registran tasas similares de decremento:

-0.5557% para el PAN; y -0.4964% para la CPBT.

Está claro que la oligarquía neoliberal y los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad decidieron dar un golpe de Estado, acreditando ante los ojos de la nación lo que para muchos ya era un hecho sabido: que la supuesta democracia de nuestro sistema político no pasa de ser una operación cuidadosamente dirigida por los grandes intereses económicos y políticos, tanto nacionales como supranacionales, que desde hace años destruyen el país y que, al votar por Calderón, decidieron la continuidad del régimen neoliberal sin cambio o enmienda alguna.

En otras palabras, la democracia electoral en México es una falsedad (y la siguió siendo con la elección presidencial del 2012, cuando Peña Nieto se hizo de la Presidencia de la República con una compra masiva de votos).

Aun cuando el PRD, sus aliados políticos y su entonces candidato presidencial no representaban una amenaza para el capitalismo, el sistema prefirió no arriesgarse y seguir al pie de la letra el guión que

fue dictado desde Washington y los organismos financieros internacionales.

Debemos anotar que el proselitismo, las elecciones y su resultado se mantendrán en el imaginario colectivo probablemente por 20 o 30 años, sobre todo porque las campañas del miedo transmitidas por la gran mayoría de los medios electrónicos sí funcionaron. Quedará, sin embargo, el recuerdo del engaño y el fraude, la manipulación y la mentira.

El racismo y el clasismo son reacciones a una campaña mediática que alimentó la división debido a posturas socioeconómicas enfrentadas, y eso aún no ha terminado.

En las campañas previas, durante y después de las elecciones fue clara la manipulación, y sus efectos tardarán en desaparecer. Percepción mata realidad, de ahí que la campaña en favor del miedo haya tenido resultados positivos.

La falta de mayores recursos económicos por parte de la entonces *Coalición por el Bien de Todos*, las pugnas entre los dirigentes partidarios y las redes ciudadanas y la debilidad del trabajo en el cuidado de las casillas y la defensa del voto, favorecieron el trabajo de los *mapaches* blanquiazules, encabezados por la otrora líder “vitalicia” del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

Debemos decir que en la campaña negra desatada en los medios de comunicación masiva oficialistas (aunque parezca pleonismo) se manejaron asuntos económicos con los cuales se pudiera engañar a la ciudadanía, pues también se explotó, además del clasismo y el racismo, el egoísmo, con el cual se advertía a los ciudadanos que perderían su estatus, ya fuese real o imaginario.¹⁰²

En resumidas cuentas, el castigo ciudadano al gobierno de Fox se manifestó en alguna medida con el abstencionismo electoral de casi el

¹⁰² Mucha gente que se creyó inserta en las clases medias o altas, y que imagina tener cierto estatus tanto social como económico, indica (en pláticas de café) que los lopezobradoristas son una bola de “nacos”, “jodidos”; que mejor “se pongan a trabajar” y que están ahí por “acarreados” y por “no tener nada que perder”. “Qué bueno que no ganó López Obrador,” pues haría un “país socialista” y “que nos llevaría a la crisis”.

60% en el 2003, y con la disminución de la bancada del PAN en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.¹⁰³

A partir de ahí se prendieron los focos rojos en Los Pinos y, pasando por el desafuero, se llegó a la decisión de jugar la última carta de Fox y de la oligarquía conservadora en el poder para derrotar a López Obrador. ¿En qué forma?: por la vía del fraude electoral.

En otras palabras, los mexicanos transitamos del castigo ciudadano a los resultados del gobierno de Fox, a través del abstencionismo en el 2003, al fraude electoral del 2 de julio del 2006.

Este acontecimiento fue el gran parteaguas para que el país cayera en una gran crisis de inseguridad, violencia y derramamiento de sangre a la llegada del usurpador Felipe Calderón Hinojosa y su llamada “guerra contra el narcotráfico”, continuada (aunque no en el discurso) por su sucesor Enrique Peña Nieto, quien también se hizo de la silla presidencial con un fraude electoral emanado de la compra masiva de votos, y es él quien ha sumido al país en una mayor violencia, terrorismo de Estado (Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, entre otras atrocidades más) y una profundización del modelo neoliberal monetarista que ha puesto al país en vilo.

Referencias bibliográficas

- Buendía, J. (2002). Determinantes de participación electoral.”En *Deconstruyendo la ciudadanía. Avances y retos de la cultura democrática en México*, Segob-SEP-IFE. México, Ed. Porrúa.
- Crespo, J. A. (2006). *Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana*, México, Ed. Debate.
- Durand Ponte, V. M. (2004). *Ciudadanía y cultura política, México, 1993-2001*. México, Siglo XXI Eds.
- El Internacionalista* (2006). *Análisis forense de procesos electorales, anomalías numéricas*. www.internacionalista.org

¹⁰³ Aunque los votos no se transforman directamente en escaños.

- Hollín, N. (2006). Académicos mexicanos insisten en un presunto fraude electoral, *El Mensajero*: [www. elmensajero.com](http://www.elmensajero.com)
- López Obrador, A. M. (2007). *La mafia nos robó la presidencia*. México, Ed. Grijalbo.
- Pliego, F. (2007). *El mito del fraude electoral en México*. Ed. Pax.
- Salazar, R. y Benjamín, T. Y. (2004). *Abstencionismo, escolaridad y confianza en las instituciones. Las elecciones federales de 2003 en México*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, México.
- Sotelo Valencia, A. (2002). *6 de julio: las elecciones en México de cara al abstencionismo*, [http/ /www.rebelión.org/internacional](http://www.rebelión.org/internacional).
- Sagardoa, J. (2006). *El verdadero resultado de la elección presidencial*, www.astillero.tv/desacargas/
- Villamil J. y Scherer Ibarra, J. (2007). *La guerra sucia de 2006*, México, Ed. Grijalbo.

Especulaciones aventuradas sobre los egresados universitarios y el mercado laboral

Wietse de Vries Meijer

“The average Yaleman, class of ‘24
Time Magazine noted once,
commenting in *The New York Sun*,
“makes 25,111 a year.”
Well, good for him!
Duff, 1954

Resumen

La relación entre el mercado laboral y los titulados universitarios está llena de especulaciones. Éstas se basan principalmente en una gran ausencia de información, ya que no existen estudios sistemáticos sobre el tema. Las especulaciones se dividen básicamente en dos campos: para la mayoría de los conocedores del tema, el estudiante ideal sigue siendo aquel que se dedica de tiempo completo a los estudios, produciendo tasas más altas de graduación y éxito en el mercado. Para un grupo más pequeño, pero más escéptico, lo es el caso contrario: los estudiantes que trabajan tienen buen desempeño durante sus estudios y más éxito en el mercado laboral. En este estudio comparamos a los dos grupos.

Palabras clave: mercado laboral, graduados, tasa de graduación, tiempo completo

Abstract

The relationship between the labor market and graduates is mired with speculation. Much of this is due to an enormous lack of knowledge, as very few systematic studies on the topic exist. Speculations are divided mainly into two camps: for the majority of pundits, the ideal student is still someone dedicated full-time to his studies, leading to higher graduation rates and success in the labor market. For a smaller group of skeptics, the contrary is the case: students who work have a good performance during their studies and more success in the labor market. In the study we compare both groups.

Keywords: labor market, graduates, graduation rate, full-time

Introducción

A BUNDAN las mentiras alrededor de la educación superior. Pero un ámbito particular, que trataremos aquí, concierne a la relación que se da entre la universidad y el mercado laboral. Es éste un tema que está rodeado por una gran cantidad de mentiras, mitos y especulaciones aventuradas. El aspecto cualitativo depende del punto de vista.

En una famosa declaración, Mark Twain (1906) postuló que había tres tipos de mentiras: *lies, damned lies, and statistics*, observación que adjudicó a Benjamin Disraeli (Twain, 1906). Más adelante, Darrell Huff (1954) enseñó cómo mentir con estadísticas, y su obra empieza con la observación asombrosamente precisa sobre el ingreso promedio —de 25 111 dólares al año— de los graduados de Yale que aparece al principio.

También Best (2001) postula que existen mentiras y vicisitudes tan graves como las estadísticas. En cambio, los historiadores tienden a ser más apaciguadores, al hablar de ‘especulaciones aventuradas’ (Schama, 1992).

Sea como sea, alrededor de la relación entre la universidad y el mercado laboral giran una serie de mentiras, estadísticas dudosas y

especulaciones aventuradas. Analizaremos en este capítulo varias de ellas.

El dudoso manejo de los datos

El manejo poco confiable de datos está presente en muchos ámbitos de la educación superior. Ya en 1959 Eric Ashby planteó lo siguiente:

“Sesudos académicos, que no decidirían sobre la forma de una hoja, sobre el origen de una palabra o sobre el autor de un manuscrito sin una concienzuda recopilación de evidencias, toman decisiones sobre políticas de admisión, tamaños de las universidades, número de alumnos por profesor, contenidos de los cursos y cuestiones similares basándose en dudosas suposiciones, datos fragmentarios y meras intuiciones. Aunque dedicados a la búsqueda del conocimiento, los universitarios han declinado hasta hace poco buscar el conocimiento sobre ellos mismos.” (Ashby, 1959)

Es preciso tener en mente estas observaciones cuando hablamos de la educación superior y de las políticas de reforma acaecidas en las últimas décadas. Cuando en 1989 se inicia la reforma de las universidades mexicanas, se carecía de datos confiables sobre el número de estudiantes y académicos (Gil, 2000). Aun en ausencia de datos precisos, los distintos gobiernos formularon políticas diferentes en aras de mejorar el sistema.

Ahora bien, aunque este fenómeno está presente en muchas iniciativas para formar doctores o en las constantes reformas curriculares, se hace particularmente notorio en el ámbito de la relación entre la universidad y el mercado laboral.

Desde que inició la masificación de la educación superior en los años sesenta del siglo pasado (Trow, 1974), han aumentado las especulaciones de que algo anda mal en la relación entre la universidad y el mercado laboral. La conjetura prevaleciente afirma que la universidad no prepara adecuadamente a sus estudiantes, mismos que al egresar enfrentan serios problemas para encontrar trabajo.

El discurso de diferentes instancias oficiales incluso muestra evidencias de bipolaridad (De Vries y Navarro, 2011), ya que por un lado se plantea que la creciente matriculación de estudiantes es crucial para el avance socioeconómico de los países, o para alcanzar la “sociedad del conocimiento” (Machin y McNally, 2007; Rodríguez, 2010); mientras por otro lado las mismas instancias señalan que el creciente número de estudiantes conlleva una tasa de desempleo progresivamente mayor.

Cabe reparar aquí en que, desde sus inicios, la universidad ha estado rodeada por debates sobre su función social. Las primeras universidades (Bolonia, Salamanca, Oxford y Cambridge) nacieron como iniciativas de familias *bien* para educar a sus hijos; ahí los profesores eran contratados directamente por esas familias, en un esfuerzo por reemplazar la educación en casa por algo más organizado y colectivo.

El siglo XIX fue testigo de disputas acerca de la función principal de la universidad: ¿era su rol principal convertirse en un lugar para la investigación científica, como proponía Humboldt en Alemania?, ¿o su papel consistía en proveer una preparación general para formar a una persona educada, como proponía Newman en la Gran Bretaña? (De Vries y Slowey, 2012).

Sin embargo, básicamente estos debates no se centraron en la relación entre la universidad y el mercado de trabajo. Esta relación no era considerada en ese entonces algo problemático: los que acudían a la universidad formaban parte de la élite en cada país y ya tenían su futuro asegurado. Como tal, la función principal de la universidad consistía en seleccionar y preparar a los “herederos”, en una situación donde el diploma universitario reemplazaba al antiguo título nobiliario (Bourdieu y Passeron, 1964).

La situación, empero, empieza a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de los años sesenta del siglo pasado. A raíz de distintas políticas (como el *GI Bill* en los Estados Unidos, que otorgaba becas para estudiar una carrera de educación superior a los veteranos de guerra), la matrícula en muchos países empieza a crecer rápidamente.

Con el tiempo, varios de esos sistemas pasan de ser de élite a sistemas masificados (Trow, 1974), cuando la matrícula crece más del 15 por ciento. Más adelante, algunos sistemas empiezan a ser universales, incorporando a más del 40 por ciento del grupo de edad correspondiente (18-24 años). Con ello, grupos sociales anteriormente excluidos empiezan a participar en la educación superior (Unterhalter, 2006).

Sin embargo, esta inclusión no sucedió sin algunos efectos colaterales. Si bien por una parte primaba el convencimiento de que más educación es mejor –inspirado en teorías como la del capital humano (Becker, 1964)—, particularmente a partir de los setenta asoma una situación novedosa: la tasa de desempleo entre egresados universitarios se incrementa, e incluso en ocasiones rebasa la tasa de desempleo de personas con menores calificaciones.

La situación se torna más crítica a lo largo de los años setenta del siglo pasado, a consecuencia de crisis recurrentes: la tasa de desempleo crece continuamente, en especial para los egresados de la educación superior.

Con el surgimiento del pensamiento neoliberal aparece una nueva consideración: las universidades deberían tener como principal tarea preparar a sus estudiantes para un futuro exitoso en el mercado laboral.

La calidad de una universidad se empieza a medir entonces por factores como la capacidad de sus egresados de insertarse exitosamente, el nivel de los salarios percibidos, la coincidencia entre estudios y empleo y la satisfacción laboral, amén de otros factores como la opinión de los empleados o la adquisición de las habilidades o competencias adecuadas.

Ciertamente, esta visión abandona varias tareas que antes se adjudicaban a la universidad, como la formación general de ciudadanos, la preparación de investigadores y una formación general o de valores. Todas ellas empiezan a jugar un papel secundario o desaparecen. La universidad debe adecuarse a las demandas del mercado laboral.

En términos generales, podemos señalar que la educación superior ha pasado por varias etapas durante la segunda mitad del siglo XX.

En la primera de ellas, el papel principal consistía en la preparación de las élites para el desempeño de su trabajo (como funcionarios de gobierno o profesionistas independientes). La segunda, la de educación masiva, consiste en la transmisión de habilidades y preparación para una gama más amplia que incluye funciones técnicas y económicas de un estrato todavía limitado. Una tercera fase –la educación superior universal– consiste en la adaptación de gran parte de la población al acelerado cambio social y tecnológico, en un impulso hacia la sociedad del conocimiento (Trow, 1973; CEPAL-UNESCO, 1992; Brennan 2004; Castells, 2004).

Sin embargo, este cambio se da en un contexto donde queda poco claro cómo funciona exactamente la relación entre universidad y mercado de trabajo (Flores-Crespo y Muñoz-Izquierdo, 2009; Márquez, 2008).

En ocasiones, no se especifica cuál es el nivel de desempleo, ni a qué se debe (Vedder, Denhart y Robe, 2013). Tampoco queda muy claro cuáles son exactamente las demandas del mercado en cuanto a competencias, conocimientos o habilidades, y si la universidad debería acoplarse a ellas (Brennan y Little, 2010; Planas, 2014). Es en este contexto que surgieron varias especulaciones y mentiras, mismas que revisaremos aquí.

La información

Este capítulo explora tales interrogantes a partir de datos extraídos de un proyecto de investigación internacional llamado “El profesional flexible en la sociedad del conocimiento” o PROFLEX. Este proyecto retoma la experiencia del seguimiento de egresados en la Unión Europea, denominado REFLEX (*The Flexible Professional in the Knowledge Society*).

Desde 2006 el PROFLEX, bajo la coordinación de la Universidad Politécnica de Valencia, ha incorporado a más de 50 instituciones latinoamericanas y se han aplicado más de 10 mil cuestionarios.

En el caso mexicano participaron nueve universidades, tres privadas y seis públicas: la Universidad del Valle de México, la Universidad La Salle, CETYS-Universidad, el Instituto Tecnológico de Sonora y las universidades públicas estatales de Guadalajara, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

Las universidades mexicanas participantes en el proyecto representan una parte importante de la matrícula nacional: se trata de universidades públicas y privadas de mediano a gran tamaño, casi todas con más de 50 mil estudiantes de licenciatura.

En el caso mexicano, se aplicaron 4 260 cuestionarios a los egresados de licenciatura (ISCED 5A). Para fines comparativos internacionales, se entrevistó a personas a cinco años de haber egresado: los cuestionarios fueron aplicados en 2007 y 2008 a aquellos que habían terminado sus estudios en 2002 y 2003. Se trata de un muestreo aleatorio estratificado, proporcional a la población por área geográfica y área de estudio de cada universidad.

Para cada universidad se definió una muestra representativa a partir del egreso reportado en 2002 y 2003. El margen de error es de $\pm 0.311\%$ para los datos globales, considerando $p=q$ y un margen de confianza del 95.5%.

La encuesta se llevó a cabo por medio de un cuestionario de preguntas cerradas. La aplicación se efectuó vía entrevistas telefónicas, visitas domiciliarias y a través de una página *web*.

Limitaciones

En primer lugar, la muestra no considera datos sobre algunos sectores del sistema educativo mexicano, como las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos o el amplio sector de pequeñas universidades privadas.

En segundo lugar, la muestra es confiable por áreas de conocimiento, pero no en cuanto a las carreras específicas. Un problema importante para los estudios sobre egresados consiste en que casi todas las universidades de tamaño medio o grande ofrecen actualmente más de 50 opciones de licenciatura, algunas con pocos estudiantes y

egresados, lo cual complica organizar un estudio representativo para todas las opciones.

La agrupación de carreras por área de conocimiento sigue la acostumbrada en la Unión Europea (Mora, Carot y Conchada, 2010).

Primera mentira: la educación superior lleva al desempleo

Un primer ejemplo de especulaciones aventuradas concierne a la suerte de los egresados universitarios en el mercado laboral. Aquí, la observación recurrente es que la educación superior produce un gran número de desempleados. Como observó el entonces subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán en 2010:

Al presentar un panorama del mercado laboral de profesionistas, en 2010, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Rodolfo Tuirán observó: “de los egresados universitarios que radican en nuestro país, 5.6 millones tiene un empleo o subempleo; 367 mil están desocupados; 165 mil están buscando empleo”. Sin embargo, 920 mil más se dicen ‘no disponibles’, no buscan empleo y si alguien se los ofrece no lo aceptan. El funcionario de la SEP aseguró que durante 2009 el desempleo entre los egresados universitarios presentó un incremento constante hasta alcanzar 15% (*La Jornada*, 29 de enero de 2010).

A primera vista, los datos de PROFLEX parecen confirmar esta declaración, tal como lo refleja la tabla 1.

Sin embargo, se trata aquí de la tasa de desempleo bruto. Si seguimos la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde solamente se considera como desempleados a aquellos que no tienen trabajo pero sí lo están buscando activamente, las tasas bajan hasta 6.2% para hombres y 7.5% para mujeres (De Vries y Navarro, 2010). Aun así, la tasa de desempleo en México se muestra ligeramente más alta en la muestra de PROFLEX, si bien el problema no se vislumbra como grave.

Una mentira relacionada con esto atañe a la tasa de desempleo de los egresados universitarios comparada con el desempleo que afecta a personas con niveles de preparación educativa más bajos. Aquí parece

asomar una anomalía: la tasa de desempleo para egresados universitarios suele ser más alta que para aquellos que nunca accedieron a la educación superior.

Tabla 1. Tasa de desempleo bruto por países

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX.

Como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE):

El organismo confirma que entre los mexicanos las tasas de desempleo aumentan a medida que aumentan los niveles de educación. Es así como las tasas más altas de desempleo, con 20.6%, se encuentran en los adultos más jóvenes, mientras que en los adultos mayores llega al 10.2%.

Por ejemplo, “en México las tasas de desempleo aumentan a medida que aumentan los niveles de educación. La tasa de desempleo es mayor en el caso de la educación terciaria, en comparación con aquellos que carecen de educación media superior”, indica la OCDE. (Educación Futura, 2015).

Sin embargo, estas notas adolecen de un manejo dudoso de las estadísticas. A modo de ejemplo, las aseveraciones de la OCDE se apoyan en datos del INEGI, que anualmente aplica la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Según los datos de esta encuesta, el desempleo es efectivamente más bajo para aquellos que cuentan solamente con educación primaria, pero destaca que este sector de la población labora principalmente en el sector informal.

Tabla 2. Condición de empleo por nivel educativo.
IV trimestre de 2013

	Formal	Informal	Desempleado	Total
Primaria o menos	19	78	3.5	100.5
Secundaria	37	58	5.1	100.1
Preparatoria o técnica	51	43	5.7	99.7
Licenciatura o posgrado	74	21	4.8	99.8

Fuente: elaboración propia a partir de ENOE IV-2013.

El desempleo entre jóvenes con o sin estudios superiores es entonces un tema controversial, y depende de cómo y cuándo se mide. Según algunas declaraciones oficiales, ronda el 15 por ciento para los egresados universitarios. Según otros, la tasa de desempleo entre recién egresados se situaría en alrededor del 11%, tres veces más que la tasa de desempleo oficial entre la Población Económicamente Activa (PEA) en general (Flores-Crespo, *et ál.*, 2009).

De acuerdo a los datos de PROFLEX, se sitúa en alrededor del 6 por ciento para una población con título universitario que tiene cinco años de haber egresado. Según los datos de ENOE, el desempleo para egresados universitarios es de 4.8 por ciento, ligeramente más alto que para jóvenes con solamente primaria, pero más bajo que para jóvenes con un diploma de escuela secundaria o preparatoria.

Adicionalmente, los que cursaron estudios superiores son menos proclives a emplearse en el sector informal de la economía. Ello implica que gozarán de prestaciones como el seguro social y un fondo de retiro, que tendrán más estabilidad en el empleo y que percibirán salarios más altos. Considerando eso, parece mentira la aseveración de

que los egresados universitarios se enfrentan a un creciente desempleo.

Segunda mentira: algunas carreras están saturadas

Declaraciones adicionales postulan que el mercado laboral para varias carreras pareciera haber llegado a un límite, particularmente para opciones tradicionales como administración, contaduría, medicina o derecho (Cabrera, De Vries, Anderson, 2008). Según afirmaciones oficiales,

Casi la mitad de los egresados de la carrera de administración, el 48 por ciento, no trabajan en actividades afines a su área de estudio. Situación similar padece el 32 por ciento de los que se formaron en contaduría y finanzas; y el 29 por ciento de quienes cursaron derecho (*La Jornada*, 2009).

Los datos de PROFLEX, sin embargo, presentan una situación radicalmente distinta. Los mayores problemas de desempleo parecen darse en áreas de conocimiento como las ciencias, la salud, las ciencias sociales y las humanidades. En las áreas de economía y empresa es dónde más del 80 por ciento de los egresados declara tener un empleo.

Tabla 3. ¿Actualmente tienes un trabajo remunerado?

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX

Ahora, no solamente son las áreas supuestamente saturadas las que generan menos desempleo; también es ahí donde los ingresos mensuales son más altos. Según los datos de PROFLEX, éstas son las áreas donde hay un mayor porcentaje de egresados que perciben más de 3 mil dólares estadounidenses al mes. En cambio, en áreas como educación o ciencias hay un gran número de trabajadores que reciben menos de mil dólares al mes.

Tabla 4. Ingreso mensual en US\$ (2009)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX

Tercera mentira: los egresados carecen de competencias

Una mentira o especulación muy extendida reza que los egresados encuentran problemas en el mercado de trabajo porque les faltan las competencias necesarias. Ahora, la moda de las competencias abunda en especulaciones: hay desde quienes señalan que están surgiendo nuevas demandas desde el mercado laboral (Perrenoud, 1999), hasta críticos que observan que no hay muchas novedades, y que el término “competencias” está reemplazando a lo que antes se definía como “habilidades” (Díaz-Barriga, 2006).

Las distinciones son importantes, empero, si revisamos los resultados de PROFLEX. En el cuestionario se preguntó a los egresados acerca de

su propio nivel, acerca del nivel exigido en su actual trabajo y sobre la aportación que hizo la universidad para la adquisición de estas competencias. La tabla 5 revela varias cosas.

En primer lugar, destaca que las competencias más importantes son: capacidad para la toma de decisiones; capacidad para trabajar bajo presión; capacidad de aplicar los conocimientos; y capacidad para hacerse entender. Como tal, prevalecen las competencias sociales, y no aparecen las competencias académicas.

En efecto, según el cuestionario PROFLEX, las competencias menos valoradas son el dominio de un segundo idioma y el manejo de paquetes de cómputo (De Vries y Navarro, 2010).

En segundo lugar, hay poca diferencia entre el nivel propio reportado y el nivel requerido en el trabajo. Así, los egresados indican que no carecen de falta de competencias. De esta forma, la discusión acerca de la falta de competencias se diluye hasta convertirse en otra mentira.

Tabla 5. Competencias

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX (Escala 1-7, donde 1 es muy poco y 7 es mucho)

Cuarta mentira: los empleos de los egresados no coinciden con sus estudios

Otra mentira muy en boga es que los egresados universitarios terminan por desempeñar trabajos que no tienen nada que ver con sus estudios. A modo de ejemplo, en 2009 el entonces subsecretario de Educación Superior observó que

“2... el 45 por ciento de los más de 7.8 millones de profesionistas nacionales no realizan actividades relacionadas con su carrera y se han tenido que conformar con trabajos de taxistas, comerciantes o empleos marginales.” (*La Jornada*, 2009).

Nuevamente los datos de PROFLEX pintan un panorama radicalmente opuesto. En México, el 88.3 por ciento de los egresados indica que su trabajo coincide con sus estudios. Con esto, México se ubica ligeramente por debajo de Chile y Alemania, pero muy por encima de Japón.

Tabla 6. ¿Hasta dónde coinciden tus estudios con tu trabajo actual?

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX

Quinta mentira: los egresados se ven obligados a aceptar puestos que no coinciden con su nivel de estudios

Una conjetura más sugiere que los egresados se ven forzados a aceptar trabajos para los cuales anteriormente no se exigían títulos universitarios. Los egresados estarían así desplazando a aquellos que cuentan solamente con un diploma de la escuela secundaria o preparatoria.

Una vez más, los datos de PROFLEX indican que no es así: solamente un 5 por ciento de los egresados indica que ocupa una plaza para la que no es necesario tener un título universitario. Incluso, más del 40 por ciento señalan que, para desempeñarse adecuadamente en su puesto, requieren de estudios de posgrado.

Tabla 7. ¿Qué nivel de estudios se requiere para tu trabajo actual?

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX

Sexta mentira: los egresados no están satisfechos con su empleo

Siguiendo la lógica de los argumentos anteriores, resulta obvio especular que los egresados mexicanos no estén satisfechos con su empleo. Pero sucede todo lo contrario, según los datos de PROFLEX. Es más, desde una perspectiva comparativa, los egresados mexicanos reportan las más altas tasas de satisfacción (4.10 en una escala de 1 a 5).

Tabla 8. ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo? (comparación por países)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX

La satisfacción varía además según el área de conocimiento, destacando la elevada tasa en el caso del sector de la salud. El dato plantea interrogantes importantes acerca de la relación entre satisfacción, ingreso, coincidencia de estudios y trabajo y género. Por lo general, la coincidencia entre estudios y trabajo parece llevar a una mayor satisfacción. El ingreso parece ser menos importante.

Tabla 9. Satisfacción con el empleo por áreas de conocimiento

Fuente: elaboración propia a partir de datos de PROFLEX

Esto lleva a una situación paradójica: los profesionistas mexicanos reciben los salarios más bajos dentro de la encuesta de PROFLEX, pero se declaran más satisfechos. Las mujeres (que reciben menos salario que los hombres), y aquellos que trabajan en las áreas peor pagadas (salud, ciencias, educación) reportan niveles más altos de satisfacción. Aparentemente, la satisfacción con el empleo guarda una relación inversa con el salario recibido.

Séptima y última mentira: la situación ha mejorado gracias a varias políticas

Estas mentiras no serían muy preocupantes si no hubiesen dado lugar a un sinnúmero de políticas de reforma en las universidades y en el sistema de la educación superior en general.

Desde el inicio, el objetivo detrás de estas políticas ha estribado en promover la preparación de los jóvenes para el mercado laboral, y de ajustar las actividades universitarias a lo que demanda el mercado (CEPAL-UNESCO, 1992).

Desde esta perspectiva destacan diferentes iniciativas:

1. Desde principios de los años noventa del siglo pasado, el gobierno federal introdujo un programa especial de estímulos adicionales al salario regular para fomentar la docencia. Hacia finales de la misma década se introdujo el Programa de Mejora del Profesorado (PROMEP) con fines similares: una creciente proporción de los docentes universitarios tendrían que ser de tiempo completo, contar con doctorado y dedicarse a la docencia, la investigación, la tutoría y la gestión (Rubio, 2006).
2. Desde inicios de los años noventa, el gobierno federal se abocó a la creación de nuevos tipos de instituciones de educación superior. Nacieron así sectores como las Universidades Tecnológicas e Interculturales. La suposición tenía que ver con que estas instituciones estén más ajustadas a las demandas del mercado laboral.
3. Durante las últimas dos décadas ha habido múltiples esfuerzos para cambiar la oferta. Si antes las universidades ofrecían alrededor de 20 carreras, muchas de ellas ofrecen ahora un

abanico de 60 a 70. Algunas universidades han pasado la frontera de las cien. La ampliación de la oferta ha sido impresionante: México cuenta hoy con más de 5 mil instituciones de educación superior (con lo cual rebasó a los Estados Unidos), y con miles de carreras de licenciatura y de posgrado. Igualmente, casi todas las universidades públicas, y varias privadas, han logrado la acreditación de casi todas su carreras. Muchas han transitado de planes de estudios tradicionales a planes organizados por competencias. Al mismo tiempo, la mayoría de las universidades públicas impusieron límites o cupo para el ingreso a las carreras tradicionales presuntamente saturadas (medicina, administración, contaduría, derecho) (De Vries y Álvarez, 2005).

4. Desde los años noventa del siglo pasado se introdujeron diferentes fondos especiales, que a partir de 2000 se administraron a través del Programa Integral de Fomento Institucional (PIFI), en el afán de dotar a las instituciones de educación superior públicas de una mejor infraestructura (Rubio, 2006).

Aunque en estos rubros las autoridades federales e institucionales reportan notables avances –hoy tenemos más tiempos completos con doctorado–, no queda claro si estas políticas contribuyeron en algo a la preparación de estudiantes o que haya mejorado su inserción y éxito en el mercado laboral.

Existen en este ámbito varias señales cruzadas. En cuanto a la preparación y contratación de profesores, varios estudios señalan que los doctores de tiempo completo no son mejor evaluados por sus estudiantes que los profesores de tiempo parcial con solamente licenciatura (De Vries *et al.*, 2008; Estévez-Nenninger, 2009).

En lo que concierne a los nuevos sectores de la educación superior, destaca que solamente lograron atraer al 5 por ciento de la matrícula nacional, y que sus egresados suelen tener poco éxito en el mercado laboral (Flores, 2009).

La diversificación de la oferta parece haber arrojado algunos aciertos, pero en términos generales las carreras tradicionales supuestamente saturadas continúan siendo las más exitosas, si esto se mide por

ingresos percibidos y tasas de empleo (Cabrera, *et al.* 2008). Finalmente, resulta ambiguo responder a cuál ha sido la aportación de los fondos para la infraestructura. Sin duda, las universidades públicas cuentan hoy con mejores instalaciones y más capacidad para recibir estudiantes, pero esto no necesariamente se traduce en mejores niveles de aprendizaje.

Conclusiones

A lo largo de dos décadas no se observan grandes cambios en la tasa de desempleo entre los egresados universitarios, ni en las tasas de deserción. Los cambios que se producen en el mercado laboral parecen relacionarse mucho más con el comportamiento de la economía nacional que con algún cambio en las instituciones de educación superior.

Otro factor de impacto parece ser si la universidad es pública o privada (de élite), (de Garay, 2002; De Vries *et al.*, 2013): los egresados de la universidad privada de élite suelen tener mayor éxito en el mercado laboral. Sin embargo, no hay evidencias de que estas diferencias se deban a profesores mejor preparados o a planes de estudios distintos.

En términos generales, la revisión de datos sobre la relación entre la educación superior y el mercado de trabajo deja la impresión de que muchas políticas se basaron en una ausencia de datos confiables, o en malas interpretaciones de los datos disponibles. En algunas ocasiones, incluso se podría afirmar que los hacedores de las políticas educativas plantearon problemas que en la realidad no existieron.

Con ello, muchas políticas formuladas por los “adecuacionistas” (Planas, 2014) resultan irrisorias: no tiene mucho sentido adecuar mejor la universidad a las cambiantes demandas del mercado, si desde el inicio no se presentan problemas importantes a resolver.

Eso, por supuesto, no implica que la universidad no necesite revisar lo que sucede en el mercado laboral para modificar ocasionalmente sus planes y programas. Sin embargo, significa que es poco

conveniente emprender reformas basadas en conjeturas aventuradas, modas del momento o mentiras.

Referencias

- Ashby, E. (1959). Decision-making in the academic world, *The Sociological Review*, 7: 5-13.
- Becker, Gary S. (1964). *Human capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. New York: National Bureau of Economic Research (second edition: 1975).
- Best, J. (2001). *Damned lies and statistics: untangling numbers from the Media, politicians, and activists*, Berkeley and Los Angeles (CA): University of California Press.
- Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1964). *Les héritiers. Les étudiants et la culture*. Paris: Les Editions de Minuit.
- Brennan, J. and Little, B. (2010). Graduate competences and relationships with the labour market: the UK case. In: *Development of Competencies in the World of Work and Education*, 24-26, September 2009, Ljubljana, Eslovenia.
- Cabrera, A. F., De Vries, W., Anderson, S. (2008). Job satisfaction among Mexican alumni: A case of incongruence between hunch-based policies and labor market demands, *Higher Education*, 56: 699-722.
- Castells, M. (2004), *La era de la información: economía, sociedad y cultura*, Madrid: Alianza Editorial.
- CEPAL-UNESCO (1992). *Educación y conocimiento: eje de transformación productiva con equidad*, Santiago de Chile (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
- De Garay, A. (2002). Un sistema de educación superior, dos realidades distintas: la universidad pública y la universidad privada, *Revista de la Educación Superior*, vol. XXXI, núm. 122, pp. 69-77.
- De Vries, W. y Álvarez, G. (2005). Acerca de las políticas, la política y otras complicaciones en la educación superior mexicana, *Revista de la Educación Superior*, vol. XXXIV (2), núm. 134, pp. 81-106.
- De Vries, W. y Navarro, Y. (2011). ¿Profesionistas del futuro o futuros taxistas? Los egresados universitarios y el mercado

- laboral en México, *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, vol. 2, N° 4. (pp. 3-27),
<http://ries.universia.net/index.php/ries/article/download/71/109>[consulta: 2 de enero de 2015].
- De Vries, W., Vázquez-Cabrera, R. y Treto, D. (2013). Millonarios o malparados. ¿De qué depende el éxito de los egresados universitarios? *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, vol. 4, núm. 9.
<http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/273>
 [Consulta: 2 de enero de 2015].
- De Vries, W. y Slowey, M. (2012), Concluding reflections. Between Humboldt and Newman: marketization and global contributions in contemporary higher education. En: Schuetze, H. y Álvarez, G. (eds.). *State and market in higher education reforms. Trends, policies and experiences in comparative perspective*, Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.
- De Vries, W., González, G., León, P., Hernández, I. (2008). Políticas públicas y desempeño académico, o cómo el tamaño sí importa, *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, núm. 7, julio-diciembre.
- Díaz- Barriga, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio?, *Perfiles Educativos*, vol. XXVII, núm. 111, pp. 7-36.
- El Economista* (2009). Desempleo, en su mayor nivel desde 2004: INEGI, 21/01/2009, <<http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/01/21/desempleo-su-mayor-nivel-2004-inegi>> [consulta: 18 de febrero de 2009].
- ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo), IV-2013, en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/regulares/enoe/> [consulta enero de 2015].
- Estévez-Nenninger, Etty (2009). *El doctorado no quita lo tarado*, México: ANUIES.
- Educación Futura* (2015). A mayor educación en México, mayor desempleo: OCDE, *Educación Futura*, 20 de enero de 2015.<http://www.educacionfutura.org/a-mayor-educacion-en-mexico-mayor-desempleo-ocde/>. [Consulta: 20 de enero de 2015].
- Flores-Crespo, P. y Muñoz-Izquierdo, C. (2009). Crisis y desempleo: ¿podrán hacer algo las universidades?, *Campus Milenio*,

- 19/02/2009,
<<http://www.campusmilenio.com.mx/309/ensayos/index.php>
> [consulta: 20 de febrero de 2009].
- Flores, P. (2009), *Trayectoria del modelo de universidades tecnológicas en México*, (Cuadernos de trabajo de la Dirección General de Evaluación Institucional), México: UNAM.
- Gil, Manuel (2000). Un siglo buscando doctores, *Revista de la Educación Superior*, vol. 29, núm. 113.
- Huff, D. (1954). *How to lie with statistics*, New York-London: WW Norton & Company (Norton paperback reissue, 1993).
- La Jornada* (2010). Más de 200 mil egresados en el país no buscan ni tienen empleo (nota de Laura Poy), 29/01/2010, <http://m.jornada.com.mx/index.php?articulo=043n1soc&seccion=sociedad&amd=20100129> [consulta febrero de 2011].
- La Jornada* (2009). SEP: 45% de profesionistas, en áreas ajenas a su especialidad (nota de Emir Olivares), 06/02/09, <<http://www.jornada.unam.mx/2009/02/06/index.php?seccion=sociedad&article=035n1soc>> [consulta: 6 de febrero de 2009].
- Machin, S. y McNally, S. (2007), *Tertiary Education Systems and the Labour Market. A paper commissioned by the Education and Training Policy Division, OECD, for the Thematic Review of Tertiary Education*, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- Twain, M. (1906) Chapters from *My autobiography*, *North American Review*.
- Márquez, A. (2008). Jóvenes mexicanos: su horizonte de posibilidades de participación en la educación y el trabajo. En Suárez, M. L. y J. A. Pérez, coord. (2008), *Jóvenes universitarios en Latinoamérica, hoy*, México: UNAM/ Miguel Ángel Porrúa.
- Mora, J. G., J. M. Carot y A. Conchada (2010). *Informe resumen del proyecto PROFLEX en América Latina. Comparativa con el proyecto REFLEX en Europa*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia/CEGES.
- Perrenoud, P. (1999). *Dix nouvelles compétences pour enseigner. Invitation au voyage*, Paris: ESF.
- Rodríguez, R. (2010). Acuse de recibo: más sobre cobertura, *Campus Milenio*, 4/11/2010.

- <<http://www.campusmilenio.com.mx/392/opinion/rrg.html>>
[consulta 9/11/2010].
- Rubio, J. (coord.) (2006). *La política educativa y la educación superior en México. 1995-2006: un balance*. México: FCE/Secretaría de Educación Pública.
- Schama, S. (1992). *Dead certainties and unwarranted speculations*, New York (NY): Vintage Books.
- Trow, M. (1974). Problems in the transition from elite to Mass Higher Education, *Policies for Higher Education*, OECD (Paris): 51-101.
- Unterhalter, M. (2006). Reflections on the transition from Elite to Mass to Universal Access: Forms and Phases of Higher Education in modern societies since WWII. En: Altbach, P.; Forest, J. J. F. (Eds.) *International Handbook of Higher Education*. Dordrecht (Países Bajos): Springer International pp. 243-280.
- Vedder, R.; Denhart, C.; Robe, J. (2013). *Why are recent college graduates underemployed? University enrollments and labor-market realities*. Policy Paper. Washington, D.C.: Center for College Affordability and Productivity.

La falsedad de la Santa Sede

José A. Alonso Herrero

Resumen

El objetivo del artículo es describir y explicar la “falsedad”; es decir, la falta de verdad de la Santa Sede. No se trata, por tanto, de la Santa Iglesia Católica Romana. El presupuesto básico se apoya en la doble cualidad del Papado: la *auctoritas* adosada al Romano Pontífice, y la *potestas* que ejerce el papa al poseer plenos poderes legislativos, judiciales y ejecutivos en la Santa Sede. A continuación se analiza el poder dual papal frente a la modernidad, en el contexto de la falsedad reinante en la vigente modernidad capitalista. En la conclusión se alude a los dos tipos de actores actuales en la Iglesia Católica Romana: los que mantienen las estructuras de poder vigentes y los que se atreven a cuestionarlas.

Palabras clave: falsedad, Santa Sede, capitalismo, modernidad, periferia, libertad

Abstract

The objective of this article is to describe and explain the “falseness”; i.e., the misrepresentation of the Holy See, not the Holy Roman Catholic Church. The basic affirmation is sustained by the two main features of the Pope: that of “auctoritas”, which is attached to the Roman Pontiff, and that of “potestas”, which is exercised by the possession of full legislative, judicial and executive powers of the Holy See. We continue analyzing these papal attributes in the modern world and the current context of the reigning falseness of modern capitalism. Finally, we conclude by referring to the two types of

actors participating in the Roman Catholic Church: those who maintain the structural powers and those who dare questioning them.

Keywords: falseness, Holy See, capitalism, modernity, periphery, freedom

Introducción

SI entendemos la falsedad como “la falta de verdad o autenticidad de un individuo o de una organización”, pocos ciudadanos de los países de añeja tradición católica pensarían en la posibilidad de adosar este concepto a la Santa Iglesia Católica Romana.

Nuestro intento, aclaremos, no es enturbiar la secular atmósfera que envuelve a tan distinguida institución religiosa. Insistimos desde el comienzo en que el objeto de nuestras disquisiciones no es la Santa Iglesia Católica, sino la Santa Sede.

La Iglesia Romana goza de una merecida reputación histórica, derivada de su amplia constelación de santos, vírgenes y mártires. Repetimos, no es nuestra intención proyectar la más mínima mácula hacia este inagotable caudal histórico. Tal vez personajes como Lutero o Calvino o alguno de sus multivariados seguidores quisieran revivir hoy en día las disputas teológicas surgidas en el amanecer de la Edad Moderna.

Tampoco intentamos incidir en el añejo debate teológico que enfrentó a los sabios teólogos jesuitas y dominicos desde fines del siglo XVI. La disputa persiste en pleno siglo XXI, porque ningún teólogo católico ha sido capaz de resolver la cuestión clásica: ¿se puede conciliar la potencia infinita de Dios y su omnisciencia con la libertad humana? (Bonillo, 2011).

Hacia fines del siglo XVI personajes tan poderosos como el rey Felipe II y el papa Clemente VIII intervinieron en el debate. Las disputas teológicas invadieron la escena católica hasta el punto de que en 1607 el papa Paulo V concedió la libertad a ambas órdenes para defender

sus doctrinas; es decir, las elucubraciones elaboradas por dominicos y jesuitas, sin que ninguna de ellas fuera tildada de herejía.¹⁰⁴

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, estas interminables disputas teológicas denuncian la existencia de una variable que será clave en nuestras reflexiones posteriores. Nos referimos al poder. Porque la libertad concedida por el papa Paulo V a jesuitas y dominicos provocó en los hijos de San Ignacio tal exaltación que “lo celebraron con festejos públicos, música, fuegos artificiales y corridas de toros”.

Nunca imaginaron aquellos jesuitas premodernos que, en el amanecer del siglo XXI, un miembro ilustre y argentino de tal institución religiosa llegaría a ser papa de la Iglesia Romana y, por tanto, el máximo dignatario de la Santa Sede.¹⁰⁵

En esta doble cualidad del papa se entroncan nuestras preguntas y la hipótesis. La pregunta central se refiere a la posible contribución de la Santa Sede, que no de la Iglesia Romana, al clima de falsedad que invade a toda la sociedad global desde hace décadas.

Pero antes de explicitar las preguntas oportunas, es preciso subrayar que esta doble cualidad papal tiene rancios antecedentes históricos, porque fue el papa Gelasio I quien elaboró en el siglo V la doctrina de

¹⁰⁴ María Bonillo sintetiza la discusión con nitidez: “¿Hasta qué punto es posible conciliar la potencia y sabiduría infinita de Dios con la libertad humana? Para el jesuita Molina existía la necesidad de una CIENCIA MEDIA que conciliara la potencia divina con la libertad humana, defendiendo esta libertad frente al fatalismo protestante. Sin embargo, para los dominicos esta visión limitaba el poder divino.”

¹⁰⁵ La tensión y la disputa por el poder no son cosas olvidadas en la Iglesia Romana. Hoy día asistimos a una repetición del pasado. La pugna por el poder en El Vaticano no es entre dominicos y jesuitas. La reciente destitución de un obispo paraguayo del Opus Dei impuesta por un papa jesuita abre al fin un panorama tenso entre ambas organizaciones católicas que no sorprende a los analistas de la Iglesia Romana y que se incrementó a partir de la sospechosa muerte del papa Juan Pablo I (*La Jornada*, 26-09-2014). Más aún, en tiempos de Juan Pablo II el Opus Dei manejaba las cuentas de la Iglesia y su imagen pública y mediática en manos del español Joaquín Navarro-Valls, pero ahora el papa Francisco, jesuita, exigió al Opus Dei que la canonización de Álvaro del Portillo, quien fuera sucesor y mano derecha del fundador José María Escrivá de Balaguer tuviera lugar en Madrid, no en Roma como quería el Opus Dei (*El País*, 27-09-2014).

las “dos espadas” (Bovero, 2013: 4), al afirmar la independencia de la *auctoritas* del pontífice de la *potestas* del emperador.

Esta doctrina sería retomada siglos más tarde –entre otros por Dante Alighieri, como apunta Bovero– para defender la autonomía del poder político contra las pretensiones de supremacía por parte del poder eclesiástico.

De hecho, como es sabido, esta pugna entre ambos poderes, el civil y el papal, llegaría a su culmen con la disputa de las investiduras durante la Edad Media. Pero a diferencia del apunte de Bovero, según el cual la doctrina de Gelasio I se podría considerar como “una especie de arquetipo de la separación entre el Estado y la Iglesia (católica) que se transformaría en el objetivo medular de la cultura política laica en su apogeo en el siglo XIX, nuestro objetivo consiste en subrayar que el papa reúne en sus manos ambos poderes: la *auctoritas* y la *potestas*.

En efecto, el Pontífice Romano es, al mismo tiempo, la máxima y absoluta autoridad eclesiástica en la Iglesia católica y el jefe supremo de la Santa Sede; es decir, del Estado Vaticano. Porque en el siglo V de Gelasio I no existían los Estados Pontificios, que se fueron configurando en la Edad Media y que serían refundados en miniatura en 1929 gracias al Tratado de Letrán firmado por Mussolini y el papa Pío XI.

Admitida esta conjunción de poderes, la *auctoritas* y la *potestas*, en el Romano Pontífice se configura con precisión nuestro tema, que es escudriñar la posible contribución de la Santa Sede a la falsedad del mundo actual.

La primera pregunta, por tanto, será si tiene sentido formular esta duda en referencia a la Santa Sede. Si la respuesta es positiva, debemos inquirir cuál sería la contribución de la Santa Sede en la generación y fortalecimiento de la falsedad reinante en el amanecer del siglo XXI.

Insistimos: ¿por qué no debe descartarse esta pregunta en referencia directa a la Santa Sede?, ¿cuál es la condición intrínseca que condena a la Santa Sede a ser parte integrante de la falsedad vigente?

Nuestra respuesta hipotética a tales cuestionamientos es que la actual contribución de la Santa Sede a la falsedad global hunde sus raíces en el hecho de que los papas actuales gozan del doble privilegio de manipular simultáneamente la *auctoritas* y la *potestas*.

Si Gelasio I puede considerarse, según Bovero, como “el arquetipo de la separación entre la Iglesia católica y el Estado”, la realidad hogaño es que la evolución secular de la Iglesia Vaticana ha construido paso a paso un *Rey Pontífice* que detenta sin ambigüedad ambos poderes en la misma institución.

La *auctoritas* adosada al Pontífice Romano

El tema de la *auctoritas* papal cuenta con una larga historia anterior al papa Gelasio I. Pero tras el surgimiento de la crisis religiosa detonada en la Iglesia Romana a partir del siglo XVI por Lutero y Calvino, entre otros, el descontento en los países europeos llegó a su culmen con la Revolución Francesa (1789).

Autores católicos tan representativos de la ideología vaticana como el francés Joseph de Maistre y los teólogos jesuitas Giovanni Perrone y Claus Schrader (Fábrega, 1996: *passim*), asesores teológicos del Concilio Vaticano I (1870), defendieron la doctrina ultramontana del primado papal.

Su tesis restauracionista (*ibídem*: 69) fue que la monarquía absoluta era la solución para contrarrestar la desestabilización radical generada por la Revolución Francesa.

Frente a la situación de angustia provocada por el protestantismo y su libre interpretación de la *Biblia*, estos autores proclamaron que la Iglesia Romana era la única arca de salvación, porque contaba con una autoridad suprema que era infalible e indivisible.

La consecuencia lógica de esta soberanía e infalibilidad papal sería el restablecimiento del orden prístino destruido por la Revolución Francesa. El diagnóstico de Perrone era concluyente:

“En medio de los principios disolventes del protestantismo, de los estragos del racionalismo, del indiferentismo religioso, de la

inundación universal del radicalismo y comunismo, subvertidores del orden... no existe para las sociedades cristianas otro remedio auténtico y duradero que no sea volver al centro de la unidad y verdad católica.” (ibídem: 80)

En efecto, tal diagnóstico tuvo como complemento lógico la tesis de Schrader (ibídem: 89) de que la única solución ante el caos revolucionario se encuentra en “la Iglesia Católica, que se identifica con la Iglesia Romana, la cual debe estar rígidamente jerarquizada bajo su cabeza visible, el Romano Pontífice”.

Fábrega, por su parte, comenta que este nuevo orden vaticano no es una continuación del antiguo pluralismo de las primeras iglesias cristianas, “sino el que ha de caracterizar una polifacética acción papal, centralista y eficiente” (ibídem: 90).

Esta afirmación de Fábrega nos señala la necesidad de examinar con más detenimiento, aunque sea brevemente, el proceso de construcción del primado papal desde los orígenes del cristianismo.

Siguiendo a este autor, nos apoyaremos en los dos primeros capítulos para destacar el proceso histórico de elaboración de la *auctoritas* papal desde el siglo I. Fábrega (ibídem: 68) concluye su análisis con una afirmación sorprendente porque en relación con nuestro tema, es decir, la suprema potestad del papa en la sede episcopal romana, la conclusión es que tal convicción “no existió en la conciencia cristiana durante los dos primeros siglos de su historia”¹⁰⁶.

La conclusión de Fábrega se deduce del siguiente análisis. Primero, la base bíblica descansa sobre dos textos evangélicos: uno en la vida mortal de los apóstoles (Mt: 16,16), y el segundo después de resucitado Jesús (Jn: 21,15-17).

Ambos textos fundamentan el dogma del primado jurídico – *auctoritas*– sobre la Iglesia universal. No obstante, el método histórico-

¹⁰⁶ Fábrega confirma esta conclusión con una referencia al teólogo jesuita Klaus Schatz (1990: 14), quien afirma: “Si se hubiera preguntado a un cristiano de los años 100, 200 o incluso 300, sobre si el obispo de Roma está en la cabeza de todos los cristianos, sobre si existe un obispo supremo por encima de los otros obispos y que tiene la última palabra en las cuestiones que tocan a la Iglesia entera, hubiera contestado con seguridad negativamente.”

crítico, asegura Fábrega, ha desmoronado el concordismo bíblico apoyándose en el movimiento científico de la teología liberal.¹⁰⁷

En segundo lugar, el destacado teólogo protestante Rudolf Bultmann propone una tesis –cada vez más aceptada en el campo católico– según la cual “la singular posición del apóstol Pedro en la Iglesia nacida después de la muerte de Jesús” no fue debida a ninguna primacía de *carácter jurídico* en el marco de un proyecto de institución eclesiástica, sino a “su íntima convivencia con el Maestro” (énfasis añadido).

En tercer lugar, por tanto, el lugar especial otorgado por Jesús a Pedro “no lo convierte en cabeza de una serie de detentadores de poderes jurídicos, sino que gira enteramente en torno a su destino personal, único e irrepetible”.

En conclusión, afirma Fábrega (*ibídem*: 29), la exégesis moderna nos permite rechazar la interpretación impuesta por el Concilio Vaticano I, según la cual Pedro –príncipe de todos los apóstoles– es la cabeza visible de la Iglesia entera con su primado de jurisdicción auténtica, y primer eslabón de una cadena ininterrumpida de sumos pontífices concebidos como monarcas absolutos de la única y verdadera Iglesia.

Además de Perrone y Schrader, ambos teólogos participantes en el Concilio Vaticano I, la *auctoritas* absoluta del papa se vio proclamada por católicos laicos entre los que destaca Joseph, conde de Maistre. Este escritor francés descuella, tanto por su conservadurismo religioso como por su ardiente patriotismo. Ambos factores son indispensables para comprender por qué se sentía miembro de una nación elegida por La Providencia.

La convicción política del conde de Maistre, sintetizada en su convencimiento de que la monarquía absoluta era la única respuesta adecuada a la debacle causada por la Revolución Francesa, es la base firme para apoyar su tesis sobre el papado como monarquía absoluta.

¹⁰⁷ Un ejemplo de esta teología liberal, originalmente protestante, nos lo ofrece el mismo Fábrega (*ibídem*:

19) al referirse a Claus Schrader, quien se apoyó en el evangelio de Mateo para afirmar que la pasión y muerte de Jesús fue un hecho real. Según esta lógica, “deberíamos rechazar como falsos los evangelios de Marcos y Lucas, que silencian tan importante manifestación”.

Ni siquiera es permitida cierta intromisión aristocrática, porque “el Papado constituye la condición de posibilidad de la existencia del cristianismo en la tierra” (Fábrega, 1996: 75).

Diversas son las consecuencias de esta concepción integrista del poder papal: el rechazo de cualquier tipo de colegialidad democratizadora, la fiera oposición al protestantismo disolvente, y sobre todo la defensa a ultranza de la infalibilidad pontificia.

La potestas del romano pontífice

Por lo tanto, es indispensable tener presente hoy en día cuál es la estructura de poder que detenta el Pontífice Romano. En primer lugar, el papa posee plenos poderes legislativos, judiciales y ejecutivos. Para llevar a cabo tan complicadas tareas, el papa cuenta con un gobierno central, conocido como la Santa Sede, dotada de personalidad jurídica.

Por otra parte, desde la firma del Tratado de Letrán en 1929, el papa cuenta con el Estado Vaticano, regulado por una comisión pontificia. Las relaciones con los Estados extranjeros, de creciente importancia a partir de los tiempos de Carlomagno, son atendidas por la Secretaría de Estado.

Aunque las relaciones diplomáticas permanentes se incrementaron a partir del siglo XVI; es decir, en el amanecer de la Edad Moderna. En esa época es cuando los nuncios, surgidos con varios siglos de anterioridad, comienzan a adquirir un reconocimiento creciente por su carácter internacional (Feldkamp: 2004). De ahí que en la actualidad la Santa Sede mantenga relaciones con 179 países.

No obstante, la interacción de la Santa Sede con el entorno internacional no se agota con el quehacer estrictamente gubernamental, porque la Santa Sede está presente en una larga lista de treinta y tres organismos de alcance internacional.

La colaboración de la Secretaría de Estado con el papa reinante se inauguró oficialmente en 1487, cuando la actividad papal se encontraba apoyada por 24 secretarios apostólicos. El tortuoso avance de esta secretaría experimentó un gran desarrollo durante el

siglo XVI, época en la que el Concilio de Trento catalizó las tensiones surgidas entre la Iglesia Vaticana y los seguidores de Lutero y Calvino, entre otros.

Aunque ciertas huellas de la premodernidad continuaron vigentes hasta los tiempos de Inocencio XII, quien abolió el famoso *secretarius intimus*, cardenal que pertenecía tradicionalmente a la parentela del papa, la nueva fase de la modernidad, generada en Europa con la Revolución Francesa, obligó al papa reinante a enriquecer la burocracia papal con una nueva oficina dedicada a atender los negocios eclesiásticos en el reino de Las Galias (Francia).

Organismo, sin embargo, que en 1814 ya debió ampliar sus actividades a todo el mundo. Este proceso imparable de actualización modernizadora experimentó un nuevo enriquecimiento en 1967, cuando el papa Paulo VI reformó la Curia al concluir el Concilio Vaticano II.

Aunque de nuevo en 1988 el papa Juan Pablo II dividió la Secretaría de Estado en dos secciones: una dedicada a los asuntos generales y la segunda en calidad de promotora de las relaciones con los Estados del mundo entero.

En cuanto al sistema financiero de la Santa Sede, es preciso indicar que el Estado Vaticano no es un país rico, al estilo de los pequeños países productores de petróleo (Berry, 2012: 61).

Las constantes colectas de la Iglesia católica son sus principales fuentes de ingresos económicos. La más importante es el Óbolo de San Pedro, el cual recogió en 2009 más de 82 millones de dólares. Cuando Jason Berry trató de averiguar cómo se gastan esos ingresos se encontró con una barrera de obstáculos. Sólo el programa *Cor Unum* publica datos anuales (*ibidem*: 62).

Este periodista comenta la situación del arzobispo Marcinkus, cuyo caso analizaremos más tarde, quien permitía que el IOR (Instituto para las Obras de Religión) cubriera los gastos excesivos de la Curia Vaticana, y maniobraba el IOR para que esta institución “lavara dinero de la mafia para Michele Sindona y Roberto Calvi”.

Por ser estadounidense, Marcinkus se valió de su inmunidad diplomática para evitar que la ley italiana lo citara a declarar y se quedó dentro de la Ciudad del Vaticano.¹⁰⁸

El poder dual papal frente a la modernidad

Establecida la peculiar estructura dual del poder pontificio, es preciso analizar las consecuencias de tal estructura en el contexto de la modernidad surgida en los países del centro capitalista europeo, en el marco de la Reforma protestante.

Como es sabido, con la modernidad surgen procesos sociales tan relevantes como el humanismo, la Reforma protestante y las guerras religiosas (Bovero). Desde Espinoza, quien defiende la exégesis racional de la *Biblia*, hasta Hobbes, cuyo objetivo explícito es someter la Iglesia al Estado, la tendencia modernizadora culmina en Francia con Diderot y Voltaire, quienes se proponen abatir el poder eclesiástico. Legado ideológico que recogería en Italia el político Cavour, en sus disputas contra los diputados clericales.

Bovero sintetiza todas estas corrientes modernizadoras en el principio de la neutralidad del Estado, gracias al cual será irrelevante pertenecer a un grupo religioso, y además se impondrá la educación pública.

La pregunta obvia es de dónde dimanen todos estos procesos socioculturales. La respuesta es que todos surgen gracias a la modernidad occidental.

Hablar de modernidad implica referirse a dos fenómenos distintos, pero convergentes: secularización y laicismo. Este último término se expone hoy en las escuelas francesas con el objetivo de explicitar los principios, deberes y derechos que deben tener en cuenta todos los alumnos de la República Francesa. En México es oportuno subrayar

¹⁰⁸ El Cardenal Krol de Filadelfia, según Jason Berry (*ibidem*: 64), no quería que las donaciones de caridad al óbolo de San Pedro, que enviaban las diversas iglesias en el país, fueran desviadas para cubrir los salarios o los gastos de la burocracia papal. Otro dato del mismo tenor (*ibidem*: 225) es que el padre Chris Kunze, estadounidense y miembro de la Legión de Cristo, percibía un salario de 28 mil dólares mensuales, que endosaba a la Legión.

algunos de ellos, para evitar la confusión entre laicismo y jacobinismo. Destaquemos algunos de ellos, porque son aplicables en cualquier república modernizada:

- En una república laica se respetan todas las creencias;
- Se organiza la separación entre religión y Estado;
- Se garantiza la libertad de conciencia;
- Se protege a los alumnos de todo proselitismo y de toda presión que les impida realizar su libre elección;
- Se les asegura la libertad de expresión; y
- Los profesores deben ser estrictamente neutrales, etcétera.

Puesto que Francia y México son naciones de añeja tradición católica, es oportuno destacar que en Francia las 8 800 escuelas privadas, en su mayoría católicas, han quedado liberadas de exhibir esta carta de principios.

Sin negar la vigencia del proceso de secularización, resulta más útil para nuestros propósitos concentrarnos en la laicidad como eje vertebrador de la modernidad vigente.

Coincidimos con Pedro Salazar Ugarte¹⁰⁹ cuando sugiere que “una historia razonada de la laicidad, no sólo resultaría oportuna, sino necesaria”. En efecto, la contribución de Norberto Bobbio (Vitale, 2013: 20) se antoja muy iluminadora, aunque él decidiera no firmar en 1998 el MANIFIESTO LAICO, “por el tono de cruzada que contradecía, en el mismo momento en el que querían afirmarlo, al espíritu laico”.

Los autores del MANIFIESTO LAICO, en opinión de Bobbio, recurrieron “a un lenguaje insolente, de viejo anticlericalismo, irrespetuoso”. En diversas ocasiones Bobbio había planteado (*ibídem*: 23) el tema de la laicidad como oposición a cualquier ortodoxia, de conocimiento doctrinal o dogmático.

¹⁰⁹ El Dr. Salazar Ugarte expresa esta opinión en el prólogo al cuaderno elaborado por Ermano Vitale (2013). Este autor italiano analiza la ‘laicidad’ apoyándose en el filósofo inglés Bertrand Russell y en Norberto Bobbio.

En un segundo ensayo, Bobbio investigó una tercera dimensión de la laicidad: la que se refiere a la relación del “no creyente” con la fe religiosa. En definitiva, Bobbio combatió desde 1978 la tesis que sostiene que “la cultura laica es un *tertium genus* entre la cultura marxista y la cultura católica” (ibídem: 24).

La conclusión a la que llega Bobbio es que la laicidad debe considerarse como un método y no como un contenido, y además es más adecuado hablar del espíritu laico en lugar de referirse a una cultura laica.

El politólogo italiano Miguel Bovero (2013) ha retomado el hilo de esta discusión para analizar la gama de significados atribuidos al término “laicidad”.

Bovero distingue dos acepciones básicas: en la primera se agrupan aquellas concepciones que se oponen a las visiones religiosas del mundo, y en la segunda el adjetivo “laico” se contrapone al “confesionalismo”, entendido como la subordinación de cualquier comunidad a los principios metafísicos y morales de una religión determinada, los cuales son custodiados por sus clérigos. Laico significa, por tanto, “no clerical” (Bovero, 2013: 1).

En la búsqueda de los orígenes de la “laicidad”, Bovero descubre diversas sectas ubicadas unas en el siglo XIII y otras en el siglo XVI, opuestas a la Contrarreforma católica, pero ambas confluyen en “una lucha única por la libertad de conciencia y de pensamiento y por la autodeterminación individual y colectiva” (ibídem: 5).

Al concluir esta revisión del concepto de “laicidad”, es imprescindible tener en cuenta el perfil que esta temática posee en América Latina. Bohoslavsky (2013) centra su búsqueda de la “laicidad” en Latinoamérica en el contexto de la teoría de la modernización, según la cual los problemas sociales de América Latina provienen de poseer una serie de rasgos culturales hostiles al progreso y a la modernidad.

Entre ellos destacan los enraizados en el sustrato cultural católico. Bohoslavsky se opone a esta tendencia totalizadora de la “teoría de la modernización” y analiza las diversas fases históricas por las que han atravesado los países latinoamericanos desde las luchas independentistas.

En la revisión se tienen en cuenta los diversos movimientos liberadores, conservadores e integristas en los distintos países de América Latina. El énfasis recae en las luchas originadas entre los partidos políticos, de derecha y de izquierda, y las variadas respuestas elaboradas por la Iglesia católica.

En definitiva, la documentada revisión de Bohoslavsky coincide con Jean Meyer, al afirmar que la religión en América Latina ha significado un problema tanto para el Estado moderno como para la Iglesia Católica.

De cara a estas luchas seculares, podemos preguntarnos: ¿cómo se ha definido el espacio de la “laicidad”? La respuesta del autor es que “no se trató de una marcha imbatible y creciente hacia la laicización de América Latina, puesto que la *clericalización* del estado ha tenido marchas y contramarchas”.

Prueba de ello es que la pérdida de poder (relativo, subraya el autor) de la Iglesia católica no ha significado la caída de influencia de la religiosidad, debido en gran parte a las iglesias pentecostales.

Estas apreciaciones tan generales acerca de la “laicidad” en América Latina nos ofrecen la pauta para profundizar en el aporte de la Santa Sede a la falsedad del mundo actual en la América Latina del siglo XXI.

La falsedad actual de la vigente modernidad

Si aceptamos la argumentación expuesta para documentar la dualidad de poderes del Romano Pontífice, entonces la tarea definitiva consistirá en mostrar cómo y por qué esta acumulación del poder vaticano en manos del papa incide en la falsedad del mundo actual.

Bastará con explicar en qué sentido la falta de autenticidad de la Iglesia Vaticana se ha convertido en las últimas décadas en un ingrediente estructural de la falsedad reinante.

Pero antes es preciso distinguir dos fases o momentos en la falsedad de nuestro mundo neoliberal. La primera fase se refiere a la estrategia

global de desarrollo impuesta en el sistema capitalista mundial en las últimas décadas.

La segunda fase consistirá en evidenciar la participación histórica y estructural de la dualidad papal en la falsa globalidad imperante. En primer lugar, la estrategia de desarrollo impuesta por el neoliberalismo carece de verdad, porque sus principios básicos contradicen las leyes tradicionales del sistema capitalista.

No es éste el lugar o el momento para discutir qué actitud tomar frente al sistema capitalista. Simplemente damos como un hecho que todos los países se encuentran inmersos en el mismo sistema capitalista global, aunque México y los demás países latinoamericanos no pueden olvidar nuestra inserción en la periferia capitalista desde los tiempos coloniales.

Pocos autores dan cuenta de la falsedad imperante en el sistema capitalista mundial, como el economista estadounidense Joseph E. Stiglitz. Aunque su producción científica es considerable, nos remitiremos a la argumentación expuesta en su libro *Caída libre, el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial* (2010).

El tema central gira alrededor de la crisis capitalista mundial que comenzó –afirma Stiglitz– en los Estados Unidos. La clave consiste en mostrar la relación entre la crisis y las creencias económicas neoliberales que afectan a las cruciales políticas desreguladoras, responsables de la debacle actual.

En síntesis, Stiglitz (*ibídem*: 18) describe el papel de la mala conducta de los bancos, de las fallas de los reguladores y de la errática política monetaria de la Reserva Federal. Stiglitz se apoya en estos antecedentes para atribuir la carga de la responsabilidad a los mercados y a las instituciones financieras.

Este economista desgrana y comenta algunas consecuencias de tales políticas. La primera se refiere a la mala política crediticia, nacida de las conductas miopes y arriesgadas adoptadas por los banqueros. La consecuencia fue el surgimiento de la “burbuja”, que al romperse trajo consigo la devastación.

La segunda consecuencia está íntimamente ligada a la falsedad de la economía capitalista mundial: son los nuevos instrumentos (*credit default swaps*) supuestamente creados para gestionar el riesgo, pero en realidad diseñados para engañar a los reguladores.

Estas medidas tuvieron consecuencias inmediatas: el creciente endeudamiento de las mayorías, el colapso de la industria manufacturera, la voracidad del mercado hipotecario, el escalamiento de los precios del petróleo desde 32 dólares en 2003 hasta 137 dólares en 2008.

La apreciación de Stiglitz es fulminante: la economía estadounidense habría sido más competitiva si se hubiera invertido en empresas manufactureras. Por el contrario, la economía de Estados Unidos giró de la manufactura a los servicios. De ahí que Stiglitz no pueda omitir el referirse a las ventajas de China, que produce más de lo que consume.

Al concluir, Stiglitz analiza las políticas iniciales de Obama. A pesar de ser un presidente demócrata, Obama no se opuso a la política crediticia del sector financiero, ya que a través de ese sector se generó la crisis de las viviendas, por las deudas mal pagadas.

Sin embargo, en vez de ayudar a los dueños de las viviendas, Obama y su equipo optaron por una estrategia conservadora. A través del asistencialismo corporativo los bancos se recapitalizaban y se evitaban los debates políticos, pero en 2008-2009 se multiplicaron los millones de hipotecas ejecutadas.

Al fin, en febrero de 2009 Obama dio un paso adecuado, pero insuficiente, con las hipotecas: no se tocaba la *quita* en el *principal*, porque el reto consistía en salvar los hogares de cientos de miles de personas y obligar a los bancos a aceptar las consecuencias de su imprevisión.

No obstante, los bancos se opusieron aunque, subraya Stiglitz (*ibídem*: 143), en vez de ganar dinero fácil, los bancos deberían haber hecho lo que les toca: crear nuevas empresas.

La conclusión a la que llega Stiglitz es irrefutable: cuando llegó tardíamente el rescate, no se restableció el crédito porque los bancos

de los Estados Unidos son contaminadores a través de la basura tóxica. “Hemos asistido a la madre de todos los rescates, pero con estrategias equivocadas,” concluye Stiglitz (*ibídem*: 175).

Su propuesta final es iluminadora. El reto, afirma, es crear un nuevo capitalismo. Pero éste es otro tema, en nuestra opinión. Por el momento nos toca revisar en México las consecuencias de este fracaso económico de los Estados Unidos.

Porque, como era de esperarse, las crisis desatadas en los Estados Unidos repercuten en la periferia, y en primer lugar en su vecino del sur. Hecho también reconocido por Stiglitz, al afirmar que “la periferia es la más golpeada” (*ibídem*: 257).

Las conexiones entre el centro y la periferia capitalista —y más en concreto, entre los Estados Unidos y México— son innumerables, pero hoy continúa la agresión colonial a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Stiglitz no omite denunciar al Consenso de Washington, promotor de las privatizaciones en la periferia, que han sido usadas en beneficio de las empresas extranjeras.

La segunda fase expondrá sintéticamente las devastadoras repercusiones en la economía mexicana de la caída sistémica generada en los Estados Unidos, tal como han sido expuestas en revistas científicas y artículos periodísticos con regularidad durante toda la época neoliberal.

Una exposición sintética debería distinguir entre los incontrovertibles datos duros y las opiniones de las élites políticas y empresariales. En cuanto a las estadísticas oficiales, nacionales o extranjeras, pueden mencionarse las siguientes:

- 1) México presenta la mayor desigualdad en la distribución del ingreso entre los 34 países de la OCDE. En el año 2010, el ingreso del 10 por ciento de las familias más ricas fue 28.5 veces superior al ingreso del 10 por ciento de las familias más pobres. En los Estados Unidos esa misma proporción fue del 15.9.
- 2) Según la revista *Forbes* (*La Jornada*, 19 de marzo de 2014), en la punta de la pirámide sólo diez mexicanos acaparan 133 mil

mdd, mientras que el ingreso anual de 15.7 millones de hogares equivale a menos de dos terceras partes de esa fortuna.

- 3) Además, esa fortuna no se quedó en México porque en el año 2012, en el inicio de la actual administración federal, los acaudalados mexicanos sacaron del país 20 mil millones de dólares en tres meses. A su vez, este monto es cuatro veces mayor que la IED que llegó a México en ese lapso, según informa el Banco de México (*La Jornada*, 24 de mayo de 2013).
- 4) En agradecimiento, uno de los países más beneficiados por las políticas neoliberales de México otorgó al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, fiel continuador de tal estrategia, la Orden del Mérito Civil “por haber prestado servicios distinguidos a España”. En efecto, en 1994 las inversiones españolas en México sumaban unos 145.7 millones de dólares. Al concluir el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa la cifra se acercaba a los 40 000 millones de dólares.
- 5) El 8 de marzo de 2014, *El País* informaba de un golpe al trono de “hierro” del narco. En efecto, la minería ilegal era uno de los pulmones económicos de Los Caballeros Templarios. Ese día el gobierno mexicano anunciaba que el ejército había asumido el control del puerto de Lázaro Cárdenas. Desde hacía décadas, tales Caballeros habían gestionado numerosas minas clandestinas y habían obtenido pingües ganancias de los empresarios chinos, muy interesados en obtener el mineral. Tres meses más tarde, la revista *Proceso* insistía en el tema y confirmaba que el crimen organizado había obtenido mil millones de dólares de ganancias en cinco años de explotar ilegalmente los yacimientos de hierro gracias a la protección de las autoridades mexicanas (nota 1).
- 6) Tal situación no es exclusiva del hierro. Hace casi un año se anunciaba (*La Jornada*, 8-12-2013) la modificación a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales en materia de energía. La novedad es que PEMEX se convertirá en una empresa productiva del Estado. Entre los múltiples cambios se anuncia que “la refinación, la petroquímica y el transporte de

hidrocarburos dejan de ser actividades exclusivas del Estado. Las puede realizar cualquier particular”.

De acuerdo con el planteamiento inicial, nuestro objetivo no se reduce a documentar la falsedad de la política económica estadounidense, ni podemos contentarnos con exponer las falsas medidas socioeconómicas adoptadas en México durante la etapa neoliberal.

Captar el engarce de ambas falsedades con la política de la Santa Sede en esta estrategia mundial, exige explicitar las políticas impuestas por los Estados Unidos, nación hegemónica decadente pero capaz de reinventar su estrategia de dominación en América Latina.

El respetado internacionalista John Saxe-Fernández (*La Jornada*, 19 de abril de 2012) menciona el debilitamiento de la hegemonía de los Estados Unidos debido a la intensa multipolarización económico-industrial y estratégico-militar en el mundo actual.

En consonancia con las tesis de Stiglitz, Saxe-Fernández también denuncia “el sometimiento de las cúpulas republicana y demócrata a los intereses financiero-especulativos y cortoplacistas de los grandes bancos y de las multiformes empresas trasnacionales.

En América Latina se impusieron los intereses de los Estados Unidos gracias a la colaboración de Menem en Argentina, de Cardoso en Brasil y de Salinas-Zedillo-Fox-Calderón en México. Hoy día Enrique Peña Nieto acaba de completar la lista.

Se confirmó así la tesis de Gabriel y Joyce Kolko (1972)¹¹⁰ de que las empresas de los Estados Unidos sólo pueden operar en el mundo si están acompañadas por regímenes capitalistas de la periferia confiables y estables. Opinión compartida y enriquecida por Noam Chomsky (*La Jornada*, 6 de septiembre de 2009).

Desde su nacimiento en el siglo XVIII, el control del hemisferio fue vital para los Estados Unidos. De ahí la larga lista de gobiernos

¹¹⁰ Autor citado por el internacionalista John Saxe-Fernández (*La Jornada*, 19 de abril de 2012).

insumisos de América Latina que fueron derrocados durante los siglos XX y XXI por el país del norte.

Es cierto que en este siglo han surgido voces discordantes en América Latina: en 2005 fue elegido Evo Morales en Bolivia, quien pretende resolver los problemas de su país sin la presencia agobiante de los Estados Unidos. En Ecuador, Rafael Correa puso fin al uso de la base militar de Manta por parte del ejército estadounidense. Ambos gobiernos cuentan con el apoyo de la UNASUR (Unión de Repúblicas Sudamericanas).

No obstante, el predominio de América Latina por los Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de falsedad. Nos referimos a la falsa lucha contra el narcotráfico, que entró en una nueva dinámica cuando Colombia permitió a los Estados Unidos utilizar siete bases militares.

La creciente expansión de las drogas en América Latina forzó a la Comisión Latinoamericana sobre Drogas en 2009, afirma Chomsky, a reconocer que la guerra contra las drogas había sido un fracaso total.

Mientras tanto, durante la última década se han incrementado la ayuda militar y el adiestramiento de oficiales de América Latina. Además, se ha reactivado desde 2008 la Cuarta Flota de los Estados Unidos, cuya responsabilidad comprende El Caribe, Centro y Sudamérica.

La actual contribución de la Santa Sede a la falsedad global

En definitiva, el incremento de la falsedad durante el comienzo del siglo XXI, tanto en los Estados Unidos como en México y América Latina, nos obliga a examinar el papel que ha jugado la Santa Sede en estos complicados procesos.

¿Ha sido El Vaticano un simple espectador de la debacle mundial?, ¿qué partido ha tomado en la lucha contra la injusticia y la desigualdad global? Nuestra respuesta final es que la Santa Sede ha actuado como un Estado autoritario y se ha olvidado del mensaje evangélico sintetizado en el Sermón de la Montaña.

Miles de páginas se han escrito sobre la actuación de la Santa Sede durante las últimas décadas. Unas discuten los avances modernizadores logrados gracias al Concilio Vaticano II; otras más pesimistas hablan del desmantelamiento de las nuevas reformas allí promovidas desde la década de los setenta.

Existen, sin embargo, datos duros que confirman la falsa política de la Santa Sede a partir de esa década fatídica. Nadie como el investigador inglés David Yallop ha documentado en sendas publicaciones (1984 y 2007) lo ocurrido en las entrañas de El Vaticano desde el momento en que Juan Pablo I fue elegido papa.

Sus treinta y tres días de pontificado fueron suficientes para demostrar que él creía en una Iglesia pobre, y que iba a actuar de acuerdo con sus convicciones. Tal como lo había hecho desde 1962, cuando era obispo de Venecia. Los hechos son bien conocidos, aunque todavía no se ha realizado la autopsia, ni existe un certificado oficial de defunción.

El asesinato, nunca desmentido oficialmente, de Juan Pablo I marca el inicio de la nueva falsedad de la política vaticana (Baeza: 1993; Suenens: 1978) (nota 2).

En efecto, para comprender a cabalidad el comportamiento político-espiritual de la Santa Sede durante largas décadas, es indispensable examinar con detenimiento el cúmulo de falsedades sabiamente entretrejidas, cuyos resultados están a la vista: la desactivación de la colegialidad esbozada en el Concilio Vaticano II; el olvido del humilde papa Juan Pablo I; la insultante canonización del papa Juan Pablo II; la aceptación y promoción, junto con el aprovechamiento pecuniario del corruptor Marcial Maciel y sus organizaciones.

Finalmente, el encumbramiento del respetado teólogo Joseph Ratzinger, primero como inclemente inquisidor y después como papa incapaz de resolver con auténtica responsabilidad evangélica la debacle moral originada por los miles de curas pederastas.

Su renuncia inaudita al Pontificado debería haber incluido un profundo *mea culpa* por su corresponsabilidad en el cúmulo de falsedades originadas tras la muerte-asesinato de Juan Pablo I.

No es posible sintetizar las escrupulosas investigaciones de David Yallop. La primera (1984) está dedicada al asesinato de Juan Pablo I, y la segunda (2007) nos introduce en el oscuro corazón del Estado vaticano de Juan Pablo II.

El meollo de sus descubrimientos yace en la intrincada red de mentiras fabricadas en El Vaticano y en haber explorado los motivos y las oportunidades de los seis funcionarios de la Santa Sede que formaron el núcleo de la mortal conspiración.

Para llevar a cabo tal tarea uno pensaría que bastaba con adentrarse en los archivos y en las bibliotecas de El Vaticano para obtener toda la información pertinente. Sin embargo, David Yallop tuvo que recurrir a fuentes tan diversas como cardenales y criminales, mafiosos, monseñores y empleados de gobierno para dar respuesta a la pregunta inicial: ¿quién y por qué asesinaron a Juan Pablo I?

La lista de sospechosos es bien conocida: el ya mencionado arzobispo Marcinkus (ligado al Banco del Vaticano); el cardenal francés Jean Villot, secretario del Estado vaticano; Roberto Calvi, director del Banco Ambrosiano, junto con sus protectores Licio Gelly y Umberto Ortolani, junto con el banquero Michele Sindona (Yallop, 1984: 6).

Nada más útil para detectar las falsedades inherentes a esta historia, la cual había comenzado con el asesinato de Juan Pablo I, que analizar la Teología de la Liberación explícitamente atacada por Juan Pablo II. David Yallop realiza esta tarea en el segundo volumen (2007), dedicado a desentrañar el oscuro corazón del nuevo papa.

Mientras Albino Luciani (Juan Pablo I) había condenado a muerte al IOR, el Papa Wojtyla rechazó las reformas propuestas por Juan Pablo I y mantuvo en sus puestos a Marcinkus y sus colegas, mientras comenzaba a preocuparse por la adquisición de riquezas (Yallop, 2007: 40).

La historia comenzó en México en el mes de enero de 1979. Pocos días antes el juez Alessandrini, quien preparaba la investigación del Banco Ambrosiano, también fue asesinado. Pero en México Juan Pablo II encontró tanto multitudes aclamadoras como élites educadas por el mexicano Marcial Maciel.

También respondió a la pregunta de un descarado estudiante: ¿qué piensa de la Teología de la Liberación?, inquirió el joven. La respuesta de Juan Pablo II acuñó en una sentencia su programa para los próximos veinticinco años: “Depende de qué Teología de la Liberación se trate. Yo sigo la de Cristo, no la de Marx” (*ibídem*: 43).

El tiempo mostraría que su versión era la polaca. De ahí que nadie reprochará a Juan Pablo II haber sido infiel a tan lúcida respuesta.

En las siguientes quinientas páginas, David Yallop sigue paso a paso las actividades de Juan Pablo II y de su fiel colaborador, el futuro inquisidor Joseph Ratzinger. La colaboración de ambos personajes fue constante y rebosante de mutua fidelidad. Por ejemplo, en el caso de la pederastia clerical.

Como jefe de la Congregación de la Fe, el cardenal Ratzinger impartió a los obispos –apoyado con una carta de Juan Pablo II– una serie de normas secretas que imponían el control jurídico de los casos de abuso sexual sacerdotal.

Se trataba de imponer la estrategia del encubrimiento, como lo reconoció cierto obispo en El Vaticano (*ibídem*: 315). Como sabemos en México, nadie disfrutó mejor de tales medidas papales que Marcial Maciel y sus legionarios, quienes perfeccionaron el arte del encubrimiento.

Con referencia a Marcial Maciel y sus legionarios,¹¹¹ nada más oportuno hoy día, cuando la Iglesia Romana y la Santa Sede están en manos de un jesuita argentino, que recordar el humillante e injusto tratamiento que sufrieron tanto el padre Pedro Arrupe –general de los jesuitas–, como los jesuitas centroamericanos, seis de los cuales fueron asesinados hace veinticinco años en San Salvador.

¹¹¹ Tales abusos abarcaron varias generaciones, como lo documenta Yallop (*ibídem*: 316). En el caso de Juan Vaca, sus palabras son: “Maciel gave me instructions that all traces of the abuse should be covered up. The perpetrator was fired from his post and immediately transferred secretly to a mission in the Yucatan Peninsula of Mexico. For my ‘good work’ in covering up the mess, the founder rewarded me with the appointment of superior and president of the Legion of Christ in the United States”.

Además de los testimonios presentados por investigadores tan reconocidos como David Yallop y Jason Berry, son innumerables las referencias publicadas sobre la actuación oficial de la Santa Sede. Destacan por su abundancia y persistencia las acusaciones formales contra la Santa Sede y sus legítimas autoridades en relación con la pederastia clerical.

Así, en el año 2010 aparecieron diversas referencias directas a la complicidad de la Santa Sede. La cantante irlandesa Sinéad O'Connor calificaba de “huecas” las disculpas del papa por los abusos sexuales a menores en Irlanda (*El País*, 7 de abril de 2010), país que al igual que España puede calificarse como una “teocracia católica”.

La cantante alude explícitamente a la carta personal escrita por el papa Benedicto XVI (hoy cardenal Joseph Ratzinger) en la que pedía perdón a Irlanda por los decenios de abusos sexuales a menores.

En México, el arzobispo de San Luis Potosí pidió perdón a víctimas de la pederastia sacerdotal (*La Jornada*, 21 de mayo de 2014). Pero al encontrarse en Roma en la visita *Ad limina* del episcopado mexicano al papa, añadió la denuncia correspondiente “acatando sin pretexto alguno la Ley de Asociaciones Religiosas y del Culto Público”.¹¹²

Otro caso reciente que apunta en la dirección correcta es la expulsión del sacerdocio del ex nuncio polaco Josef Wesolowski, acusado de abuso sexual en la República Dominicana (*La Jornada*, 27 de agosto de 2014). Pero es sólo el comienzo. La decisión ha sido tomada luego de un juicio canónico —es decir, según las leyes de la Iglesia Romana— en El Vaticano.

La agencia Reuters insiste en subrayar que la Santa Sede está bajo presión desde hace décadas “para aclarar una serie de escándalos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes católicos” (ver nota 2).

En la misma dirección puede mencionarse la remoción de 884 sacerdotes pederastas en la última década, los cuales “han sido destituidos del ministerio sacerdotal por acusaciones creíbles contra

¹¹² No es posible siquiera sintetizar las innumerables denuncias, firmemente comprobadas, que han tenido lugar en México, país originario de Marcial Maciel.

menores de dieciocho años de distintos países” (*Proceso*, 6 de mayo de 2011), según anunció oficialmente monseñor Silvano Tomasi¹¹³.

Sin embargo, estos pasos adecuados de la Santa Sede al castigar a los clérigos pederastas no son más que el comienzo si es que los castigos sólo responden al Derecho Canónico de la Iglesia Romana. Hoy ya no puede olvidarse que “el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura comparó el abuso sexual cometido por sacerdotes con actos de tortura y criticó los intentos de El Vaticano por evadir su responsabilidad jurídica en los casos ocurridos fuera de su territorio, así como sus métodos para castigar a los religiosos involucrados”.

Mandato oficial que tiene más vigor en el caso de la Iglesia Vaticana, porque al menos desde 1929 exige ser considerada como un Estado, aunque sea *sui generis* (Schmitt: 2011; Campderrich: 2011). Exigencia formulada meses antes, según Reuters, AFP, AP y *The Independent* (*La Jornada*, 6 de febrero de 2014), porque la Santa Sede protegió a curas pederastas al guardar silencio sobre abusos sexuales de sacerdotes católicos (ver nota 3).

Conclusión

Antes de sacar las debidas conclusiones es necesario subrayar, una vez más, que en la Iglesia Católica Romana coexisten dos orientaciones religiosas y dos mentalidades.

La primera es la encarnada por el dualismo del poder papal, cuyas consecuencias hemos expuesto. La otra orientación es la representada, con diversos matices, por el arzobispo Romero de El Salvador y Samuel Ruiz, arzobispo de Chiapas.

Su colaborador Fray Raúl Vera, actual obispo de Saltillo, está bajo el escrutinio de la burocracia vaticana. Su defensa de la comunidad gay

¹¹³ Monseñor Silvano Tomasi y el que esto escribe coincidimos como estudiantes del doctorado en sociología en la New York University en la década de los setenta del siglo pasado. Ojalá que ambos hayamos asimilado las sabias lecciones de modernidad científica aprendidas en tan entrañable universidad.

ha provocado la molestia de las autoridades vaticanas (Beltramo: *e-consulta*, 21 de septiembre de 2011).

Se le acusa de haber abandonado a su grey por trabajar con homosexuales, colaborar en dos centros de los Derechos Humanos, apoyar a Javier Sicilia y emitir declaraciones contra el gobierno por su lucha contra el narcotráfico.

¿Cuál es el error de Raúl Vera?, ¿no es cristiano su comportamiento? El problema es que “utiliza las estructuras de la Iglesia Vaticana para promover la ‘normalización’ de las preferencias sexuales, aclara Andrés Beltramo. Una cosa es proporcionar atención psicológica y espiritual a los homosexuales y otra es pretender convertir eso en un tácito aval al *lobby gay*. Beltramo concluye: en su viaje a Roma, los cardenales “le leyeron la cartilla”.

Aparecen, por tanto, dos tipos de actores en la Iglesia Romana: los que mantienen las estructuras de poder y los que se atreven a cuestionarlas (Aguirre: 2014).

Se revive la historia gráficamente inaugurada en la Edad Media con Francisco de Asís y la orden franciscana. El santo pretendía permanecer en el carisma, pero chocó con la nueva orden. Él no es el verdadero fundador, pues fue marginado y después reubicado.

Hinkelammert (231) califica este proceso como la institucionalización de la Orden Franciscana. Lo que comenzó como un soplo espiritual adquiere una dimensión política. Ahí es donde surgen los problemas, insiste Hinkelammert (233). Porque al llevar el carisma cristiano hacia el plano político, es cuando se produce el choque.

En la Orden Franciscana prevalece la nueva institución, como acaba de ocurrir en el último tercio del siglo XX con la Iglesia Romana. Juan Pablo I, cual nuevo Francisco, fue enviado intempestivamente al paraíso. ¿Quién se impuso? La versión polaca de la Teología de la Liberación, con la ayuda de conocidos cardenales y de organizaciones vaticanas tan poderosas como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

En el caso de México, la historia se repite. Es lo que describe Bernardo Barranco (2007) cuando analiza la actuación de la jerarquía

católica durante la supuesta transición democrática mexicana. Como hicimos en el comienzo de este escrito, Barranco sitúa esta multiforme transición en el contexto histórico de la modernización capitalista en su doble vertiente: la secularización y la laicidad.

Las consecuencias de esta evolución nos son bien conocidas: en la sociedad moderna ya no existe la religión pública, sino la libertad religiosa basada en el reconocimiento de los derechos de toda conciencia individual.

¿Cómo han reaccionado la Santa Sede y sus representantes jerárquicos en México, comenzando por el intrigante nuncio Prigione? Con la doble experiencia y multisecular oficio de la Iglesia Romana y de la Santa Sede, avaladas por muchos siglos de historia.

Si nos centramos en las dos últimas décadas, como lo hace Barranco (*ibídem*: 39), observaremos que la Santa Sede, a través de su nuncio, eligió una postura colaboracionista con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Prigione contó con el apoyo de la Santa Sede, y también del gobierno mexicano.

Años después, en pleno siglo XXI, cuando desaparece Prigione de la escena y se reestructura en el año 2005 la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), surgen nuevas comisiones eclesiales.

No obstante, Ratzinger convertido en Benedicto XVI sigue interviniendo directamente en la estructura jerárquica mexicana a través de su nuevo nuncio. De ahí que permanezcan los mismos debates de antaño “en torno a la píldora, al aborto, a la homosexualidad, la familia y la eutanasia”.

La llegada al Pontificado de un jesuita argentino ostentará nuevos modales, pero permanecerá incólume la misma postura tradicional vaticana (Larraquy: 2014).

En México, como en el resto del mundo, la Santa Sede no adoptará la modernidad impulsada en Occidente desde el siglo XVIII, aunque el papa Francisco tampoco respalde el ultramontanismo del papa Pío IX y su *Syllabus*.

Su nueva estrategia se centra en la pretensión de introducir en las constituciones de los países del Primer Mundo y en América Latina el concepto de ‘libertad religiosa’.

Barranco (*ibídem*: 43) puntualiza acertadamente que las jerarquías vaticana y mexicana desean instaurar –bajo un nuevo ropaje, aclaramos– una concepción de la libertad religiosa que no es nueva. Sin embargo, la Santa Sede sabe en su secular experiencia que no es preciso mantener ahora las embestidas políticas, apoyadas en los mismos tópicos, por mucho tiempo. Recientemente ha cambiado la táctica en México (Vera, 2014: 19-21).

Los obispos mexicanos, en su visita *Ad limina* le han expuesto al papa Francisco toda la realidad de la violencia multiforme presente en México desde hace décadas. Llegan a cuestionar explícitamente las cinco reformas constitucionales del presidente Enrique Peña Nieto: política, energética, fiscal, educativa y de telecomunicaciones. La crítica de fondo es que tales reformas ofrecerán una nueva oportunidad monopolizadora “para aquéllos acostumbrados a depredar los bienes del país”.

La pregunta final es: ¿qué sentido y qué futuro tendrá para México esta inesperada denuncia por parte de una institución político-religiosa que monopolizó el poder virreinal durante tres siglos en México?, ¿se anuncia el regreso de un nuevo monopolio eclesiástico? En definitiva: ¿se abre el camino en México para una renovada falsedad posmoderna?

Notas

NOTA 1) Las consecuencias trágicas –para el desarrollo autónomo de la industria mexicana– de la equivocada política industrial llevada a cabo por el Estado mexicano en las últimas décadas, se reflejan en la investigación que lleva a cabo la Secretaría de Economía acerca de “las presuntas prácticas comerciales desleales en las importaciones de lámina rolada en frío, originarias de China y que es utilizada para la elaboración de componentes de chasis, autopartes, tubería, entre otros productos” (*La Jornada*, 8 de diciembre de 2014). Si las élites políticas y empresariales de México hubieran seguido el modelo de

industrialización aplicado por los países del centro capitalista, hoy día México habría sido capaz de elaborar en territorio mexicano las láminas roladas que ahora tiene que importar de China. Los beneficios de tal política neoliberal mexicana ni siquiera recaen en el pueblo de México porque, como es sabido, el narcotráfico de Michoacán controla tanto las minas como la exportación del hierro hacia China.

NOTA 2: Las pérdidas económicas que menciona Jason Berry están obviamente relacionadas con los problemas no resueltos por la Santa Sede en cuanto a las acusaciones contra la pederastia clerical.

Tabla 1. Estimado de las pérdidas por defraudación a las colectas dominicales en la Iglesia católica de Estados Unidos

Año	Pérdidas totales para periodos mostrados	Parroquias existentes†	Pérdidas anuales por parroquia*
1965	1965-1974	17 637	\$3 612
1974	\$16 223 000	18 427††	\$5 348
1975	1978-1984	18 515	\$6 008
1984	\$336 040 000	19 171	\$11 727
1985	1985-1994	19 244	\$12 190
1994	\$560 690 000	19 322††	\$16 879
1995	1995-2004	19 331	\$17 330
2004	\$738 980 000	18 935††	\$21 336
2005	2005-2010	18 891	\$22 031
2010	\$519 096 000	17 958	\$25 000

Pérdidas estimadas 1965-2010: \$2 317 036 000. Fuente: Berry, J. (2012). Las finanzas secretas de la Iglesia. México. Random House Mondadori. P. 508.

Bibliografía

- Aguirre, A. (2014). *La guerra del Papa Francisco*, en *Contenido* (abril), pp. 19-31.
- Baeza, Á. (1993). *¿Por qué murió Albino Luciani?* Madrid. ABL editor.
- Barranco, B. (2007). “La jerarquía católica: entre transición democrática y tentación teocrática”, en *Metapolítica*, vol. 11, núm.54 (julio-agosto), pp. 36-43.
- Berry, J. (2012). *Las finanzas secretas de la Iglesia*. México. Random House Mondadori.
- Bonillo, M. (2011). *La disputa de jesuitas y dominicos por el poder*, en: levante-emv.com <http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/30/disputa-jesuitas-dominicos/778324.html>
- Bohoslasky, E. (2013). *Laicidad y América Latina*. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM.
- Bovero, M. (2013). *El concepto de laicidad*. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM.
- Campderich, R. (2011). *Catolicismo romano y forma política: manifiesto político eclesial y pieza del engranaje decisionista*. Madrid. Ed. Tecnos. Estudio preliminar, pp. IX-LXXXVIII.
- Fábrega, V. (1996). *La herejía vaticana*. Madrid, Siglo XXI.
- Feldkamp, F. (2004). *La diplomacia pontificia*. Madrid, BAC.
- Hinkelammert, J. (1990). *Democracia y totalitarismo*. San José, Costa Rica, Ed. DEI.
- Larraquy, M. (2014). *Recen por él*. México, Random House Mondadori.
- Salazar, P. (2013). *Los dilemas de la laicidad*. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
- Schatz, Klaus (1990). *Der Päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart*. Würzburg.
- Schmitt, C. (2011, primera ed.: 1923). *Catolicismo romano y forma política*. Madrid, Ed. Tecnos.
- Stiglitz, J. E. (2010). *Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial*. México, Taurus.
- Suenens, L. J. (1978). *Juan Pablo I: la esperanza*, Introducción. Barcelona. Daimon.

- Vitale, E. (2013). *Laicidad y teoría política*. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
- Yallop, D. (1984). *In God's name. An investigation into the murder of Pope John Paul I*. New York, Bantam Books.
- Yallop, D. (2007). *The power and the glory. Inside the dark heart of John Paul II's Vatican*. New York. Carroll and Graf Publishers.

Comunicación pública: el gran negocio de mentir

José Cisneros Espinosa

Cuando una bebida gaseosa que daña la salud desde hace más de cien años se puede presentar a nivel mundial como sinónimo de deporte y felicidad, y el presidente de un país que traiciona y saquea a su pueblo se exhibe como su salvador, sin que a la primera se le juzgue por fraude y al segundo por traición a la patria, se ratifica públicamente que vivimos en una sociedad sometida a la mentira.

José Cisneros

Resumen

Con base en el modelo teórico de Antonio Gramsci sobre el funcionamiento de la estructura social denominado *Bloque histórico*, que fundamentalmente atribuye a los grandes empresarios capitalistas, sobre todo financieros, la dirección y el control de la sociedad, se aborda en este texto un análisis particular de la denominada *comunicación pública* y su función de encubrimiento de un sistema social injusto y destructor que la *clase dirigente*, la *sociedad política* y los medios de difusión presentan formalmente como “democrático”.

Dicho análisis se estructura a partir de tres categorías o tipos de encubrimiento: a) el que se refiere a afirmaciones sobre economía; b) el que se enfoca al manejo político; y c) el que se refiere a la ideología como reiterado encubrimiento de las dos categorías anteriores. Dentro de este tipo de encubrimiento, donde se ubica propiamente la *comunicación pública*, se analiza el doble sesgo que desde su origen ha tenido el manejo del concepto de “comunicación” hegemónico, y se confronta con la idea de *acción comunicativa* de Jürgen Habermas y el concepto de *comunicación* de Antonio Pasquali, explicando así la existencia de un estado de incomunicación social con el gobierno.

Finalmente, se concluye en la necesidad de refundar el Estado de manera integral, en tanto reorganización social de la población, su gobierno, el territorio y las leyes, para retomar el sentido de la acción política de la sociedad en función del *buen vivir* de todos los seres humanos y el cuidado de la naturaleza.

Palabras clave: comunicación pública, acción comunicativa, mentiras sobre economía, mentiras sobre política

Abstract

This paper is based on Antonio Gramsci's theoretical model the Historic Block, which deals with the functioning of the social structure; this thesis proposes capitalistic corporate elites, particularly financial conglomerates, are in control and design society as a whole. This essay carries out a specific analysis of the so called public communication concept and its direct purpose to cover-up a basically unfair and destructive social system which the ruling class, the political society and the mass media formally present as “democratic”. This analysis is structured from three basic categories or forms of concealment: a) those statements required on the state of the economy; b) those focused on political management; and c) those referring to ideology, as a repetitive concealment of the two previous categories. Within this later type of cover-up which includes public communication, this paper analyses the double bias implied in this conception from its origins as part of the current hegemonic concept of “communication”. Secondly, this paper challenges this public communication notion versus the communicative action paradigm introduced by Jürgen Habermas and Antonio Pasquali's

communication concept and this leads to a state of social uncommunication. Finally, this paper concludes there is a need to comprehensively re-establish the State; this involves reforming the social organization, governmental action, territory and the law, in order to restructure political management to promote human wellbeing and protecting the environment.

Keywords: public communication, communicative action, lies on the economy, political lies

Introducción

DESDE siempre, el poder autoritario se ha impuesto y se ha mantenido sobre la población con base en dos factores: la fuerza y la mentira. En términos de hoy, se trata de la coerción del gobierno o “violencia legal”; y de la hegemonía ideológica que impone socialmente la visión del mundo que conviene a los poderosos para ocultar sus mecanismos de explotación y de saqueo.

Pero los poderosos mayores no se dejan ver, sólo sus actores, funcionarios públicos y fuerzas armadas, así como sus voceros; es decir, los trabajadores intelectuales al servicio de la *clase dirigente* (Gramsci, 1985). El paradigma de esta asociación de actores en la historia moderna lo constituyen Hitler y Goebbels, el ejército nazi y los medios de propaganda. Los poderosos banqueros por encima de Hitler nunca fueron cuestionados. Como sigue siendo ahora con los empresarios financieros, salvo el caso de los *ocupas* de Nueva York, quienes señalaron a los banqueros de Wall Street como los causantes de la desigualdad mundial, y los escritos de algunos autores como Noam Chomsky (2010), Joseph Stiglitz (2012) y Manfred Max-Neef (2014), entre otros.

Pero el poder autoritario, aunque frecuente, nunca fue la principal forma de organización social a través del tiempo, aunque sí la más destructiva y por ello recordada. Por el contrario, en la historia del mundo siempre ha sido la minoría. La organización comunitaria, participativa y pacífica, ha sido la más extendida y duradera a través de milenios.

Sin embargo, en los siglos recientes esta forma de organización ha sido reiteradamente “borrada” de la historia oficial por ser solidaria, y se ha privilegiado el sistema social donde “el hombre es el lobo del hombre”, como si ésta fuera la única organización posible de la vida humana.

En la época actual de *capitalismo salvaje*, después de la derrota del socialismo burocrático, la organización autoritaria del poder se ha vuelto más sofisticada, más cínica, desigual y dominante a nivel mundial. Como se ha explicado en el libro *Democracia-ficción e incomunicación política. Una mirada desde el Sur* (Cisneros y Valdiviezo, 2013), estructuralmente existe un pequeño grupo de empresarios multimillonarios que se reúnen una vez al año para dictar las políticas económicas mundiales, sin que tengan que informar a nadie de sus acuerdos, y sin que nadie los haya elegido para tal función.

Posteriormente, a través de sus grandes empresas financieras como el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, todos ellos bancos enfocados al lucro, se transmiten a los gobernantes las reglas a seguir, no sólo en el terreno económico, sino también en el político e ideológico, aunque en estos dos rubros lo hagan de manera extraoficial. No importa si se trata de gobiernos del primer o del tercer mundo, los presidentes del G7 o del grupo de los 20, o de cualquier otro país. Todos son dependientes de tales bancos, debido a que están sujetos a ellos mediante la deuda pública, la política monetaria y la emisión de billetes.

Y si algún país pretende tomar decisiones económicas y políticas de manera independiente, pronto será sometido por la fuerza de la economía o por las armas, desde dentro o desde fuera del país, con cualquier justificación oficial, creíble o no, inducida a través de los medios de difusión masiva.

Pero atendiendo a la explicación de Antonio Gramsci sobre el funcionamiento capitalista descrito a través de su teoría del *bloqueo histórico*, resulta claro que la dominación es más duradera si se hace con el consentimiento de la población dominada, la llamada *hegemonía*. Y para ello es de vital importancia persuadir a la gente de que la vida

que vive es la mejor, y que sería un profundo desatino pretender cambiarla.

Es aquí donde el uso de los medios de “comunicación” se vuelve estratégico: Se busca instaurar en la mente de las personas una falaz explicación del mundo y de la organización social, donde la desigualdad y la pobreza son culpa de los propios trabajadores, y que el sistema social “democrático” da oportunidades a todos para ser empresarios exitosos.

Función ideológica que además deja muchas ganancias económicas y políticas para los dueños de los medios de difusión. Se trata, pues, del gran negocio de mentir en favor de la *clase dirigente* y de sus operadores políticos en el gobierno.

Antes de proceder al análisis, conviene aclarar que muchos de los datos del contexto social son tomados de referencias periodísticas por dos razones: no existen estudios académicos nacionales que aborden la temática en cuestión con un enfoque crítico del poder; y en segundo lugar, porque las notas periodísticas empleadas se sustentan en informes y declaraciones oficiales de organismos gubernamentales y organizaciones profesionales con reconocimiento público.

Finalmente, los datos sólo ilustran las explicaciones del análisis conceptual acerca del funcionamiento estructural de la sociedad en que vivimos, objetivo central del presente texto.

A continuación se abordarán, a modo de “botones de muestra”, algunas de las mentiras recurrentes en nuestra época que pretenden someter mentalmente a la población para que los grandes empresarios continúen con el despojo de la riqueza social sin mayores contratiempos.

Agruparemos estas mentiras en tres categorías: a) las que se refieren a la economía; b) las que se refieren a la política; y c) las que se refieren a la ideología; o sea, las mentiras que ocultan o justifican las mentiras anteriores, donde los medios de difusión masiva son los más eficaces persuasores en la época actual.

Primera parte: mentiras sobre la economía

El lenguaje de los economistas, aunque tiene relación directa o indirecta con nuestras actividades cotidianas, refleja en realidad una concepción de la vida muy parcial e interesada, ignorando y descalificando innumerables aspectos de nuestra existencia que contribuyen a que podamos vivir en armonía entre los propios seres humanos y con la naturaleza.

Por ejemplo, omiten el respeto y la conservación de la naturaleza, los sentimientos de amor y de solidaridad con las demás personas, el desarrollo espiritual y artístico, la salud preventiva, el descanso y la recreación, además de la producción sustentable para satisfacer las necesidades naturales de toda la población, presente y futura, entre otros.

Por el contrario, las llamadas “leyes de la economía” y las “leyes del mercado”, que no son tales, sino estrategias económicas diseñadas con intereses muy definidos, nos llevan a la destrucción de la naturaleza y a la desigualdad entre los seres humanos.

Como expresan Manfred Max-Neef y Philip Bartlett (2014) en su libro *La economía desenmascarada. Del poder y la codicia, la compasión y el bien común*, las construcciones teóricas de la economía capitalista tienden principalmente a generar injusticia y desigualdad. Y Max-Neef es un economista de alto nivel que conoce del tema.

De modo que, aunque cada lenguaje implica una determinada mirada sobre el mundo, observamos que la conceptualización de los economistas hegemónicos no sólo hace referencia a una mirada muy estrecha del mismo, sino que se percibe su intención de ocultar las implicaciones de injusticia que con claridad conocen en la generación de la riqueza.

Max-Neef y Bartlett desmienten la economía dominante como una ciencia exacta y como el único modo de vida posible:

“Los economistas neoliberales, queriendo semejarse a las ciencias exactas, niegan que la economía encierre juicios de valor, intereses concretos y subjetividad, (pero) incluso Adam

Smith o Keynes entendían la economía como una ciencia moral.” (Max-Neef y Bartlett, 2014).

Una ciencia moral es la que contribuye a la vida y a la sana convivencia social. Pero, como afirman Max-Neef y Bartlett (2014), “en la economía capitalista el ‘otro’ no es un ser que vive y siente, sino un instrumento para acrecentar la ventaja de uno mismo. La comunidad no existe”.

Y es por ello que en las diferentes expresiones que los economistas y publicistas económicos emplean para el gran público, puede analizarse sin gran esfuerzo la desigualdad que implican. Por ejemplo:

“Ponemos a trabajar su dinero”

Los negocios bancarios dedicados a captar los ingresos de los empleados y trabajadores en general, inventan frases como la anterior para que las personas les entreguen sus ahorros. Pero en esta frase hay una mentira evidente y al menos un ocultamiento de la desigualdad:

Por supuesto que el dinero, los billetes y monedas, no van a generar por sí mismos otros billetes y otras monedas, sino que el dinero reunido con muchas aportaciones individuales se le va prestar a otras personas y al gobierno. Esas otras personas, que no el gobierno, tendrán que trabajar muy duro para invertir y recuperar el dinero recibido en préstamo, más sus respectivas utilidades. Por lo que a su vez tendrán que poner a trabajar a otras personas a las que les pagarán menos de lo que producen (plusvalía) para obtener las utilidades buscadas.

Por ejemplo, en la industria de la construcción masiva de viviendas en México, es común obtener el 100 % de utilidad, lo que implica que tendrán que construirlas pagando muy poco a los obreros de la construcción y cobrando mucho a los consumidores.

En cuanto al pago de intereses, un ciudadano recibe entre el 1 y el 3% anual por sus ahorros, generalmente menos que el porcentaje de inflación, que por regla general supera al 4% (González, 2014).

Por otra parte, si el ciudadano usa además una tarjeta de crédito porque el sueldo no le alcanza, o compra una casa o un auto a plazos, entonces tendrá que aportar al menos 10% de intereses si paga a tiempo, y entre 30 y 80% si no lo hace oportunamente. Resumiendo, por tanto:

1. El dinero no produce dinero, sino que su valor lo genera el trabajo de los seres humanos. Trabajo que, por otro lado, no se le paga completo al obrero o empleado, sino que se le sustrae una parte del mismo, sin decirlo, que enriquece al patrón y a lo que Marx llamó *plusvalía*.
2. Aparte de la extracción sistemática de *plusvalía* al trabajador, debido al desempleo y a las nuevas leyes laborales, en México el precio que se paga por la mano de obra ha disminuido 6.6 % en los primeros 9 trimestres del sexenio de Peña Nieto, mientras que su productividad (*plusvalía*) se ha incrementado en 2 por ciento en este mismo periodo, de acuerdo con datos del propio Banco de México (Zúñiga, 2015).
3. Como antes se expuso, el pequeño ahorrador recibe por su dinero menos intereses de lo que sube la inflación, por lo que a través del tiempo va perdiendo el valor de su dinero, o lo que llaman el *poder adquisitivo*. En México en los últimos 25 años los trabajadores han perdido 77.79% de su *poder adquisitivo* (Pallares, 2014).
4. Pero además de lo mucho que cobran los bancos, sus dueños hacen fraudes a través de prestarse dinero a sí mismos para otras de sus empresas y las de sus amigos, y entonces, para no quebrar sus propios negocios bancarios, el gobierno “los rescata” asumiendo sus deudas gigantescas, que los ciudadanos deberán pagar a través de los impuestos.

Max-Neef, premiado con el *Right Livelihood Award*, plantea un dato contundente: “Con el dinero que se ha usado para ‘salvar’ a los bancos, habría 600 años de un mundo sin hambre” (Max-Neef y Bartlett, 2014).

En esta lógica, de pagar los “rescates” bancarios y la deuda contraída por los políticos, las consecuencias económicas directas para los ciudadanos son inevitables: más impuestos y menos pensiones y servicios.

Y si a ello le sumamos la caída de los precios y utilidades del petróleo, más la privatización de este recurso y sus ganancias, la carga fiscal sobre el ciudadano se vuelve un grillete de por vida, de una vida cada vez más pobre para los trabajadores y todos sus descendientes.

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz afirma que 8.6 millones de adultos mayores de 64 años en México no cuenta con ahorros para una jubilación digna, y 4 millones de esta edad viven de por sí en condición de pobreza. México, dice, está entre los países que tienen uno de los mayores niveles de pobreza de adultos mayores (González, 2015: 26).

Pero en tanto los adultos mayores se hunden en la pobreza, los fondos de pensiones financian 4 de cada 10 pesos de la deuda de grandes empresas. Según análisis del grupo financiero Banorte-Ixe, de los 2 billones 444 mil 100 millones de pesos que se acumularon hasta marzo de 2015 en fondos de pensiones para la jubilación, 37.66 % de ellos, o sea, 1 billón 65 mil 102 millones de pesos se invirtieron en fondos de deuda de grandes empresas, como la constructora OHL, Domino's Pizza y la cementera Holcim-Apasco (Cardoso, 2015: 21).

Por supuesto, el monto de lo que pagarán esas empresas a los fondos, si no los defraudan, será mínimo en relación con lo que tendrían que pagarle a un banco comercial directamente.

Otra forma de aprovechar los fondos de pensiones para beneficios particulares consiste en invertirlos en la Bolsa de Valores, de donde los operadores sacarán grandes utilidades arriesgando el patrimonio de los trabajadores, no el suyo, y que, en caso de pérdida, serán los ahorradores quienes finalmente la asuman; como ha ocurrido antes con fondos de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un ejemplo reciente del manejo de fondos de pensiones en la Bolsa Mexicana de Valores es la inversión de 2 300 millones de pesos de dichos fondos en proyectos privados de infraestructura, operados por ex funcionarios del gobierno como el ex presidente de la Comisión

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) Mario Gabriel Budebo, y el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz (Cardoso, 2015).

Gracias a los usufructos que de esos fondos se obtienen, en la actualidad se están incrementando las engañosas campañas de promoción del ahorro para el retiro, “para que los trabajadores tengan una vida digna en el futuro”, pues eso implica tener en el presente la disposición de mayores recursos para los negocios privados sin riesgo alguno para los operadores. El riesgo y la devaluación serán para los ahorradores, como ha ocurrido recientemente con el alza del dólar.

Y mientras a la población en general se le aumenta la carga fiscal, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda, los empresarios dejaron de pagar impuestos por 389 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2015. Y sólo los “grandes contribuyentes” deben 118 mil 300 millones de pesos, pero el gobierno “transfiere” este adeudo a los ciudadanos haciendo un recorte presupuestal de 124 mil 300 millones (Cardoso, 2015: 25), lo cual significa menos programas sociales y menos servicios para la población.

Cuando los precios del petróleo subieron el sexenio anterior, no se tradujeron en beneficios para la población; pero cuando los precios bajan, son los contribuyentes los que tienen que cubrir ese faltante.

En el primer trimestre de 2015 Pemex perdió 121 mil 554 millones de pesos porque bajaron los precios del barril de petróleo, pero Hacienda lo compensó con una recaudación especial de 146 mil 872 millones de pesos a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios Diversos (IEPS) (Méndez, 2015). Y esta lógica será aplicada sistemáticamente por el gobierno en el futuro inmediato, al privatizar la industria petrolera y no recibir el monto de las utilidades anteriores.

Quienes ahora recibirán las utilidades serán los empresarios y políticos en lo personal. Por ejemplo, en la llamada *ronda uno* de venta de campos petroleros ya se confirmó que el consorcio ganador está relacionado con un cuñado del ex presidente Carlos Salinas. Y también la petrolera inglesa Premier Oil PLC, del mismo consorcio, a

pesar de que ha sido enjuiciada en Argentina por operar de manera ilegal (Rodríguez, 2015).

En conclusión, si el ciudadano que ahorra recibe menos valor del que invierte, y además debe pagar la deuda de su gobierno y la de los propios bancos, financiar negocios privados, así como los adeudos no pagados por los grandes empresarios y la baja en los ingresos petroleros, ¿en qué situación se encuentra quien no puede ahorrar, y peor aún, quien no tiene empleo?

La desigualdad y la injusticia de este sistema económico resultan catastróficas para la población trabajadora de México y de cualquier país. En México, por ejemplo, de 2012 a 2014 el ingreso trimestral de los hogares bajó 3.5% en promedio, aunque en el campo este déficit llegó hasta 6.6% (González, 2015), lo cual acelera el empobrecimiento de las mayorías. Y en el futuro será cada vez peor.

A pesar de la situación anterior, se busca hacer creer a la población que éste es el único sistema económico posible para vivir en sociedad. Lo cual, por supuesto, es falso. Todos los pueblos originarios vivieron durante milenios con una economía sustentable a partir de prácticas comunitarias y de respeto a la naturaleza. Y hoy día es posible retomar los valores comunitarios con herramientas modernas y el uso de energía limpia.

Pero, como sostienen Max-Neef y Bartlett (2014), necesitamos reemplazar los valores dominantes de la codicia y la acumulación por la solidaridad y la cooperación. Y abogan por una economía humanizada de acuerdo con los principios siguientes:

1. La economía ha de servir a la gente, no a la inversa;
2. El desarrollo se refiere a las personas, no a los objetos (ni a las utilidades);
3. Crecimiento no es sinónimo de desarrollo, y el desarrollo no necesariamente requiere de crecimiento, sino de reparto justo;
4. Ninguna economía es posible en ausencia de los servicios de los ecosistemas;

5. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera; de ahí que el crecimiento permanente sea imposible;
6. Las necesidades humanas no son infinitas, y por lo tanto saciadas por el mercado. Al contrario son finitas, pocas y clasificables;
7. Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de esas necesidades.

Teniendo en cuenta estos factores, es posible un Desarrollo a Escala Humana contrapuesto al capitalismo. De ahí que sea tan importante desenmascarar las mentiras recurrentes de este sistema, como por ejemplo la del “libre mercado”. (Max-Neef y Bartlett, 2014).

“Libre mercado”, ¿para quién?

Se nos repite hasta el cansancio que “el mercado” debe operar libremente en todo el mundo, sin ninguna restricción, para llevar el crecimiento y el “desarrollo” a todos los rincones del planeta.

No se habla, por supuesto, de los intereses y las conductas antiéticas de los mercaderes. Ellos permanecen ocultos en la mistificación conceptual del “libre mercado”, como si éste fuera un ente profesional y autorregulado, o cuando menos la nueva versión de la “mano invisible”, que por cierto nunca existió, para regular las transacciones comerciales de los monopolios.

Por ello no es de extrañarse que el “libre mercado” nunca haya funcionado para bien de la sociedad y, por el contrario, desde la aparición del liberalismo inglés en el siglo XVIII hasta el neoliberalismo global de 2015, el libre mercado siempre ha generado monopolios transnacionales y desempleo, desigualdad, pobreza y hambre, además del saqueo de materias primas y la destrucción de la naturaleza.

Por otra parte, el “libre mercado” es perfectamente unidireccional y excluyente. Los países ex colonialistas e industriales pueden llevar sus

mercancías y sus industrias contaminantes a los países antes colonizados, sin regulación fiscal ni ecológica alguna y con una legislación laboral que evade todo compromiso duradero con los trabajadores.

Pero, por el contrario, filtran a su conveniencia las mercancías que se producen en los países dominados y frenan así la migración laboral de estos países hacia las naciones colonizadoras.

Sólo un pequeño grupo de empresarios multimillonarios de los países dominados pueden participar en el flujo internacional de mercancías, siempre asociados a los empresarios dominantes.

En México es paradigmático el rol del empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, propietario incluso de acciones del periódico estadounidense *The New York Times*.

Finalmente, la mercancía que fluye sin control de ningún tipo es el capital. No los ingresos que con sacrificios ganan los trabajadores migrantes y que envían a sus familias a tasas impositivas usurarias, sino el dinero de los empresarios financieros, quienes aprovechan todas las facilidades de inversión de cualquier país y la especulación en los llamados “paraísos fiscales”.

Juegan además con los mercados de dinero y provocan quebrantos por doquier, siempre con planeadas ganancias exorbitantes, como ocurrió con la “burbuja inmobiliaria” de 2006-2008, que provocó millones de desempleados en todo el mundo, pero altas ganancias para los empresarios financieros del grupo Bilderberg.

En México, mientras el desempleo crece junto con la aplicación de leyes laborales adversas a los trabajadores, en los primeros cinco meses de 2015 la banca aumentó 22.1% sus utilidades respecto del mismo periodo del año anterior, sumando 42 mil millones de pesos en utilidades en este corto tiempo (Zúñiga, 2015).

Por tanto, la mentira del “libre mercado”, lejos de beneficiar a la población la sumerge cada vez más en una situación desesperada de desigualdad, pobreza y desempleo.

El Banco Mundial declaró en julio de 2015, sin pena alguna, que en América Latina 208 millones de habitantes, o sea 4 de cada 10 de

clase media baja, pueden volver a la pobreza (González, 2015), para sumarse a los 167 millones de pobres que ya existen desde 2014 (Cepal, 2015).

Es decir, la pobreza afectará a 375 de 521.9 millones de personas; o sea, que 71.65% serán pobres gracias al sistema económico neoliberal impulsado por los gobiernos, y según Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, “ya no existen condiciones de transformación social” (González, 2015: 24).

La máxima consecuencia de la tiranía del mercado y la desigualdad que provoca es la venta, abierta o encubierta, de seres humanos. En 2011 ya se hablaba de entre 10 y 30 millones de esclavos en todo el mundo con un valor de 32 000 millones de dólares (Madox, 2011: 1). Con la dinámica económica actual, la esclavitud crecerá a medida que avance el siglo XXI.

Al lado opuesto del mercado criminal se encuentra el mercado de las *clases subalternas* en las culturas originarias. Es un punto de encuentro de personas que producen alimentos, artesanías y herramientas que no destruyen la tierra, entre muchos otros productos.

Es prácticamente un intercambio entre productores que a la vez son consumidores, y donde la utilidad es baja en general, porque lo importante es realizar la mercancía para regresar a la actividad cotidiana con los productos que sirven para continuar con la vida familiar y con el trabajo.

La máxima expresión de este mercado es el *trueque* de productos sin que medie el dinero, además de que con el intercambio de productos del campo se contribuye a mantener la soberanía alimentaria.

La práctica de este tipo de mercado, a pesar de ser descalificada por los economistas hegemónicos, lejos de desaparecer se está fortaleciendo gracias a múltiples organizaciones sociales que han visto en ese modo de intercambio el futuro de una sociedad comunitaria.

Una de las organizaciones más conocidas que impulsa este tipo de prácticas económicas en niveles cada vez mayores en América Latina es la Red de Educación y Economía Social Solidaria (<http://educacionyeconomiasocial.ning.com>).

Más aún, cabe subrayar que este tipo de mercado no sólo cumple una función económica, sino también social y cultural, como ocurría en los pueblos originarios. La gente conversa y socializa, refuerza los lazos filiales y vecinales, se informa y aprende de los demás.

Es un mercado que integra a la comunidad en vez de dividirla, como lo hace el mercado capitalista excluyente. Es un mercado que refuerza los sentimientos personales y comunitarios, y se conecta con otras dimensiones de la vida en sociedad, como las expresiones artísticas y espirituales.

De modo que ni el llamado “libre mercado” ni el mercado monopolístico capitalista son las únicas formas de organizar el intercambio de bienes y servicios, y mucho menos las deseables, como se quiere hacer creer a la población del mundo.

“Gente emprendedora” y “creadora de empleos”

Tanto los anuncios publicitarios de los bancos como muchos del gobierno difunden la idea de que toda persona puede ser un empresario exitoso. Es decir, el paradigma es hacer negocios y obtener grandes utilidades gracias a la iniciativa individual.

La idea de fondo que subyace en esta expresión, además de promover los costosos servicios bancarios, es que la economía sólo puede organizarse siendo empresario o empleado, y no existe otra forma de manejar la economía, y en caso de que exista, “seguramente” no vale la pena o está en desuso.

Y lo mejor, por supuesto, es vivir del trabajo de los demás mediante la extracción de la *plusvalía*, del *plustrabajo* que, por supuesto, no se menciona. Y mientras más grande sea la empresa, mayor será la extracción de riqueza del trabajo humano y de la naturaleza, pero con el argumento de que se generan empleos y “progreso”.

En esta concepción no hay lugar para el trabajo familiar autosustentable, las cooperativas y mutualidades, el ejido colectivo, el intercambio comunitario y el trueque.

Todas estas formas de economía social y solidaria que no se enfocan a la acumulación de dinero sino a la reproducción de la vida en sociedad y a la conservación de la naturaleza, son “invisibilizadas” desde la economía capitalista, pero resulta que son las formas que permiten vivir en paz con los demás y en armonía con la naturaleza.

En un estudio realizado en áreas rurales del estado de Puebla, México, se preguntó a las personas qué significaba para ellos tener una “buena vida”, y un campesino respondió: “estar bien conmigo, con mi familia y con mi comunidad” (Cisneros, 2007).

De esta manera un campesino sintetizó la idea de vivir bien, muy distante del vivir apropiándose del trabajo de los otros y consumiendo productos compulsivamente.

El análisis de las mentiras anteriores sobre economía se puede continuar de manera extensa, pero no es la finalidad de este capítulo, sino únicamente ejemplificarlas. Sin embargo, conviene acotar las consecuencias negativas de estos engaños económicos en términos de Max-Neef y Bartlett:

“Nos enfrentamos actualmente a un cuádruple desafío: el cambio climático, el fin de la energía barata, el agotamiento de recursos claves y una gigantesca burbuja especulativa cincuenta veces más grande que la economía real.

“El sistema económico en el que vivimos no sólo obliga a la mayoría de la humanidad a vivir sus vidas en la indignidad y la pobreza, sino que además amenaza a todas las formas de vida del planeta.” (Max-Neef y Bartlett, 2014: contraportada)

De ahí la necesidad de evidenciar las mentiras sobre la economía capitalista y construir nuevas relaciones económicas y sociales en general, solidarias y respetuosas del entorno y de la vida de todos, incluso “de los que aún no han nacido”, como se concibe en la filosofía de los pueblos originarios.

Segunda parte: mentiras sobre política

“Representación política” y usurpación de los recursos sociales

Se dice que vivimos un sistema político de *democracia representativa*, donde supuestamente los funcionarios públicos como el presidente de la República, los gobernadores, presidentes municipales, diputados y senadores “representan” los intereses de los ciudadanos.

Así se establece en los documentos oficiales, en la legislación formal, pero en la práctica no resulta cierto, pues tanto el uso del dinero recaudado través de los impuestos y de los préstamos adquiridos por ellos, como las leyes aprobadas, no benefician realmente a los ciudadanos y a sus familias, sino a los propios políticos, y sobre todo a los empresarios trasnacionales mexicanos y extranjeros. Especialmente a los empresarios financieros.

Lo que no se dice es cómo los *representantes* deben administrar los recursos de todos para el beneficio de todos. Y con esta omisión, los gobernantes en turno deciden el uso de esos fondos como mejor les conviene a ellos y a la *clase dirigente* trasnacional.

En México, la reciente aprobación de 11 reformas constitucionales que permite privatizar los recursos nacionales estratégicos, desde el petróleo y la minería hasta las playas, el agua, las telecomunicaciones y la electricidad en beneficio de unos pocos grandes empresarios, que además ya cuentan con una ley laboral que los exenta de compromisos duraderos con sus empleados, confirma una línea de acción evidente en los gobiernos desde hace al menos 35 años.

Como se explica en el libro *Democracia-ficción e incomunicación política: una mirada desde el sur* (Cisneros y Valdiviezo, 2013), en realidad los gobernantes son representantes reales de los intereses de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, sobre todo de estos últimos, pues a los pequeños empresarios mexicanos todo se les dificulta.

Y a los ciudadanos, como se menciona en la primera parte de este texto, se les cargan las deudas tanto del gobierno como de los “rescates” bancarios, el incremento de los precios, la baja en las utilidades del petróleo y el desempleo, de manera que los gobernantes operan un sistema político que en realidad produce una desigualdad

crónica y patológica entre trabajadores y grandes empresarios, y entre los ciudadanos y la élite política.

Es por ello que la “democracia” operada por los representantes políticos actuales resulta una democracia-ficción, la cual hemos definido como “una simulación democrática del autoritarismo político real, mediante la cual los ciudadanos son sometidos legal e ideológicamente a través de los aparatos del estado y de la banca, a un dominio económico creciente y a un saqueo sistemático de los recursos materiales y sociales del país, pero que puede presentarse públicamente como una democracia debido a que cumple con los procesos formales de ésta, tales como las competencias electorales y la aprobación de leyes en un congreso, aunque estos procesos no respondan a las necesidades e intereses de la ciudadanía sino a la conveniencia de las cúpulas empresariales y financieras.” (Cisneros y Valdiviezo, 2013: 54).

La organización política, entonces, no cumple su misión de representar los intereses y velar por la vida digna de la población, y tampoco se ve la intención de impulsar un cambio en este sentido, sino todo lo contrario.

Lo cual obliga a pensar en la necesidad de una refundación del Estado, el *Estado* entendido como la relación orgánica entre gobierno, leyes, territorio y población, que retome el sentido social para el que fue creado.

Esto ya lo ha hecho Islandia en 2010-2011, al no cargar la deuda de los bancos sobre los ciudadanos y retomar el enfoque del “Estado de bienestar” que siempre ha tenido, y lo mismo se está buscando en países sudamericanos como Ecuador y Bolivia, con todo y las trabas que les imponen los empresarios globales.

De modo que es falso que no se pueda gobernar en favor de la población, y más falso aún que en nuestro entorno mexicano los políticos representen y velen por los intereses de los ciudadanos.

“Plan de gobierno”: el gobierno como negocio de negocios

De acuerdo con la operación política descrita en el apartado anterior, los gobiernos no buscan el bienestar de sus ciudadanos, sino facilitar jurídicamente el despojo de los recursos nacionales. Acciones que son contradictorias desde la perspectiva democrática y ciudadana, pero coherentes en la lógica de subordinación de los políticos a los empresarios globales.

De esta manera, la mayoría de los gobiernos del mundo funcionan actualmente como un mecanismo de negocios en tres sentidos: como acceso y disfrute de ciertos grupos de políticos a los multimillonarios recursos recolectados mediante impuestos; como propietarios o copropietarios de empresas privadas que ofrecen servicios de alto costo al propio gobierno y a los ciudadanos; y como agencia de los empresarios transnacionales para facilitarles la apropiación de los recursos del país a través de las leyes y las políticas públicas dictadas y aplicadas “a modo”.

Un ejemplo evidente de esta función del gobierno como facilitador de negocios para la élite empresarial y política lo ofrece actualmente el gobierno mexicano del presidente Enrique Peña Nieto, quien desde su campaña electoral usó como eje publicitario la firma ante notario de 255 compromisos de acciones en que basaría su plan de gobierno, aunque en el fondo dicho plan resultó una estrategia de negocios multimillonarios para la industria de la construcción y el comercio de equipos electrónicos.

Efectivamente, los 255 compromisos firmados pueden integrarse en diferentes rubros relacionados con diversos temas como “Educación y ciencia”, “Salud pública”, “Seguridad”, “Turismo”, “Economía familiar”, etcétera.

Sin embargo, al analizar las acciones específicas de cada compromiso, independientemente del tema de referencia, terminan por resumirse en dos tipos de acción: construcción y compra de equipos electrónicos (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).

Así, independientemente que se trate del tema de educación, transporte o medio ambiente, los proyectos específicos consisten en la construcción de infraestructura: escuelas, caminos, presas, etc. Y lo

mismo en educación que en economía familiar, se financia la compra de equipo electrónico para estudiantes o para actualizar los equipos de pequeñas empresas familiares.

Finalmente, lo que importa para la *clase dirigente* y la *sociedad política* son los grandes negocios de la construcción y la venta de equipo electrónico. Las demandas ciudadanas de empleos formales y duraderos no tuvieron respuesta. En este sentido, el “plan de gobierno” resultó una mentira destinada a hacer negocios particulares.

El gran negocio del sexenio de EPN: 7.7 billones de pesos para construcción

Teniendo claro que la construcción de obras sólo genera empleos temporales para los trabajadores, pero elevadas ganancias a las compañías constructoras y a los fabricantes de cemento y de acero, se puede apreciar claramente que es aquí donde se ubica el principal negocio promovido por el gobierno actual en México.

Al principio de su gobierno en 2013, Peña Nieto anunció que se invertirían al menos 4 billones de pesos en infraestructura; es decir, en construcción (Román, 2013: 15). Pero en abril de 2014 Peña subió la cifra a 7.7 billones de pesos (Olson y Ramos, 2014), prácticamente el doble del primer anuncio.

Y un negocio de la construcción de esta magnitud tiene beneficiarios específicos: Las constructoras ligadas al presidente Peña Nieto y a Carlos Salinas, como el Grupo Higa y OHL, y los productores de acero y de cemento. El acero lo produce el grupo Alfa de Monterrey y sus socios de Estados Unidos, y el cemento principalmente Cemex, de Lorenzo Zambrano, quien en vida fue miembro de la Comisión Trilateral, capítulo Norteamérica (The Trilateral Commission, 2010).

De esta manera el círculo se cierra: las mayores transferencias económicas se hacen finalmente hacia la Comisión Trilateral, cabeza de la *clase dirigente mundial*, que junto con el Grupo Bilderberg dirige la globalización neoliberal.

La deuda pública crónica y las mentiras sobre empleo y bienestar

La pérdida de ingresos por la privatización de los recursos nacionales, como el petróleo y la electricidad entre otros, sumada a los “rescates bancarios” y los enormes gastos en construcción de megaobras y compra de tecnología, son financiados de manera irresponsable mediante la contratación de más deuda pública.

La actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por Luis Videgaray, anuncia sin rubor que la deuda pública total llegó a 6 billones 62 mil millones de pesos, equivalente a 38.07% del PIB y 195.6% mayor que en el año 2000, cuando sumaba 2 billones 51 mil millones de pesos: “... en los primeros seis meses de la nueva administración gubernamental, la deuda pública total aumentó en 171 mil 157 millones de pesos, a razón de 950 millones diariamente” (Zúñiga, Méndez y Ballinas, 2013, 23).

Para el mes de agosto de 2014, los partidos PRD y PT desmintieron las cuentas del secretario Videgaray, que no consideró los pasivos de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de Protección al Ahorro, el sistema de pensiones, el rescate carretero y otros, lo que junto a la deuda anunciada por el secretario sumaban una deuda pública nacional de 12 billones 947 mil 666 millones de pesos en 2014 (Méndez y Garduño, 2014).

Por supuesto, el gobierno hará pagar a los ciudadanos esa enorme deuda que ellos no solicitaron, así como sus intereses crecientes. Deuda pública que además siguen haciendo crecer sin medida, sin importarles el alza del dólar.

El 5 de septiembre de 2015 se anunció que México ha pagado en 15 años siete veces la deuda externa; sólo en intereses se pagó el equivalente a 43% del PIB de 2014; no obstante, está al doble de lo que estaba en el año 2000 (González, 2015), ya ha alcanzado 48% del PIB y seguirá aumentando.

Por tanto, las reiteradas afirmaciones presidenciales de que a partir de las reformas estructurales se darían pasos firmes hacia el desarrollo del país, los empleos bien pagados y el bienestar de todos los mexicanos resultan mentiras dolosas.

Con esa deuda y la privatización de los recursos nacionales, lo que tenemos es un incremento sistemático de impuestos y un mayor empobrecimiento de la población, con todas las consecuencias destructivas que esta situación ocasiona: mayor desigualdad social, desempleo, desnutrición, enfermedades, violencia, crímenes y delitos; en síntesis, un deterioro crónico del clima de convivencia humana.

El FMI y el sometimiento de los países

Como también se ha señalado en el libro *Democracia-ficción e incomunicación política*, la meta de la *clase dirigente mundial* es muy clara: se trata de organizar un mundo gobernado por los bancos y las corporaciones transnacionales, donde los gobiernos nacionales tienen solamente un rol secundario de vigilantes.

Los bancos y las corporaciones globales se imponen sobre la nación-Estado, lo mismo en México que en Alemania, Inglaterra o los Estados Unidos. Y el congreso de cada país se convierte en un instrumento para legalizar las políticas públicas que convienen a esa *clase dirigente*.

De entre los organismos reguladores de los negocios y la política global, es importante destacar la función del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas reglas definen claramente el rumbo que deben seguir los gobiernos sometidos y en función de las cuales deben proponerse nacionalmente las reformas constitucionales y nuevas leyes reglamentarias.

Joseph Stiglitz ha denunciado las siguientes políticas del FMI:

- Saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social. El FMI apunta que el Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos que pueden pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto ha resultado en la disminución de servicios sociales a los sectores que no están en condiciones de pagarlos.
- Generación de superávit fiscal primario suficiente para cubrir los compromisos de deuda externa (esto implica el aumento de impuestos para el pago permanente de intereses a los bancos).

- Eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en los servicios sociales, junto con la reducción de los aranceles.
- Reestructuración del sistema impositivo. Con el fin de incrementar la recaudación fiscal, el FMI ha impulsado la implantación de impuestos regresivos de fácil percepción (como el Impuesto al Valor Agregado).
- Eliminación de barreras cambiarias. El FMI es partidario de la libre flotación de las divisas y de un mercado abierto.
- Implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que sólo debe asumir un rol regulador cuando se requiera. Pero se trata de un libre mercado unilateral: de norte a sur, no al revés.
- El concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta comprender áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social, y áreas estratégicas como el agua y la energía, la minería y las telecomunicaciones.
- Políticas de flexibilidad laboral, entendida como la desregulación del mercado de trabajo (Stiglitz, 2002: 9).

Como expone Stiglitz, una de las tareas principales que el FMI impone a los gobiernos es que aseguren la transferencia de recursos públicos al pago de la deuda externa, que, por supuesto, nunca termina de pagarse. Y para ello hay que aumentar los impuestos, como el IVA y otros, y sangrar el dinero antes destinado a la seguridad social, desprotegiendo además a los trabajadores con la desregulación del mercado de laboral. Se trata, claramente, de una estrategia de despojo integral regulada desde el FMI.

La gran mentira del FMI, es que, siendo un banco privado que busca el máximo lucro, se presenta como el promotor del desarrollo para todos los países.

La injusticia “legalizada”

Ligada a la desigualdad en las condiciones materiales de vida, se practica la desigualdad en la aplicación de la justicia. En cada país se dice que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, y que sobre todo la impartición de la justicia es igual para todos; pero en la práctica cotidiana, tanto los derechos como la impartición de la justicia se vuelven discrecionales. Por tanto, el respeto a los derechos humanos y la “justicia ciega” resultan una mentira reiterada.

En México, por ejemplo, la historia reciente de injusticias jurídicas es larga. El 2 de octubre de 1968, por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz el ejército mexicano llevó a cabo una masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la ciudad de México. Nadie fue juzgado por ese crimen de *lesa humanidad*.

El 10 de junio de 1971, el gobierno realizó una segunda matanza de estudiantes y profesores través de sus cuadros paramilitares llamados *Halcones*, también en la ciudad de México. Tampoco fueron juzgados. Y así sucesivamente.

En la etapa de la “Guerra Sucia” en el estado de Guerrero, de 1969 a 1979, después de 30 meses de trabajo la Comisión de la Verdad documentó 532 muertes por desaparición forzada llevadas a cabo por el ejército y la policía. Pero incluso los pilotos militares hablan de mil 500 personas arrojadas al mar (Petrich, 2014: 10). Y nadie responde ni es juzgado por esos crímenes masivos.

Además, como reporta Raúl García:

“La *guerra sucia* tiene amplias raíces desde los años 50, con la represión que sufrieran los médicos y los ferrocarrileros en 1958 del siglo pasado; en la década de 1960, la masacre de Chilpancingo en el Movimiento contra el general Caballero Aburto, la masacre del 18 de mayo de 1967 en el zócalo de Atoyac, que dio origen al levantamiento del profesor Lucio Cabañas y el surgimiento del Partido de los Pobres. Una de tantas masacres fue la de los copreros en la Calle 6 y avenida Ejido en Acapulco, cuando asesinos a sueldo al servicio de los caciques asesinaron a los dirigentes y activistas que exigían un mejor pago por sus cosechas de copra.” (García, 2013: 1).

En 1995 fueron asesinados 17 campesinos por la policía del gobernador Rubén Figueroa Alcocer en el vado de Aguas Blancas, Guerrero. Y tampoco fueron juzgados ni el autor intelectual ni los asesinos materiales.

En 2014 fueron masacradas 22 personas por un comando del ejército mexicano en Tlatlaya, estado de México, y debido a la denuncia de un periodista extranjero pudo conocerse el crimen, aunque sólo se pretende juzgar, como caso aislado, a siete elementos militares por las propias autoridades militares.

Y a pesar de que en junio de 2015 peritos criminólogos han ratificado que al menos 11 de las 22 víctimas fueron *fusiladas* (Castillo, 2015), a ningún oficial se le responsabiliza por el empleo de esas prácticas de asesinato de civiles.

Finalmente, el asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 jóvenes más, estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, crímenes en los que se involucraron el ejército y la policía, ha despertado la indignación no sólo de sus padres y los habitantes de Guerrero, sino de todo el país y de un gran número de países en el mundo.

Debido a esta presión se “atrapó” a los autores intelectuales, el presidente municipal de Iguala y su esposa, relacionados con el crimen organizado. Él se encuentra en la cárcel preventiva y ella arraigada en una casa particular. Pero nada más.

Después de seis meses del crimen, el gobierno estatal se desentendió del asunto y el gobierno federal afirma que sigue investigando, pero sin dar información precisa sobre lo que ocurrió con esos jóvenes, aun cuando tienen detenidos a los policías que los entregaron a los supuestos criminales.

El gobierno trata el hecho como un caso aislado de unos cuantos policías, pero no lo asume como crimen de Estado, a pesar de la historia de reiterados asesinatos en los que el ejército y la policía están involucrados.

De ahí que el gobierno en turno carezca de la mínima intención de reconocer los delitos de *lesa humanidad*, y menos juzgarlos. Incluso la ratificación de que la práctica permanente de tortura por agentes del gobierno expuesta por un relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una especie de notario internacional que da fe pública de que esas prácticas delictivas, continúa hoy en día, es desmentida por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (Pérez, 2015: 7) ante la sorpresa de mexicanos y extranjeros que conocen la historia de los incontables crímenes que han sido denunciados y documentados (García, 2013).

Para completar el cuadro de violencia impune, el gobierno reconoce que hay ex militares en los *cárteles* criminales, pero liberan a narcotraficantes confesos al argumentar que sufrieron torturas durante su captura (Castillo, G. y Méndez, A., 2015).

En cambio, las torturas infligidas por militares a civiles quedan impunes, aunque las denuncie un funcionario de la ONU.

En esta historia de crímenes contra el pueblo de México, el gobierno busca aplicar la prescripción de los delitos más antiguos y reducir los más recientes a asesinatos comunes y casuísticos, aunque en realidad estas desapariciones forzadas y crímenes de civiles se den en un contexto de guerra de baja intensidad, asesorada por militares estadounidenses y llevada a cabo por miembros del gobierno con policías federales, estatales y el ejército mexicano.

Aparte de la guerra, en la vida cotidiana se continúa la aplicación injusta de la ley contra los ciudadanos pobres. Un ejemplo típico es el encarcelamiento de Esperanza Reyes, madre soltera con dos hijos y sin empleo fijo, quien en marzo de 2011, sin saberlo, pagó en una papelería con un billete falso de 100 pesos.

Por este “delito” y sin una defensa adecuada, un juez la condenó a cinco años de cárcel, en los cuales anduvo por diferentes reclusorios incluyendo la cárcel de las Islas Marías.

Tras dos años en prisión fue liberada debido una solicitud de indulto promovida por la Barra de Abogados ante la Secretaría de Gobernación, pero esa misma Secretaría reconoce que hay otros cien

casos de personas que, sin saberlo, pagaron con un billete falso y permanecen en prisión (Juárez, 2014: 33).

Por el contrario, a pesar de que se dictó auto de formal prisión contra el empresario Amado Yáñez Osuna por un fraude de 5 mil millones de pesos a un banco, sus abogados pagaron una fianza de 82 millones de pesos para que Yáñez enfrente su proceso en libertad.

Lo cual no pudieron hacer tres empleados bancarios involucrados y encarcelados por el mismo delito, ya que supuestamente sabían que el empresario no pagaría los 5 mil millones del caso (Castillo y Méndez, 2014: 8).

Sobre el mismo tema, ocurre que mientras en marzo de 2015 en España se investiga por presunto lavado de dinero a Gabino Antonio Fraga Peña, jefe de campaña de Enrique Peña Nieto en Tlaxcala en 2012 y relacionado con el caso de financiamiento irregular a través de Banca Monex y otras empresas como Soriana, en México el hecho es desestimado por el gobierno mexicano, como lo hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación con dicho financiamiento ilegal en 2012.

Por otra parte, mientras en 2014 se desarticulaba la organización de las autodefensas ciudadanas en Michoacán y Guerrero, el narcotraficante Servando Gómez “La Tuta” era protegido y trasladado en helicópteros del propio ejército mexicano, según testimonios de los pobladores de la región (Martínez, 2014).

Y fue hasta marzo de 2015 cuando se le “capturó”, sin descartar que en un futuro próximo pueda ser liberado por “abusos” en su captura (Martínez, 2015), como lo han hecho con otros narcotraficantes y secuestradores.

Curiosamente, la detención de “La Tuta” ocurrió en momentos de alta presión sobre el presidente de la República y su secretario de Hacienda, por actos de corrupción con inmuebles y por los crímenes del ejército y la policía federal en Tlatlaya y Apatzingán.

Privatización del agua o crimen de Estado

Pero el mayor crimen que se ha cometido en esta época y en este sexenio (2015) por parte del gobierno, es legalizar la privatización del agua. Una injusticia que se acrecentará crónicamente en todos los años por venir.

Ni el saqueo del oro, el petróleo, la energía eléctrica y las playas reviste el grado de injusticia y de exclusión de los ciudadanos, sobre todo los más pobres, como la privatización del agua.

Somos 75% de agua, sin ella morimos, y ahora su suministro dependerá de lo que decidan los empresarios que la controlan como negocio lucrativo. Y quien no tenga para pagarla, o morirá de sed o la robará o se opondrá a los proyectos privatizadores, y en estos casos se convertirá en delincuente por decisión del gobierno, que es otra forma de morir socialmente.

El gobierno mexicano ha legalizado en 2015 un *crimen histórico de lesa humanidad* que se viene construyendo desde años atrás.

El caso más representativo de este despojo se presentó en Sonora, sin que ello sea un asunto aislado, pues con el pretexto de llevar agua potable a la capital del estado se inició la construcción y operación de un acueducto que despoja del agua a la tribu yaqui, y cuyos nuevos beneficiarios son los industriales instalados en la ciudad de Hermosillo y los ranchos de la *clase dirigente*.

Y ante la protesta de la tribu durante meses, el gobierno del estado detuvo y encarceló a su vocero en vez de resolver el conflicto (Rojas y Gutiérrez, 2014). Mientras tanto, el mismo gobernador del estado, Guillermo Padrés, construyó su propia presa de más de dos millones de metros cúbicos para mantener irrigadas cientos de hectáreas de su rancho, privando del líquido a los habitantes de la ribera de un afluente del río Bacanuchi.

Gracias a los reclamos de los habitantes de esta zona y a la presión política que acarrearón las protestas de la tribu yaqui en el mismo estado, la presa fue demolida (Gutiérrez, 2015), pero esto no es lo usual.

Por el contrario, en el estado de Jalisco se construye la presa El Zapotillo, que privará del agua a productores de carne y huevo de la región, con el argumento de llevar agua a los habitantes de Guadalajara y León, pero en realidad se trata de abastecer el proyecto empresarial Puerto Seco, en Guanajuato, el centro de negocios más grande de América Latina (Enciso, 2015).

Finalmente, los legisladores de la nación mexicana aprobaron una Ley General de Aguas, que según análisis de los expertos facilita su privatización y el saqueo aplicando la fuerza represiva del gobierno, y que

“... fue elaborada para dar respuesta a las necesidades de las grandes empresas nacionales y extranjeras que explotarán los hidrocarburos (y la minería), con el consecuente despojo a los pueblos indígenas, advirtió el investigador Pedro Moctezuma Barragán, integrante del equipo de académicos y personalidades de la sociedad civil que elaboraron una iniciativa ciudadana presentada ya en el Senado.” (Becerril, 2015: 33).

Por supuesto, la iniciativa ciudadana no pasará, pues la tendencia global de los gobiernos es entregar el servicio de agua a las empresas, no a los ciudadanos. Esto ya es una realidad en Colombia, por ejemplo, y en muchos países del mundo.

Otro caso ilustrativo es el de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con 22 millones de habitantes, donde 537 empresas como MacDonalld's consumen el agua equivalente a la que utilizan 115 mil familias, y además obtienen un descuento de 75% en sus tarifas (Zibechi, 2015).

Pero no sólo eso, sino que desde octubre de 2014, cuando la sequía obligaría a hacer cortes de agua, el gobierno brasileño envió militares a capacitarse con la SWAT (Special Weapons and Tactics) de Estados Unidos, policía militar especializada en manifestaciones sociales (Zibechi, 2015).

De modo que, al advertir la creciente inconformidad social por la falta de agua, el gobierno en vez de solucionar esta necesidad popular, capacita a su ejército para detener por la fuerza estas manifestaciones.

Como corolario de la privatización del agua en México, la nueva ley coarta la libertad de investigación en materia hídrica, pues para hacer algún estudio en acuíferos de la nación se debe contar con un permiso de la Comisión Nacional del Agua, al servicio de los empresarios desde luego, y si el conocimiento obtenido o por obtener no les conviene, puede decidir que no se publique o negar el permiso de antemano.

Y quienes no acaten esta disposición serán sancionados, entre otras penas con la aplicación de multas hasta por 500 días de salario mínimo, cantidad muy superior a la que un académico promedio gana en un mes (González, 2015).

Por tanto, la “igualdad ante la ley” de las “sociedades democráticas” sigue siendo una mentira que todos los días lastima gravemente a la gente de escasos recursos y oculta crímenes e impunidad, tanto de organizaciones criminales como del gobierno y las empresas.

Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, mientras tanto, siguen cobrando los sueldos más altos del país (6 millones 761 mil pesos anuales, más 586 mil pesos de aguinaldo para su presidente en el presupuesto de 2015), sólo por seguir las instrucciones del presidente de la República y detener cualquier demanda ciudadana que exija mayor equidad y justicia, apoyando así la entrega de los recursos estratégicos del país a empresarios privados, especialmente el bien más importante de todos: el agua.

Tercera parte

Los ideólogos de la “comunicación pública” y el negocio de mentir

La práctica cotidiana de las mentiras públicas de hoy (2015) se sustenta conceptualmente en un modelo de “comunicación” que se construyó sesgado desde 1927 en Estados Unidos, y que se cultiva hasta la fecha como el modelo dominante.

En este concepto de “comunicación” el diálogo real no existe, y tampoco el respeto por *los otros*. Por el contrario, se centra en la unidireccionalidad, la masificación, la mediatización y la manipulación de la información en favor de los intereses económicos y políticos de pequeños grupos de personas que controlan la estructura del poder en la sociedad, y de sus medios de difusión, en consecuencia. Pero, ¿cómo surgió este modelo de “comunicación”?

Breve historia del concepto hegemónico de “comunicación”

La construcción del concepto de *comunicación* dominante hoy en día obedece a la misma búsqueda del control de la sociedad que se ejerce en la *democracia ficción*. Esta idea de *comunicación* se empezó a legitimar desde hace 88 años, y se basó en las exitosas experiencias de propaganda bélica que se tuvieron en Estados Unidos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, aunque dichas experiencias siempre contaron con el sustento práctico de una acción bélica manipulada que “justificaba” entrar en guerra y a cuyo reclutamiento se enfocaban dichas campañas. Veamos:

Durante la Primera Guerra Mundial, iniciada en julio de 1914, los países aliados solicitaban a Estados Unidos 500 mil soldados como apoyo, pero el pueblo norteamericano no estaba de acuerdo con esa intervención.

Por tanto, los estrategas militares idearon una provocación enviando el barco de pasajeros *Lusitania* con un cargamento oculto de armas hacia el Mar del Norte, lo cual detectaron los alemanes y lo hundieron

frente a las costas de Irlanda el 7 de mayo de 1915. Este hecho motivó que los norteamericanos, estimulados por una propaganda masiva, apoyaran la intervención de Estados Unidos en esa guerra.

Los propagandistas norteamericanos iniciaron una gran campaña de reclutamiento apoyada en la difusión masiva de carteles, uno de ellos con la icónica imagen del “Tío Sam” señalando al espectador con el dedo índice y diciendo *I want you*.

Con el ánimo ciudadano encendido, el ejército norteamericano logró incorporar, no 500 mil, sino 2 millones de reclutas para intervenir en la acción bélica, a la cual se sumaron en abril de 1917, casi tres años después de iniciada la guerra.

Ese mismo año Rusia se retiró de la confrontación mundial para librar su propia lucha interna, donde triunfaron los socialistas. Así, en noviembre de 1918 los aliados ganaron la Primera Guerra Mundial, al rendirse Alemania.

Retomando esa experiencia de propaganda y campaña de reclutamiento, en 1927 Harold Lasswell propone la *Teoría de la aguja hipodérmica* o *La bala mágica* (De Fleur, 1987), con la convicción de que las masas son manipulables.

Es decir, a partir de un mensaje o serie de mensajes elaborados por publicistas y difundidos masivamente, se logra una respuesta exitosa de las masas en el sentido propuesto por los emisores. Posteriormente Raymond Nixon, Paul Lazarsfeld, Harold Lasswell, Wilbur Schramm y otros sociólogos y psicólogos fueron completando el esquema, siempre con base en dos referencias conceptuales y una pragmática: la psicología conductista, la teoría de las masas y el uso de medios de difusión masiva.

Después de la Segunda Guerra Mundial, tras observar la fuerza de la propaganda nazi, se reforzó en los norteamericanos la idea de los mensajes poderosos.

Cabe señalar que para entrar la Segunda Guerra Mundial también se usó una acción “convinciente” para el pueblo norteamericano: permitir el ataque de los aviones japoneses a Pearl Harbor en Hawai, pues nuevamente el pueblo norteamericano se mantenía neutral desde

1939 en que comenzó la guerra, y fue hasta el 8 de diciembre de 1941, al día siguiente del ataque mencionado, que Estados Unidos se declaró en combate.

Es una táctica ampliamente empleada por el gobierno de los Estados Unidos, como el derribo de la Torres Gemelas para iniciar la invasión a Irak y apoderarse de sus campos petroleros.

La propaganda siempre va ligada a una o más acciones de encono social, desde una acción de muerte colectiva hasta la amenaza de un peligro inminente, ya sea una epidemia o un enemigo construido desde el poder. Por ello han retomado la construcción del “enemigo perfecto”, del ideólogo nazi Carl Schmitt.

Después de probar la eficacia de la propaganda bélica y de elaborar un modelo de “comunicación” masiva eficaz, este esquema que privilegia la persuasión unidireccional se aplicó a las campañas electorales, y después a la venta masiva de productos y servicios.

Con el tiempo se fueron haciendo ajustes al modelo “emisor-mensaje persuasivo-receptor-conducta deseada”, limitando algunos alcances, destacando aspectos de procedimiento, conociendo mejor al *receptor*, empleando el manejo de símbolos, la persuasión subliminal, etc.; pero en esencia no cambió el sentido unidireccional y persuasivo del modelo de “comunicación” apoyado en medios masivos.

Por tanto, el concepto de *comunicación* que iniciaron los sociólogos y psicólogos estadounidenses tuvo desde el principio un doble sesgo: en primer lugar, concebir la “comunicación” como un proceso unidireccional, del *emisor* al *receptor*, con el objetivo de persuadirlo, e incluso manipularlo.

Y aunque al poco tiempo incluyeron el *feedback* o mecanismo de *retroalimentación*, esto sólo se hizo para saber qué tanto el *emisor* estaba logrando su objetivo de convencer al *receptor* acerca del interés específico buscado. No se incluyó para escuchar las necesidades e intereses reales de la población.

El segundo sesgo fue ligar la práctica y el estudio de la *comunicación* al uso de los medios de difusión masiva, y de ahí su necesidad de

concebirla como una estrategia de persuasión conductista para influir en grandes públicos.

Como rasgo complementario, es importante destacar que la ejecución de este modelo de “comunicación” implica la inversión de grandes cantidades de dinero, algo que las *clases subalternas* no poseen.

Es hasta finales de los años sesenta y principios de los setenta cuando surge una propuesta realmente distinta de comunicación con el concepto de *acción comunicativa* de Jürgen Habermas (1993) por una parte, y la propuesta de *comunicación* de Antonio Pasquali (1990) por la otra.

En ella se plantea la necesidad de un intercambio igualitario de mensajes entre los actores del proceso de comunicación, una acción biunívoca, y con la finalidad, no de persuadir el uno al otro, sino de entenderse recíprocamente, de “prestarse oídos” y lograr entre ambos un acuerdo con respeto mutuo que los compromete equitativamente.

La única diferencia importante entre los autores de este concepto de comunicación es que Habermas alude a una vinculación especialmente racional, y Pasquali a una relación volitiva, ligada al afecto; sin merma del componente racional, por supuesto.

Pero en ambos autores este nuevo modo de concebir la comunicación enfocada al entendimiento mutuo, permite pensar y construir de otro modo las relaciones sociales: igualitario, democrático, no sólo entre los individuos, sino entre los grupos de culturas distintas y entre gobernantes y ciudadanos. Con o sin medios eléctricos, electrónicos o físicos de por medio.

Por otra parte y por contraste, este modelo de comunicación sirve también para evidenciar la cultura hegemónica de la manipulación social y el engaño predominante en los medios masivos, así como para evidenciar conceptual y prácticamente la incomunicación sistemática que viven los ciudadanos en la relación con sus gobernantes. Analicemos este engaño con más detalle.

El engaño mediante la *acción dramática*

Contrariamente a la *acción comunicativa*, Habermas define la *acción estratégica* orientada al éxito unilateral como el reclutamiento masivo o un triunfo electoral, por ejemplo. Pero aclara que la *acción estratégica* no se mide por la consecución directa de ese fin, sino por *la influencia que se logra sobre las decisiones de un oponente racional* (Habermas, 1993).

Se trata de persuadir a una persona o a un público para que adopte las decisiones que convienen al actor que diseñó, o para quien se diseñó la estrategia. Más aún, existe un tipo de *acción estratégica* que explica con mayor claridad el manejo, por ejemplo, de la imagen política. Habermas la llama *acción dramática*.

Por *acción dramática* Habermas entiende la interacción entre un agente o actor que hace representación de sí mismo, una autorrepresentación, y un grupo social que se constituye en su público. El actor suscita en su público una determinada idea o impresión de sí mismo, de forma calculada, para lograr la imagen que de sí quiere dar.

Si entendemos por *imagen* la idea que del actor se genera en la mente del *receptor*. El concepto central de autorrepresentación significa entonces, no un comportamiento espontáneo, sino la configuración manipulada de las propias vivencias con vistas a la imagen que se quiere dar del actor.

Por tanto, la *acción dramática* está dirigida a un público que, sin darse cuenta de las intenciones estratégicas del actor, se imagina estar participando en una *acción comunicativa* orientada al entendimiento (Habermas, 1993).

Desde esta perspectiva unidireccional, se crea la imagen pública o *imagen política* de un candidato como parte de la representación dramática. Así, podemos definir la *imagen política* como “la construcción dramática o la autorrepresentación de un actor político que se posiciona en la mente de un público.”

Cada público tiene necesidades, expectativas y lenguajes propios. Por ello, los estrategas de la *acción dramática* emplean una mezcla de medios y mensajes para cada público en un tiempo determinado, de

modo que la percepción y decisiones de dichos públicos sean acordes con los objetivos del actor político.

Estas *acciones estratégicas* han sido ampliamente desarrolladas y muy bien pagadas en lo que ha dado en llamarse el *marketing político*, con toda la contradicción conceptual y el engaño que ello implica, al transformar desde su perspectiva al ciudadano democrático en *receptor* o *cliente* de los *productos y servicios políticos*.

El *marketing político* o la doble mentira: engaño de *representación* y manipulación de la información

Existe, por supuesto, toda una metodología de *marketing político* muy probada acerca del diseño y manejo de la *imagen política*, que va desde el estudio del perfil del candidato y sus *públicos*, hasta el diseño del discurso verbal, la imagen visual, el comportamiento en vivo y la estrategia de medios de difusión.

Pero la primera característica del *marketing político* es su distanciamiento de todo compromiso social. Y la segunda, no menos negativa, es su inhibición de la participación real de la ciudadanía. Peor aún, los alcances de este manejo de la *imagen política* son más profundos y trascendentes de lo que puede ser un éxito electoral: están relacionados con cierto tipo de conocimiento, pero también con la construcción de *verdades sociales y realidades* desde el poder.

Por lo anterior, como dice Foucault (Hall, 1999), al aparato institucional le interesa producir cierto tipo de conocimientos, y no otros. Y mucha información relacionada con delitos de funcionarios públicos, crímenes de Estado, robos al presupuesto público o tráfico de influencias, se califica como “información reservada” a la que el ciudadano no debe tener acceso.

O incluso se modifican las cifras o los mismos indicadores que sirven para evaluar el desempeño del gobierno, de modo que siempre aparezca como eficiente y se oculten sus abusos.

El discurso general del poder define *lo correcto* y *lo incorrecto*, y con ello norma culturalmente la conducta. Por ejemplo, se nos repite que vivimos en una sociedad *democrática*, aunque los ciudadanos no

decidamos sobre las políticas públicas que nos afectan, y menos aún sobre el manejo social de los recursos económicos del país; pero quien diga que no vivimos en una *democracia* estará “equivocado” y será públicamente descalificado.

Esta descalificación ha sido ampliamente explicada por Noam Chomsky y Edward Herman en su *Teoría del modelo de propaganda* (Chomsky y Herman, 2001), mediante el mecanismo de *flack* o *fuego antiaéreo*.

La mentira del *espacio público* que *ofrecen* los medios

En la medida que la *clase dirigente*, la *sociedad política* y sus voceros oficiosos emplean los medios de difusión masiva para generar la visión del mundo que les conviene a fin de ocultar la realidad social injusta, han “transformado” el espacio mercantil de los medios en el *espacio público*, de la misma manera en que han llamado “comunicación” a las acciones estratégicas de persuasión unidireccional.

Y de paso, consideran al mismo espacio comercial como “arena política”, como espacio público político.

Es decir, los funcionarios y sus voceros manipulan una consecuencia como si fuera la causa. En otras palabras, puesto que ellos pagan para difundir sus campañas unidireccionales hacia la audiencia de los medios y para opinar verticalmente sin un interlocutor verdadero, y en tanto diferentes partidos pueden comprar espacio en los medios, entonces ya pueden considerar que esos medios no sólo son difusores de sus mensajes pagados, sino que se constituyen en *el espacio público político*.

Pero existe una gran diferencia conceptual entre *hacer público* o *difundir* un mensaje, que es *publicitar* una idea; y participar en un diálogo público. La *esfera de lo público* (Habermas) excluye el control gubernamental y comercial, e implica la discusión sobre asuntos de interés general de la comunidad, desde los temas culturales hasta los políticos, con participación abierta y equitativa de los interesados.

No ocurre así en un medio privado y pagado. Tanto las campañas publicitarias de productos y servicios como los anuncios de propaganda gubernamental o de partidos políticos, son estrategias de difusión y de persuasión pagadas que convienen al medio y al patrocinador, pero no un espacio público abierto a la participación libre de todos los actores.

Y menos aún espacios de deliberación para sustentar la toma de decisiones que afectan a todos, como lo sería un espacio político democrático.

Por tanto, el *espacio público político* tendría que ser un lugar donde puedan concurrir libremente todo tipo de actores sociales, sin exclusiones, para expresar su propio pensamiento e incidir realmente en las decisiones que les afectan y que contribuyan al bienestar o desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Un lugar con acceso restringido, o, peor aún, excluyente, no puede considerarse como espacio público político, aun cuando se argumente que las decisiones se toman por el bien de la sociedad, como ha ocurrido por ejemplo con el discurso televisado de George Bush en el que declara la guerra a Irak para la “liberación” de este pueblo del régimen de Hussein... y tomar su petróleo. O los discursos de Peña Nieto sobre las reformas estructurales.

El *espacio público*, y por supuesto el *espacio público político*, más allá de su delimitación física, es una estructura de relaciones establecidas entre diferentes actores sociales con intereses diversos, e incluso opuestos, que reconocen la necesidad de decidir juntos sobre asuntos que los afectan, y que por tanto acuden a expresar sus respectivas propuestas y visiones del mundo con el ánimo de confrontarlas, complementarlas o incluso desarticular la del adversario, pero con la disposición para llegar a algún tipo de acuerdo que les permita seguir conviviendo con respeto y dignidad.

Participar en un espacio público implica reconocer el derecho del *otro*, diferente, a participar abiertamente con sus propios intereses y sustentos. Las reglas del encuentro en un espacio público las han de proponer y/o aceptar los propios protagonistas de la participación.

El espacio privado, en tanto empresa, como es el caso de los medios de difusión, es contradictorio con la estructura de relaciones políticas democráticas. El *espacio público*, y sobre todo el *espacio público político*, es el lugar donde se expresan esos diferentes actores sociales, no aquél donde una *masa* asiste sólo como espectadora.

En México, a partir de 1994 se empezó a construir un espacio público político real, paradigmático, incluso difundido mundialmente por los medios, en los Diálogos de San Andrés Larráinzar, Chiapas, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En este espacio, aunque con múltiples dificultades ideológicas y culturales, se pudieron establecer acuerdos políticos sancionados por todos los actores sociales involucrados, la sociedad civil incluida.

Sin embargo, esta oportunidad histórica en el país fue desmantelada por el propio gobierno federal: el diálogo se suspendió y los acuerdos fueron alterados y sustituidos por documentos unilaterales que en un juego demagógico de los diputados y senadores se aprobaron como la *Ley Indígena*.

Fue desconocida, por supuesto, por los *zapatistas*, por muchos intelectuales y por otros grupos de la sociedad civil. Pero la ficción legislativa sustituyó los acuerdos legítimos por una ley espuria. Ésta es la misma lógica de quienes llaman *espacio público* o *espacio político* a los medios de difusión masiva.

De este modo, en los medios de difusión se expresan sistemáticamente los grupos de poder, tanto en su dimensión política como económica, y todos aquellos que sin pertenecer a estos grupos contribuyen al entretenimiento y distracción de los ciudadanos, pero no se da cabida igualitaria a actores políticos distintos u opuestos a sus intereses.

Lo que sí se hace es hablar de los actores sociales críticos, pero descalificándolos o construyendo una imagen negativa de ellos. Por tanto, es falso hablar estructuralmente de los medios de difusión masiva como *espacio público*. Y más falso aún considerarlos *espacio público político*. La censura que se ejerce sobre periodistas y programas críticos lo confirma.

La fuerza política de la televisión

La fortaleza persuasiva de la televisión, apoyada en su larga experiencia publicitaria, la *espectacularización* de los hechos cotidianos y de las acciones políticas, así como el manejo de los sentimientos reactivos del público, ha sido aprovechada por la *clase dirigente* y por los gobernantes en turno para crear un modelo de operación política unidireccional, como el modelo de “comunicación” hegemónica antes analizado.

Con este modelo operativo, como dice Sartori, “... la democracia representativa no se caracteriza como un gobierno del saber, sino como un gobierno de la opinión” (Sartori, 2011: 76); pero resulta que “el pueblo soberano ‘opina’ sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar” (*Ibidem*, 2011: 72). Más específicamente:

“... la videocracia está fabricando una opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacía, la democracia como gobierno de opinión... Porque la televisión se exhibe como portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de (su) propia voz... En realidad, la televisión refleja los cambios que promueve e inspira a largo plazo.” (*Ibidem*, 2011: 78-79).

Los políticos tienen cada vez menos relación con los acontecimientos genuinos y cada vez se relacionan más con los “acontecimientos mediáticos”; es decir, acontecimientos seleccionados por la *videovisibilidad*, que después son agrandados o distorsionados por la cámara.

“La televisión no sólo ha llegado a ser la autoridad cognitiva más importante de los grandes públicos, sino que al mismo tiempo atribuye un peso desconocido y devastador a los falsos testimonios. Con la televisión las autoridades cognitivas son los divos del cine, mujeres hermosas, cantantes, futbolistas, etcétera, mientras que el experto, la autoridad cognitiva competente (es uno más).” (*Ibidem*, 2011: 122).

En estas referencias, Sartori hace una interpretación acertada de la regresión que significa el sometimiento de los procesos sociales a la *video-política* y al *show business*. Regresión tanto en la capacidad cognoscitiva, como en la *video-dependencia* de los “representantes” al medio, el distanciamiento respecto de la población y el abandono de la resolución de sus necesidades fundamentales.

Por lo que no sólo la carrera presidencial es un *show*, sino que las decisiones de los asuntos políticos en general, y en especial las reformas legislativas, por ejemplo, son difundidos como campañas promocionales permanentes, como estrategias publicitarias unidireccionales manejadas mediante el *marketing político*.

Una *acción dramática* ejemplar de la relación entre los políticos y la televisión fue el caso de la alianza entre Enrique Peña Nieto y Televisa para su campaña presidencial, la cual ya ha sido expuesta en detalle en el libro antes citado sobre *Democracia-ficción e incomunicación pública* (Cisneros y Valdiviezo, 2013).

El gran negocio de engañar

Como se ha visto en el caso de Peña Nieto, las elecciones políticas tomadas como *acción dramática* obligada a hacer “ganar” a un candidato predeterminado, se vuelven un proceso condicionado, manipulado y caro.

Condicionado porque sólo puede salir como ganador en la elección quien acepta seguir los dictados del poder financiero internacional.

Manipulado, porque para lograr el “triunfo” oficial del candidato aceptado por la cúpula, debe hacerse coincidir la actuación dramatizada del candidato preelegido con los resultados de las encuestas difundidas y con la información manejada en los medios masivos, para que todo ello parezca creíble.

Y muy caro, porque el presupuesto empleado para las elecciones es demasiado elevado por la necesidad de saturar de costosos mensajes publicitarios a la población, para aparentar popularidad, además de la compra de numerosas voluntades y la espectacularidad histriónica de las presentaciones mediáticas, los viajes del candidato y su numeroso

equipo de campaña, y la movilización pagada de públicos multitudinarios.

En la campaña presidencial de 2012 se emitieron en México 21 millones de *spots* electorales oficiales en radio y televisión, sin contar con otros formatos pagados en medios como espectaculares y redes sociales.

El gasto de estas elecciones fue de 16 000 millones de pesos (1 200 millones de dólares, 955 millones de euros a precios de 2011), con cargo a los ciudadanos a través del pago de impuestos (Urrutia, 2011: 18; Urrutia, 2011: 16), y aproximadamente 70% de este gasto se pagó a las televisoras, donde Televisa recibió la mayor parte.

Pero eso no es lo único: las campañas son permanentes y las concesiones a las televisoras son reasignadas automáticamente, por décadas, reiterativamente. Y quien se atreva a cuestionarlas, saldrá automáticamente del escenario.

La mentira de la libertad de expresión

Pero aun sin cuestionar las concesiones de los medios de difusión masiva, simplemente con señalar los abusos del poder, las personas son eliminadas del medio en que laboraban, como ha sido el caso en México de los periodistas Ricardo Rocha y Carmen Aristegui y su equipo televisivo.

El primero por denunciar los crímenes de la policía en el Vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995, donde policías municipales acribillaron a 17 campesinos inconformes desarmados (Briseño, 2014).

Y los segundos por revelar en noviembre de 2014 la existencia de una millonaria residencia de la esposa del presidente Peña Nieto, relacionada con un contratista del gobierno beneficiado con multimillonarios contratos. Lo cual llevó también a descubrir otros casos de residencias sumamente costosas, como la del secretario de Hacienda del mismo equipo presidencial, vinculadas a la misma constructora (*lainformación.com*, 2015).

Como elemento clave de la falsedad de la libertad de expresión, intervino un tribunal federal en materia administrativa para desechar la demanda de amparo de Carmen Aristegui en contra de su despido del Grupo MVS (Méndez, 2015).

En otras palabras, la demanda de protección de la periodista y su equipo en favor de la libertad de expresión no tuvo apoyo alguno de los responsables de la justicia mexicana; por el contrario, la periodista deberá enfrentar una demanda mercantil del consorcio empresarial equivalente a un año de su sueldo.

En resumen, una periodista que denuncia presuntos actos de corrupción del gobierno federal no sólo no logra que se investigue y se castigue a quienes resulten culpables, sino que es despedida y agredida “legalmente”.

Por supuesto, éstas son muestras de injusticias “legales” y públicas contra periodistas, pero las hay peores. Especialmente el asesinato de reporteros en ejercicio de su profesión. Del año 2000 a 2015 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México, organismo de la Procuraduría General de la República, informa el asesinato de 103 periodistas y la desaparición de 25 más en ese lapso de tiempo.

Y en los cinco años recientes dicha fiscalía ha integrado 625 averiguaciones previas por delitos contra periodistas y medios de comunicación (Ballinas y Becerril, 2015), pero en todos estos casos no se informa sobre responsables y castigos.

Más aún, John Ralston, presidente de la asociación de periodistas PEN Club International, señala que 90% de los ataques contra periodistas permanecen impunes por falta de voluntad política (Camacho, 2015).

En estas condiciones de violencia unilateral, tanto la libertad de expresión en medios de difusión como el diálogo gobierno-sociedad no pueden existir. Las expresiones críticas al poder y las propuestas de una nueva asamblea constituyente, por ejemplo, se hacen como acciones valerosas de sus autores enfrentando siempre el riesgo de la represión. No son manifestación de la libertad de expresión existente, sino heroicos reclamos de libertad para todos.

Incomunicación social

Como antes se ha mencionado, Habermas (1993) y Pasquali (1990) conciben la *acción comunicativa* como la búsqueda de entendimiento entre los actores del proceso comunicativo. No se trata de buscar el éxito unilateral, y por tanto no se apoya en cálculos egocéntricos de uno de los actores del proceso, sino a través de la recíproca voluntad de entenderse.

En la *acción comunicativa* se busca un saber común, que a su vez funda un acuerdo, un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez de ambos actores, pero estas pretensiones de validez también son susceptibles de crítica constructiva.

Y este acuerdo se apoya en el respeto al *otro* y en una convicción común, la cual vincula a los participantes en términos de reciprocidad y de equidad. No se busca controlar al otro, sino entenderse con él y construir juntos una relación igualitaria.

En consecuencia, la *acción comunicativa* no puede ser unidireccional o inequitativa, donde uno de los actores tenga definida su propia meta, y en la cual las respuestas del “receptor” sólo le sirvan para hacer modificaciones tácticas en el proceso de persuasión que le ayuden a obtener su éxito egocéntrico, como ocurre en las campañas publicitarias gubernamentales.

Por ende, si tanto los mensajes de los medios de difusión masiva como la relación política entre gobernantes y ciudadanos se basan en estrategias de difusión unilaterales, aunque éstas se apoyen en sondeos y encuestas de todo tipo, estamos hablando de *acciones estratégicas* desde el punto de vista del poder, y no de un proceso real de *comunicación* ni de un procedimiento verdaderamente democrático.

En otras palabras: cuando existe un manejo unilateral de la imagen y el discurso político estamos hablando de un proceso de *comunicación-ficción*, de una *no-comunicación*, congruente con un sistema político dramático de *democracia-ficción*.

Y la reiterada práctica de la *comunicación-ficción* o la *no-comunicación* genera un prolongado estado de incomunicación real entre autoridades y ciudadanos, a pesar de los masivos anuncios

publicitarios gubernamentales o de las manifestaciones públicas de inconformidad de la ciudadanía.

Finalmente, el uso del concepto de “comunicación” hegemónico, enfocado a la persuasión masiva, es en sí mismo una mentira que encubre un proceso de relación unidireccional y autoritaria.

Y esta mentira, como se ha visto, se magnifica con el uso sistemático de los medios de difusión masiva, especialmente de la televisión, en los cuales mientras mejor se engaña a los ciudadanos, más dinero se recibe de sus patrocinadores gubernamentales.

Conclusiones

1. La *comunicación pública* y la *comunicación política* nombrada por los gobernantes, los políticos y sus voceros privados, es propaganda, publicidad, persuasión y manipulación, pero no es *comunicación* entendida como *acción comunicativa*, como diálogo respetuoso, intercambio de visiones del mundo, de problemas, soluciones y compromiso por el buen vivir de todos. Y quienes mejor manejan el engaño público se enriquecen sin medida.
2. En el aspecto político, desde la acción más elemental como el voto hasta el endeudamiento histórico a nombre de un pueblo, pasando por el saqueo de los recursos nacionales, actualmente se teje una cadena de mentiras con repercusiones muy graves para un país a través de mucho tiempo.
3. Las votaciones en los procesos electorales, más allá de las imágenes huecas de l@s candidat@s, de las falsas consultas ciudadanas y de la compra de votos de las personas más necesitadas, encubren una ilegal e ilegítima designación de personas que sirven a la estructura del poder y no a los ciudadanos.
4. Una vez ejecutadas, las elecciones encubren una representatividad ciudadana inexistente; más aún, se trata de una usurpación de la representatividad ciudadana. Y esta falsa representatividad enmascara un gobierno ilegítimo constituido *legalmente*, en tanto cubre las formalidades legislativas hechas a

modo, pero no responde a la voluntad, los intereses y las necesidades de la población.

5. Por el contrario, el gobierno así constituido en falso, pretende encubrir a su vez su sometimiento a los grandes banqueros y a las empresas trasnacionales que operan en el país para enriquecerse a costa de la pobreza crónica de la población y su muerte anunciada. Y es por ello que el gobierno aprueba las leyes que convienen a estos empresarios y usa las fuerzas armadas para hacer cumplir dichas normas injustas, como todas las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Peña Nieto en México.
6. Por ello es que los trabajadores se ven obligados a pagar cada vez mayores y más numerosas contribuciones a costa de vivir cada vez peor. En contraste a las grandes empresas, o no se les cobra, o se les devuelven millonarias cantidades con la falsa justificación de que generan empleos. En resumen, la democracia formal en los países capitalistas es otra *acción dramática* encaminada a *legalizar* el despojo de los recursos nacionales, que profundiza la injusticia, la desigualdad social y la violencia; no es una democracia real que permita la participación de los ciudadanos en las decisiones que les afectan para buscar una vida mejor. La democracia formal es una mentira que en la práctica lleva a los ciudadanos y a sus familias a la esclavitud cotidiana.
7. El falso progreso del sistema capitalista. Fuera del avance tecnológico que a los ciudadanos sólo les llega en forma de productos comerciales de obsolescencia programada enfocados a la distracción, el sistema de vida diseñado por el *capitalismo salvaje* en todo el mundo es un sistema de injusticia y muerte para todas las clases subalternas. Injusticia porque se funda en el engaño que esclaviza a las mayorías trabajadoras a entregar su energía personal y los recursos colectivos a cambio de una sobrevivencia cada vez más difícil y violenta. Y muerte, porque destruye la naturaleza, el sustento de las comunidades, la sabiduría de los pueblos, y orilla a grandes masas a morir de hambre, sed y enfermedades curables.
8. Por tanto, en defensa de la vida humana y de la naturaleza, es necesario refundar el Estado en cuanto organización social

completa (población, gobierno, territorio y leyes), de manera que las fuerzas sociales y sus recursos estén al servicio del *buen vivir* de todos, y no para enriquecer hasta la locura destructiva a los señores hoy dueños del dinero.

9. Por supuesto que se puede vivir de otro modo, mejor, incluso como en el capitalismo responsable de los países nórdicos antineoliberales. O mejor aún, aprendiendo de las comunidades de origen, sudamericanas o zapatistas, purépechas o yaquis, la relación armónica con la naturaleza, la educación y la economía social y solidaria, el diálogo igualitario y respetuoso, las *acciones comunicativas*, el entendimiento intercultural, y la visión de “un mundo donde quepan muchos mundos”.

Referencias

- Ballinas, V. y Becerril, A. (2015). Asesinados, 103 comunicadores en 15 años: PGR. En: Periódico *La Jornada*, 25 de febrero de 2015, México, p. 19.
- Becerril, A. (2015). El dictamen de Ley General de Aguas tiene visión privatizadora y represiva: expertos. Su ejecución se apoyaría en la fuerza pública. En: Periódico *La Jornada*, 8 de marzo de 2015, México, p. 33.
- Briseño, H. (2015). A 19 años de la masacre de Aguas Blancas, exigen que se ponga fin a la impunidad. En: Periódico *La Jornada*, 29 de junio de 2014, México, p. 17.
- Camacho, F. (2015). Falta de voluntad política impide castigar ataques a periodistas en México. En: Periódico *La Jornada*, 25 de febrero de 2015, México, p. 19.
- Cardoso, V. (2015). Fondos de pensiones financian 4 de cada 10 pesos de la deuda de grandes empresas. En: Periódico *La Jornada*, 6 de mayo de 2015, México, p. 21.
- Cardoso, V. (2015). Empresarios usarán fondos de pensión para financiar proyectos privados. En: Periódico *La Jornada* 26 de junio de 2015, México, p. 27.

- Cardoso, V. (2015). Empresarios dejan de pagar \$389 mil millones de impuestos, dice Hacienda. En: Periódico *La Jornada* 7 de mayo de 2015, México, p. 25.
- Castillo, G. y Méndez, A. (2015). Ex militares, en el cártel *Jalisco Nueva Generación*. En: Periódico *La Jornada*, 6 de mayo 2015, México, p. 1.
- Castillo, G. y Méndez, A. (2014). Dictan auto de formal prisión al dueño de Oceanografía por delito 'no grave'. En: Periódico *La Jornada*, 4 de junio 2014, México, p. 8.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2015). Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los países de América Latina. En: <http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-indigencia-en-la-mayoria-de-los-paises-de> Consultado: 30 de junio de 2015.
- Chomsky, N. y Herman, E. (2001). *Los guardianes de la libertad. Propaganda, desinformación y consenso en los medios de comunicación*. Madrid, Editorial Crítica.
- Chomsky, N. (2010). *Secretos, mentiras y democracia*. México, Siglo XXI.
- Cisneros, J. y Valdiviezo, R. (2013). *Democracia-ficción e incomunicación política: una mirada desde el sur*. Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico y Sociedad Latina de Comunicación Social. Tenerife, España.
- Cisneros, J. (2007). *Reporte de investigación sobre calidad de vida*. Centro de Estudios sobre Calidad de Vida. Universidad de las Américas, Puebla. México.
- De Fleur, M. (1987). *Teorías de la comunicación de masas*. México, Paidós.
- Enciso, A. (2015). El proyecto, que costará 110% más de lo previsto, beneficiará a inversionistas. En: Periódico *La Jornada*, 16 de junio de 2015, México, p. 3.
- García, R. (2013). Masacres y guerra sucia. En: *La Jornada Guerrero* en internet. <http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2013/05/24/index.php>

[?section=opinion&article=002a1soc](#) Consultada el 12 de noviembre de 2014.

- Garduño, R. y Méndez, E. (2015). Avalan diputados dictamen que facilita la privatización del agua. En: Periódico *La Jornada*, 5 de marzo de 2015, México, p. 41.
- Gobierno de la República (2014). *Proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015*. En: <http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/PPEF2015/tribunal.html> Consultado: 2 de octubre de 2014.
- González, R. (2015). La nueva norma coartaría la libertad de investigación en materia hídrica. En: Periódico *La Jornada*, 8 de marzo de 2015, México, p. 34.
- González, S. (2014). Bajó 3.5% el ingreso trimestral en hogares del país entre 2012 y 2014: Inegi. En: Periódico *La Jornada* en internet, 17 de julio de 2015. México, p. 27.
- González, S. (2014). Inflación se disparó a 4.48% a tasa anual en enero: Inegi. En: Periódico *La Jornada* en internet, 7 de febrero de 2014. México. <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/02/07/inflacion-en-enero-rebasa-meta-del-bdem-se-ubica-en-4-48-a-tasa-anual-2300.html> Consultado: 1 de noviembre de 2014.
- González, R. (2012). “Documenta *The Guardian* la colusión Televisa-Peña. En: periódico *La Jornada*. 8 de junio de 2012. México, p. 7.
- González, R. (2012). *Unidad secreta* de Televisa operó en 2009 a favor de Peña: *The Guardian*. En: periódico *La Jornada*. 27 de junio de 2012. México, p. 3.
- González, R. (2015). Pobreza de personas mayores de 64 años, “problema crítico” de México: Stiglitz. En: Periódico *La Jornada*. 7 de mayo de 2015. México, p. 26.
- González, R. (2015). En riesgo de regresar a la pobreza 208 millones de latinoamericanos. En: Periódico *La Jornada*. 9 de julio de 2015. México, p. 24.

- González, R. (2015). Pagó México en 15 años siete veces la deuda externa. En: Periódico *La Jornada*. 5 de septiembre de 2015. México, portada.
- Gramsci, A. (1985). *Antología*. Siglo XXI Editores. México, 1985.
- Gutiérrez, U. (2015). Demuelen la presa de Guillermo Padrés. En: Periódico *La Jornada*. 13 de febrero de 2015. México, p. 34.
- Habermas, J. (1993). *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*. México, Edit. Rei.
- Hall, S. (1999). *Representation*. London, Sage.
- Juárez, V. (2014). Liberan a mujer presa por pagar con billete falso. En: Periódico *La Jornada*, 30 de enero 2014, México, p. 33.
- La información.com* (2015). Despedida la periodista que reveló la existencia de una millonaria residencia de la esposa de Peña Nieto. 16 de marzo de 2015. En: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/radio/despedita-la-periodista-que-revelo-la-existencia-de-una-millonaria-residencia-de-la-esposa-de-pena-nieto_7DUIRHCnlWIk4WMHKJU61 Consultado el 27 de julio de 2015.
- La Jornada* (2015). Investigan en España a uno de los jefes de la campaña de Peña. En: Periódico *La Jornada*, 18 de marzo de 2015, México, p. 3.
- La Jornada*. 2012. Ejecutivo de Televisa alardea de ser el creador de Peña Nieto, dice el *WSJ*. 1 de julio de 2012. México, p. 13.
- Madox, T. (2011). La esclavitud hoy en día: un problema que no puede ser ignorado. En: *CNN*. 8 de marzo de 2011. <http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/08/la-esclavitud-hoy-en-dia-un-problema-que-no-puede-ser-ignorado> Consultado: 15 de noviembre de 2014.
- Martínez, E. (2015). Denuncian abusos de federales durante la detención de *La Tuta*. En: Periódico *La Jornada*, 8 de marzo de 2015, México, p. 9.

- Martínez, S. (2014). Mireles: no quiero ser mártir; sólo quiero seguir limpiando de criminales a Michoacán. En: Periódico *La Jornada*, 29 de junio de 2014, México, p. 11.
- Max-Neef, M. y Bartlett, P. (2014). *La economía desenmascarada. Del poder y la codicia, la compasión y el bien común*. Barcelona, Icaria Editorial. ISBN: 978-84-9888-557-6.
- Méndez, A. (2015). Tribunal federal desecha en definitiva demanda de amparo de Carmen Aristegui. En: Periódico *La Jornada*, 15 de julio de 2015. México, p. 11.
- Méndez, E. y Garduño, R. (2014). Por deuda pública cada mexicano deberá pagar 109 mil 355 pesos. En: Periódico *La Jornada*, 1 de agosto de 2014, México, p. 3.
- Méndez, A. (2015). Mayor recaudación de impuestos compensó bajos ingresos petrolero”. En: Periódico *La Jornada*, 5 de mayo de 2015, México, p. 18.
- Olivares, E. (2015). Afecta a la tribu yaqui la construcción del acueducto Independencia. En: Periódico *La Jornada*, 4 de marzo de 2015, México, p. 42.
- Olson, G. y Ramos, J. (2014). Van \$7.7 billones a infraestructura; Peña Nieto anuncia proyectos en seis sectores. En periódico *Excélsior* en línea. 29 de abril de 2014.
<http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/29/956352>V
 isitado el 30 de junio de 2014.
- Pallares, M. Á. (2014). Cae poder adquisitivo 77.79% en México. En: Periódico *El Universal*, 30 de abril de 2014. México.
- Pasquali, A. (1990). *Comunicación y cultura de masas*. Venezuela. Monte Ávila Editores.
- Pérez, C. (2015). Recibí presiones para minimizar mi informe sobre tortura: Méndez. En: *La Jornada*, 2 de abril de 2015, México, p. 7.
- Petrich, B. (2014). *Vuelos de muerte* en Guerrero, hecho del que el Estado aún debe responder. En: periódico *La Jornada*, 18 de octubre de 2014. México, p.10.

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 Visitado el 30 de junio de 2013.
- Rodríguez, I. (2015). Confirman la relación de la empresa ganadora de la *ronda uno* con cuñado de Carlos Salinas. En: periódico *La Jornada*, 18 de julio de 2015. México, p. 23.
- Rodríguez, I. (2015). Enjuiciada en Argentina, socia del consorcio ganador de la *ronda uno*. En: periódico *La Jornada*, 18 de julio de 2015. México, p. 22.
- Rojas, R. y Gutiérrez, U. (2014). Detienen a líder de la tribu yaqui, Mario Lun". En: Periódico *La Jornada* en internet, 11 de septiembre de 2014.
<http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/11/confirman-detencion-de-lider-de-la-tribu-yaki-mario-luna-841.html>
 Consultado: 19 de marzo de 2015.
- Román, J. A. (2013). Inversión en infraestructura superará los \$4 billones esta administración: Peña. En periódico *La Jornada*, 16 de julio de 2013. México, p. 15.
- Sartori, G. (2011). Homo videns. *La sociedad teledirigida*. México. Punto de Lectura, Santillana.
- Sinembargo.mx* (2014). Para 2015, el gobierno propone contratar deuda pública por 673 mil mdp. En:
<http://www.sinembargo.mx/opinion/09-09-2014/27099>
 Consultado el 2 de noviembre de 2014.
- Stiglitz, J. (2012). *El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita*. Taurus. México.
- The Trilateral Commission (2010). Executive Comminttee. En :
<http://info.publicintelligence.net/TrilateralList2010.pdf>
 Visitado: 29 de julio de 2013.
- Urrutia, A. (2011). Aprueba Consejo General del IFE propuesta de presupuesto para 2012, por casi \$16 mil millones. En: periódico *La Jornada*, 26 de agosto de 2011. México, p. 18.

- Urrutia, A. (2011). Más de 2 mil estaciones de radio y televisión emitirán unos 21 millones de promocionales. En: periódico *La Jornada*, 18 de noviembre de 2011. México, p. 16.
- Urrutia, A. y Martínez, F. (2012). Exculpa el IFE a Peña Nieto y Televisa por campaña encubierta. En: periódico *La Jornada*, 17 de agosto de 2012. México, p. 7.
- Zibechi, R. (2015). La tormenta sistémica ya está aquí. En: periódico *La Jornada*, 12 de junio de 2015. México, p. 19.
- Zúñiga, J. A.; Méndez, E. y Ballinas, V. (2013). La deuda pública llega a 6 billones 62 mil millones en junio. En: periódico *La Jornada*, 01 de agosto de 2013. México, p. 23.
- Zúñiga, J. A. (2015). Se desploma 6.6% el costo unitario de la mano de obra en México: B de M. En: periódico *La Jornada*, 22 de junio de 2015. México, p. 25.
- Zúñiga, J. A. (2015). Sumaron \$42 mil millones las utilidades de los bancos en 5 meses, reporta CNBV. En: periódico *La Jornada*, 14 de julio de 2015. México, p. 23.

Los autores

José Cisneros Espinosa es Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna en Tenerife, España (2001). Maestro en Administración educativa por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP, 1990), y Licenciado en Ciencias de la información por la Universidad Iberoamericana, México (1979). Desde 2012 es profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.

Ha sido Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación en la UDLAP de 1993 a 1997 y de 2007 a 2008, y Coordinador de la Maestría en Comunicación Pública de 2006 a 2008 en la misma universidad.

Sus líneas de investigación son: Comunicación y democracia; la Comunicación como mecanismo de autoconstrucción de los seres humanos y sus vinculaciones sociales, y Pensamiento originario, educación y comunicación para el desarrollo comunitario.

Sus publicaciones recientes son: *Diálogos sobre la democracia* (2014), ICGDE-BUAP, y *Democracia-ficción e incomunicación política. Una mirada desde el sur* (2013), SLCS-BUAP.

<http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cac54/1>

Es miembro de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación.

Alejandro Silva Arias es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Estudios sobre Estados Unidos, por la Universidad de las Américas Puebla, y Licenciado en Economía, por la BUAP.

Actualmente es Director de Investigación del Instituto Poblano de Especialidades en Psicología, y consultor de soporte empresarial.

El Dr. Silva es autor del prólogo del libro *Democracia-ficción e incomunicación política. Una mirada desde el sur* (2013), y del capítulo: El pequeño papel de la democracia en el sistema hegemónico mundial, en: *Diálogos sobre la democracia* (2014), ICGDE-BUAP.

José Antonio Alonso Herrero es Doctor en Sociología por la New York University (1979), Doctor ‘Honoris Causa’ en Letras Humanas por la Universidad Estatal de Nueva York (1985); Premio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en Ciencias y Humanidades (2003), Licenciado en Humanidades Clásicas (1958) y en Filosofía (1961) por la Universidad Católica de Quito, Ecuador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II) desde 1985.

Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.

Sus líneas de investigación son: Globalización neoliberal, subcontratación industrial e informalidad; Relaciones del Estado Mexicano y el Estado Vaticano, e Igualdad de género y liberación femenina.

Sus publicaciones más recientes: La disyuntiva de México entre la ‘razón de Estado’ y la Santa Sede, en: Revista *Bajo el volcán*, año 12, n. 20, marzo-agosto, 2013, pp. 71-86. Informalidad laboral y

neoliberalismo en México, en: *Aportes*, Año XVII, n.46 (septiembre-diciembre, 2012), pp. 51 – 66, y *Topar con el Vaticano* (2011), BUAP.

Wietse de Vries Meijer es Doctor en Educación (Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 1997). Es profesor-investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE-BUAP) en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1995, actualmente nivel II.

Actualmente desarrolla un proyecto que busca desarrollar indicadores de desempeño universitarios en Europa y América Latina (INFOACES), con apoyo financiero de la Unión Europea.

Durante 2009-2012 trabajó en un proyecto comparativo sobre educación liberal y cambio curricular, financiado por el Institute for Higher Education Policy, Washington DC, Estados Unidos.

Es miembro del consejo editorial (y director) de la *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, de la *Revista de la Educación Superior* y de la *Revista Complutense de Educación*.

Publicaciones recientes: De Vries, W. (2013). El balance público-privado en América Latina y sus visibles consecuencias, en: Silas-Casillas, J. C. (coord.), *Estado de la educación superior en América Latina, México*. ANUIES/ITESO. De Vries, W. y Navarro, Y. (2013). Las controversias de la evaluación académica, en: *Avance y Perspectiva*, Vol. 5, No. 2, Nueva época 2013,

<http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/3680/las-controversias-de-la-evaluacion-academica> De Vries, W., R. Vázquez-Cabrera y D. Treto (2013), Millonarios o malparados. ¿De qué depende el éxito de los egresados universitarios? en: *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, Vol. 4, Número 9, ISSN: 2007-2872.

<http://ries.universia.net/index.php/ries/article/view/273>

Óscar Antonio Jiménez Morales es Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología Política por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Políticos por la UDG, y Licenciado en Economía por la BUAP.

Tres veces becario por excelencia estudiantil: 1995, 1996, 1997; Consejero Universitario (1997-1998), Becario CONACYT, y realizó una estancia posdoctoral (2013 a 2015) en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP.

Es autor de los libros: *La desilusión sexenal* (2012) Universidad de Málaga, y *Abstencionismo electoral y deterioro socioeconómico*. Tomo 1. (2013). Editorial Académica Española.

Un mundo falso. Notas sobre sus constructores actuales

José Cisneros Espinosa (Coordinador)

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2015 en los talleres de Endocopias Drago – La Laguna (Tenerife, Islas Canarias, España).

Esta publicación fue realizada con recursos PROFOCIE.

La tirada inicial ha sido de 500 ejemplares.